



**Tipo de documento: Tesis de Doctorado**

**Título del documento: (Re) configuraciones de lo público: organizaciones de vecinos, de trabajadores desocupados y Estado (Córdoba, 2001-2007)**

**Autores (en el caso de tesis y directores):**

**María José Franco**

**Mónica Gordillo, dir.**

**Ana Natalucci, co-dir.**

**Datos de edición (fecha, editorial, lugar,**

**fecha de defensa para el caso de tesis): 2021**

Documento disponible para su consulta y descarga en el Repositorio Digital Institucional de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.  
Para más información consulte: <http://repositorio.sociales.uba.ar/>

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Argentina.  
Atribución-No comercial-Sin obras derivadas 4.0 (CC BY 4.0 AR)



La imagen se puede sacar de aca: [https://creativecommons.org/choose/?lang=es\\_AR](https://creativecommons.org/choose/?lang=es_AR)



**Esp. María José Franco**

**(RE) CONFIGURACIONES DE LO PÚBLICO: ORGANIZACIONES DE  
VECINOS, DE TRABAJADORES DESOCUPADOS Y ESTADO  
(CÓRDOBA, 2001-2007)**

**Tesis para optar por el título de Doctora en Ciencias Sociales**

**Facultad de Ciencias Sociales  
Universidad de Buenos Aires**

**Directora: Dra. Mónica Gordillo  
Co-directora: Dra. Ana Natalucci**

**Córdoba, Argentina  
Octubre de 2021**



## **RESUMEN**

Desde un enfoque sociopolítico, esta tesis analiza las acciones colectivas de organizaciones de vecinos y desocupados de Córdoba y su relación con el Estado y los procesos de democratización entre los años 2001 y 2007, en un período de crisis, redefinición y estabilización de un orden político, económico y social a nivel nacional. La investigación concluye en el año 2007 para contemplar el cierre -siempre provisorio- de una etapa en la experiencia organizativa de los dos casos objeto de estudio y por coincidir con el fin de las gestiones de gobierno a nivel municipal, provincial y nacional. El estudio de estos procesos menos indagados por la academia a nivel local, pretende realizar un aporte a la vasta bibliografía que se produjo en torno a ellos a nivel nacional.

Los dos colectivos analizados son el Centro de Vecinos Autoconvocados y el Movimiento Barrios de Pie que, con distintas trayectorias, gramáticas y apuestas políticas a nivel nacional, compartieron a lo largo de este período algunas demandas y modos de abordar la problemática social; entre ellas, la administración de planes de asistencia al desempleo, la participación en el Consejo Consultivo Municipal de Políticas Sociales y en la gestión municipal y, finalmente, el desarrollo de proyectos de cooperativización.

Para el abordaje teórico se construye una red conceptual que recupera las contribuciones de reflexiones posfundacionales de lo social, lo político y del vínculo entre ambos. Con ese enfoque y desde una perspectiva pragmática de la política, se articulan los conceptos de “acción colectiva”, de “gramáticas políticas” y de “institucionalización” con una concepción relacional de los procesos de democratización y desdemocratización.

Desde ese lugar, se busca establecer las características y vinculaciones entre las condiciones en las cuales estas organizaciones desarrollaron sus acciones colectivas y las relaciones que establecieron con el Estado, las gramáticas políticas que reactualizaron y recrearon en esas acciones, los sentidos sobre lo social, lo político y los procesos de democratización que en esos procesos inscribieron en el espacio público así como las limitaciones y posibilidades que encontraron para su constitución como sujetos de transformaciones políticas.

El abordaje metodológico se realiza principalmente desde un enfoque paradigmático interpretativo y con perspectiva cualitativa. Asimismo, se triangula con datos cuantitativos provenientes de cuatro bases de datos: una sobre acciones colectivas de protesta y tres sobre programas sociales. Para el abordaje cualitativo, se trabaja con fuentes escritas y orales como entrevistas en profundidad a referentes de estas organizaciones sociales y a funcionarios municipales, con análisis de documentos y de noticias de la prensa local.

## **ABSTRACT**

From a sociopolitical approach, this thesis analyzes the collective actions of organizations of neighbors and unemployed of Cordoba and their relationship with the State and the processes of democratization and de-democratization between the years 2001 and 2007, a period of crisis and redefinition of a political, economic and social order at the national level. The research concludes in 2007 to contemplate the closure -always provisional- of a stage in the organizational experience of the two cases under study and to coincide with the end of the government management at the municipal, provincial and national levels. The study of these processes at the local level less investigated by the academy aims to make a contribution to the sufficient literature that was produced around them at the national level.

The two groups analyzed are the *Centro de Vecinos Autoconvocados* and the *Movimiento Barrios de Pie* which, with different trajectories, grammars and political bets at the national level, shared throughout this period some demands and ways of addressing social problems; among them, the administration of unemployment assistance plans, participation in the Municipal Council of Social Policies, municipal management and, finally, the development of cooperative projects.

For the theoretical approach is built a conceptual network that recovers the contributions of a post-foundational conception of the social, the political and the link between both. With this approach and a pragmatic perspective of policy, the concepts of "collective action", "political grammars" and "institutionalization" are

articulated with a relational conception of the processes of democratization and de-democratization.

From that place, we seek to establish the characteristics and links between the conditions in which these organizations developed their collective actions and the relations they established with the State, the political grammars that they updated and recreated in those actions, the senses about the social, the political and the democratization that in those processes were registered in the public space as well as the limitations and possibilities that they found for their constitution as subjects of political transformation.

The methodological approach is mainly carried out from an interpretative paradigmatic approach and with a qualitative perspective. It also includes triangulation with quantitative data from four databases: one of collective protest actions and three of social programs. For the qualitative approach, we work with written and oral sources such as in-depth interviews with referents of these social organizations and municipal officials, analysis of documents and news from the local press.

## INDICE

RESUMEN.....	3
ABSTRACT .....	4
INDICE.....	6
SIGLAS .....	10
AGRADECIMIENTOS.....	13
PREFACIO.....	15
INTRODUCCIÓN.....	18
1. Presentación de la propuesta teórico metodológica.....	21
2. Las perspectivas norteamericanas y europeas .....	22
3. Los estudios sociopolíticos latinoamericanos post dictadura.....	24
4. Aportes y límites de los estudios sobre organizaciones de vecinos y desocupados en Argentina.....	27
5. Organización de la tesis .....	33
CAPÍTULO 1: ACCIONES COLECTIVAS, ESPACIO PÚBLICO Y ESTADO. UNA PERSPECTIVA SOCIOPOLÍTICA PARA SU ABORDAJE	
1. Perspectiva sociopolítica .....	36
1.1. Lo político como conflicto y forma colectiva .....	36
1.2. Los aportes del concepto de “gramáticas políticas” .....	39
2. Organizaciones sociales, Estado, espacio público y procesos de democratización.....	41
2.1. Aportes del concepto pragmático de institucionalización .....	43
2.2. Organizaciones sociales, acciones colectivas y la constitución de subjetividades políticas.....	45
2.3. Estado y espacio público. El Estado como relación y conjunto de estructuras en disputa.....	49
2.4. Organizaciones sociales, Estado y procesos de democratización .....	53
3. Preguntas, objetivos e hipótesis.....	57
4. Perspectiva metodológica, estrategias y delimitación del objeto.....	59
4. 1. Selección de casos.....	60
4.2. Fuentes utilizadas y estrategias de recolección de información .....	61

4.3. Dimensiones de análisis y procesamiento de los datos.....	65
<b>CAPÍTULO 2: ESTADO, POLÍTICAS SOCIALES Y ORGANIZACIONES EN ARGENTINA. LAS PARTICULARIDADES DE CÓRDOBA</b>	
1. Crisis del orden político, económico, social y el “argentinazo” del 2001 .....	68
2. Fin y comienzo del nuevo milenio en Córdoba. La reforma del Estado y el papel de las organizaciones sociales.....	72
3. El gobierno de transición de Duhalde. <i>Por una Argentina de pie y en paz</i> ....	80
3.1. El “Plan Jefes y Jefas de Hogar” como recurso de la asistencia social. Su implementación en Córdoba y la creación del Consejo Consultivo Municipal .....	85
4. Redefinición y estabilización de un nuevo orden. El protagonismo del Estado a nivel nacional y la transversalidad .....	93
4.1. La centralidad del empleo, la integralidad y la territorialidad. La transformación de la política social .....	96
5. Redefiniciones en las políticas sociales asistenciales en Córdoba y en la modalidad de vinculación del gobierno con las organizaciones sociales.....	104
5.2. Un estado municipal con participación social y redefinición de la política social. La versión antipolítica de Luis Juez .....	106
*** .....	114
<b>CAPÍTULO 3: CENTRO DE VECINOS AUTOCONVOCADOS. DE LA RESISTENCIA Y LA DEFENSA DE LA VIVIENDA ÚNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA COOPERATIVA CVA</b>	
1. Antecedentes .....	119
2. 2001: Por la defensa de la vivienda única, una ley de emergencia económica, social, empleo y salario digno. <i>Un cabildo abierto a la esperanza</i> .....	128
2.1. 2002-2004: La incorporación de una nueva demanda en las protestas, el desarrollo de microemprendimientos y procesos de autogestión en torno al PJyJHD y la experiencia de participación en el Consejo Consultivo Municipal.....	134
3. 2005: La construcción de la Cooperativa de Vecinos Autoconvocados. Desafíos, demandas y protestas y un breve paso por la gestión municipal .....	140
*** .....	147

## CAPÍTULO 4: MOVIMIENTO BARRIOS DE PIE. DE LA RESISTENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE PODER POPULAR EN LOS TERRITORIOS A LA DISPUTA DEL ESTADO Y EL DESARROLLO DE POLÍTICAS POR LA AMPLIACIÓN DE DERECHOS

1. Antecedentes en Córdoba.....	151
1.1 Acciones territoriales barriales. De Córdoba desde Abajo a CTA de los barrios .....	159
2. 2001. De la CTA de los barrios al Movimiento Barrios de Pie .....	165
3. 2002-2003. La etapa piquetera y de resistencia del Movimiento Barrios de Pie: construcción de “poder popular”, desarrollo territorial y lucha en torno a la asistencia alimentaria y a los planes de empleo.....	167
3.1. Cuando la participación institucional se articula con la protesta. La experiencia de integración al Consejo Consultivo de Políticas Sociales de Córdoba. ....	176
4. 2004-2006. Participación popular para una Argentina que cambia. La inclusión en la gestión del Estado nacional y local. ....	178
4.1. La redefinición de la movilización y del trabajo territorial.....	182
4.2. 2006. El Estado y el gobierno en disputa. La conformación del Movimiento Libres del Sur.....	195
*** .....	197
CAPÍTULO 5: ORGANIZACIONES SOCIALES, ESTADO Y PROCESOS DE DEMOCRATIZACIÓN Y DESDEMOCRATIZACIÓN. CONSIDERACIONES FINALES	
1. Recapitulando.....	201
2. Continuidades y desplazamientos, encuentros y desencuentros .....	203
3. Potencialidad performativa e impacto político de las acciones de las organizaciones .....	210
4. Organizaciones sociales, Estado y procesos de democratización. ....	214
5. Una vuelta sobre las recapitulaciones. Reflexiones y desafíos.....	217
BIBLIOGRAFÍA.....	222
FUENTES .....	241

1. Documentos institucionales de distintas dependencias estatales e informes para el Estado.....	241
2. Discursos de autoridades nacionales, provinciales y municipales .....	242
3. Legislativas.....	243
4. Páginas Web.....	244
5. Medios de comunicación nacionales y locales (selección de noticias).....	244
6. Registros, materiales gráficos y audiovisuales y medios de comunicación de las organizaciones sociales .....	245
7. Entrevistas realizadas .....	245
7.1. Funcionarios estatales .....	245
7.2. Integrantes de la organización Movimiento Barrios de Pie .....	246
7.3. Integrantes de la organización Centro de Vecinos Autoconvocados.....	247

## **SIGLAS**

ALCA: Área de Libre Comercio de las Américas

ACEMOS: Asociación Civil Entre Muchos Organismos Sociales

AYSA: Aguas y Saneamientos Argentinos

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

BM: Banco Mundial

CCC: Corriente Clasista y Combativa

CCM – Cba: Consejo Consultivo Municipal Córdoba

CCP Cba: Consejo Consultivo Provincial Córdoba

CECOPAL: Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal

CELS: Centro de Estudios Legales y Sociales

CENOC: Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad

CTERA: Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina

CGT: Confederación General del Trabajo

CISPREN: Círculo Sindical de la Prensa

CNPL: Corriente Nacional Patria Libre

CPC: Centro de Participación Comunal

CTA: Central de los Trabajadores Argentinos

CVA: Centro de Vecinos Autoconvocados

DDHH: Derechos Humanos

DIPAS: Dirección Provincial de Agua y Saneamiento

ECI: Escuela de Ciencias de la Información

EPEC: Empresa Provincial de Energía de Córdoba

EPOS: Empresa Provincial de Obras Sanitarias

ERP: Ejército Revolucionario del Pueblo

ERSEP: Ente Regulador de Servicios Públicos de Córdoba

FMI: Fondo Monetario Internacional

FONAVI: Fondo Nacional de la Vivienda

FOP: Frente de Organizaciones Populares

FOPAR: Fondo Participativo de Inversión Social

FPV: Frente para la Victoria

FRAL: Frente Amplio de Liberación  
FREPASO: Frente País Solidario  
FTV: Federación de Tierra y Vivienda  
MBP: Movimiento Barrios de Pie  
MCPS: Mesa de Concertación de Políticas Sociales  
MDS: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación  
MLS: Movimiento Libres del Sur  
MO: Manos a la Obra  
MTEySS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación  
ONG: Organización No Gubernamental  
PAICOR: Programa de Asistencia Integral Córdoba  
PC: Partido Comunista  
PEC: Programa de Empleo Comunitario  
PH: Partido Humanista  
PI: Partido Intransigente  
PJ: Partido Justicialista  
PJyJD: Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados  
PO: Partido Obrero  
PPP: Programa Primer Paso/Plan Primer Paso  
PRT: Partido Revolucionario de los Trabajadores  
PTCS: Promotores Territoriales para el Cambio Social  
SEAP: Servicio a la Acción Popular  
SEHAS: Servicio Habitacional y de Acción Social  
SEP: Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba  
SERVIPROH: Servicio en Promoción Humana  
SIPOS: Sindicato del Personal de Obras Sanitarias  
SLyF: Sindicato de Luz y Fuerza  
UCEDE: Unión de Centro Democrático  
UCR: Unión Cívica Radical  
UEPC: Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba  
UNC: Universidad Nacional de Córdoba  
UniDHos: Unión por los Derechos Humanos

UOBDS: Unión de Organizaciones de Base por los Derechos Sociales

UOM: Unión Obrera Metalúrgica

## AGRADECIMIENTOS

“Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma...”  
Jorge Drexler (2004). Todo se transforma [Canción]. ECO.

Esta tesis, quizás como la vida misma, es producto y productora de transformaciones en las que distintas relaciones, personas y experiencias de vida fueron dando lugar a otras y acompañando (me) en estos años. Mi agradecimiento a cada una de ellas.

A Santiago, por el amor inmenso desde aquel día en que nos encontramos y por los nuevos caminos que fuimos construyendo. A Juli y a Pauli porque mi vida cambió hermosamente desde que nacieron, por su cariño e invitación al juego, por el aguante y por todo lo que aprendo con ellas.

Al resto de mi familia y, en particular a mi hermana, mi papá y mi mamá que me apoyaron de tantos modos estos años y que confiaron en que, más tarde que temprano, finalmente iba a terminar de escribir esta tesis. A Anabela que siempre lee cada escrito que le comparto y me acerca amorosamente sus devoluciones.

A cada una de mis amigas, amigos y seres queridos por su inmenso afecto y por su presencia, siempre. A Sole. A Lala. A Alberto, Analía y su familia. Esta tesis definitivamente no podría haberse escrito sin ellas y ellos.

A Cuca por el espacio sonoro y lúdico en mi vida. A Gabriela por los caminos y las búsquedas que me acompaña a recorrer.

A mis compañeros y compañeras de militancia estudiantil de la UNC y de otros espacios políticos posteriores compartidos. Esta tesis hubiera sido otra sin ese proceso de formación, debate y organización que iniciamos a fines de los años '90.

A cada uno y una de los integrantes de las organizaciones con las que me relacioné en el marco de esta tesis; no solo por el tiempo que destinaron a las entrevistas y los materiales que me aportaron sino también porque se dispusieron a rememorar y a revisar sus propias historias de militancia.

A mi directora de tesis, Mónica Gordillo, con quien vengo aprendiendo y compartiendo el equipo de investigación hace tantos años y a mi co- directora Ana Natalucci, por sus fundamentales orientaciones y aportes. A ambas por su

generosidad, su apoyo, su cariño y por las horas que destinaron a lecturas, correcciones y charlas.

A Elisa, Leticia, Carol, Fernando y el resto de mis compañeros y compañeras del equipo de investigación por el trabajo conjunto y enriquecedores debates y contribuciones durante estos años.

A Checha por sus aporte indispensable al trabajo de campo que dio por resultado esta tesis.

También a mis compañeros y compañeras de diferentes proyectos de investigación, equipos de cátedra y otros espacios de trabajo en la UNC. A Keka, a Patricia.

A la Universidad Pública que me dio la posibilidad de formarme y a CONICET a través del cual obtuve dos becas para realizar el Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y desarrollar esta investigación.

## **PREFACIO**

Las preguntas que motorizan esta tesis comenzaron tiempo antes de su proceso de producción, en el marco de mis estudios de grado en la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Hacia el inicio del nuevo milenio, el despliegue de algunos proyectos políticos transformadores en América del Sur y, en Argentina, la emergencia en el espacio público de colectivos organizados en resistencia a las políticas neoliberales, nos interpelaron -como a tantos otros- a reflexionar sobre los alcances y límites de esa participación popular en el país y en Córdoba en particular. También, sobre el papel de la universidad y del Estado provincial en la reproducción o transformación de un modelo de país excluyente que se venía profundizando desde la última dictadura militar a nivel nacional. Estas inquietudes motorizaron, además, nuestro trabajo final de licenciatura que defendimos en el año 2002 y que se propuso indagar la relación entre las representaciones estudiantiles sobre la universidad pública y su disposición a la acción colectiva a fines y comienzos del nuevo milenio en la Escuela de Ciencias de la Información de la Facultad de Derecho de la UNC.

La pregunta por la relación entre organizaciones sociales, Estado y procesos de democratización en Córdoba fue cobrando forma en el marco de una beca de extensión universitaria que obtuvimos en el año 2003 -como parte del “Programa de Extensión Interfacultades” de la UNC- para desarrollar un proyecto sobre procesos comunicacionales en un comedor y cooperativa de una “villa” de la ciudad capital. Con una compañera de estudio, a lo largo de dos años, pudimos aproximarnos a la vida cotidiana de los habitantes de ese asentamiento y del comedor, a los modos en que fueron reinventando la organización y la movilización para procurar la supervivencia en momentos en los que la crisis económica del país era muy importante y el Estado se desentendía de su rol de garante de derechos; a los vínculos -a veces de tensión y/o enfrentamiento- que se generaron hacia adentro del propio colectivo, con otras organizaciones de desocupados, con los partidos políticos y con la universidad así como también con distintas instancias del Estado provincial y municipal con las que quienes integraban el comedor interactuaban a partir de subsidios, capacitaciones y/o programas sociales.

También pudimos acompañar sus proyectos de creación de una huerta, una panadería y un ropero comunitario con planes Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Observamos, además, las posteriores transformaciones que se fueron produciendo en las políticas sociales nacionales y en el comedor con el traspaso del plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados al programa Familias por la Inclusión Social y con la implementación del plan Manos a la Obra; los intentos fallidos del comedor de generar un emprendimiento de bloqueras en el marco de este último plan y de constituir una cooperativa para conseguir viviendas dignas en el año 2004, durante la gestión municipal de Luis Juez.

El acompañamiento en el auge y ocaso de este comedor, el conocimiento de otras experiencias que lograron crecer y sostenerse en el tiempo y mi posterior participación en otras instancias de implementación del Programa Familias por la Inclusión Social alimentaron preguntas y proyectos de investigación que inicié en el año 2005 cuando me incorporé a un equipo de investigación sobre historia reciente en Córdoba.

Ese colectivo que integro hasta la actualidad está radicado en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC y es dirigido por la Dra. Mónica Gordillo. Como equipo venimos realizando desde entonces investigaciones vinculadas con el tema de esta tesis. Parte de sus resultados fueron publicados en dos libros que se recuperan a lo largo de este trabajo: Gordillo et al. (2012) y Ferrari y Gordillo (2015).

La primera, con subsidios de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC, abordó las reformas estructurales producidas y las acciones colectivas de protesta protagonizadas por organizaciones sociales, sindicales, grupos de vecinos y otros actores en Córdoba en el período 1989-2003, entre los que se encuentran los dos colectivos que seleccionamos como casos de estudio en la investigación que dio por resultado esta tesis: el Movimiento Barrios de Pie y el Centro de Vecinos Autoconvocados. El segundo estudio, con un subsidio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, se abocó al análisis de los principales desafíos enfrentados por un conjunto de actores políticos y sindicales, incluyendo organizaciones barriales y villeras, en los primeros diez años del período de

reconstrucción democrática argentina en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Estas últimas indagaciones se produjeron junto con un equipo del Centro de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

La pregunta por las transformaciones en las acciones colectivas de algunas de las organizaciones de desocupados y vecinos y su relación con el Estado a comienzos del nuevo milenio en Córdoba dio lugar al proyecto presentado en el marco del Doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires del que resultó esta tesis. El mismo fue financiado con becas tipo I y II del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina (CONICET). Las mismas me permitieron realizar esta investigación y concluir el cursado de la Maestría en Comunicación y Cultura en el Centro de Estudios Avanzados de la UNC.

En el tiempo que transcurrió desde la obtención de las becas doctorales hasta la actualidad, distintos proyectos y experiencias acompañaron la realización de la tesis y la producción de este trabajo: el cursado de la maestría y el doctorado, la posibilidad de rendir concursos docentes que me permitieron incorporarme a la planta docente en las carreras de grado de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la UNC; el desarrollo de docencia de posgrado y la participación en otros proyectos de investigación en torno al amplio campo de la Economía Social y Popular; la producción de publicaciones y de encuentros de formación; actividades de gestión en la UNC; así como también, la vida “más allá” de la academia.

## INTRODUCCIÓN

A menos de un año y medio del estallido popular de diciembre del año 2001 en Argentina, en un contexto de movilización y de crisis económica, social, política e institucional, se realizaron elecciones presidenciales que pusieron fin al gobierno provisional de Duhalde. La asunción de Néstor Kirchner como presidente en el año 2003 fue acompañada de una crítica al modelo neoliberal, la recuperación de buena parte de las demandas que habían articulado las acciones de un conjunto de organizaciones sociales, sindicales, organismos de DDHH -entre otras-, el llamado a la institución de una “nueva normalidad” y una convocatoria amplia a diferentes actores sociales a la construcción de un proyecto de “transversalidad”. Desde esa iniciativa, referentes de algunas organizaciones sociales integraron el equipo de gobierno y participaron, entre otras, de la propuesta de transformación de la política asistencial vigente.

Argentina transitó un proceso en sintonía con otros iniciados en algunos países de América del Sur -cada uno con sus particularidades- en el sentido de que la emergencia de organizaciones y movimientos de resistencia a la implementación de las políticas neoliberales iba acompañada de la posterior llegada al poder presidencial de gobiernos con vertientes nacional-populares que revalorizaban el poder del Estado, incorporaban a referentes de estos colectivos a la gestión pública y apostaban a consolidar alianzas entre países latinoamericanos.

Estas transformaciones renovaron los debates sobre la articulación entre organizaciones sociales, Estado y procesos de democratización al interior de los propios colectivos y de sus espacios de articulación, de los gobiernos y del campo académico e intelectual, tras un período en el que, como parte del dispositivo ideológico neoliberal, lo social y lo político habían resultado escindidos.

Si bien estos cambios fueron analizados a nivel nacional por vasta bibliografía, aquellos que se produjeron al interior del país, recibieron menor atención por parte de las ciencias sociales. En particular, los ritmos y modalidades que asumieron estos procesos en la provincia de Córdoba no fueron siempre acompasados ni tuvieron similares orientaciones a los desarrollados a nivel nacional.

En la provincia, como referente de la coalición Unión por Córdoba, José Manuel De la Sota había asumido la gobernación en 1999, tras quince años ininterrumpidos de gobierno del partido de la Unión Cívica Radical. En el año 2000 había lanzado la reforma del Estado en alianza con el capital privado, con el respaldo de los organismos de crédito internacional. Esta reforma relativamente “tardía” respecto de la desarrollada a nivel nacional en la década del '90 durante el gobierno de Carlos Menem, redefinió las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. La orientación de estos procesos, en términos generales, se mantuvo en las políticas provinciales que promovió el gobierno en sus dos mandatos consecutivos hasta diciembre de 2007 y tuvieron una línea de continuidad a nivel municipal, con la gestión de Germán Kammerath hasta el fin de su único mandato en el año 2003.

En diciembre de ese año, con la asunción de Luis Juez como nuevo intendente de la ciudad capital por el Frente Nuevo, el papel del Estado y la perspectiva sostenida en éstas políticas municipales fue puesta en tensión. Por entonces, el mandatario había adherido al proyecto de la “transversalidad” y había convocado a referentes de organizaciones sociales a participar de la gestión municipal.

Asimismo, como en otras partes del país, a comienzos del nuevo milenio se desplegaron en el espacio público cordobés acciones colectivas de organizaciones de vecinos y desocupados<sup>1</sup> de resistencia al modelo neoliberal y a los gobiernos que implementaban políticas con esas orientaciones. Con afluentes en los procesos de organización y movilización en Córdoba en los años '90 -e incluso en algunos casos de los años '80-, estos colectivos habían surgido al calor de la profundización de este modelo de desigualdad que se fue profundizando con particularidades al interior del país. Un modelo que fue acompañado de reformas estructurales,

---

<sup>1</sup> En adelante nos referiremos a estos colectivos en masculino por tratarse de una categoría nativa, con el fin de mantener el modo en que se autodenominaron estas organizaciones en el período objeto de estudio, en el cual las discusiones sobre género eran incipientes. Sin desconocer la pluralidad de identidades auto percibidas, en el resto de la tesis, también apelamos al uso del masculino para facilitar la lectura. Sin embargo, en la bibliografía general se incluyen los nombres completos de las y los autores. En el mismo sentido, se sostiene la referencia a organizaciones de trabajadores “desocupados” y no de desempleados conservando la denominación de una de las organizaciones objeto de estudio que, como desarrollamos en el capítulo 4, a veces se nombró como “piquetera” y otras como de “trabajadores desocupados”. Este modo de nombrar a las organizaciones en esta tesis no desconoce las discusiones y diferencias entre trabajo, empleo y ocupación que estos mismos colectivos comenzaron a visibilizar en el espacio público a fines y comienzos del nuevo siglo.

tecnológicas, en los modos de la organización del trabajo y una reconfiguración de los sistemas de protección. Entre ellos, el de las políticas sociales asistenciales - descentralizadas, focalizadas y comunitarizadas- que atentas a las prescripciones del Banco Mundial, promovían la “autorganización” de estos colectivos para la participación en la administración de los programas sociales en un contexto de crecimiento de la tasa de desempleo, empleo informal y pobreza.

Estas vinculaciones entre lo social y lo político son las que en la investigación que dio lugar a esta tesis nos propusimos comprender a partir de una pregunta por las acciones colectivas de organizaciones de vecinos y trabajadores desocupados de Córdoba y su relación con el Estado -en particular con las políticas sociales asistenciales- y los procesos de democratización y desdemocratización entre los años 2001 y 2007. Como cuestiones más específicas nos preguntamos ¿cuáles fueron las condiciones de emergencia y despliegue de las acciones colectivas de estas organizaciones y su vínculo con los distintos niveles del Estado en estos años? ¿Cuáles fueron las gramáticas políticas reactualizadas y recreadas, los sentidos sobre lo social, lo político y los procesos de democratización que estos colectivos pusieron en juego? ¿Cuáles fueron las limitaciones y las posibilidades que habilitaron o no su constitución como sujetos de transformaciones políticas?

Para responder estos interrogantes, se analizaron dos casos significativos en el período 2001-2007 en Córdoba: una organización de trabajadores desocupados, el Movimiento Barrios de Pie, y un colectivo de vecinos, el Centro de Vecinos Autoconvocados. Ambos, con distintas magnitudes en términos organizativos, diferentes trayectorias, gramáticas y apuestas políticas a nivel nacional, compartieron a lo largo de este período algunas demandas y modos de abordar la problemática social; entre ellas, la administración de planes nacionales de asistencia al desempleo, la participación en el Consejo Consultivo Municipal de Políticas Sociales y en la gestión municipal y, finalmente, el desarrollo de proyectos de cooperativización.

Nuestro enfoque sobre la relación entre lo local y lo nacional distó de aquella metáfora de la “isla” con la que, desde el retorno a la democracia, el gobierno radical asoció a Córdoba, como modo de legitimar una forma de gestión provincial diferente a la del resto del país. Antes bien, analizamos los procesos locales en

diálogo con aquellos nacionales, revisando convergencias, diferencias, articulaciones y desarticulaciones.

Atendiendo al modo en que finalmente construimos el objeto de estudio, si en la actualidad tuviéramos que titular la tesis lo haríamos de la siguiente forma: **“(Re) configuraciones de lo social y lo político. Organizaciones de vecinos y trabajadores desocupados, Estado y procesos de democratización y desdemocratización (Córdoba, 2001-2007)”**

### **1. Presentación de la propuesta teórico metodológica**

Cuando comenzamos a construir la propuesta teórica de investigación, encontrábamos que parte de los enfoques de la bibliografía que indagaba estos procesos presentaba un límite para comprenderlos. Se trataba de lecturas sobre las relaciones entre organizaciones sociales, Estado y procesos de democratización que reponían una concepción esencialista y de exterioridad entre lo social y lo político y una perspectiva de las relaciones de poder que situaba a las propias organizaciones sociales por fuera del conflicto del que emergían, en una relación de heteronomía respecto de un Estado, comprendido como un espacio monolítico.

Asimismo, partíamos de reconocer la presencia de otras producciones -algunas que estudiaban relaciones entre organizaciones sociales y Estado y procesos sociopolíticos más generales- con otra perspectiva sobre estas relaciones. Entre ellas recuperamos las contribuciones de una concepción posfundacional de lo social y de lo político y un enfoque pragmático de la política. Desde ese enfoque construimos una red conceptual que articula las nociones de “acción colectiva”, “gramáticas políticas”, “institucionalización” y “democratización”/“desdemocratización”, entendidos como procesos dinámicos, resultado de contiendas políticas de las que participan, entre otros actores, el gobierno, el Estado y las organizaciones sociales.

En términos metodológicos, a diferencia de los estudios de corte más positivista, construimos una propuesta centralmente cualitativa y comprensiva de la perspectiva de los propios actores a partir del análisis de sus prácticas, a través de fuentes orales y escritas (Vasilachis, 1992). Asimismo, decidimos triangular esta metodología con otra cuantitativa para el procesamiento y análisis de cuatro bases

de datos: una de acciones colectivas de protesta en Córdoba entre los años 1989 y 2003 -elaborada por el equipo de investigación del que formo parte- y otras tres bases sobre políticas sociales implementadas en la provincia de Córdoba en el período objeto de estudio. Desarrollamos estas discusiones y la propuesta teórico-metodológica en el capítulo 1 de esta tesis.

En lo que sigue de esta Introducción presentamos los antecedentes principales que revisamos para construir esa propuesta, sin pretender agotar la vasta y prolífica cantidad de estudios sobre estos procesos a nivel nacional. Decidimos agruparlos en tres sub-apartados para facilitar la lectura aunque entre ellos hubo cruces, discusiones e influencias mutuas. Sobre estas producciones dejamos enunciadas sus concepciones y/o propuestas para pensar las relaciones entre lo social y lo político y sus aportes y limitaciones para comprender las relaciones entre organizaciones sociales, Estado y procesos de democratización y desdemocratización. Un desarrollo más extenso de las discusiones con algunos de esos planteos y sus contribuciones se recuperan en el capítulo 1 de la tesis.

El primero de los apartados, presenta las perspectivas de las dos grandes corrientes -nortamericana y europea- que se constituyeron en referencias teóricas para el análisis de organizaciones de vecinos y desocupados en Argentina. El segundo, organiza las principales contribuciones de algunos estudios sociopolíticos producidos en América del Sur post dictaduras. El tercero, recupera los aportes de importantes investigaciones sobre organizaciones de vecinos y desocupados en Argentina y en Córdoba, en particular.

## **2. Las perspectivas norteamericanas y europeas**

Las dos principales corrientes de las que se nutrieron los estudios sobre movimientos sociales y acciones colectivas en Argentina en los últimos treinta años fueron, primero, la de los “Nuevos Movimientos Sociales” (NMS) -o corriente identitaria- y, entrados los años ‘90, la de la “Movilización de Recursos” (MR) -o corriente estratégica-.

No vamos a reconstruir pormenorizada ni históricamente los planteos de ambas corrientes porque ya hay una importante cantidad de bibliografía que ha sistematizado sus aportes y críticas y no es objeto de este trabajo hacerlo. No

obstante ello, sí nos interesa dejar planteada la perspectiva de lo social y lo político desde la que construyen sus objetos de estudio en tanto han atravesado las discusiones de parte de los estudios sobre acción colectiva.

Sendos abordajes habían surgido en la década del '60 en el marco de la emergencia de movimientos sociales de gran escala en EEUU y Europa (Cohen y Arato, 2000) y cuestionaron la perspectiva teórica clásica de la conducta colectiva dominante hasta la década del '70, vinculada con la tradición sociopsicológica de la Escuela de Chicago. A partir de una diferenciación entre las acciones no institucionales -colectivas y las acciones institucionales, la teoría clásica caracterizaba a las primeras como respuestas no racionales o irracionales de las masas o de la multitud al cambio, resultantes de procesos de anomia, del colapso normativo o institucional de la sociedad civil.

Frente a esas explicaciones, la corriente de la MR se centró en la racionalidad estratégica de la acción y priorizó “variables objetivas” para explicar las movilizaciones a gran escala como la organización, los intereses, los recursos, las oportunidades políticas y las estrategias. Las acciones colectivas fueron comprendidas por esta corriente como conflictos contruidos dentro de relaciones de poder por parte de quienes eran excluidos de la representación directa dentro del sistema político. El éxito de la acción se evidenciaba en su reconocimiento como actores políticos y en la obtención de recursos materiales.

Esta concepción, deudora en sus comienzos de la lógica utilitaria del actor racional presente en la teoría de la acción colectiva de Mancur Olson (1968) y de los desarrollos de la teoría de la elección racional de Jon Elster (1990) en términos epistemológicos, tuvo sus particularidades según las distintas orientaciones de sus referentes. Entre ellos, el enfoque organizativo - empresarial de McCarthy y Zald, el modelo multifactorial de Jenkins o los modelos de los procesos políticos de Tilly, Gamson, Tarrow, entre otros (Cohen y Arato, 2000). En especial, los estudios de Tilly y luego Tarrow hicieron inteligibles cuestiones sub consideradas en la perspectiva clásica como la relación entre los movimientos sociales -sus estrategias- y el contexto político social, a través de conceptos como los de oportunidades políticas, repertorios de acción, procesos enmarcadores y estructuras movilizadoras. Los desarrollos recientes de Tilly sobre los procesos de

democratización y desdemocratización y sus aportes son retomados con algunas discusiones en el capítulo 1 de esta tesis.

Por otra parte, la corriente de los NMS desarrolló una clave de lectura de estos movimientos aunque descentrándose del conflicto de clase y la referencia al Estado como el interlocutor central de la lucha. Esta perspectiva hizo foco en los procesos culturales y puso énfasis en la identidad colectiva, como puente entre la acción social y la dimensión estructural. La construcción identitaria implicaba un doble proceso -inacabado, precario- de construcción de significados compartidos que, como señalaba Melucci (1994) incluían la construcción de lazos de “solidaridad” así como también de “conflictos” o -en algunos casos- consensos en torno a determinados recursos simbólicos o materiales.

Para la perspectiva de la MR el logro estratégico de los movimientos sociales estaba dado por su capacidad para incidir en el sistema político -lugar donde se resolvía el conflicto- institucionalizando sus demandas. Como señalaron Pérez y Natalucci (2008), subyacía a este planteo la teoría del Pluralismo Competitivo de Robert Dahl (1989) que concebía a la política “según el modelo económico de la competencia por recursos e influencia, llevada adelante por grupos de interés constituidos en el marco institucional estable del gobierno representativo” (2008, p. 83). Por su parte, para la teoría de los NMS la potencialidad estribaba en la posibilidad de los movimientos de promover el “radicalismo autolimitante”; es decir, espacios de construcción de identidades que disputaban el modelo de desarrollo postindustrial, por fuera de la instrumentalidad del Estado y del utilitarismo del mercado (Pérez, 2010).

No obstante las importantes diferencias entre estos enfoques, ambos incluían una concepción de exterioridad entre lo social -y como parte del mismo, las organizaciones sociales- y lo político -principalmente cristalizado en instituciones- que limitaba las posibilidades de pensar la relación entre las organizaciones sociales, lo público y los procesos de democratización.

### **3. Los estudios sociopolíticos latinoamericanos post dictadura**

En Latinoamérica, iniciado el siglo XX, la preocupación por la relación entre lo social y lo político atravesó las reflexiones y las investigaciones producidas desde la

sociología, la política y la historia, entre otras disciplinas. Recuperamos en este apartado algunos aspectos centrales a partir del período de reconstrucción democrática en adelante.

Tras los regímenes dictatoriales y la desarticulación de esa matriz sociopolítica, en los años '80 emergió una discusión sobre la relación entre lo sociocultural y lo político vinculada a los procesos de democratización, desde una inquietud por las condiciones de fortalecimiento de las instituciones y la modernización del Estado. Con respecto a las organizaciones y movimiento sociales, relacionado con el postulado del resurgimiento de la "sociedad civil", Calderón y Jelin (1987), reconocieron la emergencia de nuevos actores y la multiplicación de prácticas colectivas segmentadas que, entre otras, suponían nuevas formas de sociabilidad y proponían nuevos modos de hacer política que cuestionaban el sistema de representación partidario. Dos Santos y Calderón expresaron, por entonces, la necesidad de "politizar la democracia social y socializar la democracia política" (1987, p. 635) y propusieron una articulación en la que los mecanismos de participación política de los grupos se plasmaran en las instituciones según las reglas de la representación y la delegación política y en la que éstas pudieran registrar las demandas sociales para elaborar un proyecto societal. Ello implicó un corrimiento sobre la preocupación de las ciencias sociales en Latinoamérica que - entre los años '30 y '60, con variantes entre los diferentes países y períodos-, se habían concentrado en el Estado, los partidos políticos y los actores sociales como componentes centrales de lo que se denominó matriz sociopolítica "clásica", "político-céntrica" o "nacional popular" (Garretón, 2002).<sup>2</sup>

Los debates de este período fueron puestos entre paréntesis a fines de los años '80 y comienzos de la década del '90. A medida que la política era colonizada por la economía de la mano de una concepción de la primera que negaba su forma colectiva y conflictiva, se transformaron los sentidos de lo público, lo estatal y lo

---

<sup>2</sup> En esta matriz, el Estado se había constituido como el destinatario principal de las demandas sociales y "como el locus de poder sobre la sociedad" (Garretón, 2002, p. 10). Hacia fines de los '60, la imposibilidad de explicar las características de la región en términos de los "cánones" desarrollistas de los años '50 habían corrido la preocupación del pensamiento social a la problemática de la dependencia, acompañada del redescubrimiento poder imperial y modalidades de inserción en el mercado internacionalizado (Sigal, 2005; Dos Santos, 1987).

privado y se escindió lo social de lo político, como dos categorías “ópticas” o esencialistas (Natalucci y Pagliarone, 2013, p. 85).

En detrimento de una perspectiva democrática, la deslegitimación del papel del Estado como garante de derechos e inclusión social frente a la libertad de un mercado que se proponía como autoregulado (Morresi, 2007) se desplegaba en un escenario político cultural caracterizado por la sustracción de los asuntos políticos del espacio público, la reducción de la política a estrategias de administración y gestión y la disolución de sus anhelos de universalidad (Mata, 2002; Rancière, 2007).

Por entonces, Garretón (2002) identificaba en América Latina una redefinición de los actores y de los modos de acción colectiva tradicional -ligados al modelo de sociedad industrial de Estado nacional-, menos vinculados con la posición estructural de quienes los promueven que a ejes de sentido referidos a procesos de democratización política y social, reestructuración económica y afirmación de identidades y modelos de modernidad. Asimismo sostenía que quedaba pendiente “la relación de estas manifestaciones con la vida política” por lo que resultaba “indispensable la institucionalización de espacios en que se expresen formas clásicas con formas emergentes” (Garretón, 2002, p. 23).

En sintonía con esta advertencia, al ingreso al nuevo milenio y en el marco de la crisis del modelo neoliberal y de lo que se denominó como “giro a la izquierda” en algunos países sudamericanos -entre ellos Brasil, Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador y Uruguay-, García Linera y Tapia fueron dos de los referentes a nivel regional que propusieron un enfoque articulado y no esencialista de la relación entre lo social y lo político. Ambos intelectuales, proponían concebir lo político como el momento de institución de lo social, abriéndose en la sociedad la posibilidad de disputa del orden social. La acción colectiva se presentaba como clave en esa lucha y, cuando desbordaba los lugares estables de la política, se abría paso a la posibilidad de configuración de un movimiento social o de movimientos societales (Tapia, 2009) y la oportunidad de la recreación y/o ampliación (o no) democrática. De las propuestas de ambos autores, recuperamos en esta tesis sus planteos para la comprensión de las acciones colectivas de las organizaciones

sociales indagadas y su relación con el Estado, en el tránsito entre lo social y lo político antes que en uno de estos ámbitos en particular.

#### **4. Aportes y límites de los estudios sobre organizaciones de vecinos y desocupados en Argentina**

En Argentina, los debates sobre estas relaciones también cobraron relevancia en el nuevo milenio al calor de los estallidos del 19 y 20 de diciembre de 2001 y tras las elecciones presidenciales del año 2003. Por entonces era posible constatar que las ciencias sociales no habían podido anticipar estos procesos, que las categorías con las que contaba en las dos décadas previas resultaban insuficientes para comprenderlos y que habían sido desarrolladas desde concepciones que reproducían cierta exterioridad entre lo social y lo político.

El período postdictadura, había sido muy prolífico respecto del estudio de lo que se denominó “transición democrática”. Por entonces, se había privilegiado un enfoque en cierta forma etapista para el que la democracia era un punto de llegada. Dicho proceso tendría lugar a partir de un movimiento principalmente político que acentuaba la generación de un consenso para la consolidación de las instituciones y procedimientos políticos, el fortalecimiento del sistema de partidos políticos y la preservación de un conjunto de derechos y libertades que permitieran garantizar el pluralismo y fortalecer una cultura democrática (Nun y Portantiero, 1987; O’Donnell et al., 1988; De Ipola, 1987). En esa definición, el objeto de preocupación de la ciencia política argentina priorizó al régimen político antes que al Estado (Lesgart, 2003). Como señalaron Rinesi et al. (2007), ello tuvo diversas consecuencias: en la construcción de una teoría de la transición democrática más limitada, la carencia de una perspectiva crítica para reflexionar sobre la reforma neoliberal del Estado que se profundizó en los años ’90 y la crisis del nuevo milenio y en la reducción de los procesos políticos, los propios objetos de estudio y las incumbencias de la ciencia política y la sociología. En esa distribución, como si se tratara de ámbitos y condiciones escindibles, a la sociología le correspondía el estudio de la sociedad y, en particular, de la pobreza y los pobres; y a la ciencia política, la política y, en especial, los derechos y la ciudadanía (Merklen, 2005).

Con respecto a los estudios sobre vecinos, predominaron en esta década aquellos sobre acciones colectivas de protesta y procesos de constitución de comisiones vecinales y normalización de centros vecinales post dictadura; también otros sobre la organización territorial de actores que no se nombraron siempre como vecinos sino -y sobre todo en los años '80- como villeros, habitantes de asentamientos, entre otros. Se trataba de actores que centralmente se organizaban y movilizaban en torno a cuestiones de hábitat urbano vinculadas al acceso a servicios básicos, tierra, vivienda, pago de impuestos, entre otras (Jelin, 1985; González Bombal, 1988; Merklen, 2005; Nardacchione, 2005; Franco et al., 2015; y otros). Estas producciones aportaron elementos para comprender parte de las vertientes organizativas de las que se nutrieron los colectivos objeto de estudio de esta tesis.

Frederic (2006), advertía para los años '90 un desplazamiento de la categoría de la “causa villera” a la de “vecino” como comunidad política de referencia de unos representantes políticos profesionalizados y una reconversión de los “militantes políticos” en “militantes sociales” en el Gran Buenos Aires. Asimismo, en el análisis de Nardacchione sobre distintas protestas vecinales que tuvieron como antagonista al Estado a comienzos de los años '90 en Buenos Aires, el autor resaltaba dos aspectos importantes para la comprensión de la complejidad de las acciones vecinales, aportes que recuperamos en esta tesis. Por una parte, su dificultad para constituirse en interlocutores válidos reconocidos frente al Estado y la “red de maniobras” a las que apelaron para ello. Por otra parte, la relevancia de generalizar la protesta frente a la tendencia vecinal a reducirla a lo local -a una afectividad propia de la “comunidad orgánica”, en palabras de Rusconi (2006, p. 211)- y a una participación intermitente que repudiaba la “excesiva institucionalización (post conflicto) de las organizaciones vecinales” (Nardacchione, 2005, p. 214-215).

En otro contexto, estudios sobre las protestas y asambleas vecinales gestadas en distintas localidades del país al calor de la crisis del 2001, interpretaron a esos y otros espacios como expresiones de un “ethos participativo” -en términos de Pérez (2010)- o de un “ethos militante” (Svampa, 2005) que pretendían condensar al tiempo que eran inmediatamente desbordadas por una diversidad de sentidos en tensión y disputa. Esa pluralidad conformó un abanico que incluyó desde la impugnación del orden hasta un pedido de restauración de los ahorros confiscados

por los bancos -como el caso de algunos ahorristas o los “acorralados”- pasando por una efervescencia de formas organizativas autogestivas con cuestionamientos a los sentidos de la representación política institucional y la recreación de modos horizontales de democracia directa. Con respecto a las asambleas barriales, algunas investigaciones las comprendieron como una expectativa de recomposición política “desde abajo” (Svampa, 2003) mientras que otras las interpretaron como estrategias de supervivencia que tensaron “situacionalmente” la heteronomía de las estrategias biopolíticas de vulnerabilización (Fernández, 2011). Algunos estudios además dieron cuenta del trabajo territorial de estos y otros colectivos de vecinos, su vínculo con el Estado y con las organizaciones de trabajadores desocupados en distintas provincias del país y en Córdoba en particular (Cabral, 2005; Gordillo, 2009). Las reflexiones sobre las relaciones de autonomía/heteronomía de estas experiencias respecto del Estado y el orden social y sus aportes a los procesos de democratización son recuperados para analizar el caso de la organización Centro de Vecinos Autoconocados.

Posteriores indagaciones analizaron los desplazamientos en los sentidos que atravesaron algunas asambleas y cacerolazos cuando, a partir del año 2004, la cuestión de la “inseguridad” adquirió protagonismo en el espacio público y las vincularon a un antagonismo que lejos de radicalizar el proyecto democrático operó sobre la exclusión de grupos marginales y a legitimar la sociedad de castigo (Martínez, 2013). Estas producciones constituyeron un aporte para comprender el contexto de creación de políticas estatales en la provincia de Córdoba a comienzos del nuevo milenio.

Con respecto a las diversas y múltiples investigaciones sobre “piqueteros” y organizaciones de trabajadores desocupados en la década del ‘90, se ocuparon centralmente de analizar -y en la mayoría de los casos comparar- la emergencia de distintos colectivos a nivel nacional y sus acciones colectivas de protesta. Entre otros, realizaron importantes aportes en torno a la constitución y consolidación de un espacio piquetero y sus afluentes (Svampa y Pereyra, 2003; Pereyra et al., 2008; Svampa, 2005); la relación entre los procesos de desafiliación, la emergencia de la organización colectiva y sus modos de politicidad (Merklen, 2005); los cambios en la escala de las relaciones sociales, la resignificación de los vínculos políticos y el

papel de lo territorial (Delamata, 2004); las dinámicas y las particularidades que asumió la protesta social, el papel de las organizaciones en ella, el vínculo que establecieron con el Estado y el impacto político de las acciones (Schuster y otros, 2006; Massetti, 2009; Pereyra et al., 2008; Schuster et al., 2005; Schuster y Scribano, 2001; Auyero, 2002a; Maneiro, 2012; Gordillo, 2009), entre otras. Asimismo, otras investigaciones, desde una perspectiva etnográfica, enfocaron esas experiencias a partir de la vida cotidiana de quienes participaron de las organizaciones (Quirós, 2006), de la vinculación entre las biografías individuales y las protestas (Auyero, 2004), como “sitios” en los que reconocer la “política en movimiento” (Manzano, 2013). Por lo general, estos estudios se concentraron en indagar procesos en el conurbano bonaerense. Otros, por su parte, los indagaron en el interior del país (Aizicson, 2017; Giarraca et al., 2001) y, en particular, en Córdoba (Natalucci, 2008, 2011; Ciuffolini et al., 2007). Entre estas últimas se encuentran las que desarrollamos con el equipo de investigación que integro (Gordillo et al., 2012).

De modo general, estas producciones pusieron de relieve la capacidad de estas organizaciones de transformar en colectiva una experiencia que puede vivirse de modo individual como el desempleo, construyendo al desempleado como actor político con una identidad piquetera; la inscripción de estos procesos -en algunos casos a partir de la trayectoria de quienes los protagonizaron- en otros de resistencia y organización colectiva en temporalidades históricas más amplias a su constitución como colectivos de trabajadores desocupados; el cuestionamiento de los modos de representación política delegativos a partir de la construcción de espacios deliberativos para la toma de decisiones y de participación directa; su importante presencia en el espacio público a partir de la protesta y un sostenido trabajo territorial; su capacidad de resignificar las políticas asistenciales del Estado y convertirlas en recursos organizacionales.

Con respecto a esta relación entre organizaciones de vecinos y trabajadores desocupados y políticas sociales que en esta investigación nos proponemos enfocar, las interpretaciones producidas por la academia partieron de distintos modos de pensar la relación entre lo social y lo político.

En algunos casos, estas políticas fueron estudiadas como respuestas estatales disciplinadoras -no represivas- a la demanda de trabajo; es decir, como estrategias tendientes a disuadir las acciones de protesta de organizaciones de vecinos y desocupados apuntando a su desmovilización a partir de mecanismos de negociación en relación con estos programas y a otros de ayuda alimentaria (Delamata, 2004; Svampa y Pereyra, 2003). La versión más extrema de estos procesos se sintetizó en algunos trabajos en la categoría de “cooptación” (Ciuffolini y De la Vega, 2010). Esta noción, como la de “disciplinamiento” y “estatalización”, reponía aquella fractura teórica entre entre lo social y lo político a la que nos referimos, limitando los modos de comprender la relación entre las organizaciones sociales, lo público- estatal y los procesos de democratización y desdemocratización. La política de las organizaciones reducida a las transformaciones territoriales y al momento destituyente y/o de confrontación con el Estado, se concebía como externa al conflicto de la que emergía. El Estado, en estas perspectivas, asumía la forma de un espacio monolítico, de administración y gestión del orden existente.

Muy emparentadas con esta perspectiva, algunas nociones de “clientelismo” que se propusieron para dar cuenta de la dinámica entre organizaciones sociales o sujetos, políticas sociales y partidos políticos en los años ‘90 en nuestro país, aportaron sentidos semejantes. En tensión con estas concepciones, la propuesta relacional y político-cultural de Auyero (1997; 2001), invitó a estudiar la “zona gris” desde un enfoque de no exterioridad entre estos espacios y, sobre todo, respecto del estatuto de los sujetos destinatarios de estas políticas.

Otra bibliografía, haciendo foco en la politicidad “positiva” en los sectores populares y los procesos de territorialización -que incluye la protesta pero también la negociación para la supervivencia y/o para garantizar ciertos derechos básicos-, introdujeron la metáfora de la “caza” para nombrar las estrategias que los sectores populares desarrollan con respecto a las políticas asistenciales diseñadas desde el Estado (Merklen, 2005). Desarrollos más recientes que trabajaron con recortes temporales que incluyen al primer gobierno Kirchnerista recuperaron la categoría de “profanación” de Agamben para dar cuenta del proceso de apropiación no solo utilitario de estas políticas por parte de las organizaciones sociales (Maneiro, 2013).

Por otra parte, algunos estudios desarrollados desde la antropología política pusieron de relieve la diversidad de prácticas que tensionaron algunas perspectivas analíticas reificadas que enfatizaban la distinción normativa entre los movimientos sociales y el Estado (Manzano, 2008). En sintonía con esta última, otras producciones pusieron en tensión la “encrucijada teórica” (Perez, 2010) - “autonomía” versus “heteronomía”- desde la que se analizó la relación entre las organizaciones sociales y el Estado y recuperaron la noción de “institucionalización” para abordar estos procesos, sobre todo en el periodo post 2003 (Masseti, 2006; Natalucci, 2010a). De estas últimas producciones, retomamos centralmente con Natalucci (2013), las contribuciones de una perspectiva pragmática de estos procesos y una concepción relacional de lo social y lo político.

Algunos estudios realizaron importantes aportes para analizar la participación de aquellas organizaciones de trabajadores desocupados que se integraron a la gestión del Estado nacional -y en la implementación de políticas sociales asistenciales- tras la convocatoria de Kirchner y el modo en que eso se relacionó con el trabajo territorial en la capital federal y el conurbano bonaerense (Perelmiter, 2010; Massetti, 2010; Cortés, 2010; Gómez, 2010; Gradin, 2015; Forni y Castronuovo, 2014; Schuttenberg, 2010; Fornillo, 2008; entre otros). “Militar el Estado” en el territorio o -en otra dirección- “disputar el Estado”, “territorializar” o “movimientizar el Estado”, “politización militante de la gestión” son algunas de las categorías que estas investigaciones recuperaron para analizar estas relaciones y el modo en que fueron interpretadas por estas organizaciones, atravesadas por una tensión entre la lógica de construcción de las organizaciones sociales y la racionalidad técnico-burocrática estatal. Las contribuciones de parte de estas investigaciones se recuperan a lo largo de las páginas que siguen; en particular, las de aquellos estudios que enfocaron a nivel nacional la relación entre el Estado y una de las organizaciones objeto de estudio en esta tesis, el Movimiento Barrios de Pie a nivel nacional (Perelmiter, 2010; Massetti, 2010; Cortés, 2010; Gómez, 2010; Gradin, 2015; y otros).

Otras investigaciones indagaron algunos aspectos de este colectivo a nivel local (Traversaro, 2014; Ramos Avila, 2004; Ciuffolini y De la Vega, 2007).<sup>3</sup> De ellas, las más vinculadas con el tema y la perspectiva teórica de esta tesis fueron las producidas por Natalucci (2008; 2010). Estas realizaron aportes para comprender, primero, la constitución del espacio piquetero a nivel local y sus vínculos con el régimen político entre los años 1994 y el 2006 y, luego, la movilización de las organizaciones piqueteras y sindicales y sus relaciones en el espacio multiorganizacional en el período 1995 y 2001. Principalmente el primero de estos estudios nos ofreció datos y aportes teóricos que consideramos al construir las dimensiones de análisis en el proceso de investigación que dio lugar a esta tesis.

Hasta el momento no hemos encontrado investigaciones que indaguen sobre la relación del Centros de Vecinos Autoconvocados con el Estado. Con respecto a este colectivo sólo hemos podido reconocer una presentación general sobre algunas de sus acciones de resistencia (Ciuffolini, 2008) y la producción del equipo de investigación que integro, centrada en sus acciones de protesta entre los años 1995 y 2003 (Franco y Medina, 2012).

## **5. Organización de la tesis**

La exposición de la tesis se estructura en una Introducción y cinco capítulos.

Luego de la presentación del tema y la revisión de los antecedentes realizada en la Introducción, en el capítulo 1 explicitamos la perspectiva teórica de estudio, construimos una red conceptual, el problema, los objetivos, las hipótesis y exponemos la propuesta metodológica.

En el segundo capítulo, revisamos las transformaciones en el Estado -a nivel nacional, provincial y municipal- y los vínculos con las organizaciones sociales, atendiendo a los distintos períodos y gestiones de gobierno involucradas en el contexto estudiado. Analizamos, en particular, los cambios en la política social, el papel de las organizaciones sociales en ellas y sus especificidades en Córdoba.

---

<sup>3</sup> Estas investigaciones sobre el Movimiento Barrios de Pie en Córdoba indagaron sus propuestas comunicacionales (Traversaro, 2014); las prácticas de organización y resistencia de las mujeres que lo integraban entre los años 2002 y 2003 (Ramos Avila, 2004); sus procesos de resistencia y las estrategias que desplegó frente al PJyJHD en los primeros años del nuevo siglo (Ciuffolini y De la Vega, 2007).

Los capítulos 3 y 4, presentan una reconstrucción empírica de los antecedentes, las acciones colectivas protagonizadas por ambas organizaciones y su vínculo con el Estado, atendiendo a las dimensiones propuestas y a las distintas temporalidades de la acción.

Finalmente, en el capítulo 5 realizamos una recapitulación de los principales resultados presentados en la tesis y una interpretación sobre las relaciones entre organizaciones sociales, Estado y procesos de democratización y desdemocratización. Para ello recuperamos los planteos teóricos y hallazgos empíricos y analizamos los encuentros y desencuentros, continuidades y desplazamientos entre las condiciones de surgimiento y de desarrollo de las dos organizaciones sociales analizadas, Centro de Vecinos Autoconvocados y el Movimiento Barrios de Pie, sus acciones colectivas y su vínculo con el Estado. Como parte de las consideraciones finales, dejamos formulados desafíos y nuevos interrogantes.

Al final de la tesis, incluimos la enumeración y descripción de las fuentes documentales, las referencias y datos contextuales sobre cada una de las entrevistas realizadas.

## **CAPÍTULO 1: ACCIONES COLECTIVAS, ESPACIO PÚBLICO Y ESTADO. UNA PERSPECTIVA SOCIOPOLÍTICA PARA SU ABORDAJE**

Un concepto, entonces, es palabra historizada e historia verbalizada; consecuentemente, todo concepto es político. Y es acaso este el tan mentado concepto de lo político: un concepto es un campo de batalla donde entran en disputa las narrativas posibles que restituyen a y en la acción su significado histórico.  
(Germán Pérez, 2010, p. 439)

La lucha política es siempre también una lucha por definir lo que es la política.  
(Norbert Lechner, 1984, p. 13)

Para analizar las acciones colectivas de las organizaciones sociales y su vinculación con el Estado y los procesos de democratización y desdemocratización desde una interrogación por las relaciones que se producen entre lo social y lo político, en las páginas siguientes definimos una perspectiva de análisis y construimos una red conceptual en la que lo político constituye una dimensión central de comprensión de la sociedad.

Para ello recuperamos discusiones y aportes de las investigaciones sobre acciones colectivas presentadas como antecedentes en la Introducción y lo articulamos con algunas contribuciones por fuera de ese campo de estudio en particular. Sobre estas últimas, iniciamos este capítulo retomando el debate con las posiciones que han postulado la existencia de un fundamento último de lo social y la posibilidad de una ciencia “objetiva” y verificable.

Luego, para comprender los vínculos y solapamientos entre lo social y lo político desde una relación entre agencia y estructura, nos concentramos en los conceptos de “acciones colectivas”, de “gramáticas políticas” y de “institucionalización” contruidos desde una perspectiva pragmática. La articulación de estas nociones se propone para comprender las relaciones entre las organizaciones sociales, las políticas sociales y los procesos de democratización y desdemocratización.

Hacia el final de este capítulo presentamos el problema de investigación, los objetivos, la hipótesis y la metodología.

## **1. Perspectiva sociopolítica**

### ***1.1. Lo político como conflicto y forma colectiva***

Desde la óptica de Mouffe (2009), lo social puede ser concebido como el trasfondo sobre el que opera la lógica de lo político para instituir la sociedad como objeto nunca terminado. Es decir, mientras que lo social refiere al campo de las prácticas socio – históricas sedimentadas, heterogéneas e indeterminadas que son condición de posibilidad -e imposibilidad- de la sociedad -o del orden social- a la que siempre excede (Retamozo, 2009a), lo político alude a la dimensión de conflicto por la nominación e institución de lo social que involucra diversas formas del antagonismo constitutivo de las sociedades humanas y que pueden surgir en distintas relaciones sociales (Mouffe, 2009).

Se trata de un interregno simbólico inaugural -sin un contenido prefijado- que produce un acontecimiento social potencialmente abierto y contingente y, en tal sentido, tiene una dimensión instituyente y performativa. En tanto implica una relación de diferencia y de oposición entre un “nosotros” y un “ellos” -su exterior constitutivo-, a diferencia de lo que comprende el pensamiento racional -liberal, lo político está vinculado con formas colectivas de identificación. Esta relación entre ambos no siempre es antagónica o adversativa pero existe la posibilidad de que se convierta en tal.

Desde esta perspectiva, todo orden social es contingente y político en tanto está basado en la exclusión de otras posibilidades y es expresión de una configuración particular de relaciones de poder que son constitutivas de lo social. Señala Mouffe (2009) que aquello que en un momento es considerado como el orden natural -y legitimado por el sentido común que lo acompaña- es el resultado de prácticas hegemónicas sedimentadas y no de una objetividad más profunda e independiente de las prácticas que le dieron origen, como lo concibe el racionalismo liberal o un marxismo economicista. Por ello, las prácticas a través de las cuales se establece un determinado orden y se fija el sentido de las instituciones sociales son “prácticas hegemónicas” pasibles de ser desafiadas por prácticas contrahegemónicas.

Por su parte, la política surge del movimiento de lo social y refiere a un “conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden,

organizando la coexistencia humana en el contexto de conflictividad derivada de lo político” (Mouffe, 2009, p. 16). Supone orden, conflicto y antagonismo por el reconocimiento de un “nosotros” en oposición a unos “otros”, en las luchas por la producción y reproducción de la sociedad<sup>4</sup>, disputas en las que los hombres se constituyen como sujetos; involucra decisiones y opciones entre alternativas opuestas y no sólo cuestiones técnicas relativas a expertos; tampoco puede ser reducida a la mera gestión o administración del orden instituido.

Este modo de concebir la relación entre lo social y lo político supone discutir con las posiciones que han postulado la existencia de un fundamento último de lo social y la necesidad y posibilidad de una ciencia objetiva y verificable. Como señala Marchart (2009), la propuesta de Mouffe, Schmitt, Ricoeur, Wolin, Laclau, Nancy, Badiou, Rancière, y otros se inscribe en el “posfundacionalismo”, de inspiración lefortiana, que reconoce su procedencia en lo que denomina como “heideggerianismo de izquierda”. Esta perspectiva comparte:

“(…) la necesidad de dividir la noción de la política desde dentro (y, como ya dijimos, hacerlo de una manera por completo diferente de las distinciones meramente “ópticas” como las que se establecen, por ejemplo, entre la política, la determinación de normas y objetivos generales y la forma de gobierno). Al escindir la política desde dentro se libera algo esencial. Por una parte, la política en el nivel óptico continúa siendo un régimen discursivo específico, un sistema social particular, una cierta forma de acción; mientras que, por otra parte, lo político asume en el nivel ontológico el rol de algo que es de una naturaleza totalmente distinta: el principio de autonomía política, o el momento de institución de la sociedad. En cuanto diferenciada de la política, la noción de lo político no puede integrarse en las diferencias sociales, la repetición, la tradición, la sedimentación o la burocracia. Lo político, al igual que otras figuras de la contingencia y la infundabilidad tales como el acontecimiento, el antagonismo, la verdad, lo real o la libertad, mora, por así decirlo, en el no-fundamento de la sociedad, el cual se hace sentir en el juego diferencial de la diferencia política. Pero el fundamento de la sociedad no está “meramente” ausente. (Re-) aparece y está suplementado por el momento que podemos llamar, haciendo referencia al “momento maquiaveliano” de J. G. A. Pocock (1975), el momento de lo político.” (Marchart, 2009, p. 8)

Precisadas estas nociones, nos interesa plantear dos cuestiones vinculadas con nuestro objeto de estudio y la perspectiva sociopolítica desde la que fue construido. La primera, es que la diferenciación entre lo político y la política que se propone en estos planteos pone más énfasis en marcar los límites entre una y otra -

---

<sup>4</sup> Son justamente estas dimensiones del conflicto y la propia formación de las identidades colectivas las que el pensamiento racionalista, liberal e individualista tiende a negar (Mouffe, 2009).

demarcaciones a partir de las cuales a “lo político” le corresponde la disputa y la capacidad de institución y a “la política”, lo instituido, la “tristeza sepia de las rutinas institucionales”, dirá Pérez (2017), y la administración- antes que indagar en sus relaciones, solapamientos, disrupciones; procesos a los que sí nos interesó atender en la investigación que dio por resultado esta tesis.

La segunda sigue una advertencia de Pérez (2017) acerca de que la crítica a una filosofía de la historia y al positivismo realizada por el posfundacionalismo no debe conducirnos a una escisión entre lo social y lo político. Dicha separación se produce como resultado de un desplazamiento que se sostiene en las premisas de que lo social como “totalidad representable” es siempre “el resultado contingente de una lucha política por la hegemonía significativa de un campo discursivo determinado” y que como tal no conforma un “régimen de producción de significados” (Pérez, 2017, p. 284). Es decir, dicho corrimiento es producto de una lectura que desenfoca las transformaciones en las estructuras sociales, en las instituciones, en las tradiciones y en los repertorios de acción colectiva y que tiene su origen en la filosofía del lenguaje en la que se funda:

El desplazamiento semiótico de la teoría política “posfundacionalista” se produce, precisamente, por abrazar una teoría del significado heredera de la tradición saussureana para la cual el foco de atención debe colocarse en la dimensión paradigmática de la lengua cuya estructura no sólo es independiente de la experiencia social de los hablantes sino que la configura. Y en este punto, vale aclarar, las diferencias entre el estructuralismo y el pos son de grado, no de fondo. Desde semejante perspectiva, la palabra política constituye de cabo a rabo el espacio social en el que se la reconoce, desconociendo la existencia de tradiciones, memorias y repertorios de acción que se fraguan en los lenguajes naturales a través de los cuales los hablantes definen su medio y coordinan sus relaciones entre sí y con el mundo. (Pérez, 2017, p. 284)

Al respecto, consideramos importante la advertencia de Pérez (2017) acerca de la necesidad de diferenciar el posfundacionalismo del posestructuralismo, y rescatar la idea de evitar tomar una posición totalizadora y final de la sociedad. Como alternativa autores como Natalucci (2015; 2018) y Pérez (2017) proponen reponer la noción de “gramáticas políticas” para analizar las prácticas de los agentes - considerando la performatividad política de la acción- y su vínculo con el Estado, a partir de relaciones de recursividad y no de dualidad entre estructura y acción.

## **1.2. Los aportes del concepto de “gramáticas políticas”**

La noción de “gramática política” entendida en términos generales como “performatividad política de la acción”<sup>5</sup> remite al concepto de “gramática”. En particular, se nutre de los conceptos de “regla” y “juego de lenguaje” acuñados por el *segundo* Wittgenstein (1976). Desde esta perspectiva, el lenguaje es concebido como un repertorio de juegos -escenarios y reglas de acción tanto lingüísticas como no lingüísticas-, en los cuales las palabras adquieren su significado. El sentido de una palabra va a depender “de su uso en los distintos juegos de lenguaje en que aparece, esto es, del marco de prácticas sociales en las que interviene: como se advierte, un juego de lenguaje consiste no sólo en el lenguaje sino también en las prácticas sociales a las que se vincula” (Maccioni, 2002). Tales contribuciones han permitido superar concepciones positivistas y perspectivas dualistas y deterministas de la relación entre estructura y acción (Pérez, 2002; Nardacchione, 2005; Trom, 2008; Giddens, 2011) y configurar una concepción pragmática de la política entendida como una red de significados en acción, como “juego de lenguaje” (Wittgenstein, 1976).

En este sentido, Pitkin (1984)<sup>6</sup> sostiene que la dimensión que más se asemeja al pragmatismo en Wittgenstein es la de considerar que un concepto está condicionado por los juegos de lenguaje en que se utiliza; y que los conceptos y sus gramáticas determinan las posibilidades de los fenómenos. El concepto de gramática se refiere a “las reglas no escritas que gobiernan nuestro lenguaje y regulan nuestros juegos de lenguaje” (Pitkin, 1984, p. 175). De allí que, como señala Pérez:

a un mismo tiempo habilitan y constriñen las posibilidades y oportunidades de (inter)acción produciendo el significado de una manera relacional y dialógica; desde esta perspectiva el significado no procede de las combinatorias contingentes operadas en la estructura -más o menos fallida- de la lengua, ni en la representación realista de estados de cosas externos a la comunidad de hablantes, sino que se

---

<sup>5</sup> Como señala Natalucci (2010) existen otras dos acepciones de “gramática” que no abordaremos en este trabajo: una que remite a la estructura motivacional de los sujetos implicados y que supone un enfoque fenomenológico y otra que alude a la estructura organizativa de los movimientos sociales, en clave la movilización de recursos.

<sup>6</sup> Pitkin (1984) también señala que si bien no se puede aludir a una teoría política wittgensteiniana, puede hablarse de un modo wittgensteiniano de teorizar sobre lo político, una forma que supondría ser “plenamente consciente de y haría pleno uso de la pluralidad de casos particulares [...] sustituiría perspectivas parciales desarrolladas ad hoc allí donde fuesen necesarias” (1984, p. 469. Cursivas en el original). Sin embargo, la autora no avanza más sobre esta afirmación.

plasma y recrea en la medida que contribuye a las definiciones de mundo y la coordinación de las acciones en los juegos de lenguaje naturales. Complementariamente, el significado no se restringe a la dimensión verbal de la lengua sino que el discurso se constituye como un régimen general de significación que articula saberes, instituciones, prácticas y subjetividades en un “teatro de operaciones” (Foucault, 1987 en Pérez, 2017, p. 287)

Entonces, el concepto de gramáticas no nos conduce a reintroducir ninguna esencia o concepción determinista de la acción. Más bien, nos permite reconocer las condiciones de producción de las prácticas atendiendo a las transformaciones en las estructuras sociales y las instituciones, a las memorias y experiencias aprendidas por los actores y también a sus posibilidades de recreación, transformación y reproducción de sus propias prácticas y del orden social. Las “gramáticas políticas” incluyen el sistema de reglas que dan sentido a las relaciones entre los actores movilizados y las estructuras institucionales del régimen político de gobierno; es decir, partidos políticos, asociaciones sindicales, otras asociaciones intermedias y el Estado (Pérez, 2017). Asimismo, implican un modo particular de construcción de los problemas públicos, un sentido performativo con capacidad de reconfigurar los límites entre lo público, lo privado y lo estatal (Nardacchione, 2005).

A diferencia de la noción de “gramáticas de movilización” (Trom, 2008)<sup>7</sup>, las “gramáticas políticas” no suponen un estudio de la estructura motivacional de los sujetos, más propio de un enfoque fenomenológico. Tampoco, la indagación de las “configuraciones militantes” (Pudal, 2011 en Aiziczon, 2018) entendidas como esos modos de practicar la militancia y las corrientes teóricas que dan cuenta de ellos y que predominan en determinados períodos históricos.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Como señala Natalucci para Trom (2008) “una gramática comprende un repertorio de argumentos, justificaciones y marcos para la interpretación de las acciones propias y de otros. Por ello, una gramática delinea la manera en que un sujeto colectivo interviene en el espacio público, encuentra motivos de justificación y razones para actuar, establecer estrategias de coordinación o articulación política, inscribe a otros sujetos en interrelación y propone un modo de ordenamiento, a partir de la consideración que la política tiene un sentido destituyente y también uno instituyente” (2008, p. 21-48).

<sup>8</sup> En la problematización que realiza Aizicson para la construcción de una propuesta de análisis del caso argentino, refiere a estas configuraciones como “prácticas, valores, ideologías que constituyen un modo histórico específico de practicar la militancia, como así también la forma en que determinadas corrientes teóricas las estudian o dan cuenta de ellas, porque se considera que además forman parte de la construcción de una configuración militante determinada. La noción de configuraciones militantes permite establecer perfiles históricos determinados sobre la base de un

El foco en las “gramáticas políticas” invita a reconocer sus particularidades y la posibilidad de coexistencia de ellas en un mismo período de tiempo como modos de intervenir en el espacio público. Su indagación convoca a analizar, por un lado, las reglas no escritas y usos que configuran formas de relación entre los actores movilizadas y el Estado, el gobierno y otros colectivos, los modos de organización y construcción política, sus repertorios de acción y marcos interpretativos; y, por otro lado, las relaciones entre las acciones que dan impulso a las intervenciones en el espacio público para reproducir, transformar o cuestionar el orden social. Para Pitkin (1984) esta búsqueda de visibilidad y legitimidad pública es lo que les otorga a las gramáticas su estatuto político. Al respecto, señala Natalucci que una gramática refiere al modo en que “un sujeto colectivo interviene en el espacio público, encuentra motivos de justificación y razones para actuar, establece estrategias de coordinación y articulación política y propone un modo de ordenamiento social” (2015, p. 92. Traducción propia)<sup>9</sup>.

En tal sentido, el reconocimiento de gramáticas diferentes tiene en este trabajo un sentido analítico que permite categorizar y diferenciar los modos de organización internos, las concepciones del cambio social y de la política, el papel y la forma de construcción del trabajo territorial, el Estado y el orden social, atendiendo a los contextos sociohistóricos particulares.

## **2. Organizaciones sociales, Estado, espacio público y procesos de democratización**

Como afirmamos, la política surge del movimiento de lo social a lo largo de la historia y es la propia sociedad la que define los lugares de la política, las instituciones, los actores y las acciones políticas consideradas legítimas.

La sociedad moderna legitimó al Estado junto con una estructura de dispositivos, actores e instituciones de representación y legislación política. Esto fue posible a

---

análisis que cruza variables tales como las ya mencionadas de sujeto, tipo de organizaciones sobre las que se despliega una militancia, contexto político donde se desarrolla, los paradigmas analíticos mediante los cuales se estudia el fenómeno de la militancia, ya sea desde las ciencias sociales o desde el propio campo militante, entre otras variables posibles” (2018, p. 143).

<sup>9</sup> Versión en castellano provista por la autora del artículo que fuera traducido al portugués para su publicación como: “uma gramática delinea o modo como um sujeito coletivo intervém no espaço público, encontra justificativas e razões para agir, estabelece estratégias de coordenação e articulação política e propõe uma forma de ordenação social.”

través de la instauración y el reconocimiento de un conjunto de derechos políticos que también permitieron la práctica política en la organización de la sociedad civil y la esfera de lo público (Tapia, 2009). Como parte del proceso de constitución y desarrollo de la sociedad moderna, los lugares de la política han tendido a diversificarse y también a estabilizarse, a institucionalizarse. Este proceso ha ido de la mano, al mismo tiempo, del rebase por parte de organizaciones y movimientos que participan de la disputa del orden social.

Desde esta perspectiva, la noción de acción colectiva es clave, en tanto cuando desborda los lugares estables de la política, comienza a configurarse un movimiento social. Como señala Tapia éstos pueden pensarse en el tránsito entre el espacio social y el político, aquel que “se mueve a través de la sociedad buscando solidaridades y aliados en torno a un cuestionamiento sobre los criterios y formas de distribución de la riqueza social o de los propios principios de organización de la sociedad, del estado y del gobierno” (2009, p. 2). La disputa que dan los movimientos como agentes de cambio social incluye no sólo el cuestionamiento de las reglas sistémicas que redefinen el juego político -movimientos societales- sino también la posibilidad de profundizar la conservación y reproducción de determinado orden social. Cuando lo que está en juego es la puesta en cuestión de los criterios, los modos y los sujetos que pueden participar de la distribución de bienes materiales o simbólicos de una sociedad, estamos ante la posibilidad de la recreación y/o ampliación (o no) democrática.

Relacionado con esta posición, García Linera (2010) diferencia aquellos movimientos sociales que tienen por objetivo modificar aspectos particulares de la normativa estatal, “movimientos socio-políticos reivindicativos”, respecto de los que procuran tomar el control del Estado y promover un nuevo orden estatal, “movimientos socio-políticos estructurales”. Desde esta perspectiva ni los movimientos sociales ni el Estado pueden ser pensados por fuera de lo político, de los conflictos que los constituyen.

En lo que sigue del capítulo, recuperamos las contribuciones del campo de la acción colectiva (Gamson, 1995; Mc Adam et. al., 2005; Tilly, 2010) y de los desarrollos que al respecto han realizado algunos autores latinoamericanos (Tapia, 2009; García Linera, 2010; Gordillo et al., 2012; Ferrari y Gordillo, 2015) incluyendo

aquellos que introdujeron aportes de la sociología pragmática para la comprensión de la acción y los movimientos sociales (Nardacchione, 2005; Schuster 2005; Naishtat, 2005; Pérez y Natalucci, 2008, Natalucci, 2012, Pérez, 2018).

Sobre todo estas últimas dos perspectivas -latinoamericana y pragmática- nos permiten conceptualizar al poder como “poder hacer” y a la política como “capacidad de actuar”. Esta conceptualización es clave para reconocer a los procesos de “institucionalización” como aquellos que se pueden generar a nivel de la sociedad civil y del Estado y que no pueden reducirse a la mera “cooptación” o “estatización”.

Para avanzar en la comprensión del vínculo de estas organizaciones con el espacio público y el Estado, recuperamos una concepción de éste como relación y conjunto de estructuras en disputa.

### ***2.1. Aportes del concepto pragmático de institucionalización***

Anteriormente, nos referimos a los límites para pensar las relaciones entre lo social y lo político y la acción colectiva de los dos grandes paradigmas sobre los movimientos sociales, el estratégico y el identitario. Señalamos con Pérez (2011) que, frente a la “encrucijada teórica” presente en la corriente estratégica -para la cual el logro estratégico de los movimientos sociales implica su capacidad para incidir en el sistema político como el lugar donde se resuelve el conflicto e institucionalizan sus demandas- y en la teoría de los nuevos movimientos sociales -para la que la potencialidad de los movimientos sociales reside en su posibilidad de promover el “radicalismo autolimitante” por fuera de la instrumentalidad del Estado y del utilitarismo del mercado-, es posible pensar estas relaciones desde otra concepción, una de articulación, de no exterioridad. Asumir esta última perspectiva supone abandonar una concepción minimalista de la política, guiada por un “modelo económico de la competencia por recursos e influencia, llevada adelante por grupos de interés constituidos en el marco institucional estable del gobierno representativo” (Pérez y Natalucci, 2008, p. 83) y una perspectiva estática del poder entendido como dominación de unos por sobre otros (Otto Maduro, 1992).

Sostenemos que las organizaciones sociales no sólo producen política en su constitución y en la confrontación con otros actores sociales –incluyendo al Estado– sino también en la disputa por la institución de un orden eminentemente conflictivo y que la propia existencia de los movimientos sociales reproduce. Ellos participan y promueven procesos de institución más allá del Estado y son ellos mismos producto de procesos instituyentes. Con respecto a esto último, no sería posible imaginar una organización de trabajadores desocupados o de vecinos en Córdoba, sin una movilización de trabajadores desocupados como la de Argentina a fines del s. XX y comienzos del s. XXI, un movimiento de organizaciones vecinales de base, barriales y villeras como la de Córdoba desde mediados de los años ‘80 comienzos de los años ‘90 sin un contexto económico, político y cultural como el de entonces. Al mismo tiempo, tampoco puede pensarse a estas organizaciones como mero resultado de esos procesos.

A partir de una noción de poder como “poder hacer” (Otto Maduro, 1992) y de política como “capacidad de actuar” (Natalucci, 2012), recuperamos un concepto pragmático de institucionalización como una actividad no circunscripta a las instituciones y a la relación entre organizaciones sociales y Estado; concepciones ambas que -de diferente modo- reproducen la escisión entre lo social y lo político a la que referimos con anterioridad.

En su reflexión sobre los procesos de democratización y las poliarquías en Latinoamérica, O’Donnell propone comprender a las instituciones como “(...) una pauta regularizada de interacción conocida, practicada y aceptada (si bien no necesariamente aprobada) por actores cuya expectativa es seguir actuando de acuerdo con las reglas sancionadas y sostenidas por ella” (1997, p. 224).

Frente a un neoinstitucionalismo que plantea que la democracia será más consolidada en tanto y en cuanto exista una mayor adecuación entre, por un lado, la garantía de elecciones libres, la división y el control de poderes y la libertad de opinión pública y, por el otro, los comportamientos y las expectativas de comportamiento de la ciudadanía en su conjunto de respeto de estas reglas institucionales, O’Donnell propone otra concepción. Sostiene una perspectiva que atiende a los “juegos” que realmente se practican y a las reglas formales e informales en el marco de las cuales éstos se producen.

Desde esta concepción es posible pensar que los actores movilizados son producto y productores de nuevas pautas de acción –más o menos democratizadoras o desdemocratizadoras - que pueden institucionalizarse no sólo a nivel de la sociedad civil sino también en el Estado. Como señalan Natalucci et al., los movimientos sociales pueden contribuir a conformar un “dispositivo institucional capaz de abrir el Estado y el sistema político a una interrogación democrática desde las formas de organización y los repertorios de acción de la propia sociedad civil” (2013, p. 145). A diferencia del privilegio que le otorgan las perspectivas de la “cooptación” o la “estatización” a un sentido eminentemente destituyente de la política, entendemos que lo contencioso de la acción no se opone a la institución sino que es la propia acción de los movimientos y el conflicto el que puede interpelar a (y verse interpelado por) el Estado -y la sociedad en su conjunto- respecto de las posibilidades de democratización.

## ***2.2. Organizaciones sociales, acciones colectivas y la constitución de subjetividades políticas***

Como advierte la vasta bibliografía sobre movimientos sociales y acción colectiva, no concebimos a las organizaciones sociales como entidades pre constituidas. Ni los movimientos sociales ni las propias organizaciones sociales preexisten a la acción ni, agregamos, sus prácticas son a priori transgresoras o reproductoras. Antes bien, los actores movilizados se constituyen en la lucha por la hegemonía, en el cruce entre procesos de interpelación -como propuestas de identificación y de construcción de subjetividades más o menos contingentes- y de reconocimiento -en los que los sujetos podrán aceptarlas, rechazarlas y/o proponerlas-. Esta perspectiva implica reconocer el peso de los mandatos hegemónicos sin desconocer, por otra parte, la dimensión autoconstituyente de los sujetos y la precariedad e inestabilidad de las eventuales adscripciones identitarias (Grüner, 1998). De ahí la importancia de atender a la historicidad para comprender la densidad de los sujetos que se construyen en la disputa política (Pérez, 2010).

En ese sentido, algunas de las preguntas que articularon el análisis de los colectivos que abordamos en este trabajo refirieron a las transformaciones en sus acciones colectivas y en los procesos identitarios, a las trayectorias que recuperaron y a los

modos en los que se amalgamaron en la construcción de subjetividades políticas y su vínculo con otros actores sociales incluyendo el Estado.

Comprendemos por acciones colectivas aquellas emprendidas por un grupo que se ve implicado en un proceso de identificación en torno a un objetivo común y, de ese modo, involucrado con una misma acción-discurso. En dicho proceso, ese nosotros se diferencia de un otro –alteridad- que puede o no convertirse en antagónico. La acción colectiva se inscribe en el espacio público, ámbito donde se despliega su contenido político (Nardacchione, 2005).

En este concepto amplio se inscribe el de acción colectiva de protesta, definida por Schuster como un:

acontecimiento visible de acción pública contenciosa de un colectivo, orientada al sostenimiento de una demanda (en general con referencia directa o indirecta al Estado). En este sentido, cabe remarcar que el concepto se limita a partir de su carácter contencioso e intencional, por un lado, y de su visibilidad pública, por el otro. (2005, p. 56)

Schuster señala que la demanda puede dirigirse al Estado o a todo el sistema político. En este trabajo, nos resulta pertinente ampliar esta definición para incluir acciones y demandas no necesariamente dirigidas al Estado, aunque mientras subsista la hegemonía estatal sobre la regulación del orden, éste formará parte de los diversos reclamos como el caso de las acciones emprendidas por los dos colectivos analizados en esta tesis.

A diferencia de la acción colectiva, la protesta incluye un escenario de conflicto “(...) que rompe con un estado de relaciones, aunque su aparición siempre se inscriba (...) dentro de ciertas reglas de juego” (Nardacchione, 2005, p 91). Retomando a Wittgenstein, Nardacchione señala que si bien cualquier acción colectiva se desarrolla en un escenario de juego y con unas reglas preestablecidas, al mismo tiempo puede “intentar reordenar las reglas a las cuales debe someterse” y aun cuando un acto se inscriba siempre en un determinado marco, ese marco no determina el contenido de la acción (Nardacchione, 2005, p 91).

Dicho escenario construye el antagonismo y realiza un trazado que permite la constitución de los sujetos en disputa. El antagonismo -con los nombres y lugares que otorga a los actores- habilita una “ilusión identitaria” que sustenta la cohesión interna de los protagonistas de la protesta; como operación de sentido, ordena el

campo de lucha y somete a otras contradicciones a la polarización planteada. Como señala Maneiro la identidad colectiva se transforma así en “(...) un puente entre los aspectos estructurales y la acción social” (2012, p. 61).

Junto con la construcción de un campo de identidad de los protagonistas y los antagonistas, el desarrollo de acciones colectivas de protesta requiere de la construcción de lo que Gamson denomina un “marco de injusticia”. No todo daño es interpretado como una situación de injusticia; puede ser también procesado como un “infortunio”, dando lugar a una petición a la autoridad por parte de actores no necesariamente autoconcebidos como agentes con capacidad de movilización. Es la construcción de un hecho/problema como injusto, producto de la intencionalidad de unos actores de perjudicar a otros, lo que habilita la acción colectiva de unos agentes contra aquellos identificados como responsables, como adversarios. Esta acción supone, asimismo, la posibilidad de una reconfiguración de esos sentidos naturalizados como justos e injustos (Chihu Amparan y Lopez Gallegos en Franco y Medina, 2012).

De ahí que el conflicto político no se reduce a aquella polaridad simple entre dos términos antagónicos e irreductibles, sino que supone la apelación a un otro, que garantiza lo común entre las partes, “(...) debe traducirse en un sentido público que pueda generalizar una prédica dentro de un campo hegemónico de disputa discursiva” (Nardacchione, 2005, p. 93). La protesta supone un “nombre” que presenta al “nosotros” que integra al colectivo; una “voz” que fundamenta una pretensión de generalidad de la protesta y que inscribe al conflicto y su pretensión de generalidad (fundamentación) en el espacio público; y una generalización de la demanda particular que termina de definir el sentido público de la acción.

Con “sentido público” Nardacchione se refiere a la apertura pública-comunicativa de una cuestión no-tematizada y la pretensión de generalización de una argumentación que permita juzgar de otra forma una determinada situación conflictiva (Nardacchione, 2005).

La construcción y formulación de una demanda -que incluye no sólo concretamente qué se pide sino la forma en que se lo hace- y los “repertorios” o los modos en que se presenta públicamente la acción colectiva como parte del proceso de construcción de la protesta son delineados por las particulares gramáticas políticas

que los actores ponen en juego. Ambas no son resultado directo de la racionalidad estratégica sino que ponen en movimiento, además, tradiciones, memorias, experiencias a partir de las cuales los actores hacen lo que saben hacer, crean y recrean nuevas acciones y relaciones con otros actores sociales -incluyendo al Estado- y su propia presencia en el espacio público.

Con respecto a los efectos de las acciones, la noción de performatividad nos propone atender a la capacidad que tienen de instalar un debate público, de generalizarlo, “de redefinir las reglas y los recursos que constituyen el campo simbólico dentro del cual se produce y se reconoce” y, en esa enunciación, de producir pragmáticamente al sujeto colectivo que la realiza (Schuster, 2005, p. 65). El concepto alude a la capacidad de la acción para disputar y transformar el orden social a partir de la articulación de su aspecto estratégico vinculado con la efectividad o la medida en que el objetivo planteado se consigue o no; el institucional o los otros efectos políticos que genera la acción y que no necesariamente fueron previstos; y el comunicativo, referido a la capacidad de toda protesta de instalarse en el espacio público y conseguir legitimidad social. Este modo de comprender la articulación de estos procesos permite superar perspectivas estrictamente instrumentales o normativas respecto de la relación entre la comunicación, los procesos políticos y la construcción de subjetividades (Córdoba, 2013).

Ahora bien, como venimos argumentando, las formas de intervención en el espacio público no pueden ser reducidas al acto de protesta si el interés es comprender los quiebres, los fenómenos de desafiliación y las nuevas formas de solidaridad, las institucionalizaciones y las reinstitucionalizaciones. De allí que para su comprensión también sea importante atender a otras formas que asume la construcción política y la acción colectiva en interacción con otros actores sociales, incluyendo la gestión y la lucha por la supervivencia (Merklen, 2005).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> En su análisis de las transformaciones en los modos de inscripción política y colectiva de los sectores populares, Merklen (2005) refiere a la lógica del “cazador” como una estrategia de supervivencia que permite “dominar” la precariedad, como modo de individuación y forma de socialización determinada por el carácter inestable de la cotidianidad del medio popular. La lógica del cazador - a diferencia de la del agricultor que designa la vida previsible del trabajador asalariado - no es acumulativa, es pragmática, eventual y responde a las necesidades inmediatas de la urgencia.

### ***2.3. Estado y espacio público. El Estado como relación y conjunto de estructuras en disputa***

Como explicitamos en este capítulo, concebimos al espacio público como uno de los lugares privilegiados para la constitución de los sujetos de la política, en tanto, se construye en las disputas por la autorepresentación de lo social elaboradas desde diferentes sujetos con legitimidades y poderes desiguales. Dicha representación - siempre fallida- implica la reposición ilusoria de lo común y su futuro. De allí que, en esta lucha por la representación de los asuntos comunes -y más allá de la intencionalidad de los sujetos- emerja lo político como condición constitutiva de la vida pública (Caletti, 2007). En tal sentido, nos distanciamos de perspectivas juricistas de lo público que lo reducen al Estado por oposición a lo privado - asociado al individuo o al mercado independiente, espontáneo y previo al control del Estado- como contrato jurídicamente establecido entre esta institución y la “sociedad civil”. Tampoco lo concebimos como espacio de heteronomía frente a lo privado entendido como lugar de la autonomía. Lo público no es un espacio monolítico pensable por fuera de la construcción de hegemonía.

Desde este lugar es importante atender a las acciones de las organizaciones tanto en el espacio público territorial como en el callejero, en el mediático así como también en su vinculación con el Estado, en un contexto caracterizado por cambios en las relaciones y mediaciones políticas clásicas entre Estado y sociedad civil con “las transformaciones que han operado los movimientos sociales sobre la gramática de lo público, lo privado y lo estatal” (Pérez, 2010, p. 440).

Si lo público no puede reducirse al Estado, éste sigue siendo un actor central para la política en tanto reenvía al problema del poder.<sup>11</sup> Concebimos al Estado como relación y conjunto de estructuras, como campo de lucha y expresión de la lucha política. Como señala Twaites Rey (2010), en su plano interno, el Estado expresa una relación social de dominación capitalista. Sin embargo, esa relación de fuerzas sociales se materializa de distintos modos y tiene formatos que se despliegan en un campo social y político más amplio. A su vez, las reglas mediante las cuales transita

---

<sup>11</sup> Con ello no pretendemos reducir el poder al Estado -hoy es imposible descuidar el papel de los medios masivos de comunicación, el de las empresas multinacionales, los organismos multilaterales de crédito, entre otros actores – en tanto éste sigue siendo un actor ineludible para la práctica política.

la dominación se entrelazan con las formas de institucionalización política y, por tanto, el Estado no es unívoco, monolítico (Franco, 2017). Como lo expresa Twaites Rey, el Estado:

“es” en sus agencias burocráticas de reproducción sistémica, tanto como “es” en las reglas, procedimientos y cargos resultantes de la acción política propiamente dicha, gubernamental. Y ambas están directamente relacionadas, porque tanto la estructura burocrática, en tanto límite material de lo dado y reiterado a lo largo del tiempo, condiciona el accionar de los gobiernos, como las decisiones gubernamentales pueden impactar sobre la morfología estatal (...) Porque el gobierno, con sus decisiones y acciones, también puede impactar sobre la estructura estatal misma, y en un proceso de transformación impulsado y protagonizado por la movilización popular, puede alterar y trastocar las bases materiales que le dan sustento. (2010, p. 13)

Esta perspectiva no pretende restar importancia a las instituciones, a las burocracias y a los funcionarios ni entender al Estado como mero reflejo de la sociedad. Propone comprenderlo, en cambio, como actor central en la contienda y, en todo caso, hacer lugar al interrogante por la racionalidad que sustenta sus políticas y los modos en que la misma se asemeja o no a las de particulares organizaciones sociales, las posibilidades o no de permear las unas y las otras. En ese camino, consideramos fundamental recuperar su “historicidad, espacialidad y contingencia” (Bringel y Falero, 2016, p. 33) desde la interrogación por las relaciones entre lo social y lo político, entre Estado y organizaciones sociales y los procesos de democratización.

Entre los diferentes ámbitos de intervención del Estado, entendemos con Danani a las políticas sociales como aquellas que:

se orientan (en el sentido de que producen y moldean) *directamente* a las condiciones de vida y de reproducción de la vida de distintos sectores y grupos sociales y, que lo hacen operando especialmente en el momento de *la distribución secundaria del ingreso*. (2004, p. 11)

Según Esping-Andersen (1993), las políticas sociales constituyen un conjunto de bienes y servicios que se distribuyen entre los ciudadanos a partir de su status político antes que por justicia económica, desmercantilizando algunos costos de supervivencia y reproducción de individuos y grupos. Los tipos de estratificación, los grados de desmercantilización y los sujetos de protección sobre los que interviene definen a modo de tipos ideales, tres regímenes del capitalismo de

Bienestar del s. XX: socialdemócrata, corporativo y residual. Cada uno de estos modos supone Estados que absorben una gran parte de los costos con políticas universales, abarcativas para garantizar derechos sociales amplios; otros que distribuyen bienes sociales según el tipo de inserción en el mercado de trabajo a través de pactos principalmente particularistas y corporativos; y hay Estados que intervienen de modo acotado sobre grupos o individuos considerados de “riesgo”.

La política social moderna del Estado Social o de Bienestar trabajó sobre lo que Soldano y Andrenacci (2006) sugieren agrupar en tres modalidades: la política del trabajo, la política de servicios universales y la política asistencial. Si la primera intervino sobre los modos y condiciones del trabajo mediando entre capital y trabajo para consolidar al empleo como condición salarial, la segunda generó graduales procesos de acceso universal y gratuito a servicios -como educación, salud e infraestructura social- regulando estándares mínimos para las condiciones de vida ciudadanas. Finalmente, las políticas asistenciales generaron mecanismos de transferencia de bienes y servicios para los individuos y grupos que quedaban por fuera o accedían sólo de modo poco regular al mercado de trabajo.

En las sociedades capitalistas, en las que se construye y legitima la separación entre “trabajadores” y “pobres” - es decir, el momento socio histórico a partir del cual, asentado en el principio de auto valía, la población no propietaria debe trabajar para vivir y todo aquel que no lo haga debe demostrar, en principio, su validez-, las políticas sociales se ubican en el centro del proceso de constitución de la forma mercancía de la fuerza de trabajo; un proceso sociopolítico, económico y cultural en que se expresan y se constituyen las formas de vida y las condiciones en las que se produce la reproducción social.

Estas formas y condiciones de las políticas son objeto de la lucha social en la que se dirimen, definen y legitiman determinadas construcciones sobre la relación trabajo/pobreza y sobre la política, y determinados sujetos, objetos y medios para la satisfacción de las necesidades (Lindenboim y Danani, 2003). Como señala de Swaan (1992), la pobreza es una relación entre personas, un estatus social, un invento de la civilización. Cuando la propiedad queda socialmente legitimada surge la necesidad de justificar la exclusión y de definir también alguna forma de derecho

para los pobres.<sup>12</sup> En tal sentido, puede comprenderse la afirmación de Denning cuando sostiene que el capitalismo comienza no con la oferta de trabajo, sino con el imperativo de ganarse la vida de modo tal que “la única cosa peor que estar explotado es no estar explotado” (2011, p. 77). La separación entre trabajo y pobreza es fundamental no solo por lo que describe sino por lo que produce, por los sentidos y las prácticas que genera y desde las que se genera (Franco, 2013).

Cuando la pobreza es comprendida como consecuencia de deficiencias individuales antes que como resultado de la desigual distribución de recursos y cuando se las diseñan a partir de definiciones de gobernantes antes que de legislaciones que tengan como base derechos de las personas, las políticas de asistencia se construyen como políticas “asistencialistas” (González, 2012).

En la Argentina de fines del siglo pasado, la orientación de las políticas sociales se transformó, pasando de un modo de intervención social del Estado principalmente concentrado en la regulación de la sociedad salarial a otro que compensaba y reparaba parcialmente la degradación de ésta (Soldano y Andrenacci, 2006). En ese contexto, el aspecto asistencial de las políticas cobró centralidad como modo de intervención sobre la pobreza y el desempleo produciéndose lo que diversos autores refieren como una “asistencialización del desempleo” (Grassi, 2003).

Como parte de ese proceso y atentos a las prescripciones de los organismos internacionales de crédito, diversos programas de transferencia de ingresos condicionaron la percepción de subsidios a “contraprestaciones” -con horas de trabajo, estudio y/o controles de salud- que debían realizar las y los destinatarios de los mismos o familiares a cargo. Dicha contraprestación tenía como antecedente los programas sociales “workfare”, desarrollados en EEUU y en Inglaterra en la década de los ‘80 que, como Kymlicka y Norman (2002), fueron concebidos desde una particular perspectiva de lo público y lo político que veía en el Estado de Bienestar una de las causas del desaliento a la búsqueda de autoabastecimiento por

---

<sup>12</sup> Para mantener la exclusión implícita en la institución de la propiedad, se hizo necesario diseñar reglas para redistribuir el excedente y definir categorías de personas pobres con derecho a recibir algún tipo de asistencia. Desde el comienzo, según de Swaan, tres fueron estos criterios implícitos: el más importante, el de “incapacidad” como imposibilidad de ganar lo suficiente para vivir mediante el propio esfuerzo (integra un estado de “necesidad”) y otros dos que conllevan un derecho, la “proximidad” y la “docilidad” (1992, p. 26-27).

parte de los sujetos. A continuación, retomamos estos cambios para ponerlos en relación con los procesos de democratización.

#### **2.4. Organizaciones sociales, Estado y procesos de democratización**

Es probable que entonces se trate de desplazar la intensa atención otorgada a la política de los movimientos para captar la política en movimiento.  
(Virginia Manzano, 2014, p. 261)

Desde el enfoque que venimos proponiendo, la comprensión de la relación entre las organizaciones sociales, Estado y procesos de democratización y desdemocratización requiere de una concepción de estos últimos que no los limite a un sistema de reglas y procedimientos de elección de gobierno. En ese camino, en este apartado recuperamos algunos aportes de Tilly (2010) al tiempo que lo ponemos en relación y en discusión con otros autores y con aspectos de las políticas sociales en Argentina para abordar las preguntas de esta tesis. En particular aquellas en torno a los procesos de democratización posibles cuando interactúan Estado y organizaciones sociales, el modo en que se transforman uno y otros en esas relaciones así como los aspectos de las organizaciones y de las políticas sociales que se presentan como un límite o una potencialidad para la construcción de subjetividades políticas y sociedades más democráticas.

Con Tilly entendemos a la democratización como un “proceso dinámico que siempre permanece incompleto y corre permanentemente el riesgo de inversión, de desdemocratización” (2010, p. 29). Es resultado de la contienda política, de la interacción entre reivindicaciones y contra-reivindicaciones (McAdam et. al., 2005, p. 295-298 en Gordillo y otros, 2015). Tilly propone cuatro dimensiones desde las que la democratización tiende a producir cambios en: la “igualdad” dentro y entre categorías de ciudadanos; la “amplitud” referida a la inclusión de la población en la política pública; la “protección” a las y los ciudadanos de la arbitrariedad del Estado; y la “consulta mutuamente vinculante” (2010, p. 45-46). En sus extremos este movimiento podrá generar más democratización o desdemocratización según tienda a disminuir o no la desigualdad, a ser más o menos amplio e inclusivo, a generar más protección o desprotección y a favorecer más o menos la consulta. Estos procesos interactúan con la “capacidad estatal” entendida como:

la medida en que las intervenciones de los agentes estatales sobre los recursos, actividades y conexiones interpersonales no estatales alteran las distribuciones existentes de dichos recursos, actividades e interconexiones interpersonales, así como las relaciones entre tales distribuciones. (Tilly, 2010, p. 48)

Para el autor, el aumento o disminución de la capacidad estatal no genera necesariamente efectos más democratizadores e incluye tres indicadores de esta capacidad: la integración de redes de confianza en las políticas públicas; el aislamiento de las políticas públicas de las principales desigualdades en torno a las cuales los ciudadanos organizan su vida; y la autonomía de los principales centros de poder con relación a las políticas públicas. Tilly analiza estas capacidades en regímenes democráticos liberales y entiende que todos ellos conviven e invierten en la desigualdad material por lo que no es la ausencia de desigualdad una condición para la democratización sino más bien la posibilidad de aislar a la política pública de las desigualdades materiales existentes.

Al respecto, nos interesa plantear algunas cuestiones sobre estos indicadores y postulados en los que se asientan para construir nuestra perspectiva de abordaje. Por una parte, en coincidencia con Tilly, entendemos que los procesos de mayor democratización suponen la propensión a disminuir la desigualdad de la vida social para la construcción de un horizonte más justo e igualitario, para la “restauración y/o ampliación de los derechos” (Ferrari y Gordillo, 2015, p. 32) y la participación de aquellos que “no tienen parte” (Rancière, 2007; Mouffe, 2009). Sin embargo, considerando las características de las políticas sociales implementadas en los ‘90 y el contexto de la crisis de 2001 en Argentina, algunas dimensiones vinculadas con la capacidad estatal propuestas por Tilly pueden ser al menos tensionadas.

El proceso de “desestatización” (Andrenacci y Repetto, 2006), “comunitarización” (Danani, 2005) y llamado a la “participación” de estas políticas en este período histórico, implicó la transferencia parcial de responsabilidades del Estado a otros actores sociales como organizaciones no gubernamentales, comunitarias y religiosas que quedaron encargadas de la ejecución y el control de programas sociales. Al respecto, Dagnino (2004) analiza la existencia de una “confluencia perversa” de dos proyectos con concepciones distintas sobre los procesos de democratización que interpelaron a la “participación” y al fortalecimiento de la

sociedad civil desde sentidos diferentes -y en disputa- en Brasil y que también nos permiten reflexionar sobre lo acontecido en Argentina: uno que emerge de la lucha por parte de sectores de la sociedad civil contra el último régimen militar para la reconstrucción de las instituciones, de los partidos políticos y el restablecimiento de derechos en democracia; otro de implementación del “ajuste neoliberal” y Estado mínimo a través de la transferencia de sus responsabilidades a la sociedad civil, núcleo duro del Consenso de Washington sobre el que se asentaron buena parte de las políticas sociales implementadas en los ‘90 en Argentina (2004, p. 95-96).

De este modo, analizar la “integración entre las redes de confianza y la política pública”, los sujetos y los espacios legitimados para la política, requiere indagar sentidos, prácticas y políticas en contextos históricos concretos sin partir del supuesto de que aporta en un sentido democratizador. Es decir, el incremento de la participación de distintos actores no necesariamente va acompañado de sentidos y prácticas más democráticas por parte de las organizaciones sociales ni aporta a la expansión de lo público en tanto, entre otros, puede fortalecer procesos de “corporatización por debajo” (Andrenacci y Repetto, 2006, p. 9) por los cuales éstas imponen sus intereses particulares en la gestión de lo común.

Al mismo tiempo, las propias políticas desarrolladas pueden en estos procesos intervenir para el desentendimiento o no de la gestión pública de la garantía de derechos en favor de la transferencia de esta responsabilidad a las organizaciones sociales como responsables de la “gestión de la pobreza”. Asimismo, como en otros países latinoamericanos, la “descentralización” y la “focalización” fueron otras de las características de la implementación de las políticas en Argentina. Desde estos procesos, entre otras consecuencias, se incrementaron las responsabilidades de los Estados subnacionales y se recortaron y redireccionaron las y los destinatarios de la política social a sectores de la población o a una zona considerada de riesgo (Danani, 2005; González et. al, 2006).

La focalización y asistencialización de la política social acentuaba lo que Castel (1995) denominaba “ayuda social” por sobre el “seguro social”. Mientras que este último suponía una “socialización generalizada de los riesgos al “cubrir” a los asalariados, a sus familias y finalmente a todos los que se inscriben en el orden del

trabajo”-, la “ayuda social” – rebautizada de este modo en 1953-, heredaba “la muy antigua función de la asistencia: dispensar recursos subsidiarios a aquellos cuya experiencia no está asegurada sobre la base del trabajo o la propiedad”- (1995, p. 423).<sup>13</sup>

Según Andrenacci y Repetto (2006), recuperando a Esping-Andersen, en términos de ciudadanía, estos procesos tuvieron consecuencias de “(re)mercantilización” de la integración social toda vez que el mercado ocupó un lugar central para definir el papel de las y los ciudadanos y de “desuniversalización” de la política social, incrementando las desigualdades geográficas entre las provincias y la fragmentación de derechos sociales, “(...) desde una perspectiva de ciudadanía plena hacia una de titularidades coyunturales para sectores determinados sobre servicios condicionados” (Andrenacci y Repetto, 2006, p. 6). Al respecto, se tensionaba también lo que en términos de Tilly (2010) se plantea como la posibilidad de aislar a la política pública de las desigualdades materiales y categoriales existentes, dimensión importante para indagar procesos más o menos democratizadores.

Finalmente, la dimensión planteada en términos de “autonomía de los principales centros de poder con relación a las políticas públicas”, se trata de un aspecto relevante para una concepción procesual y socio históricamente situada de los procesos de democratización. A partir de la asunción de la no neutralidad y la desigualdad de poder entre los actores sociales que interactúan con y en el Estado, la atención a esta dimensión de la capacidad estatal permite dar cuenta de los distintos actores que con poderes diferentes han tenido un papel y responsabilidades particulares en la construcción e implementación de la política pública -y en particular de las políticas sociales- en contextos socio históricos determinados.

Planteadas estas tensiones y teniendo en cuenta el objetivo de la tesis, podemos concebir a la capacidad estatal como la aptitud de los gobiernos para desarrollar políticas que permitan obtener resultados democratizadores frente a los problemas

---

<sup>13</sup> Por ello, señala Castel, “(...) para la corriente modernista y progresista de los reformadores sociales, este dualismo debía desaparecer al cabo de cierto tiempo, y un sistema único de protecciones tendría que asegurar para todos los ciudadanos un conjunto homogéneo de garantías legales” (1995: 423).

públicos, definidos y redefinidos en la interacción de distintos actores con intereses, ideologías y diferentes dotaciones de recursos de poder (Repetto y Andrenacci, 2006: p. 314). La capacidad estatal y las características que asuma podrán potenciar o no, fortalecer o debilitar, procesos de democratización.

Con respecto a las organizaciones y a los movimientos sociales, si recuperamos la perspectiva propuesta, pensar desde esta concepción, nos invita a comprender la construcción de procesos de democratización, “en movimiento”, atendiendo a los modos en que el Estado es disputado y reconfigurado por la acción colectiva y cómo las políticas que desarrolla el Estado interpelan y se dejan interpelar por las organizaciones sociales en el marco de procesos hegemónicos socio-históricamente situados.

Asimismo, en cuanto a las organizaciones y los movimientos sociales, también es posible reconocer hacia dentro de ellos y en su vínculo con otros actores sociales, prácticas más o menos tendientes a la democratización. Estos procesos pueden reconocerse en los modos de organización y toma de decisiones y en sus marcos normativos, en su apertura y modos de incorporación y relación con otros actores sociales dentro y fuera del colectivo, en la amplitud o no de sus demandas, en su capacidad y decisión de articular demandas con otros actores, en la medida en que sus demandas y acciones colectivas tiendan o no a disminuir la desigualdad social y sean más o menos amplias, en los modos de relacionarse con el Estado y de participar o no en sus instituciones, en su capacidad de inscribir en el ámbito público sus demandas y sus efectos performativos.

### **3. Preguntas, objetivos e hipótesis**

A partir de este entramado conceptual y en un contexto que caracterizamos como de crisis, redefinición y estabilización de un orden político, económico y social a nivel nacional, nos preguntamos acerca de las transformaciones en las acciones colectivas de organizaciones de vecinos y trabajadores desocupados de Córdoba, su vínculo con el Estado -en particular con las políticas sociales asistenciales- y su incidencia en procesos de democratización o desdemocratización en el ámbito local entre los años 2001- 2007. Como cuestiones más específicas indagamos las condiciones de emergencia y despliegue de las acciones colectivas y su vínculo con

los distintos niveles del Estado en estos años; las gramáticas políticas reactualizadas y recreadas, los sentidos sobre lo social, lo político y los procesos de democratización puestos en juego; y las limitaciones y posibilidades que habilitaron o no su constitución como sujetos de transformaciones políticas. Para responder a estas preguntas, recuperamos y analizamos la perspectiva de los propios actores construida a partir de su práctica; en particular, abordamos las de dos casos significativos en el período: el Movimiento Barrios de Pie (MBP) y el Centros de Vecinos Autoconvocados (CVA).

Nuestro objetivo general de investigación consistió en comprender las acciones colectivas de las organizaciones estudiadas, sus relaciones con el Estado, principalmente a través de las políticas sociales, y su incidencia en procesos de democratización o desdemocratización en el período 2001-2007. En ese camino, nos planteamos como objetivos específicos analizar las acciones colectivas protagonizadas por organizaciones de trabajadores desocupados y vecinos de Córdoba, sus condiciones de emergencia y desarrollo, las estrategias de intervención en el espacio público y los sentidos sobre lo social y lo político construidos en esos procesos entre el año 2001 y el 2007; caracterizar las principales políticas impulsadas por el Estado respecto de estas organizaciones en el período objeto de estudio a nivel nacional y local; y establecer relaciones entre las condiciones en las cuales estas organizaciones desarrollaron sus acciones colectivas, los vínculos que establecieron con el Estado y los procesos de democratización o desdemocratización que tuvieron lugar.

Como hipótesis sostenemos que, en el período considerado, se redefinieron las relaciones entre lo social y lo político y, en particular, las de las organizaciones sociales y el Estado. Ello habilitó procesos de institucionalización en el sentido de la creación de nuevas pautas de acción y de los sujetos legitimados para hacer política. Sin embargo, este proceso a priori de democratización no fue homogéneo ni en las políticas promovidas a nivel nacional ni entre las organizaciones sociales locales. Asimismo, tuvo una expresión paradójica en la política local. Con respecto a las políticas asistenciales nacionales desarrolladas a partir del año 2004, hubo una propuesta de “contrarreforma” que no llegó a concretarse, a diferencia del proceso que Danani y Hintze (2011) reconocen respecto de políticas laborales, educativas y

de salud. En cuanto a las políticas locales, si a nivel municipal identificamos una tentativa por seguir una dinámica democratizadora, a nivel provincial se avanzó en un proceso contrario.

En lo que concierne a las organizaciones sociales, la inscripción del CVA en una gramática política con aspectos predominantemente autonomistas atravesó un modo de construcción política asentado en lo local desde el que consiguió desarrollar procesos de lucha e instalar demandas en el espacio público pero que también limitó su posibilidad de reconocimiento como sujeto político y su capacidad de generalizar sus demandas en articulación con otros actores y sectores sociales. Por otro lado, Barrios de Pie siguió el camino inverso en tanto fue asumiendo una gramática con algunas características movimientistas que le permitió ampliar sus marcos de alianzas y el proceso de generalización de sus demandas y de institucionalización en los niveles estatales subnacionales, en el marco de un gobierno nacional y municipal que abrió el Estado a su participación.

#### **4. Perspectiva metodológica, estrategias y delimitación del objeto**

Es un consenso ya en las ciencias sociales el hecho de que definir un enfoque metodológico supone, en primer lugar, una decisión teórica y, en segundo lugar, una procedimental; en palabras de Schuster implica “una operación lingüística de atribución de sentido dentro de un marco conceptual” (2005, p. 50). Asumir la perspectiva propuesta en esta investigación nos pone ante el desafío de una comprensión de las prácticas de los actores sociales atenta a ellos, a sus interpretaciones y argumentos.

En particular, optamos por el estudio de dos casos que, entendemos, son paradigmáticos y pueden colaborar a la comprensión de algunos hechos socio-históricamente situados, al tiempo que habilitar preguntas y relaciones en torno al entramado conceptual desarrollado en este capítulo. En tal sentido, la elección de los mismos atendió a un propósito conceptual y empírico.

Con respecto al recorte espacio – temporal, también fue realizado atendiendo a sus aportes conceptuales y empíricos. Sin presuponer que las coyunturas de cambio o crisis potencian mayores aportes al conocimiento que otras sino perspectivas particulares, analizamos un período que incluye la crisis del 2001 y cerramos en el

año 2007. Estos años nos interesan especialmente porque sostenemos que asistimos a un cambio de sistema político en el que se transforman los modos de intervenir en el espacio público por parte de las organizaciones, incluyendo su relación con el Estado; en particular, luego de la estabilización de un nuevo gobierno a partir del año 2003. Córdoba, por su parte, aporta la especificidad de tratarse de una provincia en la que las relaciones entre gobiernos nacionales y locales -cuestión que desarrollaremos en el próximo capítulo-, fueron complejas y particulares, desde los modos en que se implementaron las políticas sociales hasta los vínculos que entablaron con las organizaciones sociales y con los partidos políticos hegemónicos en el poder ejecutivo nacional.

Las definiciones teórico-metodológicas que adoptamos no son neutras respecto de los objetos que construimos, de aquellos con quienes desarrollamos los procesos de conocimiento y de las propias concepciones desde las que lo hacemos. En tal sentido, realizamos este estudio desde un paradigma interpretativo, con metodología cualitativa (Vasilachis de Gialdino, 1993, p. 43) buscando comprender -a través de fuentes orales y escritas- las prácticas, los sentidos que le atribuyen los sujetos y las relaciones que establecen con otros, en particular, con el Estado. De modo complementario, recurrimos también a la metodología cuantitativa para dimensionar la magnitud de algunos procesos.

#### ***4. 1. Selección de casos***

De manera intencional se eligieron dos colectivos: la organización Centros de Vecinos Autoconvocados y Movimiento Barrios de Pie. Ambos con distintas magnitudes en términos organizativos, diferentes trayectorias, gramáticas políticas y apuestas políticas a nivel nacional, comparten un importante protagonismo en la protesta callejera a comienzos del nuevo milenio en Córdoba; algunas demandas y modos de abordar la problemática social, entre ellas, la administración de planes de asistencia al desempleo, en particular el Plan Jefes y Jefas de Hogar; la participación en el Consejo Consultivo Municipal de Políticas Sociales y, hacia el final del período, el desarrollo de proyectos cooperativos y la participación -muy corta en el primer caso y de un mandato completo en el segundo- en la gestión Municipal. Entendemos que estas trayectorias, similares en estos aspectos pero

diferentes en otros, pueden aportarnos a una comprensión socio –históricamente situada de la relación entre organizaciones sociales y Estado, entre lo social y lo político y las transformaciones que al respecto se produjeron en el período delimitado; los modos en que las organizaciones modificaron o no su participación en el Estado y en las políticas sociales, sus formas de construcción política, los sentidos sobre lo público y la democracia y su propia constitución o no como sujetos de transformaciones políticas. Ambos casos se abordan en los capítulos 3 y 4 de esta tesis.

#### ***4.2. Fuentes utilizadas y estrategias de recolección de información***

En la tesis utilizamos diversas fuentes orales y escritas que presentamos a continuación.

Por un lado, la sistematización de información de una Base de Acciones Colectivas de Protesta en Córdoba entre 1989 y 2003<sup>14</sup>, elaborada por el equipo de investigación del que formo parte, produjo aportes cuantitativos que nos permitieron dimensionar la presencia público callejera de las organizaciones objeto de estudio y los distintos modos de relación que entablaron con el Estado para su selección como casos de estudio y también para la delimitación del año de inicio del recorte temporal de esta indagación. Asimismo, ofreció datos cualitativos para contextualizar, reconstruir y caracterizar parte de las acciones colectivas de protesta protagonizadas en el espacio público por estos y otros colectivos, sus experiencias de gestión de algunos programas sociales y su vínculo con el Estado, cuestiones que desarrollamos en los capítulos 3 y 4.

Al respecto cabe mencionar que entre 1989 y el 2003, fue el año 2001 el que mayor cantidad de protestas presentó -11,50% del total-, si se suman las que se registraron a nivel provincial y municipal, siendo éstas últimas las mayores. Ese porcentaje alto se mantiene en el año 2002, aunque disminuye al 8,47%. Con respecto a las

---

<sup>14</sup> La base de datos se construyó a partir del registro de las acciones colectivas de protesta desarrolladas en la provincia de Córdoba en el período julio de 1989 y diciembre de 2003, tomando como fuente al diario de mayor tirada en la provincia de Córdoba, La Voz del Interior. Los datos se procesaron con el programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) con el objetivo de analizar las características generales y la dinámica de la protesta atendiendo a las localidades, los actores, los períodos, las demandas, los formatos y los tipos de acción predominantes, entre otras cuestiones.

acciones en la ciudad capital, las protestas protagonizadas por vecinos y desocupados y otras organizaciones sociales<sup>15</sup> se incrementa llegando a constituir el 35% del total de protestas en el año 2002 y el 23% en el año 2003. El año 2002 es el que agrupa la mayor cantidad de protestas del período completo y tiene como protagonistas principales a organizaciones de desocupados y luego a vecinos. Las acciones colectivas protagonizadas por las organizaciones objeto de este estudio se encuentran dentro de las que el periódico local registró mayor cantidad de veces.<sup>16</sup> Tres bases de datos sobre políticas sociales fueron también fuente de indagación. Dos de ellas, con datos sobre el Planes Jefes y Jefas de Hogar: una de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (GECAL) y otra de la Municipalidad de Córdoba. Su lectura y sistematización nos aportó datos sobre la cantidad de planes que administraron una y otra organización e información sobre el tipo de proyectos impulsados con estos programas sociales. En otro orden, evidenciaron también las dificultades que tuvo el Estado municipal y nacional para la carga y seguimiento de estos planes, los diferentes criterios con que se registraron, la falta de un espacio físico para el resguardo de la información e indicios de faltantes de documentación y hasta conflictos políticos entre gobiernos de signo partidario diferente, entre otras cuestiones que manifestó Alberto Villa Uría, ex subdirector de Empleo cordobés (SEHAS, CENOC, 2005, p. 60). La tercera base, sobre programas sociales del Área de Políticas Activas de la Agencia Territorial Córdoba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (2019), permitió conocer y dimensionar cuáles y cuántos programas nacionales vinculados a este ministerio se implementaron en este período a nivel local.

---

<sup>15</sup> Agrupamos bajo la categoría “desocupados” a colectivos piqueteros y de desocupados y a actores no organizados que son nombrados de tal modo por el diario; en cuanto a “vecinos”, incluimos a actores no organizados que aparecen nombrados de ese modo en el periódico y a otros actores que se presentan sin referencias organizacionales («villeros», «pobladores», etc.); “organizaciones sociales”, agrupa a distintos colectivos con acciones vinculadas al trabajo barrial/comunitario (Franco y Medina, 2012).

<sup>16</sup> Con respecto a las organizaciones vecinales, en el período 1989 -2003, Centros de Vecinos Autoconvocados de Base por los Derechos Sociales (UOBDS) y la primera en el lapso 2001 – 2003. Barrios de Pie sólo - y aún más como parte del Bloque Piquetero - constituye el colectivo con más cantidad de protestas registradas por el periódico local, tanto en el período completo que sistematizamos en la base como entre los años 2001-2003.

Accedimos también a un documento de sistematización de las acciones del Consejo Consultivo Municipal (CCM) en Córdoba elaborado por una ONG local, Servicio Habitacional y de Acción Social (SEHAS) y el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) en el marco del Programa de Fortalecimiento a los Consejos Consultivos, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (SEHAS, CENOC, 2005). A través de esta fuente y las entrevistas a integrantes de las organizaciones pudimos reconstruir las tareas, límites y potencialidades de este espacio al tiempo que los modos de participación de las organizaciones objeto de estudio y el papel que tuvieron los referentes de estos colectivos en este cuerpo.

La realización de entrevistas, la recolección de noticias de la prensa local, de revistas de las propias organizaciones, de documentos escritos y de cartillas nos permitió avanzar en la contextualización, caracterización y análisis de las acciones colectivas impulsadas por las organizaciones objeto de estudio, el vínculo con el Estado, los sentidos y sujetos construidos en estos procesos. Parte de estos materiales fueron digitalizados con recursos del equipo de investigación del que formo parte para su conservación y acceso.

Las entrevistas se realizaron en distintos momentos, entre los años 2009 y 2016.

En todos los casos, las mismas fueron individuales, a referentes de cada organización en el marco de nuestro objetivo de comprender las acciones colectivas de estos colectivos, las relaciones que entablaron con el Estado, su inscripción en el espacio público y los procesos de democratización/desdemocratización que se promovieron entre el 2001 y el 2007 en Córdoba. Para guardar el anonimato de los y las referentes de estos colectivos, no compartimos los nombres de las personas entrevistadas. Excepto los de aquellas que ocuparon cargos públicos o formaron parte de espacios institucionales y se mencionan en este trabajo. Todas las entrevistas y fuentes, su fecha y lugar de realización, están citadas al final de esta tesis. En todos los casos, están numeradas y son esos números los que se citan como referencia en los distintos capítulos.

En el caso del Movimiento Barrios de Pie se entrevistó a un responsable nacional, a las y los responsables provinciales y de las distintas áreas de la organización. Sobre el contexto de realización de estas entrevistas consideramos importante explicitar dos cuestiones. Por un lado, que el partido político con el que se vinculaba el

Movimiento Barrios de Pie -Libres del Sur- había roto sus relaciones partidarias con la conducción nacional del Frente para la Victoria y sus referentes principales habían renunciado a sus cargos en el Estado. Por otro lado, del diálogo con los distintos entrevistados, es posible reconocer que salvo dos de ellos, en los años que siguieron al 2007, el resto fue dejando de formar parte de la organización, por diferencias con los modos de concebir la política, la militancia y, en algunos casos, por diferencias con la propia decisión de la conducción del partido de romper su “alianza” con el gobierno kirchnerista y por las nuevas coaliciones políticas que conformó este colectivo en adelante.

En cuanto al Centro de Vecinos Autoconvocados, se entrevistó a los dos principales referentes de la organización y luego a responsables de distintas acciones y proyectos. Todas las personas, al momento de realización de la entrevista, formaban parte de la Cooperativa CVA o de su organización madre, Centros Vecinales Autoconvocados. Como se menciona en el capítulo en que se aborda este colectivo, al momento de realización de las entrevistas el mismo continuaba sin una adscripción partidaria.

En total, se realizaron 14 entrevistas, de manera no estructurada pero sí focalizada en aspectos centrales en torno a los objetivos de la investigación. La selección de entrevistados fue intencional, a partir de la técnica “bola de nieve” y atendiendo a información brindada por distintos informantes. Como parte de trabajos profesionales previos, contamos también con una entrevista colectiva realizada junto con otras profesionales en el año 2005 a la comisión directiva de la cooperativa de “Naranjitas” -CVA-, colectivo que nace a partir de la iniciativa de integrantes del Centros de Vecinos Autoconvocados.

También se realizaron 7 entrevistas a funcionarios provinciales y municipales de los distintos períodos de gobierno, incluyendo entre ellos a representantes de organismos de control de programas sociales para reconstruir las políticas y sus apuestas más o menos democratizadoras, contextualizar el vínculo de estos colectivos con el Estado y sumar una fuente de información para enriquecer la comprensión de las prácticas de las organizaciones. En las últimas páginas de esta tesis se incluyen todos los datos de estas entrevistas y a lo largo del trabajo se citan los nombres completos de los funcionarios entrevistados.

Además, se analizaron discursos gubernamentales, documentos, normativas, artículos y materiales de difusión vinculados con el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados y otros programas sociales nacionales y municipales. Nos concentramos en los principales programas vinculados a las reparticiones estatales de Desarrollo Social y de Trabajo -con sus variantes de nominaciones locales y nacionales- que se proponían intervenir sobre problemáticas de trabajo/empleo/desempleo y pobreza, según las definiciones y clasificaciones de los distintos gobiernos y normativas a lo largo del período objeto de estudio.

#### ***4.3. Dimensiones de análisis y procesamiento de los datos***

El análisis de las acciones colectivas de las organizaciones se realizó a partir de cinco dimensiones, teniendo en cuenta la perspectiva y las nociones trabajadas en este capítulo. Las mismas fueron construidas recuperando y reformulando aportes de estudios enfocados en la acción colectiva de protesta, en particular del equipo de investigación que integro (Gordillo, 2012) y de los propuestos por Schuster (2005), articulados con aquellas construidas por Natalucci (2008) en su investigación sobre organizaciones piqueteras.

- a) Adscripción identitaria:** los sujetos que actúan, las categorías desde las que construyen un “nosotros” respecto de “alteridades”, “públicos” y “antagonistas”; las adscripciones político – ideológicas y los marcos interpretativos desde los que interactúan y conciben al Estado, a las organizaciones y a la democracia; su proyecto político y utopías.
- b) Formas de construcción política y modos de intervención en el espacio público:** organización interna, relaciones con otras organizaciones sociales y acciones colectivas que emprenden -sean éstas de protesta, proyectos cooperativos, comedores, microemprendimientos, entre otros-, gestión de políticas y mecanismos de consulta; valoración sobre las condiciones y posibilidades sociales, políticas y económicas para la acción.
- c) Problemas públicos, demandas y expectativas:** incluye aquello que es construido como una problemática común, su formulación pública -aquello que se pide-, el modo en que se demanda, a quién se dirige y lo que se espera de estas acciones; supone formas de interpretación del presente y

proyecciones sobre aquello por construir. Esta dimensión delimita lo que se considera legítimo.

**d) Vínculo con el Estado, las instituciones y sistemas de gobierno:**

relación con los distintos niveles y dependencias del Estado -en particular aquellas vinculadas con la implementación de políticas sociales asistenciales- y con los programas sociales; participación en las instituciones, en las elecciones y las vivencias en torno a la represión.

**e) Performatividad:** refiere a la capacidad que tiene la enunciación pública para transformar el campo simbólico en el que se produce y reconoce. Incluye la relación entre aquello que se demanda y su satisfacción, los efectos políticos institucionales que produjo la acción -planificados y no planificados- y la capacidad de instalar una temática en el espacio público.

En todos los casos las dimensiones incluyen un análisis de lo que los actores han aprendido a partir de su experiencia que no puede desligarse de aquello transmitido -reconocido explícitamente o no- por otras generaciones, su tradición. Asimismo, los sentidos producidos en los diferentes soportes discursivos son puestos en relación con las prácticas de los colectivos.

Para el análisis de datos del material recogido, siguiendo los aportes de Maxwell (1996), además de la escucha y desgrabación de entrevistas y lectura de documentos, se elaboraron notas y memos con las categorías y relaciones que fuimos construyendo en torno a las cinco dimensiones de análisis. Asimismo, la codificación como estrategia de categorización nos permitió reorganizar datos de las distintas fuentes en categorías para su comparación y reorganización de nociones teóricas. Al respecto cabe aclarar que en este estudio, nuestro objetivo fue realizar un análisis en profundidad, generar interrogantes y aportar a la construcción de una red conceptual. La estrategia de contextualización, por su parte, tuvo el fin de comprender la información en relación con los eventos en el momento histórico particular. Estas estrategias se desarrollaron en un “ir y venir” permanente entre los datos y las categorías teóricas propuestas.

## **CAPÍTULO 2: ESTADO, POLÍTICAS SOCIALES Y ORGANIZACIONES EN ARGENTINA. LAS PARTICULARIDADES DE CÓRDOBA**

En este capítulo analizamos centralmente las transformaciones en las políticas sociales asistenciales impulsadas por los distintos gobiernos entre el 2001 y 2007, y algunos aspectos de la dinámica de gobierno vinculados con las relaciones y los roles que propusieron a las organizaciones de trabajadores desocupados/as y vecinos. Este análisis aporta a comprender las condiciones de emergencia e interacción de los colectivos objeto de estudio y las posibilidades de construcción de procesos más o menos democratizadores o desdemocratizadores.

Si bien iniciamos el capítulo con una breve referencia al momento histórico de conmoción de un orden político, económico y social a nivel nacional para contribuir a una contextualización más general de los procesos locales, priorizaremos en este capítulo el análisis de los cambios producidos en la provincia de Córdoba. Con ese objetivo se dedican cuatro partes del capítulo al abordaje de éstos últimos. Además, a medida que se analizan los procesos nacionales de creación e implementación de políticas sociales, se mencionan las particularidades que asumieron a nivel local.

En cuanto a las políticas sociales asistenciales, el foco de análisis está puesto en aquellas con las que las organizaciones objeto de este estudio se vincularon, por lo que dedicaremos una parte más extensa a la implementación del plan Jefes y Jefas de Hogar en Córdoba. Al respecto nos preguntamos ¿qué transformaciones en las políticas sociales asistenciales promovieron los distintos gobiernos y qué alianzas entablaron con diferentes actores en estos procesos? ¿Qué necesidades, problemáticas y sujetos fueron definidos por esas políticas como legítimos para proteger y con qué modalidades? ¿Qué papel tuvieron en esas políticas las organizaciones sociales y en qué medida se las habilitó como sujetos capaces de producir transformaciones políticas? ¿Qué capacidad tuvo el Estado para desarrollar políticas más democratizadoras?

## **1. Crisis del orden político, económico, social y el “argentinazo” del 2001**

El período de estudio delimitado inicia en el año 2001, en un contexto de desarrollo de un modelo político neoliberal instaurado a nivel mundial y de crisis del régimen social de acumulación y de representatividad en Argentina.

Basualdo (2016) caracterizó a este régimen de acumulación como asentado en la “valorización financiera” -patrón que se inició en el marco de la dictadura militar de 1976-, cuyas dos variables centrales en términos macroeconómicos fueron: el endeudamiento externo y la fuga de capitales locales al exterior, bajo el control de grupos económicos transnacionales y nacionales y el capital financiero internacional. La creación estatal que facilitó la primera, generó las divisas para la salida de capitales, subió la tasa interés, estatizó la deuda externa privada, transfirió las empresas públicas a grupos económicos privados. La fuga a cargo del capital oligopólico, fue posible en el marco de una nueva pauta distributiva en contra de las y los trabajadores. Fue el período en que se “generalizó la dolarización e internacionalización del capital de la alta burguesía local que no restringió su nivel de consumo sino que redujo la inversión productiva consolidando el proceso de desindustrialización” (Basualdo, 2016, *en línea*).

Fue acompañado, además, de una fuerte reducción del gasto público, la descentralización administrativa, la desregulación de los mercados y nuevas formas de organización del trabajo que condujeron a un período caracterizado por la flexibilización, la precariedad laboral y una creciente tasa de desempleo.

En términos políticos culturales, la rápida transnacionalización económico-cultural, la primacía del mercado, el creciente individualismo y las exigencias de auto regulación por parte de los sujetos fueron socavando la legitimidad de lo público estatal, naturalizando la desigualdad y contribuyendo a reformular los sentidos -y los sujetos legitimados - de la política.

El gobierno de la “Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación”<sup>17</sup> iniciado con la presidencia de De la Rúa no implicó un cambio respecto de estos procesos y sí la

---

<sup>17</sup> Partido político creado en el año 1997 producto de la coalición entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente País Solidario (FrepaSo). “La Alianza” había ganado las elecciones presidenciales

profundización de la crisis socioeconómica y de representatividad a fines y comienzos del nuevo milenio. En los dos años que duró su gobierno, las promesas de campaña de resolver el problema del desempleo, generar trabajo, educación, seguridad y luchar contra la corrupción no se cumplieron.

Al momento de su asunción, el nuevo presidente se encontraba con los principales actores sindicales divididos pero mayoritariamente reagrupados en la oposición; con organizaciones de desocupados fragmentadas pero con presencia en diversas localidades del territorio argentino, con capacidad de movilización y organización, con experiencias de acceso a programas y planes sociales; así como con una creciente predisposición a la acción colectiva de otros actores de la sociedad civil afectados por las políticas dispuestas desde gobiernos nacionales y locales, cuya presencia callejera fue incrementándose hasta protagonizar la protesta.

Las políticas de ajuste fiscal que impulsó De la Rúa, no sólo redujeron los salarios de los empleados públicos -con excepción del poder legislativo y judicial y algunas otras áreas- sino también el presupuesto, en términos de cantidad de destinatarios y de los montos para los planes sociales a los que accedían las organizaciones sociales. Estas medidas afectaron a dos de los actores que serían protagonistas de la protesta social en el período 2000- 2003: sindicatos y organizaciones sociales y piqueteras (Schuster et al., 2006). Asimismo, anunció la desregulación de las obras sociales para permitir el ingreso de empresas privadas en servicios de salud, transformaciones en normas y contratos a empresas para disminuir tarifas e intervenir sobre su control y una “reforma política” que discursivamente se planteó desde la campaña electoral como estrategia para reducir el clientelismo y la corrupción y que centralmente anunció la rebaja de gastos en las legislaturas y consejos de todo el país (Gordillo, 2010).

Como estrategia de contención del conflicto social, para restar el poder de injerencia local del justicialismo a través de los municipios bonaerenses e incrementar la autonomía en la gestión de los planes por parte de las organizaciones sociales, se avanzó en su descentralización y se creó el Programa de Emergencia Laboral (PEL) para la atención de servicios a la comunidad, en

---

de 1999 en Argentina con una fórmula que postulaba a Fernando De la Rúa como presidente y a Carlos “Chacho” Álvarez como vicepresidente.

sustitución del Plan Trabajar III (1998-1999).<sup>18</sup> Ambos, eran programas nacionales de emergencia ocupacional, destinados principalmente a subsidiar a personas desocupadas e incluían la transferencia de ingresos condicionados, entre otros requisitos, a una contraprestación laboral.<sup>19</sup> Como parte de un conjunto de políticas “(re)mercantilizadas” y “desuniversalizadas” (Repetto, Andrenacci, 2018), los mismos tenían como antecedentes otra diversidad de programas de asistencia al desempleo creados a mediados de los años '90 y que corrían el eje de la problemática de la “pobreza” -como condición de acceso- a la de la “desocupación”. La disconformidad de las organizaciones sociales con respecto a esta reducción presupuestaria se agregó a la falta de diálogo y respuesta del gobierno a las problemáticas que estos -y otros actores- venían denunciando en el espacio público. Por estos años, las protestas de las organizaciones piqueteras se fueron incrementando.

En poco tiempo el gobierno de coalición de la Alianza se fue debilitando y perdiendo legitimidad. A ello se sumó el incremento de la tasa de desocupación que sobre 31 aglomerados, pasó de 12,2 en octubre de 1994 a 18,3 en octubre de 2001, según la Encuesta Permanente de Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La tendencia demostraba para aquella época el crecimiento del empleo informal y la subocupación.

Entre tanto, se seguía profundizando la crisis económica, política e institucional, cuando la legitimidad del Estado y de los representantes del pueblo estaba siendo cuestionada. Una crisis que se había expresado en el resultado de las elecciones legislativas de octubre en las que predominó lo que se conoció como “voto bronca” y en las que por primera vez en la historia del país, el voto de los dos partidos

---

<sup>18</sup> Otros programas de atención al desempleo se crean con el gobierno de la Alianza pero son de mucha menor envergadura en términos de presupuesto asignado y cantidad de destinatarios/as y, salvo el Desarrollo del Empleo Local III que continuó más allá del año 2003, tuvieron una vigencia de entre uno y dos años: Segunda Oportunidad, Nosotras, Formujer y Crear Trabajo (Neffa y Brown, 2012).

<sup>19</sup> Entre ellos pueden mencionarse: en 1994, el Programa Intensivo de Trabajo (PIT), el Programa de Empleo de Interés Social (PROEDIS), el Programa Coparticipado (PROCOPA), Programa Nacional de Pasantías para la reconversión (PRONAPAS) y el Programa de Empleo Privado (PEP); en 1995, el Programa de Asistencia Solidaria (PROAS), el Programa de Entrenamiento Ocupacional (PRENO), el Programa ASISTIR y el Programa FORESTAR; en 1996, el Programa Servicios Comunitarios, el Programa Desarrollo del Empleo Local y el Programa TRABAJAR (PT); en 1997, se creó y reglamentó el Programa TRABAJAR II (Hintze y Costa, 2011, p. 165).

mayoritarios sumó solo un 30% del padrón electoral, la tasa de participación fue inferior al 75% y más de un 15% optó por el voto en blanco o nulo (Gordillo, 2010).<sup>20</sup>

Parte del descontento también se canalizó vía extrapartidaria, a través de una consulta popular que lanzó en todo el país el Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO), con la consigna “Ningún Hogar Pobre en la Argentina”. La misma proponía como estrategia de redistribución de los ingresos, un Seguro de Empleo y Formación para todos los jefes y jefas de hogar desocupadas, una asignación por hijo menor de 18 años y otra para mayores de 60 años que no tuvieran cobertura previsional.<sup>21</sup> Al cabo de tres días de votación, los resultados fueron que 3.100.000 personas adhirieron a esta propuesta. La consulta retomaba la demanda proveniente de las organizaciones de desocupados en relación a la creación de “trabajo genuino” y la de otros sectores de la sociedad que comenzaban a engrosar las filas de la desocupación y el trabajo precario.

La salida a las calles en casi todo el país de una amplia porción de la ciudadanía para expresar este malestar colectivo y su repudio a los representantes políticos en las jornadas del 19 y 20 de diciembre<sup>22</sup>, los saqueos a supermercados en distintas localidades del país incluyendo a Córdoba capital, la represión de la policía, cientos de heridos y más de 30 personas muertas, constituyeron parte de los acontecimientos que fueron dando forma al cierre de un gobierno y el inicio de otro. El 20 de diciembre de ese mismo año, De la Rúa renunciaba anticipadamente como presidente, finalizaba la Alianza y el tipo de relación que había propuesto desde la gestión del Estado a las organizaciones sociales, en particular desde las políticas sociales asistenciales.

---

<sup>20</sup> Este voto tuvo distintas expresiones y particularidades dentro del país. Para conocer las de Córdoba puede consultarse Gordillo (2010).

<sup>21</sup> Esta propuesta se diferencia de la de “ingreso ciudadano” que Lo Vuolo “basándose en Van Parijs (1986 y 1992), describía como “un arreglo institucional que garantiza cierta forma de ingreso incondicional a las personas, esto es, un ingreso para cuyo acceso no se requiere ninguna otra condición personal que la de ser ciudadano”. Por lo tanto para percibirlo “no se requiere trabajar (como es el caso del salario), ser declarado incapaz (jubilación por invalidez), haber contribuido con una prima de seguro (jubilación ordinaria, obras sociales), demostrar que se está desocupado (seguro de desempleo) o ser pobre (programas asistenciales focalizados)” (Lo Vuolo, 1995: 23-24, la cursiva es del autor).

<sup>22</sup> Conocidas en el discurso público como “estallido”, “rebelión”, “argentino”, entre otras.

## **2. Fin y comienzo del nuevo milenio en Córdoba. La reforma del Estado y el papel de las organizaciones sociales**

A nivel local, la asunción de José Manuel De La Sota a la gobernación de la provincia de Córdoba con la coalición Unión por Córdoba (UpC)<sup>23</sup> en julio de 1999 y, posteriormente, de Germán Kammerath a la intendencia municipal de la ciudad capital, expresaron el quiebre de la hegemonía radical en el gobierno de la provincia desde 1983 y una transformación en las fuerzas políticas, incluyendo el papel de las organizaciones sociales y sindicales.

Estos cambios en las relaciones políticas vinieron de la mano de una reforma del Estado que, como lo había propuesto el gobernador De la Sota en su programática electoral para la gobernación -“Córdoba nuevo siglo”, “Córdoba corazón de mi país” - debía integrar a la provincia al proceso nacional y al mundo en un contexto de globalización y desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), dejando atrás la metáfora insular de los gobiernos radicales precedentes. Al respecto cabe señalar que si bien fue UpC la que finalmente puso en marcha el proceso de reforma, la iniciativa ya había sido planteada tempranamente por el gobierno radical de Eduardo Angeloz con la sanción de la primera ley de reforma en 1989 (Ley N° 7850).<sup>24</sup>

Asimismo, y junto con otras decisiones políticas, el programa político de UpC proponía resolver lo que la coalición construía como problemas locales centrales: la falta de transparencia e ineficiencia en la gestión pública, un “gasto” público elevado, altos impuestos y mala calidad de los servicios, obsolescencia de la infraestructura del Estado y falta de información y participación de la ciudadanía en el control del Estado.

---

<sup>23</sup> Unión por Córdoba se había constituido en 1998 a propósito de las elecciones para autoridades provinciales, por medio de un acuerdo entre dos referentes de la denominada corriente “reformista” dentro del Partido Justicialista (PJ), De La Sota y Carlos Menem, como modo de sortear una interna partidaria (Vaca Narvaja, 2001). La integraba, además del PJ, la UCEDE, Democracia Cristiana y Acción para el Cambio.

<sup>24</sup> Como señalamos en Arriaga et al (2012) si bien la ley planteaba el achicamiento o racionalización administrativa, finalmente la orientación de las medidas impulsadas dentro de ese período de gobierno apuntaron más al resguardo de las políticas salariales y asistenciales que se desplegaban en el marco de un régimen de tipo neocorporativo y se asentaban en un imaginario, reactualizado por el angelocismo, que resaltaba el carácter distintivo de Córdoba en el escenario nacional. Más desarrollos al respecto pueden consultarse en Gordillo et al (2012), donde se presentan conclusiones de parte de la investigación que desarrollamos como equipo.

Desde esa caracterización, entre las primeras acciones que desplegó el gobierno se encuentran: la rebaja del 30 % de los impuestos, la derogación de la Ley de Emergencia Económica dispuesta por el ex gobernador Mestre en 1995 y la presentación del proyecto para la sanción de la Ley de Modernización del Estado, denominado “Reinvención, Nuevo Estado Provincial y Estatuto del Ciudadano”. Al respecto sostenía:

Con menos deuda y más recursos, vamos a construir un Estado amigo del ciudadano, solidario, eficiente, justo y más barato para toda la sociedad. La rebaja de impuestos continuará y nuestro desafío es brindarle a los cordobeses más y mejores servicios a menor costo. Modernizar el Estado es hacer cada día un poco más, gastando cada día un poco menos”. (Diarios de sesiones, periodo 123, 1/03/ 2001)

A lo largo de sus dos mandatos como gobernador, su discurso se asentó en una racionalidad neoliberal que subordinando la política a la economía, reducía los distintos modos de interacción a una forma mercantil, empresarial, recuperaba la importancia de la eficiencia en la gestión y administración del Estado y valoraba positivamente la conducta “ética” de quienes conducían estos procesos.<sup>25</sup> Al mismo tiempo diluía la dimensión adversativa propia de lo político, reducida en sus discursos de campaña a la “estructura burocrático-estatal”, al “ajuste” desplegado por el anterior gobierno radical y a la “corrupción”.

La reforma del Estado incluyó -con el respaldo de los organismos de crédito internacional- reformas de primera y de segunda generación que no sólo modificaron la matriz de acumulación económica sino también el vínculo entre el Estado y la ciudadanía, concebida, en adelante como “consumidora”. Las transformaciones en las finanzas públicas incluyeron el ajuste y el achicamiento del Estado a través de la incorporación de capital privado al sector público, la privatización de algunos servicios, reformas sobre las políticas sociales y la “modernización” de la administración pública, entre otras. Este último proceso involucró la “agencialización” del Estado (Nallino, 2005), con la creación de

---

<sup>25</sup> Un análisis de los discursos de Unión por Córdoba y del Partido Nuevo en Córdoba y las similitudes que presentan puede consultarse en: Reynares y Tomaisini (2016).

estructuras en las que actores públicos y privados coparticiparon en la toma de decisiones de la administración estatal (Arriaga et al., 2012).<sup>26</sup>

El tratamiento en la legislatura de este proyecto de reforma en los dos primeros meses del 2000 y hasta su aprobación fue acompañado de manifestaciones de oposición de algunos sectores y movilizaciones constantes de un sector del sindicalismo, con el protagonismo del Sindicato de Luz y Fuerza, centralmente cuestionando los lineamientos referidos a las privatizaciones y a las concesiones. Sin embargo, con modificaciones respecto del documento original, la propuesta se aprobó bajo la forma de tres leyes: “Carta del Ciudadano” (Ley N° 8835/2000), “Modernización del Estado” (Ley N° 8836/2000) e “Incorporación del capital privado al sector público (Ley N°8837/2000).

Este proceso fue posible a partir de acuerdos que fue construyendo el gobierno provincial con algunos de estos sectores incluyendo el propio radicalismo en lo que se conoció como “Pacto de las Tejas” (Arriaga et al., 2012). Dicha negociación no fue la única que el gobierno provincial construyó con el radicalismo y con la Alianza a nivel nacional. Si bien fueron gobiernos de signo partidario distinto y no compartían un diagnóstico común sobre la mejor salida a la crisis que atravesaba el país -las críticas de uno y otro gobierno fueron públicas (La Nación, 19/082001; La Nación, 19/10/2001)-, la necesidad de colaboración para gobernar y aprobar las normativas que cada gobierno pretendía impulsar hizo que esta relación incluyera acciones de “reciprocidad”. En tal sentido, en la apertura del período ordinario de la Legislatura en el año 2000, el gobernador manifestó lo siguiente con respecto a la aprobación de la Ley N° 25235, denominada Compromiso Federal:

(... ) esperamos una actitud recíproca tanto por parte del Gobierno nacional como de los representantes de la oposición de nuestra Provincia. Nobleza obliga. Y porque la nobleza obliga, estoy totalmente convencido de que la mayoría de los integrantes de esta Legislatura votarán dentro de pocos días, los tres proyectos de ley que comprenden la propuesta de un “Estado Nuevo” para los cordobeses. (Cámara de Senadores de la Provincia de Córdoba, 2000, p. 29)

---

<sup>26</sup> El 26 de enero de 2000, se presenta en la Legislatura el proyecto “Reinvención, Nuevo Estado Provincial y Estatuto del Ciudadano”. Tras arduas negociaciones y la acusación pública de soborno a un senador del FREPASO, en marzo de ese año, la Cámara de Senadores aprobó el paquete de tres leyes: la Ley N° 8835 "Carta del Ciudadano", la Ley N° 8836 "Modernización del Estado Provincial" y la Ley N° 8837 "Incorporación de Capitales Privados al Sector Público".

En sintonía con esta reforma provincial, en el año 2000, a través de la Ordenanza municipal N° 10207 -“Modernización municipal y Programa 24 horas”- el intendente de la ciudad capital también puso en marcha una nueva reforma administrativa del Estado, aunque no se cumplieron la mayoría de sus postulados. Entre los artículos se creaba el Consejo de la Solidaridad, un organismo de asesoramiento y ejecución de políticas sociales, integrado por funcionarios públicos y por representantes de organizaciones sin fines de lucro. Dentro del mismo se conformaron cuatro direcciones: Desarrollo Humano, de Promoción Social, de Investigación Social y evaluación de proyectos y de Hábitat Popular. El funcionamiento del Consejo “se limitó a acciones de diagnóstico, planificación y difusión” (Medina, 2015, p. 94).

Con respecto a la transformación de las fuerzas políticas y las relaciones de poder a nivel provincial, con la asunción de este nuevo gobierno adquiere un papel protagónico parte del empresariado local agrupado principalmente en la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara de la Construcción, la Fundación Mediterránea<sup>27</sup> y los organismos internacionales de crédito.<sup>28</sup> Asimismo, se generaron reacomodamientos -no sin tensiones- hacia el interior de las organizaciones sociales y sindicales,<sup>29</sup> desde algunas de las cuales -principalmente las sindicales por la estructura del PJ- se incorporaron dirigentes en la gestión del Estado. Con respecto a las organizaciones sociales, dirigentes de la Unión de Organizaciones de Base por los Derechos Sociales (UOBDS)<sup>30</sup> así como integrantes de equipos técnicos de ONGs se integraron a la administración del Estado provincial y municipal.

---

<sup>27</sup> Según Vaca Narvaja (2001) la relación entre De la Sota y la Fundación Mediterránea, en particular con Domingo Cavallo, datan de 1987, año en el que este último fue candidato a diputado nacional en la lista del PJ cordobés.

<sup>28</sup> Desde el año 2004 De la Sota anuncia una serie de programas con el objetivo de promover la producción en la provincia: “la ley de promoción industrial, la ley de promoción de las inversiones turísticas, los créditos para la producción y consumo del Banco de Córdoba cuyos destinatarios principales son los productores del sector agropecuario y del turístico” (Schuster, 2015, p. 14).

<sup>29</sup> Al respecto puede consultarse Closa (2010).

<sup>30</sup> La UOBDS, creada en 1992, se había consolidado por entonces como una de las principales organizaciones del espacio barrial en torno al derecho al hábitat y fue uno de los colectivos que integró la Mesa de Concertación de Políticas Sociales convocada por el gobierno radical a mitad de la década del '90.

A mitad del año 2001, en el contexto de crisis de representatividad, el gobierno impulsó la modificación de la constitución provincial para la unificación de las dos cámaras legislativas hacia un ordenamiento unicameral y un recorte de más de un cincuenta por ciento de la cantidad de bancas existentes. Al mismo tiempo que avanzaba en la reforma política, el gobierno provincial anunció un plan de obras públicas para la construcción de 110 escuelas y el traslado de las villas localizadas en zonas céntricas de la capital a “Ciudades Barrios” construidas en zonas periféricas de la ciudad. La construcción de estas viviendas -12 mil en total- comenzó a fines de 2003, en el marco del programa “Mi casa, mi vida” con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y contraparte de fondos públicos de la Provincia<sup>31</sup>. Parte de este programa se desarrolló con los aportes de nación a través del Programa Federal de Construcción de Viviendas.

En cuanto a las políticas vinculadas con la problemática del desempleo, desde la Gerencia de Promoción del Empleo del Ministerio de Producción y Trabajo, se generaron dos modalidades: subsidios de desempleo condicionado a incorporarse a trabajar en empresas y programas desarrollados a través de los Centros de Desarrollo Regional (Ce.De.R) provinciales para la promoción del empleo, la formación profesional, el desarrollo de microemprendimientos y la vinculación entre pequeñas y medianas empresas, por otro lado (Britos y Caro, 2007).

Con respecto a la primera modalidad, los principales programas que se impulsaron fueron el Primer Paso (PPP) en 1999, destinado a jóvenes entre 16 y 25 años que buscan empleo por primera vez y el Programa Recuperación Productiva -Volver al Trabajo (VT)- en el año 2000, para mayores de 45 años y hasta 65 años, con beneficios hasta lograr la edad jubilatoria. Ambos habilitaban a que las empresas contrataran personal sin costos de salarios ni cargas sociales, siendo las mismas asumidas por el Estado. Entre otras consecuencias, la implementación de estos planes abrió la posibilidad para que las empresas pudieran reemplazar la

---

<sup>31</sup> Este programa se desarrolló en el área metropolitana de Córdoba entre el año 2003 y el 2010 con el objeto de erradicar las villas de emergencia ubicadas a la orilla del río Suquía y de canales de riego, para prevenir posibles inundaciones (Falú et al., 2015).

incorporación de trabajadores estables por beneficiarios del PPP.<sup>32</sup> Asimismo, en tanto los destinatarios de estas políticas quedaban por fuera de los espacios de representación sindical al tiempo que dejaban de constituirse estrictamente como desocupados, se producía un desplazamiento de los sindicatos y las organizaciones de trabajadores desocupados de los espacios de negociación con el Estado.

A partir de los datos que surgen de las entrevistas a las organizaciones que se abordan en este trabajo y a los funcionarios del Estado provincial consultados, se observa que estos programas no habrían integrado a miembros de estos colectivos, a pesar de que el acceso a programas de empleo era una de sus demandas.

En el proceso de transformación estatal, el Ministerio de Desarrollo y Promoción Social pasó a denominarse Ministerio de la Solidaridad (luego, Agencia Córdoba Solidaria por Ley N° 9006/2002 y Ministerio de la Solidaridad por Ley N° 9156/2004) y su ministro durante las dos primeras gestiones delastotistas fue Herman Olivero Heredia. Los programas incluyeron entre otros destinatarios a la población desempleada o en búsqueda de trabajo y consistieron principalmente en subsidios o “ayudas” monetarias asistencialistas para sujetos individuales. Uno de los programas principales fue el “Córdoba Confía” (Resolución N° 85/99 Ministerio de la Solidaridad) que dispuso de 15.000 ayudas Económicas Reintegrables, 7.500 destinadas a Córdoba capital y otras 7.500 para el interior provincial, con la finalidad de contribuir a complementar la canasta familiar de bienes y servicios básicos de hogares con ingresos insuficientes.

Otro programa fue “Desarrollo Solidario para Jóvenes SOL” implementado a partir del 2000 y que consistió en un sistema de becas destinadas a jóvenes de “sectores vulnerables” dentro de instituciones educativas formales (niveles secundario, terciario y universitario) y una línea no formal de Capacitación Laboral en Oficios para facilitar el acceso de jóvenes al mundo del trabajo. Según palabras del secretario de Políticas Sociales, Dante Heredia, se promovía el “apoyo sistemático a

---

<sup>32</sup> Con posterioridad, se creó el Programa Edad Productiva, orientado a desempleados en edad central, entre 25 y 44 años, y el Programa Primer Paso Profesional, para profesionales universitarios jóvenes que buscaban un primer empleo.

las organizaciones civiles de la sociedad y la gestión asociada con entidades sin fines de lucro” (Dante Heredia en Medina, Ortiz y Testa, 2001, p. 145).<sup>33</sup>

Para dimensionar la magnitud de la población a la que estaban destinados estos y otros programas, en mayo de 2001, 459.000 personas (34%) del total vivían en condiciones de pobreza en el Gran Córdoba, según datos del Indec publicados en el diario La Voz del Interior (21/02/2002, p. A3).

Por acuerdo entre la provincia y la ciudad capital, en septiembre de 2000 se creó la Casa del Tercer Sector y al poco tiempo se anunció la formación del Consejo de Participación para la Concertación de Políticas Sociales (Decreto N° 3006/00), conformada recién en el año 2004. Este Consejo tomó como antecedentes inmediatos la Mesa de Concertación de Políticas Sociales y el Consejo Consultivo Provincial creado en el año 2002 en el marco del Programa Nacional Jefes y Jefas de Hogar (Decreto N° 565/02); el Programa de Fortalecimiento Institucional del Sector Social (FISS); y el Fondo de Inversión para el Desarrollo Institucional (FIDI). En el año 1999, en sintonía con este discurso de “fortalecimiento de la sociedad civil”, se había firmado un acuerdo con nación para la instalación del Centro Provincial de Organizaciones de la Comunidad (CEPROC) como parte del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) (Arriaga et al., 2012).

Sin embargo, fue muy escaso el acceso a estos espacios y programas que tuvieron organizaciones de trabajadores desocupados y vecinos. Antes bien, en el período extendido entre 1999 y 2003, la relación del gobierno provincial con estos actores se construyó a partir de la negociación y asistencia en función de las demandas planteadas en el marco de acciones de protesta y de lo que el gobierno diagnosticaba como un contexto de “emergencia”. Como ya señalamos, se había tratado de intervenciones asistencialistas menos asentadas en programas y más en decisiones políticas coyunturales en respuesta a las demandas. Con posterioridad al año 2002, buena parte de estas intervenciones se establecieron a partir de programas sociales nacionales. El acceso de las organizaciones a esos programas

---

<sup>33</sup> Durante el año 2000 “el Programa SOL otorgó 3500 becas estímulo y logró la capacitación laboral de 500 jóvenes a través de la propuesta desarrollada por el Ministerio de la Solidaridad junto con la Fundación Chacabuco” (Medina, Ortiz y Testa, 2001, p. 146).

pasó menos por su vínculo con el gobierno provincial que con el nacional y con su participación en el Consejo Consultivo Municipal. Abordaremos esto en los capítulos específicos.

Las principales respuestas que dio el Estado provincial a las demandas de organizaciones de vecinos y desocupados de Córdoba entre los años 2001 y 2003, incluyeron la entrega de subsidios y módulos alimentarios desde la Dirección de Políticas Compensatorias y Emergencia Social -área histórica dentro del gobierno- bajo la Dirección General de Familia y Grupos Vulnerables. El director de esa repartición, Darío Ranco, caracterizaba este contexto como muy complicado y a la relación con las organizaciones sociales y sindicales del siguiente modo:

Ud. veía organizaciones con un grado de intencionalidad, marcado políticamente, que nos cortaba, supóngase, tal ruta... se interactuaba con la fiscal de turno y nos ponían mujeres con chicos adelante. La necesidad de esa organización era que le bajáramos, por ejemplo, 10 mil módulos (...) nunca nos quebraron porque entendíamos que el estado tenía que estar al lado de la gente, no de una organización política. (Entrevista Darío Ranco, 2015)

Según Ranco, entre 1999 y 2003, en Córdoba Capital se entregaron mensualmente 126 mil módulos alimentarios para personas con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), en función de diagnósticos de trabajadores sociales y de las organizaciones más importantes, que recibieron módulos para copas de leche; ellas fueron Caritas, Barrios de Pie y el Polo Obrero. A partir de 2004, la entrega pasó a la Municipalidad de Córdoba como parte del programa nacional “Vale lo Nuestro” (Entrevista Darío Ranco, 2015).

En enero de 2002, la provincia firmó un acuerdo con la Cámara de Supermercadistas para la entrega de 450 mil módulos alimentarios, financiados con fondos que dispuso el gobierno nacional a través del Programa de Emergencia Alimentaria al que nos volveremos a referir en el próximo apartado (La Voz del Interior, 26/01/2002, p. A3). Sin embargo, la cantidad de módulos finalmente entregados en el marco del programa “A la mesa” rondó los 200 mil según informó el Secretario de Acción Social de la provincia, Dante Heredia (La Voz, 12/02/2002, p. A3) y los mismos eran financiados por la provincia y aportes de la nación. Al dispositivo diseñado para la entrega de módulos a través de un padrón único de beneficiarios se sumaba la demanda de asistencia alimentaria presentada por

organizaciones de vecinos y desocupados. En julio de 2002, la entrega de los 150mil módulos para Córdoba Capital se realizó a través del Tercer Cuerpo del Ejército, argumentando que de este modo se generaba “mayor transparencia social” (La Voz del Interior, 02/07/2002, p. A2). A lo largo del año 2002 y, en particular en los primeros meses, fue reiterada la tensión por la demora o falta de pago de la provincia a comedores y merenderos, la demanda de financiamiento para nuevos comedores y/o la marcha y contramarcha respecto de la decisión de disminuir raciones de comida en el marco del histórico Plan de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR) destinado a población escolar y de tercera edad (La Voz del Interior, 26/01/2002, 09/02/2002, 24/02/2002, 07/03/2002, *en línea*).

### **3. El gobierno de transición de Duhalde. *Por una Argentina de pie y en paz***

Tras la renuncia de De la Rúa como presidente en diciembre de 2001 y luego de la designación e inmediata renuncia de cuatro presidentes provisionales, Eduardo Duhalde asumió como presidente nombrado por la Asamblea Legislativa en enero de 2002. Su discurso, fuertemente restaurador de la institucionalidad, construido como independiente de intereses partidarios, diluía la presencia de antagonismos y adversarios propios de lo político y acentuaba un sentido pacificador, de orden y de acuerdo, a tono con algunos sentidos que asumía la crítica a los modos de representación política. Proponía construir un “nuevo modelo” de país desde el “diálogo nacional”, entendido como consenso entre Estado, Mercado y Sociedad Civil en función de tres objetivos: “reconstruir la autoridad política e institucional de la Argentina”; “sentar las bases para el cambio del modelo económico y social para integrarnos al mundo, revalorizando lo nacional”; “garantizar la paz en Argentina, recuperando la economía, promoviendo la transformación productiva con equidad y propiciando un modelo sustentable fundado en la producción” (Duhalde, 01/01/2002).

En ese camino, entre sus primeros anuncios estableció la devaluación del peso argentino, el llamado a la concertación social y la creación del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJyJHD) para una cantidad creciente de personas que vivían en condiciones de pobreza y desocupación.

En un primero momento, la devaluación frenó las importaciones industriales e hizo más competitivas las exportaciones generando un excedente por la exportación de productos primarios con escaso o nulo valor agregado. No sin conflictos con el sector agropecuario, los recursos provenientes de las retenciones a las exportaciones del sector primario, iniciadas en febrero de 2002 (Decreto N° 310/02), fueron permitiendo financiar subsidios a servicios públicos y compensaciones a empresas generadoras de productos de la canasta básica de alimentos, desarrollar políticas sociales de alcance masivo para frenar el impacto inflacionario e incrementar el gasto público destinado a infraestructura económica (Neffa y Brown, 2012).

Al mismo tiempo, en enero del año 2002 el gobierno nacional convocó al Diálogo Argentino, foro promovido y coordinado por representantes de la Iglesia Católica, con asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y constituido por instituciones sociales, políticas, sindicales, empresariales y Ongs (Duhalde, 14/01/2002). Una de las tareas que cumplió este espacio, en simultáneo con el gobierno, fue acordar las condiciones para establecer la naturaleza de un “seguro de empleo y formación profesional”, que ubicó al trabajo, a la asistencia y a la justicia social como problemas de paz social, integración y armonía.

La propuesta de este seguro tenía dos antecedentes inmediatos. Por un lado, la consulta popular realizada a fines de 2001 por el Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO). Por otro lado, la convocatoria a la Casa Rosada realizada por Rodríguez Saa como presidente provisional el 26 y 27 de diciembre del año 2001 a algunas organizaciones piqueteras -la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Federación Tierra y Vivienda (FTV) de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)- manifestando su disposición de otorgar 120 mil planes a provincias y organizaciones sociales, en el marco de su anuncio de creación de un millón de puestos de trabajo.

Finalmente, aquello que Duhalde anunció como “seguro de empleo y formación” tomó la forma de lo que se conoció como Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Si bien a nivel discursivo el plan pretendió ser de inclusión social universal

(Decreto N° 565/02) finalmente llegó a cubrir, en el año 2003 a 1.987.875 destinatarios en todo el país (Pautassi et al., 2003).

Definió un particular recorte de la población y de las necesidades a proteger. Se focalizó en personas jefes o jefas de hogar “desocupados” con hijos a cargo de hasta 18 años de edad o discapacitados de cualquier edad, o jefa de hogar, cónyuge, concubina o cohabitante en estado de gravidez. Con respecto a las necesidades, estableció como legítima de atención la falta de ocupación en el contexto de la crisis de comienzos de nuevo siglo. Sin embargo, la cantidad de personas en estas condiciones que llegó a cubrir el programa no incluyó a toda la que en este contexto transitaba esa situación, ni tampoco el monto -“no remunerativo” de entre 150 y 200 pesos mensuales- a cubrir un mínimo para garantizar seguridad en ingresos, cuando el valor de la canasta básica por persona adulta se estimaba en febrero de 2002 en 161,26 pesos y en diciembre del mismo año en 232,59 pesos (Indec, 2004). Como programa de transferencia de ingresos, condicionó la percepción de este subsidio a una serie de contraprestaciones que debían realizar los “beneficiarios”. La posibilidad de contraprestación se estableció en torno a siete componentes - formación, productivo, comunitario, entre otros- pero el comunitario fue el que finalmente más se desarrolló (Neffa, 2008). Entre las exigencias a los destinatarios del programa se encontraba la obtención de acreditaciones de escolaridad y control sanitario de los hijos a cargo.

No obstante es posible reconocer en el PJyJHD ciertas líneas de continuidad con el carácter descentralizado y comunitarizado de las políticas sociales nacionales precedentes, este programa masificaba un modo particular de interpelación a quienes vivían en condiciones de pobreza y se organizaban para enfrentarla. Entre otros aspectos, un discurso sobre el “derecho a la inclusión social”<sup>34</sup> principalmente

---

<sup>34</sup> En palabras de Pautassi et al. (2003), este derecho familiar a la inclusión social desde el que se fundamenta el plan no está definido en la reglamentación ni encuentra correlato en la normativa constitucional. Los considerandos del JyJHD señalan que el carácter del derecho se origina en: “el cumplimiento del mandato del Art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, que establece el rango constitucional de los tratados y pactos internacionales, y expresamente en las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Cita, además, la actual coyuntura económica, la gravísima situación que vive el país y las recomendaciones de la Mesa del Diálogo Argentino”. Pero, como señala el documento publicado por el CELS, el derecho que se afirma en el plan no se encuentra definido posteriormente en la reglamentación. Puede considerarse, y por su vinculación con el PIDESC, que se hace referencia al “derecho a un nivel de vida adecuado”.

en relación al trabajo -a cualquier precio y condición- como dignificador de la asistencia y “la capacitación” como nueva carencia exigida por el cambio de perfil productivo” (Grassi, 2003, p. 267).

Además, incluía un llamado a la “participación” de diferentes sectores de la sociedad en distintas instancias: de los “actores sociales de cada una de las jurisdicciones” en su implementación; de los jefes y jefas de hogar en los proyectos comunitarios; de “representantes de los trabajadores, los empresarios y las organizaciones sociales y confesionales” que forman parte de los Consejos Consultivos Provinciales (CCP) y Municipales (CCM), en el monitoreo del plan; de “representantes” de estos mismos sectores y del gobierno nacional en el Consejo Nacional de Administración, Ejecución y Control (Co.N.A.E.y.C), según el Decreto N° 565/02, como generador de “beneficios comunitarios”.

A los pocos meses de la implementación de este plan, el gobierno nacional decidió cerrar la inscripción a nuevos destinatarios y en enero del 2003 abrió otro programa que funcionó de modo paralelo, el Programa de Empleo Comunitario (Resolución N° 7/2003, modificada al mes siguiente por resolución N°85/2003), para incluir a parte de quienes no habían quedado contenidos en el PJyJHD y ampliar el universo de actores y organizaciones sociales que podían presentarse como ejecutoras del plan.

Sin embargo, cabe destacar que según el Informe de Gestión del Área de Políticas Activas de la Agencia Territorial Córdoba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (2019) al que tuvimos acceso, este programa no tuvo asignaciones en Córdoba durante la gestión duhaldista. Recién se registran primeras asignaciones en el año 2004 (15.129 asignaciones) como parte de una edición del PEC 2004 y que desciende en los años subsiguientes.

Asimismo, tras la declaración de la Emergencia Alimentaria Nacional, el 15 de enero de 2002 se creó el Programa de Emergencia Alimentaria al que nos referimos en el apartado anterior, bajo el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Nación “destinado a la compra de alimentos, para la atención prioritaria de las necesidades básicas de la población de alta vulnerabilidad y en riesgo de subsistencia” (Resolución N° 108/2002). Su administración estuvo a cargo de este Ministerio con el asesoramiento y monitoreo de un Consejo

Consultivo integrado por representantes del Gobierno Nacional, de cada Gobierno Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pertenecientes a sus administraciones y a organizaciones sociales o confesionales. Se implementó a través de la transferencia de recursos financieros desde el nivel central hacia las provincias según el porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza y los niveles de coparticipación fiscal de cada una. Dichos recursos sólo podían destinarse a la distribución de módulos alimentarios o vales de comida y se entregaron como cajas o mercadería a personas individuales, comedores y/o merenderos. Como la ejecución del mismo estuvo a cargo de las provincias, el modo en que la misma se desarrolló en Córdoba, se aborda en otros apartados de este capítulo. Además, con el financiamiento del Banco Mundial, se redireccionó el objetivo del Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR) -originalmente creado en 1996 con el objetivo de paliar las carencias de infraestructura social básica- para financiar prestaciones alimentarias en comedores comunitarios de los grandes aglomerados, incluyendo a la capital cordobesa.

El lanzamiento de estos planes implicó una respuesta parcial aunque importante a las demandas de organizaciones piqueteras y de otros colectivos de personas desocupadas, habilitando una cantidad de recursos. Sin embargo, no sólo no agotó sus demandas -que como abordaremos en los capítulos siguientes incluían cuestionamientos a las orientaciones de las políticas económicas y sociales y al vínculo con los organismos internacionales de crédito- sino que también hizo posibles otras nuevas como el monto y la cantidad de los planes, cajas o mercaderías, la participación de las organizaciones en su control y administración a nivel local y nacional por medio de los Consejos Consultivos, entre otras.

Asimismo, comenzaron a formar parte de la agenda de las organizaciones temas como la judicialización y la represión. Un hito clave al respecto -aunque no el único- fue la masacre en la que dos integrantes de organizaciones piqueteras, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, fueron asesinados por la policía -en una jornada en la que más de 70 personas resultaron heridas y 200 detenidas- tras su participación en un corte del Puente Pueyrredón en la provincia de Buenos Aires el 16 de junio del 2002.

Este hecho y las manifestaciones de repudio que le sucedieron junto con la dificultad del gobierno de legitimar un programa político a largo plazo, fueron parte de las condiciones que aceleraron el llamado a elecciones presidenciales. Las mismas tuvieron lugar en abril del 2003 y, a diferencia de lo que había ocurrido en los últimos comicios del 2001, el porcentaje de ausentismo y de votos en blanco fue muy bajo.

Por entonces los dos candidatos a presidente -el ex presidente Carlos Menem y Néstor Kirchner- pertenecían a un mismo partido político, el justicialismo. La candidatura de Kirchner contó con el aval de Duhalde quien también había barajado entre las posibilidades proponer al por entonces gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota. Kirchner, por su parte, provenía del “Grupo Calafate”, conformado en 1998 por dirigentes peronistas que apostaban a la construcción y conducción de un justicialismo y de un proyecto de país distinto al desarrollado por el menemismo y que habían apoyado la candidatura presidencial de Eduardo Duhalde.

### ***3.1. El “Plan Jefes y Jefas de Hogar” como recurso de la asistencia social. Su implementación en Córdoba y la creación del Consejo Consultivo Municipal***

La implementación del PJyJHD, la constitución del Consejo Consultivo Municipal y los modos de participación y vínculo con el Estado que habilitó, asumieron particularidades en Córdoba.

Según el Informe Estadístico del Ministerio de Producción y Trabajo de la provincia de Córdoba (2003), a fines de 2003 se habían otorgado en Córdoba Capital algo menos que 54 mil PJyJHD, cuando la cantidad de desocupados en la ciudad sumaban 91.221, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH - 2º trimestre de 2004). De acuerdo con los relatos de los funcionarios municipales entrevistados, las contraprestaciones efectivamente realizadas fueron escasas y, de todos los componentes del plan, el más trabajado fue el “comunitario”.

Datos semejantes surgen del análisis de una Base de Proyectos JyJHD de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral (GECAL) del Ministerio de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social de la Nación, a partir de la cual pudimos reconocer que en Córdoba capital se ejecutaron y finalizaron algo más de 10242 proyectos comunitarios entre el lanzamiento del plan y diciembre de 2006 -lo que representa un total de 76510 planes destinados a este tipo de actividades- y una cantidad menor entre proyectos de capacitación, productivos, de materiales, de insumos y herramientas que suman 1545. Al igual que en el caso anterior, los componentes materiales y proyectos productivos se ejecutaron y finalizaron en su mayoría entre el 2002 y el 2005. En cambio, los componentes de capacitación e insumos y herramientas continuaron ejecutándose hasta el año 2008.

La disminución de planes otorgados a medida que avanzó el nuevo siglo y el cambio en los tipos de componentes que se desarrollaron después del período más agudo de crisis económica y social de comienzos de siglo, fueron acompañados de transformaciones en las políticas económicas y sociales durante el primer gobierno kirchnerista a nivel nacional con consecuencias en la disminución de la desocupación y el aumento de la ocupación. Para julio de 2004, los porcentajes de desocupación en el Gran Córdoba habían disminuido de 23,6 en el primer trimestre del 2003 a 16 -subempleo demandante 12.6- (Indec, 2005).

Los proyectos comunitarios desarrollados con el PJyJHD proponían como espacio de ejecución comedores, cooperativas, bibliotecas populares, entre otros espacios ya existentes o creados a tal fin por distintos colectivos, primordialmente como estrategia frente a la crisis socioeconómica, la ausencia o deficiencia de las políticas estatales al respecto y la ruptura de lazos sociales. Los mismos formaban parte o estaban vinculados, en algunos casos, a organizaciones no gubernamentales como Servicio en Promoción Humana (Serviproh), Servicio Habitacional y de Acción Social (Sehas), Servicio a la Acción Popular (Seap), La Minga, Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal (Cecopal), Amas de Casa del País, mutuales, entre otras); a organizaciones de desocupados y/o de agrupaciones políticas como la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), Movimiento Barrios de Pie, Polo Obrero, la Coordinadora de Desocupados de Córdoba y otras; a sindicatos y centrales como el Círculo Sindical de la Prensa (CISPREN), la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SIPOS), la Confederación General del Trabajo (CGT); instituciones confesionales

(católicas, evangélicas y otras); organizaciones de vecinos como Centros de Vecinos Autoconvocados, centros vecinales y de jubilados de diferentes barrios de la Ciudad; escuelas privadas; bibliotecas populares; entre otros. Las organizaciones de desocupados fueron quienes tuvieron mayor cantidad de proyectos y planes registrados en la base de la GECAL a la que tuvimos acceso.

En cuanto al tipo de actividades comunitarias desarrolladas, según datos de la misma base, el 34,6 % incluyeron actividades económico productivas principalmente destinadas a la subsistencia -como huertas y roperos comunitarios- ; el 21 % tareas de mantenimiento y limpieza como desmalezamiento, mantenimiento de espacios comunes entre las más frecuentes; 20,6% tareas administrativas y de apoyo a instituciones; 15 % acciones de promoción educativa, en salud, culturales, ambientales y sociales; 8% asistencia alimentaria -principalmente comedores y copas de leche- y 0.8% capacitación laboral. Presentamos en una tabla a continuación estos datos:

**Tabla 1. Tipo de actividades comunitarias PJyJHD**

<b>PJyJHD - Tipos de actividades comunitarias</b>	<b>Porcentaje</b>
Actividades productivas de subsistencia	34,6
Tareas de mantenimiento y limpieza	21
Tareas administrativas y de apoyo a instituciones	20,6
Acciones de promoción	15
Asistencia alimentaria	8
Capacitación laboral	0,8

Datos contruidos a partir de la Base de Proyectos JyJHD de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral (GECAL) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Período 2002 – 2006.

En síntesis, se trataba de actividades que, en algunos casos, los destinatarios del programa ya realizaban como parte de la reproducción de la vida cotidiana -principalmente sostenidas por mujeres- y para la mayoría de los cuales el programa no aportaba insumos, capacitación o un ingreso suficiente siquiera para alcanzar estándares de pobreza. Por otra parte, el tipo de trabajo desarrollado a modo de contraprestación recibía, como señalaron Pautassi et al. (2003), escaso reconocimiento y calificación.

Con respecto a la creación de los Consejos Consultivos provinciales y municipales presentes en la normativa de creación del plan, en Córdoba, el provincial (CCP Cba) se conformó en enero del 2002 y el primer Consejo Municipal (el CCM Cba) de la provincia inició sus actividades el 20 de febrero del mismo año en el Palacio 6 de Julio de la ciudad capital (Acta N°1, CCM Cba, 2002). De un total de 421 Consejos Consultivos Municipales que debían conformarse en toda la provincia, en diciembre de 2003 aún quedaba un 24,5% de ellos sin constituirse (Lupica, 2003). El 24 de enero del año 2002 la provincia había firmado un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación, por la que ésta asignaba casi 61 mil millones de pesos con el objeto de implementar el PJyJHD. En ese convenio se establecían además acuerdos básicos sobre los roles y funciones de los Consejos Consultivos, aunque es la reglamentación del programa (Resolución N° 312/02 del MTEySS) y luego la reglamentación particular para los CC Municipales y Comunales (Resolución N° 112/02 del MTEySS), donde quedó establecido para todo el país su constitución, su función y su funcionamiento. Centralmente, este espacio estuvo constituido por organizaciones de trabajadores, empresarias, organizaciones sociales y confesionales y autoridades gubernamentales. Las instituciones no gubernamentales debían conformar al menos 2/3 partes de los miembros.

En el caso del CCM, la convocatoria para su conformación fue realizada por el Consejo de la Solidaridad, dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba. Al inicio, la misma no fue masiva ni abierta. Como expresaron los integrantes del CCM, en el 2004:

una de las condiciones para quienes integraran el espacio era tener personería jurídica o aval de una organización con personería. Hubo organizaciones que no fueron convocadas, como el caso de Barrios de Pie que reclamó al intendente hasta que logró integrarse. (Sehas, CENOC, 2005, p. 18)

Si bien en un comienzo 20 de las 30 organizaciones convocadas asistieron a la reunión fundacional, casi la mitad -principalmente las confesionales y ONGs- discontinuó su participación. En una segunda convocatoria a mitad del 2002, se sumaron otros colectivos aunque no quedó representado el sector empresarial.

Entre sus integrantes se encontraban la propia Municipalidad de Córdoba, organizaciones de los trabajadores –como la CTA, la CGT Delegación Regional Córdoba (Chacabuco), la CGT Rodríguez Peña-, organizaciones sociales – Mesa de Desempleados de la Ciudad de Córdoba, Coordinadora de Desocupados y desempleados de la provincia de Córdoba, Centro de Desocupados por la Justicia Social, Asociación Civil 1 de Julio, Centro de Vecinos Autoconvocados, Movimiento Barrios de Pie, Unión de Organizaciones de Base por los Derechos Sociales, Organización de Vecinos Desocupados de zona noroeste, entre otras- y organizaciones confesionales –CARITAS, Consejo de Pastoral Social– Arquidiócesis de Córdoba, Comité Interreligioso por la Paz.

No obstante, la participación de los distintos actores fue discontinua, al menos hasta 2004 cuando se realizó una nueva convocatoria a la participación de organizaciones sociales (Sehas, CENOC, 2005, p. 20). Ese año se sumaron más organizaciones de vecinos y desocupados, la entonces Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba y dos actores que participaron por única vez ese año: la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC). El CCM Cba se constituyó con un presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero, figura esta última que luego se modificó cuando se crearon áreas de trabajo que funcionaron durante menos de un año y luego se disolvieron.

Entre las particularidades que asumió este espacio en términos de la relación entre los distintos actores, rol y funcionamiento pueden reconocerse dos momentos con algunas recurrencias y diferencias, etapas que se corresponden con los cambios en la gestión a nivel municipal, provincial y nacional: por un lado, la creación del Consejo en 2002 hasta fines de 2003 y desde entonces hasta fines de 2007.

Una recurrencia que atraviesa ambos momentos a lo largo de estos cinco años es que el Consejo asumió funciones de administración operativa del PJyJHD, rol que le delegó la Municipalidad y para lo que aportó algunos recursos que, según relatan los integrantes del CCM, fueron motivo de disputa y reiterados conflictos: un técnico en informática, espacio físico, equipamiento informático y material de librería. Además tuvo por función asegurar el control de la inscripción, recibir formularios Simplificados Únicos, evaluar y seleccionar los proyectos presentados

por unidades ejecutoras autorizadas y elevar un listado de éstos al CCP, órgano encargado de confeccionar una nómina única y remitirla a la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Este rol del Consejo como órgano administrador de política social fue discutido por sus miembros con distintas intensidades y argumentos a lo largo de ambos momentos. Sin embargo, y a pesar de acciones emprendidas a mediados de 2003 en demanda del traspaso del área administrativa del programa a la Municipalidad junto con la cesión de tierras y un inmueble para el funcionamiento de las organizaciones vinculadas al PJyJHD, ninguna logró concretarse (Nota archivada en la Dirección Municipal de Promoción Comunitaria del 14/08/2003 en Sehas - CENOC, 2005).

La participación discontinua de la mayoría de las organizaciones que lo componían, fue otra constante de estos años. Esta particularidad puede estar asociada al contexto de su constitución y funcionamiento.

Por una parte, el Consejo estuvo compuesto por una diversidad de organizaciones con formas de funcionamiento, estilos y concepciones sobre la política que diferían entre sí y que permanecieron en tensión en la construcción del reglamento interno para el desarrollo de este espacio. A ello se sumaron las condiciones de funcionamiento del Consejo, atravesadas por el resquebrajamiento de lazos sociales en el marco de la crisis económica, social y de representatividad del 2001/2002. Asimismo, el Consejo no contó con recursos suficientes ni capacitación permanente de sus integrantes y tuvo que desarrollar un trabajo que demandó mucho esfuerzo, en el marco de la delegación de las tareas administrativas que le realizó la Municipalidad y debido a la cantidad de destinatarios del programa en la ciudad capital.

Por otra parte, se desarrolló en una coyuntura de conflictos partidarios casi permanentes en torno a los que sus integrantes tomaron posiciones distintas. Al respecto, la creación del programa tuvo lugar en un contexto de disputa dentro de Unión por Córdoba, y de conflicto con la gestión municipal de Germán Kammerath, denunciado pública y judicialmente por su sucesor en el cargo y a quien el gobernador De la Sota retiró públicamente su apoyo en febrero de 2002 (Gutiérrez,

1/12/2002). Su posterior desarrollo, tras la asunción de Luis Juez en 2003 en la intendencia de la ciudad capital, se produjo en el marco de una falta de diálogo entre la provincia y el municipio y en el que la primera apuntó a desligarse de la gestión del plan en la capital.

Con respecto al primer momento, el Consejo se dedicó principalmente a la administración de un único plan, el PJyJHD. Asimismo, todos los entrevistados y el relato construido en la sistematización realizada por Sehas, CENOC (2005) coinciden en que fue un tiempo de mucho conflicto interno y de enfrentamientos entre los integrantes que lo componían en torno a cuestiones relativas a la conducción del espacio, recursos económicos, falta de coordinación municipal y de designación de autoridades del Consejo -por decisión de sus integrantes-. Además, de inseguridad en el manejo de archivos físicos y atraso en la carga de datos (Villa Uría, informe presentado a la Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad de Córdoba, 10/02/2004), denuncias por manejo clientelar de planes e irregularidades en el funcionamiento y en la asignación de PJyJHD a personas destinatarias que no habrían cumplido con los requisitos del plan (Entrevista a Villa Uría, 21/07/2008; *La Voz del Interior*, 1/02/2004, p. 2A y 15/02/2004, p. 2A; *La Nación*, 21/05/2002, *en línea*), no monitoreo del plan y por discusiones entre las organizaciones sobre si ésta era o no una competencia del Consejo, entre otras.

En el segundo momento, con la gestión del intendente Luis Juez en la ciudad capital, se designaron coordinadores municipales, siendo Villa Uría quien asumió el rol operativo (Decreto Municipal N° 65/04), se incorporaron nuevas organizaciones -principalmente de segundo grado- y se realizaron elecciones semestrales de la Comisión Directiva que fueron reconocidas por este órgano y la Municipalidad. En la primera, resultaron electas como presidenta Marta Juárez, referente del Movimiento Barrios de Pie y como secretaria Lidia Jiménez, de la Asociación Amor y Trabajo (Acta N°2, 31/03/2004 y Decreto N° 818, 16/04/2004 en Sehas- Cenoc, 2005). Con anterioridad también habían conducido el espacio referentes de organizaciones pero habían sido elegidas en el contexto de procesos electivos que no se habían formalizado en una normativa que los regulara.

En este período, la Municipalidad de Córdoba facilitó un espacio de funcionamiento para el Consejo y tuvo lugar un proceso de fortalecimiento a través

de talleres coordinados por SEHAS, con recursos de un programa destinado a tal fin por CENOC. También se inició una depuración del padrón de destinatarios del programa que dio como resultado la baja de casi 6000 destinatarios, como parte de las irregularidades registradas y tras la implementación del cobro con tarjeta en noviembre de 2004 (Día a Día, 17/09/2004).

En esta etapa, el Consejo no avanzó en el monitoreo del PJyJHD y comenzó a replantearse su rol eminentemente administrativo. En el marco de este proceso de re-discusión, se crearon cinco áreas de trabajo y análisis de funciones: Diseño de políticas sociales, PJyJHD, Economía Social, Plan Nacional “El hambre más urgente” y Hábitat. Sin embargo, las mismas se disolvieron a los pocos meses de su creación y el Consejo afianzó su rol administrativo con nuevas funciones asociadas al programa nacional denominado “Manos a la Obra” (Sehas-Cenoc, 2005).

Esta fue una etapa en la que el Consejo empezó a constituirse como un actor con participación en pronunciamientos públicos con demandas a distintas jurisdicciones estatales ante problemáticas sociales vinculadas con políticas habitacionales, el PJyJHD y las políticas de seguridad. Algunas de las acciones registradas en ese sentido fueron: el pronunciamiento y exhortación a la Municipalidad y a la Provincia a generar políticas de mejoramiento de barrios y villas de emergencia de la ciudad con participación y organización de pobladores y construcción de casas, que incluyeran empleo de mano de obra desocupada y en contra de las políticas habitacionales del gobierno provincial en el marco del programa “Mi casa, mi vida” a la que nos referiremos en el apartado siguiente (Gacetilla de prensa 18/08/04 en Sehas-Cenoc, 2005; La Voz del Interior, 19/08/04, *en línea*). También demandó la pronta reinserción laboral de quienes eran destinatarios del PJyJHD y la creación de un Plan Nacional que contemplara a quienes no quedaron incluidos en este programa (Gacetilla de prensa 21/10/04 en Sehas-Cenoc, 2005). Asimismo promovió la declaración de persona no grata y un repudio a las expresiones del representante del Manhattan Institute de la ciudad de Nueva York, Carlos Medina, quien mantenía diálogo con el gobierno provincial para la implementación de nuevas políticas de seguridad y que se había referido a las personas que “limpian vidrios” y a las prostitutas como “terroristas urbanos” (La Voz del Interior, 4/11/2004, *en línea*).

Si bien algunos de estos comunicados y gacetillas fueron publicados por el diario de mayor tirada a nivel local, La Voz del Interior, el impacto político de estas declaraciones quedó restringido a estos pronunciamientos y el Consejo no logró trascender su rol principal de administración del PJyJHD y del “Manos a la Obra”. En términos de su posibilidad o no de profundizar procesos democratizadores, en esta segunda etapa la participación de actores integrantes del Consejo se fue ampliando, se formalizaron y concretaron procesos electorales internos y se consiguió, al menos temporariamente en los años 2004- 2005, que el funcionamiento del Consejo estuviera menos obstaculizado por disputas internas entre quienes lo integraban y entre éste y el gobierno.

Sin embargo, y a diferencia de lo que aspiraba una parte de sus integrantes, su rol siguió centrado en la administración de programas sociales focalizados y no logró producir transformaciones políticas que permitieran iniciar un proceso para reponer derechos cercenados, como los que se visibilizaban en las gacetillas mencionadas. La posibilidad del gobierno municipal de receptionar y problematizar las demandas allí planteadas estuvo limitada principalmente a cuestiones de funcionamiento interno del espacio. Esto fue clave para dificultar su avance respecto de las demandas de intervención sobre problemáticas públicas que había visibilizado este espacio, algunas de competencia municipal y otras nacionales y provinciales.

#### **4. Redefinición y estabilización de un nuevo orden. El protagonismo del Estado a nivel nacional y la transversalidad**

Con la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia el 25 de mayo de 2003, comenzó un proceso de estabilización de un régimen de acumulación económica y de redefinición del orden político. Como parte de esos procesos se produjo un cambio en el papel y la relación de las organizaciones sociales con trabajo territorial, en especial las de trabajadores desocupados. Se transformaron, también, las relaciones con los gobiernos del interior, incluyendo a Córdoba.

A diferencia del discurso de asunción del gobierno nacional saliente, el de Kirchner restituyó el antagonismo en el discurso político distinguiendo ciclos históricos y dividiendo el campo en términos de actores, modelos de país y proyectos en

disputa (Martínez, 2006; Danani y Beccaria, 2011; Retamozo, 2011, entre otros). Por una parte, un “nosotros” -“los hombres y mujeres comunes”- que se hacía cargo de las demandas presentes en el estallido del 2001, de la crisis económica y de representatividad; un sujeto de acción con un rol activo -“luchando codo a codo”- en la construcción de un nuevo proyecto colectivo, “transversal” a las “banderías políticas”, un nuevo tiempo de una “Argentina unida, normal y más justa”. Por otra parte, el antagonista principal el “modelo neoliberal” excluyente, se presentó encarnado en diferentes prácticas y actores pasados y presentes, nacionales e internacionales; entre ellos, las fuerzas armadas comprometidas con el pasado, la impunidad, los genocidas, el menemismo, los grandes evasores, los fondos buitres e intereses financieros, la corrupción, la pobreza cívica, los que priorizan la exclusión y el ajuste a costa del hambre, el pago de la deuda sobre los intereses nacionales, los organismos internacionales (Discurso de asunción de Néstor Kirchner, 25/05/2003).

Desde esta comprensión de la historia, propuso la construcción de un proyecto que reivindicaba lo nacional, la subordinación de la economía a la política, la recuperación del rol de Estado, la inclusión vía producción/trabajo/empleo, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de los vínculos con otros países latinoamericanos, generando una alianza estratégica -regional.<sup>35</sup>

Tras el debilitamiento de un patrón de acumulación sustentado en la valorización financiera y el ajuste estructural y la mega devaluación del tipo de cambio real en el año 2002 (Basualdo y Manzanelli, 2016), la recuperación de lo nacional en esta primera gestión de gobierno<sup>36</sup> incluyó, entre otras, el impulso al crecimiento de la

---

<sup>35</sup> Entre las decisiones que se impulsaron en ese sentido puede mencionarse la negativa al ALCA en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata (Discurso de Néstor Kirchner, 4/11/2005) y la apuesta al fortalecimiento del Mercosur, la renegociación de la deuda externa y el pago de aquella con el FMI, el desarrollo de los juicios a los represores del terrorismo de Estado, la remoción de las cúpulas militares, el impulso de una política de la memoria y la redefinición de la Corte Suprema de Justicia, entre otras.

<sup>36</sup> A la presidencia de Néstor Kirchner seguirán dos períodos consecutivos de mandato del Frente para la Victoria con Cristina Fernández como presidenta. Estas gestiones están fuera del período delimitado para esta investigación pero es necesario aclarar que los procesos que se dieron en las tres gestiones de gobierno Kirchnerista tuvieron sus particularidades y requieren un análisis específico.

economía, la participación de los trabajadores en el ingreso<sup>37</sup> junto con la reducción del desempleo y el subempleo -que pasó del 17,3% en el 2003 al 8% en el año 2007- y el incremento del salario mínimo vital y móvil (Informe Trimestral N° 13 del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, 2007).

Asimismo, el gobierno llamó a la búsqueda de una estabilidad política que instituyera una “nueva normalidad” y replanteó el rol de las organizaciones sociales convocándolas a formar parte del proyecto de “transversalidad”, transformando las políticas sociales vigentes.<sup>38</sup>

El nuevo espacio político “transversal” reunió a sectores de partidos y organizaciones sociales progresistas o nacional populares, peronistas y no peronistas, autónomos respecto del partido justicialista. Fue una estrategia de construcción de un nuevo espacio de representación y de poder, en el marco de la crisis de representatividad existente y de la debilidad de poder con la que Kirchner había asumido la presidencia tras la decisión de Menem de no presentarse en la segunda vuelta electoral y la escasez de votos y apoyos con que contaba al iniciar el gobierno (Torre, 2004; Mocca, 2009; Natalucci, 2010; Masetti, 2010; Retamozo y Trujillo, 2019).

Además, en estos primeros años, analiza Torre (2004), había sido una apuesta para promover una transformación dentro del propio partido que lo había llevado a la presidencia, el partido Justicialista, desplazando “viejos” sectores y promoviendo su corrimiento “hacia la izquierda”. Sin embargo, expresa Mocca (2009), las elecciones provinciales de 2003 evidenciaron el peso que aún conservaban los dos partidos tradicionales -el PJ y la UCR- en términos de representación política subnacional. Esta situación, apenas iniciado el mandato, marcó una tensión que

---

<sup>37</sup> La reconstrucción de los derechos de los trabajadores incluyó, entre otras, “el aumento de las asignaciones familiares; el impulso y mantenimiento de las negociaciones colectivas de trabajo, la derogación de la denominada “Ley Banelco” a través de la ley 25.877 de 2004, la suspensión de los despidos sin justa causa, las modificaciones de la Ley de Quiebras en 2006 reconociendo la competencia de jueces laborales en los reclamos de los trabajadores de empresas en quiebra” (Becerra et al., 2012, p. 5).

<sup>38</sup> “Ni planes ni palos” -según circuló en distintos medios de comunicación nacionales- fue la estrategia de Néstor Kirchner para afrontar el problema de la desocupación y las protestas de organizaciones piqueteras durante esos primeros años de gobierno (La Nación, 5/10/2003, *en línea*; Página 12, 16/07/2004, *en línea*).

continuó en los cuatro años posteriores, entre la pretensión de reestructuración del sistema de partidos y la necesidad de contener al PJ para la gobernación del país. Desde estas apuestas, con base en los postulados con los que asumió el mandato presidencial y en el marco de los acuerdos y tensiones que atravesaba este espacio político, el gobierno fue diseñando estrategias y políticas estatales tendientes a construir una fuerza política con la que desarrollar y viabilizar este proyecto y legitimarlo públicamente.

El proceso de conformación de una fuerza política con la que impulsar estas transformaciones, evidenció frutos en las elecciones legislativas de 2005 y en la demostración público callejera en la multitudinaria movilización a Plaza de Mayo para la conmemoración del tercer aniversario del gobierno y de asunción de Héctor Cámpora en 1973, el 25 de mayo de 2006. En esa plaza participaron sindicatos, organizaciones piqueteras, de derechos humanos, territoriales, partidarias -con presencia de referentes del PJ- y representantes políticos incluyendo intendentes del conurbano -con consignas como “La patria somos todos”-. El acto no solo se propuso legitimar las decisiones políticas tomadas hasta entonces sino mostrar “fuerza” y apoyos al proyecto (Schurman, 26/05/2006). Como señalan Natalucci y Perez, en el año 2006 el kirchnerismo “se constituía de las organizaciones sociales y territoriales, la CGT moyanista y el PJ junto con sectores de la izquierda peronista, progresismo y radicales” (2012, p. 142).

#### ***4.1. La centralidad del empleo, la integralidad y la territorialidad. La transformación de la política social***

Bajo la premisa de que “los problemas de la pobreza no se solucionan desde las políticas sociales sino desde las políticas económicas” y de que el clientelismo político no era “producto de la asistencia social como gestión del Estado, sino de la desocupación como consecuencia de un modelo económico” (Discurso de Néstor Kirchner, 25/05/2003), el gobierno diseñó una Red Federal de Políticas Sociales Integrales para garantizar el acceso a la educación, la salud pública y la vivienda para la contención a las familias en riesgo.<sup>39</sup> La integralidad propuesta tenía como

---

<sup>39</sup> Dicha red se propuso con el objetivo de articular las responsabilidades institucionales del Estado en una cogestión con las organizaciones de la sociedad y el sector privado productivo, rumbo hacia

meta superar las desarticulaciones y fragmentaciones de las políticas sectoriales precedentes, llevar institucionalidad a los barrios, generar políticas activas de empleo y disminuir la cantidad de planes sociales al tiempo que se iban reconfigurando las relaciones con las organizaciones sociales.

En octubre de 2004, por Decreto N° 1506, se planificó el traspaso del PJyJHD - dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación- a otros planes que este gobierno impulsaría desde los ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Si bien esta política data de este año, el proceso fue lento pudiendo reconocerse todavía la existencia de algunos PJyJHD vigentes en Córdoba en 2009. Los programas para el traspaso fueron los denominados “Plan Nacional Familias”, “Plan Integral de Promoción del Empleo” -“Más y Mejor Trabajo”-, el “Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Solidaria” -“Manos a la Obra”-, el “Plan de Seguridad Alimentaria” -“El hambre más urgente”-, así como otros que pudieran crearse.

El criterio de clasificación (y justificación) para realizar el traspaso de los PJyJHD a otros planes, fue el de “condiciones de empleabilidad”. Así, los receptores del programa calificados como “empleables” continuaron percibiendo sus beneficios en la órbita del Ministerio de Trabajo -con la meta de ser incluidos a futuro en espacios de trabajo formal-. Aquellos que no fueron calificados como “empleables” fueron redireccionados al Programa Familia, al Manos a la Obra -u “otros destinados a la atención de grupos vulnerables, la mejora de ingresos y de desarrollo humano creados o a crearse en el Ministerio de Desarrollo Social”-. A pesar de esta iniciativa que puso el acento en el trabajo, cierta forma de “moralización” de las identidades aparecía nuevamente en la base de la clasificación entre quienes son considerados “empleables” y “no empleables”.<sup>40</sup>

---

lo que se enuncia como una “nación integrada” y “con perfil productivo”. Ministerio de Desarrollo de la Nación, 2004, p. 2). Entre otras políticas impulsadas en el marco de esta Red, en julio de 2004 se celebró un convenio de colaboración entre distintas dependencias estatales a nivel nacional para la conformación de los Centros de Integradores Comunitarios (CIC) como articuladores de la política social a nivel territorial (Resolución N° 2173/2004). Al año 2006, como parte de una primera etapa, se habían construido 230 edificios en todo el país, de los cuales 32 estaban ubicados en la provincia de Córdoba, tres de ellos en los barrios La Tela, Villa Siburu y Cabildo de la ciudad capital (Ministerio de Economía de la Nación, 2006).

<sup>40</sup> Y si a ello se suma el hecho de que son principalmente las mujeres destinatarias del Programa Familia quienes ingresan en esta última categorización, se contribuye a generar una desigualdad de género en desmedro de la perspectiva que el propio plan dice sostener.

El Plan Manos a la Obra, inspirado en términos generales en los principios de la Economía Social, estuvo destinado a grupos de desocupados o subocupados en situación de pobreza o vulnerabilidad social que desarrollaban alguna actividad productiva o necesitaban apoyo tanto de herramientas como de equipamientos, insumos y otras inversiones para comenzar la misma (Resolución N° 1375/04). A esta apuesta al fortalecimiento de proyectos socio-productivos se sumó el programa de Promoción del Microcrédito para el desarrollo de la Economía Social en junio de 2006, con el fin de aportar al “desarrollo integral de las personas, los grupos de escasos recursos y el fortalecimiento institucional de organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboran en el cumplimiento de las políticas sociales” (Ley n° 26.117). Sin embargo, el despliegue mayor de este tipo de políticas no se produjo en este período sino años después en el marco del lanzamiento del “Programa Ingreso Social con Trabajo” (Resolución N° 3.182/2009) que, junto con una reformulación del Manos a la Obra, quedaron comprendidos en este ministerio bajo el título “Argentina Trabaja”.

Como parte del convenio marco del Programa Federal de Emergencia Habitacional-Primera Etapa, para impulsar procesos cooperativos, se creó en noviembre de 2003 el componente “Emergencia Habitacional” dentro del PJyJHD. Dicho componente permitía incluir la actividad de contraprestación en cooperativas de trabajo conformadas localmente para la construcción de viviendas (Resolución N° 299/2003, MTEySS). El financiamiento del costo de la vivienda (no reintegrable) estaba a cargo de la nación mientras que las provincias y/o municipios debían contribuir con los terrenos. La provincia de Córdoba adhirió al convenio marco en julio de 2004. Según datos de la Dirección de Vivienda de la Provincia de Córdoba (citado en Falu et al., 2015), particularmente en la ciudad de Córdoba se construyeron 1.427 unidades de viviendas a través del Programa Federal de Vivienda (21%), mientras que en el interior de la provincia fueron 5.247 unidades (79%). El estado de ejecución a abril de 2008 era de 39,26% de viviendas terminadas y 40,78% en ejecución en toda la provincia.

La política de desarrollo de la economía social y los procesos de cooperativización que comenzaba a vislumbrarse aspiraba a vincular la política social con la política económica y a fortalecer otros lazos y modos de integración social desde una

concepción del trabajo diferente a la de la contraprestación laboral como requisito de políticas compensatorias. Una de las herramientas que aportaron al desarrollo de estas políticas fue la creación del “Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social” en febrero del año 2004, por Decreto N° 189/04. El mismo permitiría incorporar al Monotributo Social -creado el 17 de diciembre de 2003 por Ley N° 25865- a “emprendedores sin ingresos estables, integrándolos a la economía formal y promoviendo su actividad” (Discurso de Néstor Kirchner, 1/03/2004, p.15).

El MDS invirtió un 4% (110.000.000 de pesos) de su presupuesto en el Plan Manos a la Obra en el año 2005 (Hintze, 2007), incrementándose a cerca de 130 mil millones en 2006 y 2007 (Informe de Ejecución Presupuestaria MDS, 2006, 2007). En el caso particular de Córdoba fue escaso el desarrollo de este programa, según lo expresaron los funcionarios entrevistados, Daniel Juez, Secretario de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, y Gustavo López, Director de Desarrollo Territorial y Economía Social dependiente de la misma secretaría (15/07/2015).

Al respecto la página web de la municipalidad capitalina publicaba los siguientes resultados de la ejecución de la primera etapa del “Manos a la Obra” en el año 2004:

**Tabla 2**

<b>Plan Manos a la Obra – Líneas de Financiamiento en Córdoba.</b>	<b>Cantidad de Proyectos</b>
Programa Insumos y Herramientas	11
Programa Redes	40
Programa Emprendimiento Productivo	33

Fuente: Página Web de la Municipalidad de Córdoba, 07/04/2005.

Según Etchegorry, et al. (2007), con respecto a la línea de financiamiento “Programa Emprendimiento Productivo”, en el año 2006 se registraban 21 subsidios a emprendimientos asociativos efectivamente funcionando, proyectos que exigían la participación de al menos tres personas -no familiares entre sí- y que podían solicitar un monto de hasta 15.000 pesos por proyecto. En cuanto al

programa de Promoción del Microcrédito para el desarrollo de la Economía Social, Córdoba adhirió en marzo de 2007 (Ley provincial N° 9365/2007).

El "Plan Nacional Familias" se compuso de una serie de programas y acciones de prevención, promoción y asistencia, entre los que se encontraban los Centros Integradores Comunitarios (CIC), las acciones implementadas por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, el Programa Federal de la Mujer y la Familia Juana Azurduy, el trabajo del Consejo Federal de la Niñez y Adolescencia, actividades de apoyo a organizaciones sociales, entre otras, y el Programa Familias por la Inclusión Social (PFIS). Este último fue un plan focalizado de transferencias condicionadas -con características semejantes a las descritas en la gestión del gobierno nacional anterior<sup>41</sup>- que incluyó dos componentes: un ingreso no remunerativo -según la cantidad de hijos que se posean y en la medida que el total de ingresos del hogar no supere el monto del salario mínimo, vital y móvil-; y la promoción familiar y comunitaria en torno a cuatro líneas principales: educación, salud, capacitación para el trabajo, y desarrollo comunitario y ciudadano y consolidación de redes (Resolución N° 825/05). Si bien el programa postulaba el derecho a la inclusión social, sus características se vincularon más con las políticas asistencialistas.

Según datos aportados por el MDS, la cobertura del PFIS a nivel nacional fue de algo más que 240 mil familias en 2005, 400 mil en 2006 y 520.677 en octubre de 2007 (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 2007a). Si se comparan las cifras de quienes poseían el plan a octubre de 2007, con los datos de hogares que vivían en condiciones de pobreza e indigencia aportados por la EPH del INDEC - 1.842.004 hogares- estos planes cubrían el 28,27% del total de dicha población. En lo que concierne a Córdoba Capital, las familias que recibieron el programa llegaron a 35.678 en septiembre de 2007 (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 15/01/2007).

En cuanto a la cantidad de familias traspasadas del PJyJHD a este programa, en diciembre de 2007, sumaban 311.926 a nivel nacional y 16.825 en la provincia de Córdoba -en la ciudad capital hacia septiembre de 2007, totalizaban 8.668-. A nivel

---

<sup>41</sup> Para un análisis al respecto, cfr. Britos, 2009.

local, ello equivalía a un 36,32% del total de destinatarios del PJyJHD que en diciembre de 2007 era de 46.318 (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 2007b).

Asimismo, como parte de la Red Federal de Políticas Sociales Integrales y de la apuesta a la incorporación de organizaciones sociales a la gestión de la política pública -entre ellos el Movimiento Barrios de Pie- en noviembre de 2004 se creó el programa “Promotores Territoriales para el Cambio Social” (PTCS), por iniciativa de la Dirección de Promotores Territoriales, perteneciente a la Subsecretaría de Organización y Capacitación Popular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El primer encuentro de este programa comenzó el proceso de capacitación de 260 formadores de todas las provincias, vinculados a organizaciones y movimientos sociales con trayectoria en la lucha por la defensa de los derechos sociales y con experiencia de trabajo territorial (Ministerio de Desarrollo Social, 04/07/2015, *en línea*).<sup>42</sup>

La construcción de esta red federal y del programa de PTCS constituyó, por un lado, una apuesta a lo que Perelmiter (2012) sintetizó en la idea de “bajar” las políticas del Estado en los territorios al tiempo que “subir” las necesidades y problemáticas de los territorios al Estado, recuperando y reconociendo la experiencia e inserción que habían construido las organizaciones sociales a lo largo de los años en los que el Estado había desatendido las mismas. Por otro lado, y al mismo tiempo, el protagonismo de las organizaciones en la gestión del Estado y en la implementación de estas políticas, aportó a la construcción de poder territorial del espacio transversal.

Con respecto a los actores calificados como “empleables”, la iniciativa de redefinición de la política social iba en sintonía con la apuesta a la construcción de trabajo genuino como estrategia de inclusión. En ese camino, en los años que siguieron a 2005, se crearon nuevos programas para aquellos destinatarios del PJyJHD que no accedieran a puestos de trabajo formal, pudiendo suscribir como parte del Plan Integral para la Promoción del Empleo (Resolución N° 256/2003) al Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE) y a otros planes de capacitación y de

---

<sup>42</sup> Durante el Encuentro se trabajó sobre la “Red Federal de Políticas Sociales”, la “Organización Comunitaria” y la “Participación, Diagnóstico y Planificación, Perfil y Rol del Promotor Territorial”

promoción de autoempleo impulsados desde el ministerio<sup>43</sup> como el Programa de Trabajo Autogestionado (PTA). Para articular redes informativas, relacionar oferta y demanda de empleo, acceso a programas sociales y capacitación, se constituyó una Red de Servicios Públicos de Empleo a partir de la creación de las Oficinas de Empleo Municipales (Resolución N° 176/05).

El Plan Integral tenía por objetivo potenciar la por entonces “relación positiva entre el crecimiento del producto, el incremento de la productividad y el aumento del empleo, fomentando su desarrollo cuantitativo y cualitativo” a través de programas, proyectos y acciones específicas a implementarse.

En ese marco, el 29 de marzo de 2006, se creó el Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE) (Decreto N° 336/06) como un seguro no remunerativo por dos años que aseguraba a los destinatarios la percepción de una base de \$225. En tal sentido, siguiendo a Neffa y Brown (2013) es posible caracterizarlo como una política activa que incluyó acciones de terminalidad educativa, formación profesional, apoyo e intermediación laboral con empresas demandantes de fuerza de trabajo. Sin embargo, sus destinatarios quedaron fuera de los mecanismos de protección y las lógicas del control y de demostración del merecimiento guardaron líneas de continuidad con las de las políticas del PJyJHD. Entre 2004 y 2007, la adhesión a nivel nacional al mismo fue de 81.494 personas (Becerra, 2016).

El Programa de Trabajo Autogestionado (PTA), por su parte, fue creado en marzo del 2004 (Resolución N° 203/04) con el objeto de promover la generación de nuevas fuentes de trabajo y el mantenimiento de los puestos existentes a través del fortalecimiento de unidades productivas de bienes y servicios, autogestionadas por los trabajadores. En Córdoba, el programa tuvo muy poco desarrollo entre el 2004

---

<sup>43</sup> Entre ellos, el Programa de Recuperación Productiva, Interzafra, Empleo Comunitario, Sostenimiento del Empleo, Fortalecimiento del Empleo, el Programa de Inserción Laboral (PIL). Este último fue creado el 16 de enero de 2006 con el objetivo de fomentar el desempeño en oficios o el desarrollo de emprendimientos de carácter individual o asociativo de trabajadores desocupados para su inserción laboral. Al respecto cabe mencionar que por Resolución N° 681/2006 del 11 de setiembre de ese año, la Secretaría de Empleo estableció que la Línea de promoción del autoempleo de este programa tendría por objeto promover la inserción laboral de los trabajadores del SCyE a través del apoyo a proyectos para el desempeño en oficios o de desarrollo de emprendimientos individuales o colectivos. Texto disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-681-2006-119794/texto>.

Entre el 2006 y el 2007, en Córdoba se había asignado a 111 destinatarios/as (Agencia Territorial Córdoba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 2019).

y el 2007, período en el que se liquidaron 182 PTA en total (Agencia Territorial Córdoba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 2019). Esta interpretación sobre la sintonía entre las iniciativas generadas por el MTEySS y los objetivos planteados se torna más esquiva cuando se analizan los destinatarios y los discursos de los programas de promoción y asistencia social que, si bien se plantearon el desarrollo de formas de ocupación y eliminación de la contraprestación laboral, quedaron igualmente excluidos de la política laboral, de la económica y de otras áreas de la producción. Esto también se aplica a los planes que se proponían incentivar la ocupación en el sector de la economía asociativa o cooperativa y que se inscribieron bajo la órbita del MDS y no en el MTEySS.

En síntesis, si bien en las propuestas políticas que el gobierno realizó y en los discursos de asunción y aperturas de Asambleas Legislativas (Kirchner, 25/05/2003, 01/03/2004, 01/03/2005) en los que daba cuenta de las transformaciones producidas, era posible reconocer un proceso de atribución de sentidos negativos a los desarrollados en la década anterior -por considerarlos parte de un modelo de exclusión- y de disputa de la legitimidad de las políticas del nuevo modelo, el Decreto N° 1506/04 de traspaso del PJyJHD a otros planes, se presentó -tomando la expresión de Danani y Hintze (2011, p. 17)- más “esquivo para su análisis”. Si los planes sociolaborales que quedaron bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a partir del 2003-2004 asumieron según las autoras características de “contra-reforma”, encontramos en aquellos que quedaron bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, un sentido más vinculado al “beneficio” y a desigualdades preexistentes que al “derecho”.

Un cambio muy importante se producirá con posterioridad a 2009, fuera del objeto de estudio de este trabajo, cuando la gran mayoría de los trabajadores desempleados -o que no perciban una suma de dinero en concepto de prestaciones contributivas o no contributivas- con hijos a cargo accedan a la Asignación Universal por Hijo (como parte de la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES) en tanto ya no se inscribe tan llanamente en una política de asistencia con transferencia condicionada sino que se propone como una política de inclusión -un

derecho- en las instituciones de seguridad social históricamente destinadas a la población formalmente ocupada.<sup>44</sup>

Por otra parte, es posible reconocer en estas políticas, una ampliación de la participación de una porción de la población que no venía “teniendo parte” durante los años previos no sólo en términos de su incorporación al mercado de trabajo o como personas destinatarias de políticas sino respecto de la capacidad de Estado de recepcionar las demandas de organizaciones sociales con trabajo territorial e involucrarlas en la gestión de las políticas sociales. Las potencialidades y las dificultades que estos procesos tuvieron desde el punto de vista de las organizaciones sociales serán abordadas en los capítulos siguientes.

Al respecto, retomando un informe del INDEC del año 2009, Becerra observa una paulatina disminución a partir del año 2005 de la participación de programas de empleo en el gasto público nacional junto con un decrecimiento en la cantidad de puestos de trabajo que surgían como contraprestación de quienes recibían planes sociales -de 140.000 a fines de 2003 a menos de 10.000 en el 2008- y “una reducción de la población cuyo ingreso principal proviene de un plan de empleo o política social, en función de la incorporación al mercado de trabajo o del aumento de los ingresos percibidos por la fuente laboral” (2016, p. 113).

## **5. Redefiniciones en las políticas sociales asistenciales en Córdoba y en la modalidad de vinculación del gobierno con las organizaciones sociales**

A partir del año 2003, la relación planteada por la provincia con las organizaciones sociales se modificó. Si en el primer período predominaba un rol de negociación a partir de demandas que provenían de organizaciones, en este otro contexto, se posicionó construyendo políticas públicas que, sin embargo, no recuperaron los reclamos de trabajo genuino que las mismas sostenían. Como surge de la sistematización de la base de datos sobre acciones colectivas, si en el período 1989 – 1995 las demandas por “vivienda, infraestructura urbana y acceso a servicios

---

<sup>44</sup> Una síntesis de los debates al respecto pueden leerse en Hintze, Susana y Costa, María (2010). “La reforma de las asignaciones familiares 2009: aproximación al proceso político de la transformación de la protección” en Danani, Claudia y Hintze, Susana (coord.) Protecciones y desprotecciones: la Seguridad Social en la Argentina, 1990-2010. Los Polvorines. Universidad Nacional de General Sarmiento

públicos” representaban el 75% de las protestas de vecinos y desocupados, en el período 2000-2003 estos reclamos constituyeron menos del 22% y cobraron relevancia las demandas de trabajo genuino (22,9%), asistencia social (22,5%) y “seguridad” (9%). Además, en el contexto de crisis de representatividad de fines de siglo y comienzo de nuevo milenio, como sucedía a nivel nacional, el repudio a los políticos y a las medidas económicas del gobierno de la Alianza (13%) cobraron visibilidad en la provincia (Franco y Medina, 2012).<sup>45</sup>

Entre tanto, durante el segundo mandato consecutivo del gobierno provincial (2003 – 2007), éste modificó su discurso ligando cada vez más el problema del “empleo” al de la “producción”: “(...) lo primero es la lucha por el empleo para los cordobeses, es la lucha por una Córdoba más solidaria y productiva” (De la Sota, 2004 en Schuster, p. 2016). Asimismo, su otrora programa bastión en política de empleo, el PPP, siguió desarrollándose pero presentado como “recompensa” a los jóvenes para “premiar sus esfuerzos facilitándoles el acceso al empleo” (De la Sota, 2005 en Schuster, p. 2016), un incentivo que ya no estaba principalmente destinado a jóvenes desocupados que vivían en condiciones de pobreza. En cambio, la principal política que impulsó y desplegó en el espacio público para éstos sectores sociales, giró en torno a la construcción de las ya mencionadas “Ciudades barrio”.

Al tiempo que se desplegaban estas políticas, y en un contexto en el que la cuestión de la “seguridad/inseguridad” incrementaba su protagonismo como problemática pública a nivel local y nacional, De la Sota impulsó importantes transformaciones en materia de políticas de seguridad y limpieza urbana, que también atravesaron las relaciones con las organizaciones sociales en el marco de un Modelo Policial de Seguridad Pública: se creó un nuevo cuerpo de Policía, el Comando de Acción Preventiva (CAP); promulgó un nuevo marco normativo de seguridad (Leyes 9235 y 9236); e introdujo reformas considerables en el Código de Faltas.

Dicho Código había sido sancionado por Ley N° 8431/94 y modificado por otras normas provinciales. En la letra de esta normativa se establecía como objetivo

---

<sup>45</sup> El 10,6% de las demandas restantes incluyeron solicitudes de alimentos a supermercados; el desarrollo de otras políticas públicas para la niñez, la juventud, la mujer y los jubilados; diversos pedidos de servicios e infraestructura a empresas privadas, concesionarias o cooperativas, entre otras.

regular las contravenciones que se produjeran en el espacio público garantizando la seguridad aunque, en la práctica, como señaló Bonvillani, habilitó a la policía a arrestar sin orden judicial a ciudadanos por lo “impreciso de los comportamientos que define como faltas y porque admite que la policía actúe de oficio de modo “preventivo”” (2012, p. 2). En su mayoría estas personas resultaron ser jóvenes que vivían en condiciones de pobreza, colaborando a la estigmatización y a la construcción de una “figura peligrosa” en los sectores populares. Como señalaron Morales y Schaefer, en ese mismo período se firmó un convenio con el Manhattan Institute, gestionado con la Fundación Blumberg, a través del cual se anunció la instalación de 1000 cámaras de vigilancia en “zonas críticas”. Asimismo, se creó el Tribunal de conducta policial a través de la Ley N° 9120, se comenzó a utilizar la ex cárcel de encausados como Alcaldía para alojar contraventores y se aprobó la Ley de registro de huellas genéticas (ADN) para almacenar datos de “sospechosos”. Se creó también el programa “Córdoba contra el delito- Llame y denuncie”, entre otras medidas (2013, p. 117-118).

En un sentido muy diferente a este desarrollado en materia de políticas de seguridad, en sintonía con las políticas de DDHH desplegadas a nivel nacional durante la presidencia de Néstor Kirchner, en el año 2006 la Legislatura Provincial sancionó la Ley Provincial de la Memoria N° 9286/2006 y creó el Archivo Provincial de la Memoria en el Ministerio de Justicia del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba. Esta política se hacía cargo de demandas históricas de los organismos de DDHH en nuestro país y en Córdoba en particular y de las de la Mesa de Trabajo por los DDHH de nuestra provincia, consolidada a finales del 2001 y de cuyas iniciativas y acciones participaron en algunos momentos, entre otros actores, los dos colectivos objeto de este estudio.

## ***5.2. Un estado municipal con participación social y redefinición de la política social. La versión antipolítica de Luis Juez***

Córdoba no fue ajena a la conflictividad y la crisis de representatividad visibilizada entre los años 2001 y 2002. Por entonces, se habían producido realineamientos políticos a nivel municipal que habían tenido como protagonistas a las

organizaciones sociales, a los partidos políticos, al gobierno y al resto de la sociedad. El cuestionamiento de la legitimidad del por entonces intendente Germán Kammerath se había profundizado con la ruptura de su alianza con Unión por Córdoba (Gutiérrez Mónica, 01/02/2002) y la presentación de un pedido de revocatoria de su mandato por parte de un espacio “Multisectorial”, conformado con ese fin en 2002. Este colectivo había contado con la participación de organizaciones partidarias, sindicales, ONGS, piqueteras y vecinales, incluyendo al Movimiento Barrios de Pie y al Centro de Vecinos Autoconvocados. El poder judicial finalmente no hizo lugar al proceso destituyente antes de que Kammerath culminara su mandato (Diario Judicial, 12/12/2002, *en línea*). No obstante, a lo largo de estos años las manifestaciones público callejeras y la reunión de la cantidad de firmas necesarias para motorizar este proceso, contribuyeron a la visibilización del debate público sobre los modos de representación política, a la ampliación de las acciones de las organizaciones que lo integraron y a la apertura de una oportunidad para la emergencia de otros actores que disputaron la conducción política en la ciudad capital.

A ello había aportado también la crisis de Unión por Córdoba que incluyó, entre otras, la renuncia de Luis Juez como Fiscal Anticorrupción en octubre de 2002, tras la denuncia a varios ministros delastotistas por irregularidades en el manejo de créditos del BID. Al poco tiempo, Juez se constituyó en el referente principal del “Partido Nuevo contra la Corrupción, por la Honestidad y la Transparencia” (PN) y posteriormente en el intendente de la ciudad capital por el Frente Nuevo, tras las elecciones municipales en Córdoba capital en octubre de 2003.

El PN fue uno de los colectivos que conformó el FN junto con el Frente Grande, Cambio Córdoba y el Vecinalismo, abriendo paso a la emergencia de un nuevo actor “entre” el bipartidismo del último tiempo. Decimos “entre” porque en este espacio también confluyeron referentes de los dos partidos políticos hegemónicos hasta entonces, como el caso del vice intendente de la ciudad, Daniel Giacomino, ex dirigente radical y el propio Luis Juez, ex presidente de la Juventud Peronista en 1987 y exdiputado provincial en 1994 por la unión conducida por De la Sota.

La construcción de una “nueva política” desde este frente se planteó desde la campaña política, con la pretensión de abordar lo que se definía como el problema

central: la corrupción y la falta de transparencia en la gestión del Estado, encarnadas en el neoliberalismo y en las figuras de De la Sota y Kammerath. Como lo expresó Luis Juez en el discurso de su asunción como intendente: “en mi campaña no prometí una sola cosa, salvo honestidad, decencia y transparencia” (Luis Juez, 10/12/2003). La formulación de los problemas públicos se centró menos en una diferencia política o ideológica -de “banderías políticas” como refería Juez en su discurso de asunción- que en una conducta política asentada en una “autoridad moral”.

En términos del vínculo de este gobierno con el conducido por Néstor Kirchner a nivel nacional, Juez había sido uno de los referentes que adhirieron al documento “La Hora de los Pueblos” elaborado por el Frente de Organizaciones Populares y al proyecto de la “transversalidad”, aunque su concepción de la política por fuera de las “banderías” difería de la perspectiva kirchnerista. Asimismo, en sus inicios integró la Mesa Coordinadora para el Proyecto Nacional junto con la Federación Tierra y Vivienda, el MTD Evita, el Frente Transversal y el Movimiento Barrios de Pie (Ratti, 4/11/2004). Esta mesa tuvo el objetivo de convocar a dirigentes a construir un frente kirchnerista que incluyera a organizaciones políticas que no formaban parte del PJ.

Este posicionamiento político a nivel nacional, el modo de construir los problemas políticos locales y las estrategias para resolverlos -mecanismos de control del Estado e incorporación de referentes valorados por la “honestidad” de su conducta y menos vinculados o “desilusionados” con la “vieja política” partidaria-, fueron parte de las condiciones en las que se produjo la convocatoria a diferentes actores sociales a integrar el FN y a participar de la gestión de la municipalidad. Entre ellos, referentes del movimiento de derechos humanos, de organizaciones de desocupados -incluyendo a varios integrantes del Movimiento Barrios de Pie-, de colectivos de vecinos -aunque con una presencia acotada en el tiempo, ese fue el caso de Vecinos Autoconvocados-; de centros vecinales de la ciudad; de otras organizaciones sociales y movimientos eclesiales con desarrollo territorial y con trabajo con quienes vivían en condiciones de pobreza.<sup>46</sup> También, actores

---

<sup>46</sup> Entre ellos Luis Miguel Baronetto a cargo de la Dirección de Derechos Humanos; Paola Fedrizzi, Fernando Nizetich, Marta Juárez y otros integrantes del Movimiento Barrios de Pie en la Dirección

vinculados al campo deportivo, como el ex basquetbolista Héctor “Pichi” Campana y personas del entorno cercano o familiar al nuevo intendente como su propio hermano, Daniel Juez, a cargo de la secretaría de Desarrollo Social y Participación Ciudadana.

Quedó así conformado un espacio político y un gabinete ideológicamente heterogéneo con diferentes perspectivas sobre los modos de gestión y sobre las alineaciones a nivel nacional. Entre ellos, quienes adherían a la transversalidad convocada por el kirchnerismo, por una parte, y quienes apostaban al no alineamiento político partidario (Tomassini, 2018, p. 124). En conjunto, compartían esta crítica a los modos de representación política y a un modo de gestión de lo público que había generado un “deteriorado sistema de salud, una insuficiente seguridad pública, un sistema educativo no equitativo y una limitación por parte del Estado de intervenir en actividades promotoras del bien común” (Bases programáticas Partido Nuevo).

Con esa perspectiva y con esos actores, desde el inicio del mandato fue posible reconocer una apuesta a construir un modo de gestión del Estado atento a la resolución de problemas públicos, algunos de los cuales habían constituido demandas expresadas por organizaciones y movimientos sociales, incluyendo a aquellas cuyos referentes se incorporaron a la gestión del Estado.

Sin embargo, las políticas que se desarrollaron en algunos casos encontraron límites para concretarse y/o sostenerse en el tiempo. Es posible conjeturar que estos topes tuvieron que ver con la crítica situación económica que atravesaba la Municipalidad a comienzos de 2003, denunciada por sus funcionarios de gobierno (Entrevista Daniel Juez, 2015). Asimismo, pudo guardar relación con las propias limitaciones de un espacio que centró sus acuerdos más en una perspectiva “antipolítica” (Mocca, 2002) que en un proyecto político concreto más amplio a desarrollar en el largo plazo; con los modos de gestión y administración propuestos por la nueva gestión y con una lógica burocrática del Estado que no logró desandarse y que tornó lento y dificultoso el trabajo político que se proponía dar

---

de Desarrollo Territorial y Economía Social, en la Subdirección de Hábitat Popular en la Subdirección de Capacitación para el Desarrollo Social, respectivamente; Key Masaccesi de Vecinos Autoconvocados; Oscar Arias de la Revista La Luciérnaga en la Dirección de Grupos Vulnerables; José Nicolás Alessio, teólogo de la liberación en la Asesoría De Políticas Sociales.

respuestas a necesidades inmediatas; entre otros. Esto último se aborda en los próximos capítulos a partir de las entrevistas a referentes de las organizaciones que participaron en la gestión del Estado.

Una de las decisiones del nuevo intendente fue derogar la ordenanza de modernización del Estado municipal aprobada en la gestión de Kammerath. Al mismo tiempo, se desarrollaron algunas políticas que regularon y/o limitaron intereses corporativos empresariales. Tal fue el caso de las políticas de urbanismo que se impulsaron a través de la Dirección de Planeamiento Urbano, un espacio institucional que pasó a estar a cargo de la aprobación de mega emprendimientos urbanos y que desarrolló modos de consulta pública entre vecinos cuando se puso en juego la creación o modificación de normativas vigentes. Al respecto, en 2004 la aprobación del Consejo Deliberante de la ciudad de una serie de Ordenanzas (N° 10760, 10761, 10762, 10763 y 10764) habilitó que se considerara “la posibilidad de apertura de las urbanizaciones privadas y tomaba provisiones que permitieran luego integrarlas a la trama de la ciudad, a la vez que establecía límites al avance de las corporaciones inmobiliarias sobre las tierras rurales” (Medina, 2015, p. 96-97). Este tipo de iniciativas fueron un conflicto más que se sumó a los ya enunciados con el gobierno provincial y que incluyó además a parte del empresariado con la gestión municipal.

Por otra parte, el gobierno municipal impulsó el Plan Integral de Promoción del Empleo Local (PIPEL) para intervenir en el mercado de trabajo y disminuir los índices de desocupación. El plan se llevó adelante desde las oficinas de “Servicios de Empleo”, situadas en cada uno de los Centros de Participación Comunal (CPC) de la ciudad. Como parte de las acciones que desarrolló cabe mencionar: la atención de consultas laborales, la organización de talleres de orientación laboral, recursos y créditos para empresas y autoempleo. Estas actividades confluyeron en el Observatorio del Mercado Laboral. Los destinatarios del plan fueron personas desocupadas, sub-ocupadas y con acceso a planes sociales, en particular del PJyJHD (Natalucci, 2008).

Con respecto a las políticas sociales, según Daniel Juez, el objetivo fue doble: atender las urgencias y desarrollar acciones de promoción. Para ello se trabajó en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, centralmente en la

ejecución de los programas que se generaban desde ese ministerio y también desarrollando políticas locales.

Dentro de las principales políticas que el gobierno impulsó para atender urgencias, se encuentran las trabajadas en el marco del ya mencionado “Plan de Seguridad Alimentaria”. La ejecución de este programa fue parte de importantes conflictos con el gobierno provincial, quien originalmente había comenzado a ejecutarlo, y que en 2004 decidió traspasar esta tarea a la Municipalidad (La Voz del Interior, 03/02/2004, *en línea*). El 16 de junio de 2004, por Decreto N° 1512, se aprobó un convenio entre la nación, la provincia, la municipalidad y el Banco de la Nación Argentina -con el que se acordó un fideicomiso- por el que se creó en el ámbito municipal el Programa de Fortalecimiento Alimentario y Desarrollo Comunitario “Vale Lo Nuestro”. Este cambiaba la modalidad de la política de asistencia alimentaria que había implementado el gobierno provincial hasta ese momento con la entrega de los módulos alimentarios. A diferencia de este, el nuevo programa creó vales canjeables en comercios por el valor de 30 pesos cada uno a distribuir -según señala el convenio- entre 106 mil destinatarios/as (Entrevista Juez, 2004; El Territorio, 22/06/2004, *en línea*), cuando el valor de la canasta básica para la línea de pobreza estaba valuada en \$234,08 y la cantidad de personas bajo la línea de indigencia era de 181.612 y bajo la línea de pobreza era de 558.190 (Indec y Gerencia de Estadística de la Provincia de Córdoba citado en Municipalidad de Córdoba, 2006). Se trató de un programa focalizado destinado a mujeres jefas de hogar con hijos a cargo, embarazadas, personas con discapacidad o con enfermedad inhabilitante, mayores de 70 años, hogares con niños malnutridos hasta 5 años y priorizó las familias donde se cruzara más de una de estas características. El objetivo de este programa fue “contribuir a la recuperación nutricional, y complementación alimentaria orientada al desarrollo integral (psicofísico y social) de Grupos particularmente vulnerables y comunidades en situación de riesgo” (Decreto N° 1512/2004). Para su implementación además de realizar un nuevo padrón en función de la menor cantidad de destinatarios y convenios con la Cámara de Supermercados y comercios locales, se desarrollaron acciones de prevención primaria de salud y desarrollo comunitario en conjunto con organismos gubernamentales y organizaciones sociales.

Asimismo, desde la gestión municipal se contribuyó a la normalización y al fortalecimiento del Consejo Consultivo Municipal de políticas sociales, con aportes para su organización y funcionamiento.

Con el objetivo de promover la cultura del trabajo, dejando atrás los “subsidios” “como “únicas” respuestas ante las diversas situaciones de pobreza”, en el marco del Plan de Inclusión Social y Economía Solidaria “Sí, nuestra gente vale”, desde la Dirección de Desarrollo Territorial y Economía Social, se promovieron dos programas que se propusieron vincular a la economía con la ética. Uno, “Productos y Servicios Éticos” y, otro, “Servicio de Estacionamiento Regulado en la Vía Pública”; ambos con el fin de generar y potenciar fuentes de trabajo digno y acompañar a grupos solidarios de emprendedores locales en las distintas etapas del procesos de organización y desarrollo económico y productivo (Entrevista Gustavo López, 2005; Boletín Oficial de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, 2004, p. 2-3). Al respecto y entre otras, en octubre de 2004, se decidió retornar a un esquema de gerenciamiento estatal del estacionamiento medido y controlado de la ciudad de Córdoba, tras el vencimiento del contrato de la empresa concesionaria del servicio -CIUCOR-.<sup>47</sup> De este modo, el Estado municipal retomaba la demanda de los “naranjitas” desempleados -los que habían sido despedidos de CIUCOR y los que históricamente trabajaban “a voluntad”-, promoviendo su organización en cooperativas, adjudicándoles el servicio en barrios periféricos de la ciudad donde no había parquímetros instalados. El 15 de febrero de 2005 (La Voz del Interior, 12/2/2005, 1A), se constituyeron cuatro cooperativas, entre ellas, la Cooperativa de Vecinos Autoconvocados (CVA) ligada al colectivo Centro de Vecinos Autoconvocados, como veremos en el capítulo 3 de este trabajo. Los miembros de las cooperativas debían adherir al “monotributo social” para facturar. Este proceso se desarrolló en una conflictividad permanente entre y con las propias cooperativas así como con los “frentistas” involucrados, cuestiones que también serán trabajadas en el capítulo siguiente.

---

<sup>47</sup> Según una nota publicada el 8 de diciembre de 2004 en el diario La Voz del Interior, a dos meses de que la Municipalidad de Córdoba retomara la administración de los 1.132 parquímetros y 66 tiqueadoras en el casco céntrico de la ciudad de Córdoba, ya había recaudado cuatro veces más que el canon aportado mensualmente por la empresa CIUCOR durante los 10 años que duró la concesión del servicio.

Asimismo, en el marco de la política nacional de desarrollo de un “Registro de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social” y de otras políticas destinadas al fortalecimiento de la economía social, como el programa “Manos a la Obra” escasamente desarrollados en Córdoba, se generó un sistema de microcréditos para pequeños emprendedores resultante de un acuerdo entre el Fondo de Capital Social de la Nación (FONCAP) y la Municipalidad para propiciar la conformación o la vigorización de espacios asociativos existentes e involucraron a organizaciones sociales de la capital.

En sintonía con esta apuesta a promover procesos asociativos que se desarrollaban a nivel nacional a través del Programa Federal De Emergencia Habitacional - Primera Etapa, desde la Dirección de Hábitat Popular de la Municipalidad de Córdoba -cuyo director era Walter Diaz y su subdirector Fernando Nizetich del Movimiento Barrios de Pie- se acompañó el proceso de construcción de viviendas para personas desocupadas organizadas en cooperativas de trabajo en dos barrios de la ciudad: Cervecedores y Marqués de Sobremonte Anexo. El trabajo se articuló con organizaciones sociales y sindicales, entre las que se encontraba el Movimiento Barrios de Pie y la Federación Tierra y Vivienda y se proponía la construcción de 112 viviendas en una primera etapa. Si bien esta iniciativa atendía a una necesidad importante de los habitantes de la ciudad, la cantidad de casas construidas fue muy escasa. Para su ejecución existieron diversas dificultades. Entre ellas, la limitación para generar una política que pudiera achicar los tiempos y simplificar los procesos administrativos del Estado para efectivizar los pagos sin que debiera frenarse la construcción, la dificultad y en algunos casos imposibilidad de las cooperativas para funcionar como tales y cumplir las obligaciones acordadas cuando la mayoría había sido creada a instancia de un plan social y no de proyectos y/o modos de trabajo preexistentes (Nota presentada por el Intendente de la ciudad al subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios el 20/04/2007; Nota presentada por el Subdirector de Hábitat Popular de la Municipalidad al Director de la misma repartición el 28/08/2006). Volveremos sobre esto en el capítulo 4.

Por otra parte, en el año 2004, se implementó un Plan de alfabetización de adultos de origen cubano denominado “Yo sí Puedo”. Su cobertura fue escasa en este

período. Hacia el año 2005, se avanzó desde la Subdirección de Adultos de la Secretaría de Educación y Derechos Humanos en la implementación del programa de Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y Adultos -“Encuentro”- (Resolución N° 686/2004) promovida desde el Ministerio de Educación de la Nación. En ese marco, se abrieron 39 Centros de alfabetización para 300 estudiantes mayores de 15 años (Municipalidad de Córdoba, 2006).

Desde que se inició la gestión municipal la estructura orgánica del gobierno se modificó en variadas oportunidades, incrementándose la cantidad de secretarías y subsecretarías. A mayo del 2007 las primeras se habían casi duplicado y había 4 subsecretarías más que en el gobierno que le antecedió (IIFAP, 2007). La ampliación de la estructura del Estado municipal junto con la incorporación de más de 4 mil empleados permanentes, fue objeto de duras críticas y debates encontrados entre quienes estuvieron a cargo de la gestión del Estado en este período, incluyendo al propio Daniel Giacomino<sup>48</sup>, intendente de la ciudad tras la finalización del mandato de Luis Juez, cuando éste se presentó como candidato a gobernador de la provincia.<sup>49</sup>

\*\*\*

Los cambios y continuidades operadas en las políticas sociales asistenciales y el papel que propusieron a las organizaciones de trabajadores desocupados y vecinos entre los años 2001 y 2007, se desarrollaron en un contexto de tensión entre las diversas administraciones de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. A nivel local, la gestión provincial se construyó desde un discurso de la transparencia, la eficiencia y la anticorrupción que negaba el conflicto propio de la política y proponía una relación entre el mercado y el Estado en favor del primero. A lo largo de las dos gestiones de gobierno de Unión por Córdoba predominó un

---

<sup>48</sup> En diversas oportunidades Giacomino advertía que las cuentas públicas habían pasado de cerrar con un superávit del 10% en 2004 a un déficit del 14% en el 2007. En el mismo período, se habían incorporado 4367 empleados nuevos, llevando a 10.103 empleados el total de la planta municipal (La políticaOnline, 03/06/2009, *en línea*).

<sup>49</sup> Luis Juez se había presentado como candidato a gobernador provincial para las elecciones de septiembre de 2007. Sin embargo, el entonces vicegobernador y candidato de Unión por Córdoba Juan Schiaretti resultó ganador con el 37,17% de los votos seguido por Juez con un 36,04%, luego de un conflictivo y cuestionado escrutinio y del rechazo por parte de la Justicia Electoral de la provincia al pedido de apertura de urnas solicitado por Juez.

modelo de política principalmente asistencialista, de disciplinamiento y de respuesta selectiva -principalmente a través de la entrega de subsidios o de módulos alimentarios antes que de inclusión en algunos de los programas provinciales- a demandas particulares de las organizaciones de vecinos y desocupados, como modo de relación con estos colectivos. La orientación de estas políticas sociales estuvo en consonancia con el modelo de política descentralizada, comunitarizada y focalizada desarrollada a nivel nacional entre los años 2001 y 2002 aunque no con los cambios que atravesaron a partir del año 2003 con el recambio presidencial.

El Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, como programa de asistencialización del desempleo, no implicó una transformación en estos aspectos aunque su masificación junto con el programa de Emergencia Alimentaria, generaron más recursos, otras tareas -principalmente a partir del componente de trabajo comunitario del JyJHD y de la participación en los Consejo Consultivos- y nuevas demandas entre las organizaciones sociales.

En ambos casos, provincial y nacional, se evidenció para los años 2001 y 2002 una escasa capacidad estatal para resolver problemas vinculados a la pobreza y para disminuir el desempleo, al tiempo que escasa autonomía respecto de los centros de poder. La política social desplegada, encontró límites para la garantía de derechos sociales al tiempo que evidenció una dificultad para aislarse de las desigualdades materiales existentes.

El triunfo del Partido Nuevo conducido por Luis Juez, en la intendencia municipal de Córdoba a partir del año 2003, se produjo tras el contexto de movilización y crisis de representatividad que también había afectado a Córdoba y a los dos partidos políticos hasta entonces hegemónicos, tanto a nivel provincial como municipal. Asimismo, tuvo lugar, luego de la asunción a la presidencia de la nación del gobierno conducido por Néstor Kirchner, espacio al que algunos referentes del PN habían adherido y que proponía una redefinición de los lineamientos políticos nacionales.

Recuperado las demandas centrales construidas como injusticias en el espacio público, el gobierno nacional había promovido una redefinición del papel del Estado y la institucionalización de nuevas pautas de acción y de los sujetos

legitimados para hacer política. La convocatoria a las organizaciones sociales con trabajo territorial a la participación de la “transversalidad” y de la gestión del Estado iba acompañada de una redefinición de las políticas sociales precedentes.

Con respecto a aquellas que promovieron el traspaso del PJyJHD para los sectores considerados “empleables”, su desarrollo en Córdoba fue marginal. Mayor despliegue tuvieron a nivel local aquellos programas impulsados desde el Ministerio de Desarrollo de la Nación para el sector considerado “no empleable”, como el “Plan Nacional Familias” y el “Plan de Seguridad Alimentaria”. El programa “Promotores Territoriales para el Cambio Social”, por su parte, constituyó un recurso al que accedieron integrantes de diversas organizaciones sociales con experiencia de trabajo territorial en Córdoba.

Si las políticas laborales, educativas y de salud avanzaron en una “contra-reforma” que modificaba las características del modelo anterior, las políticas sociales asistenciales iniciaron un proceso en ese sentido pero no llegaron a concretarlo y sus principales programas conservaron algunos rasgos asistencialistas.

No obstante el carácter asistencialista de éstas políticas, la creación de una Red Federal de Políticas Sociales, su aspiración a vincularla con la política económica, a desarrollar la economía social y a promover otros modos de inclusión social formaron parte del diseño de estas políticas. Asimismo, consiguieron una ampliación de la participación de una porción de la población que no venía “teniendo parte” durante los años previos a través de su incorporación al mercado de trabajo -o como personas destinatarias de políticas- y de la capacidad del Estado de recepcionar las demandas de organizaciones sociales con trabajo territorial e involucrarlas en la gestión de las políticas sociales.

El gobierno municipal, desde una retórica de la transparencia y la anticorrupción - en sintonía con la del gobierno provincial- y recuperando el papel del Estado en la garantía de derechos, habilitó una apertura a cierta participación social de las organizaciones de vecinos y desocupados en la gestión estatal. Las políticas sociales asistenciales desarrolladas por este gobierno centralmente se organizaron en torno a la implementación -y/o a la articulación- de aquellas promovidas a nivel nacional. Asimismo, desplegó políticas locales que -en sentido convergente con las políticas nacionales- se propusieron fortalecer el trabajo asociativo y cooperativo.

Sin embargo, la gestión desarrollada desde la municipalidad de la ciudad capital encontró límites para el sostenimiento de políticas sociales más democráticas que pudieran garantizar derechos y disminuir las desigualdades.

Con respecto al gobierno provincial, en su segundo mandato de gobierno, si bien compartió con el gobierno nacional conducido por Kirchner su vínculo con el PJ no apostó a la “transversalidad”. Asimismo, difirió respecto de la relación propuesta a las organizaciones sociales y del papel del Estado y la política que continuaron subordinados al mercado y la economía. Entre los años 2003-2007, las políticas desarrolladas por el gobierno cordobés hicieron eje en la “producción”. Como parte del mismo, en términos habitacionales, inició la construcción de “Ciudades barrio” y la relocalización de quienes vivían en algunas “villas” de la ciudad. En ellas, la participación de las organizaciones de vecinos y desocupados fue marginal.

A lo largo de todo el período analizado, el acceso a políticas sociales por parte de organizaciones de vecinos y desocupados en Córdoba, fue principalmente en el marco de políticas asistenciales nacionales antes que locales.

### **CAPÍTULO 3: CENTRO DE VECINOS AUTOCONVOCADOS. DE LA RESISTENCIA Y LA DEFENSA DE LA VIVIENDA ÚNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA COOPERATIVA CVA**

Centro de Vecinos Autoconvocados (CVA) es una organización local de origen vecinal, surgida a mitad de los '90 en Córdoba Capital. El colectivo que la antecedió -Centros Vecinales Autoconvocados-, se creó poco tiempo antes agrupando a pobladores de diferentes barrios de la ciudad que no se sentían contenidos en la propuesta de las agrupaciones vecinales vinculadas con los partidos políticos tradicionales, en particular con la Unión Cívica Radical, que por entonces llevaba once años en la conducción del gobierno municipal y provincial. Desde su origen el colectivo se nutrió de la experiencia de las organizaciones de centros vecinales creadas durante el período de reconstrucción democrática iniciado en 1983.

Para presentar las acciones colectivas que emprendió esta organización, su vínculo con el Estado y los procesos de democratización y desdemocratización, este capítulo se estructura en el siguiente orden. En tanto las acciones colectivas que desarrolló en los años 2001/2002 conservan el modo de organización y concepción del régimen político de mitad de los años '90, la primera parte comienza con los antecedentes de su constitución como colectivo. Luego, avanzamos en el desarrollo de lo que reconocemos como dos momentos en la historia de esta organización, que incluyen transformaciones en sus acciones colectivas y desplazamientos respecto de las identidades predominantes.

El primero, el período 2001 - 2004, en el que este colectivo desplegó en el espacio público acciones colectivas territoriales -incluyendo la protesta-, consiguió algunas respuestas a sus demandas históricas vinculadas con la defensa de la vivienda única e inscribió una nueva cuestión en torno al desempleo y la exigencia de planes sociales, en consonancia con las demandas de las organizaciones de desocupados del momento. Asimismo, desarrolló microemprendimientos y espacios autogestivos en torno al PJyJHD, recuperando su histórica preocupación por el trabajo. En este proceso, complejizó su adscripción identitaria vecinal e incorporó un reclamo por la incidencia del desempleo en los sectores medios bajos. Por entonces -y a lo largo de ambos momentos-, las prácticas de este colectivo

asumieron algunas de las particularidades de lo que Natalucci (2015) define como gramática autonomista. Desde ese lugar, CVA sostuvo acciones dentro de ciertos marcos destituyentes y confrontativos con el Estado y los distintos gobiernos -entre otros actores-, con sentidos de resistencia al capitalismo y al modelo neoliberal. Si bien también participó en este período de una experiencia de trabajo institucional local en el Consejo Consultivo Municipal ello no implicó un abandono de sus prácticas confrontativas con el Estado.

Hacia el año 2005 inicia lo que reconocemos como el segundo momento en el que junto con la consecución de respuestas parciales a la demanda de trabajo, se advierte una merma de las acciones colectivas de protesta y un desplazamiento en términos identitarios y de demandas más vinculado con un proceso de institucionalización de la cooperativa de estacionamiento medido y controlado “Centro de Vecinos Autoconvocados” (CVA). En estos años se produce una transformación de su relación con el Estado y con el gobierno que incluye la participación durante escasos meses de una de sus referentes en la gestión del Estado municipal en el gobierno del Partido Nuevo. Ello no supuso un cese de las acciones de protesta contra el mismo.

## **1. Antecedentes**

Durante el período de reconstrucción democrática emergieron en el espacio público cordobés diversos modos de organización barrial vecinal que incluyeron centros vecinales -intervenidos, en formación, recuperados-, comisiones provisorias de vecinos, entre otras. Su conformación y funcionamiento se articuló en torno a una serie de demandas y acciones colectivas construidas en el marco de dos grandes ejes: la discusión respecto de la propuesta de una nueva ordenanza municipal por parte del gobierno en 1985 para la regulación de los centros vecinales y el debate - junto con otros actores- por el derecho al acceso a servicios básicos de luz, agua y gas así como, en términos más generales, a un hábitat digno.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Más información al respecto puede encontrarse en Franco, Medina y Solís (2015) y en Medina (2015), entre otros trabajos. Como desarrollamos en Franco y Medina (2012), estas acciones a su vez habían sido antecedidas por una diversidad de procesos de organización territoriales – barriales que se generaron en las décadas del ‘60 y ‘70. Entre ellos, la Coordinadora de Centros Vecinales, la Coordinadora de villas, el Movimiento Villero Peronista y otra diversidad de experiencias más vinculadas a partidos políticos o a la corriente tercermundista de la Iglesia Católica. La mayoría de

De estas experiencias organizativas y de las ollas populares realizadas en la ciudad en el marco de la crisis económica de 1989, se nutrió el colectivo que abordamos en este capítulo, el Centro de Vecinos Autoconvocados (CVA) y también su organización “madre” -y con nombre muy semejante-, Centros Vecinales Autoconvocados. Esta última había surgido a mitad de la década del ‘90 agrupando a habitantes de diferentes barrios de la ciudad que no se sentían contenidos por las conducciones de los centros vecinales a cargo de integrantes de los partidos políticos hegemónicos. Como Centros Vecinales Autoconvocados, una de las acciones colectivas de “información y concientización” y de protesta que promovieron tuvo que ver con la disputa por el reconocimiento de los Centros Vecinales en la Carta Orgánica Municipal de Córdoba, sancionada el 6 de noviembre de 1995 durante la gestión del por entonces intendente de la ciudad, el radical Rubén Martí.

La conformación de CVA se produjo en el marco de ese proceso de disputa a mitad de los años ‘90 en torno a una identidad vecinal y, desde entonces, su sede principal funcionó en barrio General Urquiza en la zona sudeste de la ciudad capital.

La construcción identitaria se produjo desde una doble referencia. Por un lado, en palabras de los referentes y delegados entrevistados, como organización “de nuevo tipo” a la que los ciudadanos podían recurrir para generar demandas colectivas sobre sus derechos como vecinos y conseguir asesoramiento y capacitación. La idea de vecino como parte de una “comunidad imaginada” sugiere inmediatez, sociabilidad y reproductividad, sensibilidades vinculadas a lo compartido entre las y los más cercanos a nosotros (Rusconi, 2006, p. 211). Pero, además en este contexto, el vecino era también un “ciudadano” que reclamaba, como elementos de una misma identidad construida en el espacio público que legitimaba un tipo de práctica política.

Por otro lado, como colectivo “autoconvocado” se proclamó independiente de los partidos políticos, específicamente en Córdoba respecto del radicalismo y del justicialismo. Esta definición de constituirse sin una adscripción partidaria se

---

estos procesos fueron cercenados como consecuencia del terrorismo de Estado de la última Dictadura Militar de 1976.

sostuvo más allá de la trayectoria previa que refirieron haber tenido algunos pocos de sus integrantes en la Juventud Comunista y en el Partido Comunista o la afinidad de otros con el anarquismo, el Movimiento al Socialismo (MAS) e, incluso, con el radicalismo o el peronismo (Entrevistas 11, 12, 13, 14).

El vínculo entre la adscripción vecinal y ciudadana, su carácter autoconvocado e independiente de los partidos políticos como aspectos identitarios guardaban sintonía con otros procesos vecinales analizados en los años '90 por Nardacchione (2005) y Frederic (2017). En el caso particular de VA, no fue acompañado de una concepción apolítica de sus prácticas sino más bien apartidarias, en el marco de la profundización de la crisis de representatividad a nivel nacional y local.

Asimismo, no obstante la situación de desempleo y de creciente empobrecimiento fueron parte de las condiciones de vida en común entre quienes integraron este colectivo, estos elementos no fueron centrales para su construcción identitaria en estos primeros años. En este período, la organización estuvo compuesta predominantemente por mujeres y hombres adultos y adultos mayores de barrios en los que habitaban sectores medios y medios bajos -una “clase media empobrecida” (Minujin, 1993) antes que de pobreza estructural- que empezaban a ver el peligro de la pérdida de su única vivienda, como consecuencia de las políticas neoliberales profundizadas en los '90.

Si bien, por entonces, la relación capital – trabajo tampoco se constituyó en un aspecto central identitario, en las revistas y en las entrevistas realizadas a sus referentes, fue posible reconocer algunas referencias al respecto y expresiones de aspiración a la construcción de una sociedad anticapitalista, anti imperialista y con un sistema democrático que efectivamente respete los derechos de los ciudadanos.

En contraposición, caracterizaron a la sociedad argentina de los '90 como parte de un proyecto neoliberal de “dominio y exclusión”, de “subordinación del vecino trabajador”, con una democracia “vaciada de su auténtico contenido” que “consigue utilizar a los vecinos en defensa de sus propias instituciones y desde éstas impone condiciones de vida indigna, luego transforma su existencia en un calvario” (Revista Che Vecino, 1999, p.1).

Desde esta lectura, construyeron una perspectiva monolítica de las instituciones estatales y de los sistemas de representación efectivamente existentes a los que

repudiaron y resistieron. Las relaciones de representación, en particular, se constituyeron en centro de sus críticas y contrapropuestas, proponiendo en varias ocasiones la construcción de un “poder paralelo”. Al respecto, afirmaba uno de sus referentes y fundador de CVA en una nota editorial de la primera revista que publicaron como colectivo, titulada “Defender la dignidad”

Los derechos democráticos tradicionalmente violados y negados contradicen la letra y los hechos producidos por la misma democracia (...) Los vecinos deberán asumir el desafío de confiar en sus propias fuerzas y construir un poder paralelo que cabalmente los represente y que ellos mismos fiscalicen. (Revista Vecinos, 1999, p. 1)

A partir de este lugar de externalidad entre lo social y la política, las únicas dos y breves experiencias de participación en espacios estatales expresaron su resistencia a la construcción de procesos de institucionalización a largo plazo dentro del Estado y/o a su inclusión en un espacio político partidario mayor con capacidad de promoverlos. Esta característica guardaba sintonía con algunos rasgos de las protestas barriales que Nardaccione encontraba a comienzos de los años ‘90 en Buenos Aires, respecto a la tendencia a repudiar la “excesiva institucionalización (post conflicto)” de las organizaciones vecinales” (2005, p. 2015).

En términos de su construcción política, la organización interna asumió la forma de redes en las que los delegados cumplieron un papel importante como vínculo entre los distintos barrios y VA. Ellos eran quienes llevaban las necesidades y problemáticas de allí a la organización y las iniciativas de ésta a los vecinos. Además, coordinaban el trabajo que ésta mantenía en diferentes barrios de la ciudad.

Como colectivo, reivindicaban y promovían mecanismos deliberativos asamblearios y el aporte de los delegados para la toma de sus decisiones. En las asambleas, podían participar con voz y voto todos los vecinos y los delegados, siempre con la presencia y visibilidad de sus referentes principales. Este aspecto de la dinámica de debate y de toma de decisiones era valorado positivamente en tanto incentivo a la participación vecinal.

Asimismo, aunque en menor medida en esta década, promovió espacios de formación y desarrollo de emprendimientos laborales con jóvenes a través de la Escuela Comunitaria de Oficios (ECO) “Hugo Núñez”, nombre de un vecino

desaparecido de barrio General Urquiza de Córdoba capital en el contexto de la última dictadura militar. Creada en 1992 por algunos referentes de CVA, este espacio tuvo por objetivo enseñar labores y promover derechos civiles y políticos en un sector de la población que se diagnosticaba había abandonado el colegio secundario, no conseguía trabajo y, en algunos casos, tenía problemas de adicciones. El trabajo con esta escuela tuvo su período de mayor desarrollo hasta mediados de los '90, aunque continuó a lo largo de los años e incluyó la primera experiencia de articulación con el Estado a través de políticas sociales. Tal fue el caso del proyecto de capacitación en carpintería a 40 jóvenes de entre 12 y 16 años realizado y financiado en el marco del Programa "Crecer", del Consejo del Menor de la provincia, durante el gobierno de Mestre en la segunda mitad de los años '90. El proyecto tuvo por objetivo no sólo el desarrollo de destrezas manuales sino también de capacidades intelectuales, a través del cursado de materias en las que las y los jóvenes aprendían matemáticas, lectura y escritura, dibujo y otras (Proyecto CVA, s/f).

Para el desarrollo y también financiamiento de los proyectos que surgían de esta escuela, y de otras iniciativas posteriores de CVA, en 1995 el colectivo obtuvo la personería jurídica para la Asociación Civil Entre Muchos Organismos Sociales (ACEMOS). Otra fuente de financiamiento de los proyectos fueron los aportes individuales de sus integrantes, rifas y/o eventos que realizaban para recaudar dinero.

En términos de gramáticas políticas, estas formas que asumió su organización, el modo de construcción y de trabajo territorial, sus concepciones sobre el orden, el cambio social y el Estado guardaron similitudes con las que Natalucci (2012) caracterizó como "autonomistas". Es decir, aquellas en las que cobraron centralidad los mecanismos deliberativos assemblearios para la toma de decisiones, que construyeron una organización interna rizomática, con una concepción del cambio social desde lo local y barrial. En términos de Thwaites Rey (2004) y de una de las acepciones de "autonomía" sistematizadas por la autora, es posible reconocer la importancia que otorgaron a la "lucha" y la "auto-organización" como formas de edificación de "un sistema social distinto" (Thwaites Rey, 2004, p.18). Asimismo, sostuvieron una perspectiva de no subordinación a las instituciones estatales

entendidas en un sentido monolítico y una concepción del sistema político como “un dispositivo de captura de la autonomía colectiva y subjetiva que debe ser preservada rechazando cualquier forma de representación” (Pérez y Natalucci 2012, p. 22).

A lo largo de la historia de este colectivo, esta gramática no solo marcó sus modos de intervención en el espacio público con sus potencialidades y limitaciones sino que también delimitó las relaciones con otros actores sociales. Tal fue el caso, de su decisión de no articular acciones ni conformar un movimiento barrial con la Unión de Organizaciones de Base por los Derechos Sociales (UOBDS), por considerarla atravesada por la misma lógica punteril que los distanciaba de los partidos políticos tradicionales. La UOBDS, creada en 1992, se había consolidado por entonces como una de las principales organizaciones del espacio barrial en torno al derecho al hábitat y fue uno de los principales colectivos que participaron en la Mesa de Concertación de Políticas Sociales, convocada por el gobierno radical.<sup>51</sup>

Desde su nacimiento y hasta comienzos de 2001, las acciones colectivas territoriales de información, formación y protesta de CVA se construyeron en torno a la problemática del acceso a la vivienda como derecho. Al respecto narra una de sus referentes y fundadoras de CVA que el proceso de trabajo sobre este tema empezó con “pequeños grupos, en los barrios”, organizando reuniones en casas de vecinos/as o espacios comunitarios, incluyendo la propia sede del local de CVA (Entrevista 11).

La misma fue formulada como demanda en términos de defensa de la vivienda única como bien social, frente a las amenazas de remate por deudas impositivas, de obras públicas y/o servicios que los vecinos no podían pagar. De allí también la exigencia de la creación de una tarifa social para el pago de servicios básicos de luz

---

<sup>51</sup> La Mesa de Concertación fue una experiencia de planificación y ejecución de políticas sociales desarrolladas en Córdoba durante las gestiones radicales, entre 1992 y 1998. Estuvo integrada por la UOBDS y las ONGs con las que se vinculaban cada una de las redes que la componían, el gobierno provincial y el gobierno municipal. Nacidas en los ‘80, dichas redes, estaban integradas por una gran cantidad de organizaciones y poblaciones de las villas y barrios periféricos de Córdoba que se articulaban en torno de la problemática de la vivienda, el acceso a la tierra y a los servicios públicos. A mitad de 1992, la constitución del Plenario de Organizaciones de Base derivó en emergencia de la Unión de Organizaciones de Base por los Derechos Sociales. A mitad de los ‘90, la UOBDS se consolidaba como una de las principales estructuras movilizadoras del espacio barrial. Más información al respecto puede consultarse en Franco y Medina (2012).

y agua, de “moratorias” y/o planes espaciales para el pago de impuestos municipales y provinciales y de la “suspensión de acciones jurídicas y/o administrativas contra los vecinos deudores de obras públicas”. Durante la intendencia del radical Rubén A. Martí (1991-1999), se habían creado los “Entes Promotores” a los que se delegó el control y la adjudicación de la obra pública en firmas privadas, obras que los frentistas estaban obligados a pagar. Estas incluyeron la construcción de sistemas cloacales y obras complementarias como gas, calzadas y cordones cuneta, entre otras.

También, por estos años, se manifestaron en contra de la suba del boleto de transporte público (La Voz del Interior, 18/07/1998, p. 4A; Volante “Boicot al Aumento del Transporte”, julio 1998) y de la privatización de servicios de agua y de luz, del Banco de la Provincia de Córdoba, entre otras, frente a las que demandaron la realización de una “consulta popular”, a la que el gobierno provincial no hizo lugar. En los casos de las protestas contra las privatizaciones, las realizaron en articulación con el Sindicato de Luz y Fuerza y con SIPOS.

Uno de los volantes producidos por la organización, que incluía historietas, historización de procesos, citas de artículos constitucionales, argumentos sobre derechos y la inconstitucionalidad del contrato de concesión de agua potable de la ciudad de Córdoba, cerraba “No nos lavemos las manos. No a las privatizaciones!!” e invitaba a crear y sumarse a un “Movimiento de Unidad Barrial” (Volante de distribución callejera, fecha estimada por sus referentes, año 1997).

Por entonces, el fundamento de las demandas de CVA, se construyó desde un discurso “ciudadano” y de “garantía de derechos” y fue acompañado con la creación de espacios de formación para las y los vecinos en torno a derechos constitucionales, normativas y procedimientos legales para hacer efectivo su cumplimiento. Estos procesos que articularon la acción colectiva apuntaban en el sentido de lo que en el capítulo 2 referimos como una ampliación de los procesos de democratización, en particular de lo que Garretón (2002) nombró específicamente como “democratización social”; es decir, una transformación y ampliación del sentido de la ciudadanía en las luchas sociales, orientadas en algunos casos -como éste- a demandar mayor calidad de los servicios y/o a instaurar nuevos derechos donde no existen aún instituciones para garantizarlos y

a superar las formas de exclusión del sistema capitalista y el modelo neoliberal, como responsables últimos del avasallamiento de estos derechos reconocidos por la constitución.

Si bien abundante bibliografía sobre acciones colectivas de protesta a fines de los años '90 y comienzos de siglo en Argentina señalaron al Estado y a los gobiernos como los principales actores a los que iban dirigidas las demandas, en el caso de las protestas protagonizadas por CVA en esta primera etapa, también se constituyeron como adversarias algunas empresas de servicios públicos privatizadas a fines de la década del '90 -como el caso de DIPAS<sup>52</sup>- y algunas tarjetas de crédito como Tarjeta Naranja, Provencred y Kadicard, con las que los vecinos mantenían deudas.

Vinculados con su concepción del cambio social entendido como “lucha”, los formatos de protesta predominantes en este período fueron, en una primera instancia, las demandas administrativas- judiciales acompañadas de marchas y/o concentraciones y, en caso de no recibir respuesta a esas demandas uno de los más empleados fue la “ocupación pacífica” de edificios públicos para petitionar o la “toma”, según quien refiera a ellos; en el primer caso, Vecinos Autoconvocados y en el segundo, la prensa local (La Voz del Interior, 18/07/1998, p. 4A; La Voz del Interior, 13/4/1999, p. 15A). Los diferentes modos en que la ocupación de espacios públicos es nombrada explicitan la disputa por los sentidos públicos construidos en torno a este formato y al propio actor, al mismo tiempo que una preocupación de este colectivo por los modos de visibilizar el conflicto y conseguir impacto mediático.

Otro formato utilizado fue la interposición e impedimento de corte de algún servicio de algún vecino/a frente a quienes fueran a realizarlo, junto con la instalación de una leyenda en alusión al conflicto. El formato de “boicot” o “paro de usuarios” fue usado ante el aumento de precio del boleto de transporte público en el año 1998 (Volante “Boicot al Aumento del Transporte”, julio 1998) y desechado tras ser evaluado negativamente. La organización entendió que no había

---

<sup>52</sup> En 1992 el gobierno provincial -con Eduardo Angeloz del partido radical como gobernador- fusionó la Empresa Provincial de Obras Sanitarias con la Dirección Provincial de Hidráulica, creando la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (DIPAS). En el año 1996, el gobierno transformó la empresa en la Dirección de Agua y Saneamiento (DA) por ley N° 8548 integrándola a la administración central, eliminando su autarquía y permitiendo su concesión en mayo de 1997 a la empresa Aguas Cordobesas que incluía capitales trasnacionales (Arriaga et al., 2012, p. 42).

conseguido una adhesión importante por tratarse de una necesidad de los trabajadores movilizarse a sus espacios laborales. Según los referentes de este colectivo, la elección de uno u otro formato tomó en cuenta como criterio, comenzar con protestas a través de “pasos administrativos” y “movilización” y, en caso de no conseguir respuesta a la demanda, avanzar en la petición con ocupación de un espacio público.

Varias de estas “ocupaciones”, “interposiciones” para impedir el corte de servicios y movilizaciones incluyeron la puesta del cuerpo de los integrantes de CVA como modo de confrontación y resistencia a las autoridades gubernamentales o policiales en caso de que las demandas no fueran escuchadas o atendidas. Ello, también fue un límite para la articulación con otros colectivos con los que a veces compartieron demandas pero que habían optado por otros modos de construcción política y protesta. Al respecto, señala una de las referentes históricas de CVA, que como colectivo tenían “una impronta más confrontativa y más reivindicatoria” que otros y que esa característica fue motivo para que “algunas organizaciones nos merecen el respeto, pero también que nos tengan un poco de temor (...)” (Entrevista 11).

Una de las ocupaciones que CVA recordaba como un hito fue la primera toma de la Catedral de la ciudad, realizada en mayo de 1999 y replicada en junio del mismo año, permaneciendo durante 45 días en un salón contiguo al recinto principal y por momentos dentro del salón principal. La acción se realizó en reclamo de una Ley de Emergencia Social que declarara -entre otras demandas- la inembargabilidad e inejecutabilidad de la vivienda única y dispusiera un relevamiento socioeconómico en los barrios de la ciudad (Franco y Medina, 2012, p. 291- 292).

También, la problemática de los derechos humanos atravesó la historia y las acciones colectivas protagonizadas por este colectivo. Desde la década de los ‘90 CVA participó de las marchas del 24 de marzo y del espacio multiactoral de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos (DDHH) en Córdoba que reunió desde entonces a sectores políticos, sociales y populares de la provincia en torno a las políticas de DDHH, Verdad, Memoria y Justicia. Sin embargo, su participación en la Mesa se discontinuó a comienzos del nuevo siglo porque lo consideraron un espacio atravesado por partidos políticos (Entrevista 11).

## **2. 2001: Por la defensa de la vivienda única, una ley de emergencia económica, social, empleo y salario digno. *Un cabildo abierto a la esperanza***

Cuando el agravio se institucionaliza la dignidad vecinal se pone de pie.  
Cabildo abierto ¡El pueblo se constituye!  
(Volante CVA, 2001)

El año 2001 es, según referentes de CVA, el de apogeo de la organización. Se intensificaron las protestas y se construyeron nuevas demandas, registrándose nueve acciones de este tipo a lo largo del año. La mayoría, en el marco de las movilizaciones masivas que se producían en todo el país en contra de las sucesivas medidas de ajuste del gobierno nacional y, otras, vinculadas con las temáticas que se venían trabajando en Córdoba desde fines de los '90.

En la construcción de estas acciones y demandas, el trabajo territorial en los barrios fue su motor. Para entonces, CVA articulaba acciones con habitantes de una diversidad de barrios de la ciudad. Entre ellos: José Ignacio Díaz secciones I, II y III, José Hernández, Panamericano, Los Gigantes, Jardín del Pilar, General Mosconi, Zumarán, Patricios, Lamadrid, Sarmientos, Residencial Oeste, Los Granados, General Bustos, Pueyrredón, La Francia, Parque Liceo, Villa Urquiza, H. Irigoyen, Parque Futura, San Vicente, Güemes, Altos de Vélez Sarfield, Cabildo, San Roque, Matienzo, Villa Adela, Ameguino, San Martín, Santa Isabel, Cerro norte, Fragueiro, Jardín, Argüello, Don Bosco, Centro América, Alto Alberdi, Nueva Italia, La Fraternidad, Las Palmas, Ampliación 23 de abril, Los Álamos, Villa El Libertador (Relevamiento Poblacional, Escuela de Trabajo Social de la UNC, 4/09/2000).

A través de los delegados en distintas zonas de la ciudad, CVA generaba charlas informativas y de concientización de derechos entre los vecinos a quienes, además, se convocaba a formar parte de la organización para buscar soluciones colectivas. En tal sentido, CVA contaba con el asesoramiento de abogados -que no pertenecían al colectivo aunque eran "afines"- respecto de las distintas problemáticas y cómo resolverlas. En la sede principal de la organización, algunos de sus integrantes -principalmente mujeres- eran responsables de armar carpetas con las fotocopias de los documentos necesarios para la consecución de tarifas sociales, planes de pago y

moratorias que después eran presentados ante las dependencias correspondientes, en particular ante el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) dependiente del gobierno de la Provincia de Córdoba. Según una de las referentes creadoras de CVA, el colectivo llegó a llevar 2500 casos vinculados con estas problemáticas (Entrevistas 11 y 13).

Más allá de su estrategia de intervención a partir de acciones administrativas, el trabajo barrial también incluyó en algunos casos extremos interponerse entre el personal que iba a realizar el corte de agua para impedirlo, a la vez que evitar la discriminación por el no pago del servicio. Durante un tiempo, como modo de “disciplinar” a los usuarios, la empresa Aguas Cordobesas implementó un sistema de “marcación” con una mancha roja en los domicilios de los deudores próximos al corte del servicio por falta de pago, modalidad que luego fue abandonada a pedido del gobierno provincial (La Voz del Interior, 15/03/2001, *en línea*). En los casos en que el corte no se había podido impedir, se armaban “brigadas” constituidas por plomeros integrantes o allegados a CVA que iban al domicilio y reconectaban el servicio. En ese momento, con los vecinos concentrados, se instalaba un cartel que decía “Reconectado por Vecinos Autoconvocados” (Entrevistas 11 y 13).

Una de las acciones colectivas de protesta más significativas del año 2001, fue el “Cabildo Abierto” realizado en la Plaza San Martín entre el 22 y el 25 mayo, para el aniversario de la Revolución de Mayo. Su relevancia estuvo dada tanto por el despliegue del proceso organizativo previo como por los sentidos políticos que puso en juego y por la emergencia de nuevas demandas tematizadas por CVA en el espacio público. Según los registros de la propia organización generados en un taller de evaluación del Cabildo Abierto, se habían repartido 7500 afiches, 27 mil volantes y se habían realizado diversas pintadas en las calles de la ciudad (Taller de Evaluación: Cabildo Abierto, 20/06/2001). Los referentes entrevistados, refirieron a una participación de entre 300 y 500 vecinos en esta instancia. El formato de “cabildo”, significado por CVA como “gobierno paralelo” y “teniendo en cuenta que el pueblo es soberano”, retomaba de las asambleas populares el ideario de democracia directa para discutir problemáticas centrales de la realidad. Si bien el mismo finalizó con una orden de desalojo por parte de la policía, otro fue convocado para el 16 y 17 de agosto de ese año en la misma plaza de la ciudad. La

propuesta, en un comienzo, incluía la generación de otros cabildos en los diferentes barrios de la ciudad para confluir en uno provincial aunque finalmente no se realizaron otros posteriores.

La demanda principal de estos espacios y de otras protestas desarrolladas por estos años fue la “declaración de la Emergencia Económica y Social”. La misma incluía la petición de un relevamiento socioeconómico poblacional, la protección de la vivienda única declarándose inembargable e inejecutable, la prórroga de las deudas contraídas por los vecinos y la restitución de servicios básicos como agua y luz. Vinculado con la discusión de las causas de la crisis que atravesaba el país, uno de los temas que se habían propuesto debatir en estos espacios fue el de “la deuda externa y sus consecuencias políticas, económicas y sociales” (Revista Che Vecino, julio 2001).

Asimismo, se incorporó la declaración de la problemática del desempleo que en agosto de 2001 se articuló en una demanda que incluyó “salario digno” y -en consonancia con los debates públicos del momento motorizados por la consulta del FRENAPO- la implementación de un “seguro único” de cobro mensual. El seguro debería ser de carácter transitorio e incluir la asignación familiar por hijo para todo ciudadano declarado en estado de emergencia económica social.

En el marco de esta nueva demanda que construía el colectivo y de algunos formatos de protesta similares a los de las organizaciones piqueteras, deciden participar de la primera Asamblea Nacional Piquetera en Buenos Aires y de las acciones de protesta que incluyeron cortes escalonados de 24, 48 y 72 horas que se extendieron entre el 31 de julio y el 16 de agosto de 2001. Las mismas se desarrollaron en rechazo del plan de ajuste del gobierno nacional, por la liberación de los presos sociales, la conservación de los planes de empleo y la adjudicación de nuevos subsidios para los jefes de hogar desocupados. En Córdoba, además de piquetes con cortes parciales de tránsito en algunas rutas de ingreso a la ciudad capital y ollas populares, se desarrolló una marcha que llegó hasta la plaza San Martín y finalizó con un acto público (La Voz del Interior, 8/8/2001, p. 3A; 15/8/2001, p. 3A). Sin embargo, la participación de CVA en este espacio de articulación con las organizaciones piqueteras no prosperó en el tiempo. Entre otras discusiones, se encontraba la demanda de planes sociales y su vínculo con el

trabajo y los partidos políticos, cuestión sobre la que CVA continuó discutiendo unos meses después hasta definir su propia incorporación al Consejo Consultivo Municipal en el año 2002. No obstante ello, según narran dos entrevistadas, en el marco de la crisis económica del 2001, demandaron y recibieron de parte del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia algunos de los módulos alimentarios que distribuía el gobierno provincial como respuesta a la protesta de las organizaciones. En este caso, los bolsones estuvieron destinados a familias de adultos/as mayores que transitaban situaciones de mucha pobreza y que estaban vinculados a CVA.

Durante el año 2001 también se realizaron otras protestas que volvieron a demandar la garantía del suministro de servicios de agua potable en la provincia y el rechazo a la privatización de los servicios de luz eléctrica tras nuevas arremetidas del gobierno provincial. La demanda de acceso al agua, continuó hasta mitad de la primera década del siglo XXI cuando consiguieron la tarifa social y en algunos momentos generaron articulaciones con la Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios de Vivienda y Consumo Limitada (COOPI) de la localidad de Carlos Paz. Con respecto a la protesta por la iniciativa del gobierno provincial de privatizar el servicio de luz, la misma continuó y acompañó el plan de lucha iniciado por el Sindicato de Luz y Fuerza, incluyendo marchas, concentraciones y cortes de las principales calles de la ciudad entre mayo y octubre de 2001, junto con diversas organizaciones sociales incluyendo al Movimiento Barrios de Pie, a gremios, organismos de derechos humanos, partidos políticos y otros actores sociales (La Voz del Interior, 10/05/2001, p. 8A; 11/05/2001, p. 7A; 16/05/2001, p. 9A; 26/07/2001, p. 4A; 30/10/2001, p. 7A). Asimismo, como parte de esas acciones y en apoyo al sindicato, a comienzos de septiembre del 2001 CVA -junto con el grupo cooperativo “Remolino”<sup>53</sup>- realizó una protesta artística frente a la Legislatura, instalando una vela gigante en una importante calle peatonal de la ciudad (La Voz del Interior, 5/9/2001, p. 6A) y repartiendo volantes que versaban

---

<sup>53</sup> Según las entrevistas, se trataba de un colectivo de jóvenes con perspectiva anarquista que venía desarrollando, entre otras, experiencias autogestivas en el barrio Guiñazú de la ciudad de Córdoba capital. Con este colectivo, VA trabajó algunos de los microemprendimientos en el marco del PJyJHD en el año 2002.

Epec no es del Gobierno, es del pueblo de Córdoba. ¿Podemos quedarnos mirando como regalan lo nuestro? Luchemos ahora para que la luz de Agustín Tosco no la apaguen los representantes de la oscuridad. Consulta popular vinculante. (Volante callejero, setiembre 2001)

Se inscribía así la lucha por la empresa estatal y el servicio público de luz en el marco de la historia de la lucha del movimiento obrero. Al respecto cabe señalar que el plan iniciado a fines de 1999 por el Sindicato Luz y Fuerza, finalmente daría sus frutos en noviembre de 2001 en términos de los objetivos que se había planteado: concientizar a la población, visibilizar el conflicto y conseguir el abandono de la intención de privatización de la empresa por parte del gobernador De la Sota (Arriaga, 2012).

Todas estas protestas tuvieron al “vecino” como protagonista y, salvo en el caso de los servicios de agua que habían sido privatizados al promediar los años '90, el resto de los reclamos sostuvieron como principal destinatario al Estado y a los gobiernos nacionales, provinciales y municipales a los que vecinos de distintos barrios de la ciudad le reclamaron por la garantía de un derecho vulnerado.

Según las entrevistas realizadas, la relación con el gobierno nacional y provincial fue muy mala. A nivel local, uno de los fundadores de CVA caracterizaba al gobierno provincial como de una democracia “filo fascista que combina la represión con la dádiva” (Entrevista 12). En la trayectoria de CVA, la criminalización y la represión de la protesta por parte de la policía fueron hechos que se repitieron, en particular, en respuesta al formato de “ocupación” del espacio público. Una nota publicada en la revista “Che Vecino” (2001) titulaba “Cuando la inseguridad es la policía. Se reiteran los atropellos sobre el delegado del Barrio Urquiza Noel Quinteros”. La nota aludía al allanamiento que había sufrido en su domicilio uno de sus referentes históricos y que interpretaba como un acto de intimidación y persecución ideológica; persecución que no era planteada en términos individuales sino que era inscripta en el marco de otros 37 vecinos autoconvocados procesados desde el 5 setiembre del 2000, cuando se produjo la ocupación del edificio de Tribunales para exigir el cumplimiento del artículo 14 bis de la Constitución que garantiza el trabajo y el salario digno.

Asimismo, los medios masivos de comunicación comenzaron a ser otro antagonista presente en el discurso de este colectivo. “Apaguemos la tele y salgamos a la calle” era el título de otra de las notas publicadas en la Revista ¡Che Vecino! (julio de 2001, p. 2). La preocupación por la información que circulaba en el espacio público fue una constante en la organización y motivó la creación de la propia revista. Asimismo, otro antecedente se registró con la participación del centro vecinal de General Urquiza -junto con el Círculo Sindical de Prensa- en el lanzamiento, a comienzos de los años '90, del Canal 4 de TV comunitaria.

En cuanto a los formatos de protesta predominantes, como en los años '90, continuaron siendo la concentración y la petición, la ocupación de edificios o espacios públicos. Entre ellos, el Consejo de Partidos Políticos, la ya mencionada ocupación de Tribunales I, el Concejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo y la plaza San Martín (La Voz del Interior, 2/10/2002, *en línea*; 3/10/2001, p. 10A; 4/10/2001, p. 11A; 8/3/2001, p. 11A; 24/05/2002, *en línea*; 20/06/2002, *en línea*), seguidos de marchas, amparos judiciales y la protesta artística. Esta multiplicidad de formatos empleados como estrategias para visibilizar las demandas y conseguir soluciones a sus reclamos se evidenciaba en una nota de la revista de la organización

Veamos... ¿Nos quieren engañar con la moratoria? Ya tenemos la nuestra. ¿Nos quieren cobrar \$100 de rentas? No tenemos trabajo, le pagamos \$5 ¿Nos quieren rematar las casas? Paramos el remate en Tribunales mediante un recurso de amparo o “de pecho” en la sala de remates. ¿Nos quieren cortar el agua? Realizamos una acción ante la justicia o hacemos un abrazo solidario en el barrio (Revista “Che Vecino”, N° 3, julio de 2001)

Para las elecciones legislativas de mitad del 2001, CVA llamó a la desobediencia civil y a no votar por no sentirse representados con los candidatos. En ese marco, con el objetivo de eximirse de votar, realizó una presentación a la justicia, según narra uno de los fundadores del colectivo (Entrevista 12). De las jornadas de protesta del 19 y 20 de diciembre de 2001, CVA no participó como colectivo.

### ***2.1. 2002-2004: La incorporación de una nueva demanda en las protestas, el desarrollo de microemprendimientos y procesos de autogestión en torno al PJyJHD y la experiencia de participación en el Consejo Consultivo Municipal***

A comienzos del año 2002, la organización había conseguido alcanzar parte de sus objetivos vinculados con la defensa de la vivienda única. Algunos de ellos fueron, por ordenanza Municipal, el retiro del “libro del SEVEN”<sup>54</sup> de los vecinos que mantenían deudas por obras públicas y el establecimiento de acuerdos y planes de pago de deudas con Aguas Cordobesas y EPEC (Revista Vecinos, 1999). El 20 de febrero de 2002, obtuvieron además la sanción de la Ley N° 8998 que suspendía por 180 días los remates judiciales de viviendas únicas para familias pobres y desempleadas que hubieran contraído deudas y autorizaba al Ejecutivo a prorrogar por tiempo indeterminado esa medida (La Voz del Interior, 21/2/2002, p. 1A). Un año después, conseguiría la tarifa social para el pago de los servicios de luz que permitió a quienes no podían pagar el precio del servicio, hacerlo con un monto accesible.

Sin embargo, a fines y comienzos del nuevo siglo -señalan referentes de Vecinos Autoconvocados- el problema de la crisis y el desempleo se había tornado acuciante y se había convertido en un tema central de debate hacia el interior de este colectivo. En ese marco, en el año 2002, conservando su identidad vecinal CVA decidió participar de algunas protestas junto con organizaciones de trabajadores desocupados. Entre ellas, algunas en demandas de trabajo y planes de empleo (La Voz del Interior, 21/6/2002, p. 2A) y otras que incluyeron el repudio a las políticas imperialistas y a la presión que recibía Argentina respecto de empresas extranjeras (La Voz del Interior, 24/05/2002, p. 4A). El principal formato siguió siendo el corte de calle, la entrega de petitorios y la ocupación de edificios públicos, como una delegación del Ministerio de Trabajo y el Consulado de España en el año 2002. Los antagonistas principales continuaron siendo los gobiernos nacionales y locales, el propio Estado y el “Imperio”.

---

<sup>54</sup> SEVEN SRL era una empresa que brindaba información y asesoramiento crediticio, comercial y legal a quien lo demandara tomando como fuente, entre otras, el sistema de datos de Veraz que contenía información financiera, incluyendo aquella sobre moras en el pago de deudas.

La protesta ante el Consulado fue precedida por la entrega de un petitorio que criticaba el papel de las empresas españolas en el país y declaraba “no grata” a la sede consular española. La misma estuvo acompañada de una intervención en la plaza España junto con el MBP que incluía la puesta de un “indio” hecho en hierro y una propuesta de cambio de nombre a dicha plaza por el de “Plaza Comechingones” (Entrevista 11). El diario de mayor tirada local “La Voz del Interior” se refirió a estas acciones como “una protesta sin antecedentes” y “con trascendencia internacional”. La ocupación del Consulado terminó con el desalojo por parte de la policía y el posterior desarrollo de un acto con el apoyo de algunos partidos políticos de izquierda, organizaciones sociales y de desocupados (La Voz del Interior, 25/05/2002, *en línea*). Por estas acciones de ocupación del edificio, a los pocos meses, uno de los fundadores y referente de CVA fue imputado por la justicia (La Voz del Interior, 2/7/2002, p. 2A).

Asimismo, por estos años CVA cambió de posición y resolvió incorporar la demanda de subsidios y planes sociales, principalmente el Plan Jefes y Jefas de Hogar (PJJHD) para el desarrollo de proyectos autogestivos. También definió participar del Consejo Consultivo Municipal. Las decisiones se tomaron en asamblea y luego de intensas discusiones en torno a las políticas sociales, a la dignidad de la persona, al trabajo y a las propias características de este espacio.

En la trayectoria de CVA, a diferencia de las “políticas asistenciales” que consideraban “paliativas” y asociadas a las “organizaciones de los bolsones”, este colectivo postulaba que el trabajo dignificaba a las personas y que era a partir de él que se podía avanzar en procesos de politización y no a la inversa. En particular, el trabajo que se construía “por” -y no “para”- la organización en espacios autogestivos, sin patrones, según relata una de la fundadoras de este colectivo (Entrevista 11). Además, entendía que la posibilidad de tener o no un empleo no era principalmente una responsabilidad de los individuos sino de la sociedad y del Estado y que el desarrollo de una política en torno a estos planes venía a cambiar el eje del debate público y de las demandas de las organizaciones sociales. En palabras de uno de los fundadores de CVA

(...) todo lo que venía de la resistencia de la organización, de la unidad de la acción; a todo eso el régimen le mete un mazazo, porque a partir de ahí lo que se pasó a

discutir en las organizaciones era cuántos bolsones, cuántos Jefes y Jefas de Hogar. La tarea fue de bombero (...) fue una respuesta de una pateada para delante de un poder político desbordado que no quería perder el poder real y que quería apagar el incendio. (Entrevista 12)

En relación al PJyJHD, la organización desarrolló diferentes acciones colectivas territoriales-barriales e inició un nuevo modo de vinculación con otros colectivos y con el Estado a partir de su integración en la conducción del Consejo Consultivo Municipal de Políticas Sociales a mitad del año 2002. Su participación en ese rol, a través de la figura de Noel Quinteros -referente histórico y uno de los fundadores de CVA- fue rotativa junto con un miembro de la Mesa de Desempleados de la Ciudad de Córdoba y con un referente del Movimiento Barrios de Pie.

El Consejo Consultivo se presentó como una alternativa para canalizar -aunque no necesariamente resolver- algunas problemáticas al tiempo que fue un espacio de nuevos conflictos por las limitaciones del propio Consejo, de los planes sociales y por las características, expectativas y prácticas de los distintos actores que lo integraron.

En la evaluación de algunos de los referentes históricos del Centro de Vecinos Autoconvocados, el Consejo fue un ámbito atravesado por las prácticas clientelares de ciertas organizaciones; sin embargo, recuperan la contribución “propositiva” de CVA como facilitadores de otras dinámicas de participación en ese espacio

(...) Y nosotros entramos y le dimos otra impronta al Consejo, inosotros lo sacamos a la calle!, inosotros hacemos un recurso de amparo!, ihacemos movilizaciones! (...). (Entrevista 11)

En el año 2002, con ese objetivo, desde la conducción del Consejo se propuso que las organizaciones expusieran los proyectos que desarrollaban y en los que trabajaban quienes cobraban Planes Jefes y Jefas de Hogar, como modo de transparentar parte de estos procesos.

Otras de las acciones colectivas del Consejo Consultivo en octubre del mismo año de la que participaron CVA y el MBP junto con otras 15 organizaciones, fue en un sentido semejante. El 24 de octubre, los colectivos agrupados en el CCM iniciaron una movilización a Tribunales Federales en la ciudad de Córdoba para pedir la restitución de 11 mil planes JyJHD que habían sido dados de baja el mes anterior y

para el pago de otros 8 mil planes a quienes habían completado sus planillas y, no obstante reunir los requisitos, no lo habían recibido hasta el momento. Según relatos del diario y de integrantes de CVA, de la movilización participaron unas dos mil personas (La Voz del Interior, 25/10/2002, p. A3). En Tribunales, el CCM y la Municipalidad presentaron un amparo judicial que tuvo resolución favorable a los pocos días y que ordenaba al Ministerio de Trabajo de la Nación -a cargo de Graciela Camagno- pagar 19 mil planes.

Este conflicto no se resolvió en ese momento y complejizó las relaciones entre los distintos actores que integraban el CCM y que mantenían distintas relaciones con el Estado y gobierno nacional. A la resolución judicial le siguieron una serie de sucesos: una apelación del Ministerio, su rechazo por parte de la justicia, una movilización del CCM y discusiones internas entre las organizaciones que integraban el propio Consejo, en tanto algunas sostenían que en lugar de realizar una presentación judicial al Ministerio este colectivo debería haber abierto un espacio de negociación (La Voz del Interior, 7/11/2002, p. A4). Al poco tiempo, además, la Ministra fue imputada por “desobediencia” a la resolución judicial y al mes siguiente el ministerio hizo efectivo el pago a un poco más de 17 mil destinatarios/as de estos planes (La Voz del Interior, 16/11/2002, p. A4; 28/11/2002, p. A3). Los conflictos hacia el interior del CCM y en torno a los planes continuaron en los meses siguientes.

La acción iniciada por el CCM y los hechos que le siguieron ilustran la complejidad de esta conflictividad en torno a los planes que involucraba al Estado y a las organizaciones, la labilidad y vulneración de derechos de quienes percibían o eran potenciales receptores del PJyJHD y la potencialidad de este Consejo de constituirse como sujeto político. En este caso, con posibilidad de expresar una voz en el espacio público y lograr ciertas transformaciones, combinando la movilización y la protesta, la presentación judicial y la gestión; una articulación de estrategias y formatos de acción de los distintos actores que componían este espacio: las diversas organizaciones sociales, sindicales y el Estado. De la participación en estas acciones de las organizaciones eclesiales, al menos hasta el momento no nos ha sido posible encontrar registro.

En marzo del año 2003, en el marco de denuncias públicas cruzadas sobre los espacios en los que los destinatarios del PJYJHD realizaban sus tareas de contraprestación, el Consejo presidido por un referente de CVA, inició una investigación al respecto. En una nota publicada por el diario La Voz del Interior, afirmaba que se estaba usando el programa Jefas y Jefes como “mano de obra barata del Estado, de las empresas particulares, de la Iglesia y de las organizaciones confesionales” y que si se quería “combatir en serio el desempleo” se deberían utilizar los planes nacionales en emprendimientos en los que el Estado también realizara un aporte técnico y material (La Voz del Interior, 22/03/03, *en línea*). En el año 2005, CVA decidió retirarse de este espacio por considerarlo impregnado de la lógica de una red punteril del gobierno provincial y de una perspectiva asistencialista.

Según relataba una de sus referentes históricas, CVA llegó a tener más de 2000 planillas de PJYJHD y a realizar diversos microemprendimientos que reivindicaban una concepción del trabajo desde la que se revalorizaba la autogestión y la dignidad del trabajo (Entrevista 11). En ese marco, la contraprestación requerida por el plan fue obligatoria en esta organización y percibida como “motivadora” para aquellas personas desocupadas que por entonces habían comenzado a atravesar estados depresivos y de baja autoestima. La mayoría de estos emprendimientos -costura, tejido y manualidades, copa de leche, panificadora y repostería, granja, huertas, herrería y carpintería, limpieza y “guardería”- terminaron siendo gestionados y trabajados por mujeres. Para su seguimiento y control, se designaron encargados de diferentes zonas de la ciudad. Los productos resultantes de estos emprendimientos en algunos casos se vendieron y en otros se usaron para el autoconsumo o el truke.

Con variantes, los proyectos se sostuvieron hasta el año 2004. Su declive se produjo, en algunos casos, por falta de insumos y maquinarias para dar un “salto” productivo; en otros, por deserción, disputas internas y la dificultad de construir colectivamente en grupos que se habían conformado ad hoc con el fin de cobrar el plan. También, a medida que los destinatarios de estos planes comenzaron a

encontrar trabajo -principalmente en empresas de seguridad privada- o accedían a pensiones creadas en el marco del Programa para el Adulto Mayor Más.<sup>55</sup>

Ni para las elecciones presidenciales ni para las municipales del año 2003, CVA participó como colectivo convocando a votar a sus integrantes. Sin embargo, en términos generales, sus referentes y los delegados entrevistados sostuvieron una valoración positiva de las políticas promovidas por ambos gobiernos hasta el año 2007. Al respecto, reivindicaban que se trataba de apuestas a la construcción desde la transversalidad y por fuera del bipartidismo; también recuperaban los resultados de las políticas económicas, sociales, culturales, de DDHH y a nivel regional latinoamericano, desarrolladas en los primeros años de gobierno.

Atento a estas valoraciones positivas, discutieron la posibilidad de constituirse en un partido político o ingresar a alguno de estos espacios pero definieron no hacerlo en estos primeros años. Con una actitud de “apoyo crítico”, participaron de distintos proyectos y políticas generadas a nivel nacional y local entre los años 2005 y 2007, al tiempo que continuaron con acciones de protesta (Entrevista 11).

Entre los años 2003 y 2004, las acciones emprendidas por este colectivo continuaron desarrollándose en torno a las demandas y experiencias desarrolladas en este apartado. Si en el capítulo 1 nos referimos a los procesos democratizadores como aquellos que favorecen una construcción política amplia, más allá de lo particular, por estos años CVA trabajó sus demandas y acciones en torno a dos problemáticas generales “el derecho a la vivienda” y al “trabajo”. Sin embargo, no construyó o permaneció mucho tiempo en espacios de articulación con otros actores ni involucró en la propia organización a otros sectores sociales -y sus problemáticas- distintos de aquellos con los que había iniciado sus acciones, apuntando a potenciar transformaciones societales más amplias.

---

<sup>55</sup> Cfr. Decretos N° 582/03 y N° 583/03. El origen de este programa también se vincula con la creación, a comienzos del 2003, del Plan Mayores (cfr. Resolución N° 155/03 del Ministerio de Trabajo) que estableció una prestación de 150 pesos a las personas de más de 70 años que no fueran titulares de ningún beneficio asistencial, graciable, no contributivo o previsional, de carácter monetario (Pautassi et al., 2003).

### **3. 2005: La construcción de la Cooperativa de Vecinos Autoconvocados. Desafíos, demandas y protestas y un breve paso por la gestión municipal**

Por la devolución de las fuentes de trabajo en el micro centro de la ciudad.

(Cooperativa Vecinos Autoconvocados, 2006)

Como señalamos en los apartados precedentes, en el año 2005, CVA había conseguido respuesta a una parte de sus demandas principales. En este período, CVA continuó con algunas movilizaciones en torno a estas problemáticas pero en mucha menor medida que en el período anterior. Una de ellas se produjo en el marco de las discusiones que había iniciado el gobierno nacional sobre los servicios privatizados que atendían necesidades básicas y su decisión de rescindir el contrato de concesión con la empresa Aguas Argentinas para ponerlo a cargo de una empresa con 90% de participación estatal en 2006. En tal oportunidad, CVA se manifestó públicamente y repartió un volante en los barrios titulado “El robo del siglo continúa”, en contra de la definición del gobierno provincial de renovar el contrato a la empresa Aguas Cordobesas.

El problema del desempleo había tenido una solución parcial para los integrantes de este colectivo. En su mayoría habían conseguido paliativos a partir del plan JyJHD pero, luego, no todos habían accedido a puestos de trabajo o pensiones en el marco de las políticas impulsadas por el nuevo gobierno nacional.

Cuando el gobierno municipal habilitó la conformación de cooperativas para la prestación de un servicio de estacionamiento medido y controlado en la ciudad, CVA consideró que estaban dadas las condiciones para avanzar en la construcción de una cooperativa de “naranjitas”, primero y, luego, impulsar el crecimiento de emprendimientos autogestivos. También, para su incorporación al servicio municipal de “servidores urbanos”.

La propuesta del municipio se producía en el contexto de la convocatoria a referentes de organizaciones sociales a participar de la gestión del Estado y, en particular, de su iniciativa en octubre de 2004 de retornar a un esquema de gerenciamiento estatal del estacionamiento medido y controlado de la ciudad de Córdoba. Como desarrollamos en el capítulo 2, en el marco del Plan de Inclusión

Social y Economía Solidaria “Sí, nuestra gente vale”, la Dirección de Desarrollo Territorial y Economía Social de la Municipalidad promovió dos programas “Productos y Servicios Éticos” y “Servicio de Estacionamiento Regulado en la Vía Pública”. El segundo de éstos programas retomaba la demanda de los “naranjitas” desempleados que habían sido despedidos por la anterior empresa prestataria del servicio de estacionamiento medido y controlado de la ciudad -CIUCOR- y de los que históricamente trabajaban “a voluntad” en las calles de la ciudad, algunos de los cuales habían formado parte o eran allegados al colectivo Centro de Vecinos Autoconvocados.

La presencia de trabajadores “naranjitas” en la ciudad se retrotrae a mitad de los años ‘70 cuando, bajo la dictadura militar, el gobierno de la provincia les ofreció a unas 850 personas dejar el trabajo de vendedores ambulantes -que “afeaban la ciudad” y hacían competencia “desleal” a los comerciantes- para pasar a trabajar como “naranjitas”, ordenando y cuidando autos estacionados en la vía pública. Durante casi quince años, los “naranjitas” trabajaron de modo individual, en vinculación directa con la Municipalidad: le compraban los tickets y pagaban un canon. En el año 1994, cuando este trabajo se había vuelto un emprendimiento rentable, el gobierno radical decidió privatizar el servicio, resultando concesionado a CIUCOR, empresa que instaló parquímetros en la zona céntrica de la ciudad de Córdoba. Con la presión de algunos naranjitas, 50 de ellos fueron empleados por la empresa. El resto de los no incorporados siguieron trabajando al margen del sistema oficial en las zonas donde no se habían instalado parquímetros, recibiendo “contribuciones voluntarias” (Entrevista 15).

Para su incorporación en este programa, la Municipalidad estipuló que los trabajadores debían organizarse en cooperativas a las que se les adjudicó el servicio en barrios periféricos de la ciudad donde no había parquímetros instalados. Los miembros de las cooperativas debieron adherir al “Monotributo Social”. En el marco de este proceso, el 15 de febrero del año 2005, se constituyeron cuatro cooperativas, entre ellas, la Cooperativa de Vecinos Autoconvocados, vinculada al colectivo CVA (La Voz del Interior, 12/2/2005, p. 1A).

El proceso de creación de este colectivo y de institución de una política estatal se produjo “de arriba hacia abajo”; es decir, recuperando demandas históricas del

sector pero por iniciativa del gobierno municipal, en el marco de sus términos y condiciones, más allá del buen diálogo que la cooperativa y CVA tenían con él. No obstante ello, la forma organizativa que asumió este colectivo no le fue muy ajena a CVA que venía de una trayectoria de construcción de espacios autogestivos.

Desde entonces, y recuperando algunos vínculos previos con vecinos/“naranjitas” y algunas organizaciones sociales, el Centro de Vecinos Autoconvocados comenzó el desarrollo de la cooperativa. En términos identitarios, como colectivo se inscribía en la historia de los trabajadores “naranjitas” y del cooperativismo, al tiempo que en la propia trayectoria de CVA. La huella de CVA en esta cooperativa estuvo presente en el nombre de la organización, en la pertenencia de algunos de sus integrantes y en la práctica laboral que desarrollaron a cargo del ordenamiento, seguridad y cobro del estacionamiento en la vía pública, en vínculo con vecinos y en distintos barrios de la ciudad. Desde este lugar, construyó una identidad que combinaba acciones tendientes a la institución de un servicio público en la ciudad - y la propia cooperativa- en conjunto con el Estado municipal, al tiempo que otras de protesta dirigidas a la propia municipalidad y vinculadas con demandas laborales concretas. Desarrollamos esto en los párrafos siguientes.

Aunque la Cooperativa construyó sus propios espacios de toma de decisiones y de administración, su relación con CVA siempre se mantuvo. De hecho, en este período, el Consejo de Administración de la cooperativa estuvo principalmente a cargo de trabajadores vinculados con CVA.

La constitución de un tipo de organización que recuperara el valor de la solidaridad y no respondiera a ningún “patrón” fue valorada positivamente por los integrantes de CVA al tiempo que resultó un gran desafío. Algunas de las problemáticas que tuvo que afrontar este colectivo incluyeron la constitución de la propia cooperativa, sus espacios de toma de decisión, de administración y gestión y de formación para ello; la construcción del sentido mismo del trabajo cooperativo y la organización del trabajo hacia adentro del colectivo; la legitimación de su trabajo con la sociedad; y el vínculo con las distintas dependencias del Estado municipal y con las otras tres cooperativas.

Con respecto a la primera, una de las principales dificultades tuvo que ver con la organización laboral de unos 70 trabajadores desempleados de un promedio

superior a los 45 años. En su mayoría venían trabajando a voluntad como parte de los “viejos naranjitas” -sin una organización que los nucleara- y otros eran “nuevos” -vinculados a CVA-, sin experiencia previa en el trabajo de estacionamiento medido y controlado. El modo de organización fue por áreas de trabajo en zonas de calles periféricas del centro de la ciudad, cada una de ellas, con coordinadores. La toma de decisiones se realizó a través de asambleas. Sin embargo, uno de los problemas que tuvieron en sus inicios fue la falta de participación en éstas. Con respecto a la formación en procesos cooperativos y viales, ambos estuvieron a cargo de la Municipalidad que abrió estas instancias con equipos de profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba (La Voz del Interior, 31/01/2005, p. A12) y con la Dirección de Tránsito de la propia Municipalidad.

El desarrollo de estas tareas permitió a estas personas construir un trabajo con un ingreso que, en la mayoría de los casos, no tenían. En la narración de una de las coordinadoras de zona y miembro del Consejo de Administración de la cooperativa, se advierte la falta de organización y contención con la que empezaron a trabajar y su experiencia de obtener un primer ingreso por el trabajo realizado

Me acuerdo que ese día no tenía ni para darle de comer a mis hijos, ni para que tomaran la leche. Y yo me fui sin saber a dónde era, porque no tenía idea dónde. Me dijeron “tenés que ir a la calle Europa”, “¿a dónde es?”, “ah, mirá, vos tenes que agarrar esta calle, pa, pa, metete, preguntá por ahí y te van a decir”. Bueno, y preguntando, preguntando, se llega (...) cuando yo termino de trabajar..., me dicen unas compañeras: “¿Cómo te fue Marga?”. “Mirá, no tengo ni idea”, porque no tenía ni idea. O sea, yo sentía monedas que llevaba, qué se yo, yo sentía peso de monedas que llevaba y qué se yo, yo sentía peso de monedas, no sé lo que... entonces, doy vuelta mi mochila y en esa época había hecho cincuenta y pico de pesos, que era un mundo. Entonces llorábamos y nos abrazábamos. No, no sabés. De no tener un mango a tener esa cantidad de plata, para nosotros era un mundo. Un mundo, digo, “Negra, tengo para comprar la leche, el pan”. (Entrevista 13)

Con respecto a la relación con los “frentistas”, según relatan los entrevistados, al comienzo fue compleja por desconocimiento del sistema y de la constitución de esta cooperativa; porque en algunos casos comenzaban a tener que pagar por estacionar los autos en el espacio público donde antes no lo hacían; por falta de una discusión pública instalada al respecto; y, en algunos casos, por la experiencia de haber vivido situaciones complicadas con algunos “naranjitas viejos” con problemas de adicciones, “malos hábitos”, entre otros. Sin embargo, según narran

los trabajadores, la relación fue mejorando (Informe de la Escuela de Trabajo Social y de la Escuela de Ciencias de la Información de la UNC, 2007). En palabras de una integrante de la cooperativa, al poco tiempo, la presencia de CVA en las calles fue valorada positivamente por los vecinos que empezaron a circular con más tranquilidad

(...) estaban esos borrachos ahí y la gente no podía pasar. Y después empezaron a pasar las abuelas con sus nietos... cambió totalmente; después empezaron las mujeres a correr en la plaza, viste, haciendo gimnasia, o sea hubo un cambio ahí, un cambio muy notable, en donde muchos me agradecían y bueno.. es mi fuente de trabajo. (Entrevista 13)

La relación con la Municipalidad en términos generales fue evaluada como positiva. Sin embargo, no estuvo exenta de conflictos e incluso de protestas motorizadas por las cooperativas. La demanda central fue por la posibilidad de trabajar en las calles céntricas de la ciudad donde se encontraban las calles más rentables y los ciudadanos estaban acostumbrados a pagar. Según una nota publicada por el diario La Voz del Interior (08/12/2004, *en línea*), a dos meses de que la Municipalidad de Córdoba retomara la administración de los 1.132 parquímetros y 66 tiqueadoras en el casco céntrico de la ciudad de Córdoba, ya había recaudado cuatro veces más que el canon aportado mensualmente por la empresa CIUCOR durante los 10 años que duró la concesión del servicio. Al respecto expresa uno de los fundadores de CVA e integrante del Consejo de Administración de la cooperativa

Lo que pasó es que cambiamos de collar pero seguimos siendo perros, porque en realidad el Estado Municipal se quedó con el paquete y nos condenó de alguna manera a volver a hacer el estacionamiento en los lugares donde no hay hábito de pago, donde los frentistas y los usuarios no estaban habituados a pagar en muchos casos, y en los casos en que estaban habituados a pagar ya estaban los compañeros acá, porque en realidad de hecho fue expulsado del centro y fue a ese lugar. (Entrevista 15)

En los primeros años, otros de los reclamos tuvieron que ver con el apoyo, la señalización vial y el control por parte de la Dirección de Tránsito de la propia municipalidad; la garantía de seguridad en las horas de trabajo; la comunicación con los vecinos de las zonas en las que trabajaban (Escuela de Trabajo Social y Escuela de Ciencias de la Información de la UNC, 2007; Entrevista 15).

El vínculo entre las cuatro cooperativas no fue fácil ya que a veces se producían disputas por los espacios de trabajo. Sin embargo, el trabajo fue conjunto ante la defensa de sus puestos laborales y la construcción de una nueva demanda con acciones de protesta dirigidas a la Municipalidad y/o al Consejo Deliberante de la ciudad por “la devolución de las fuentes de trabajo” en el casco céntrico de la ciudad, entre otras problemáticas que empezó a instalar en el espacio público (La Voz del Interior, 16/02/2005, p. A12; MinutoUno, 29/05/2007, *en línea*). También por la renovación de la concesión del servicio, finalmente prorrogada por el gobierno municipal en mayo de 2007 (MinutoUno, 30/05/2007, *en línea*). En todos los casos, las protestas fueron planteadas más para tensionar las políticas municipales al respecto que para destituir al gobierno.

Desde la perspectiva de algunos integrantes de CVA, la gestión municipal tuvo sus aspectos positivos y negativos. En cuanto a los aciertos, se destaca que fue la primera vez que el admitió cooperativas para la prestación de servicios públicos generando al mismo tiempo una solución al problema social del desempleo. Sin embargo, señala uno de sus referentes, la construcción de estas cooperativas y las demoras en los pagos entraban en contradicción con esta misma política promovida y evidenciaban su dimensión de “precarización laboral” (Entrevista 15). Por otra parte, sostuvieron, que si bien el municipio había estado conducido por personas con iniciativa y buena voluntad, en el caso del servicio medido y controlado de la ciudad, no consiguió generar una política que fuera acompañada por todas las reparticiones del Estado.

Los dos micro emprendimientos autogestivos que CVA había iniciado a comienzos de siglo como parte de la Asociación Civil ACEMOS, se inscribieron y recibieron el apoyo del programa de “Productos y servicios éticos” de la municipalidad. El de costura incluyó entre sus servicios y productos la confección de las chaquetillas para los trabajadores de la cooperativa CVA. El de cocina del colectivo “Pacha”, la elaboración de panificados y dulces, entre otros (Entrevista 14).

Asimismo, algunos integrantes de CVA empezaron a trabajar como monotributistas sociales en el proyecto de “Servidores urbanos” de la ciudad, cumpliendo funciones de control del trabajo de estacionamiento medido y controlado, de educación vial, de apoyo en hogares de noche, en espacios de formación, entre otras. Algunos de

ellos habían tenido con anterioridad una corta experiencia de trabajo administrativo en el Programa “Vale lo nuestro” impulsado por el mismo municipio (Entrevista 13 y 14).

En el marco del “apoyo crítico” al gobierno nacional y local y de algunas articulaciones que CVA había tenido con integrantes del MBP, en el año 2005, una de las referentes de CVA participó de las instancias de capacitación y trabajo territorial, como promotora del Programa “Promotores Territoriales para el Cambio Social” (PTCS) de la Dirección de Promotores Territoriales, perteneciente a la Subsecretaría de Organización y Capacitación Popular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

En ese año también, recuperando la experiencia del área de género del Movimiento Barrios de Pie, como Vecinos Autoconvocados crearon el “Movimiento de mujeres independientes, Tesmoforias”<sup>56</sup> para abordar cuestiones de género vinculadas a su participación en estas organizaciones y más allá de ellas. Como parte de este colectivo, participaron de los Encuentros de Mujeres a nivel nacional y realizaron algunas intervenciones artísticas. Hacia el año 2007, formaron parte de los espacios de capacitación desarrollados en el marco del programa nacional de Fortalecimiento de Derechos y Participación de las Mujeres “Juana Azurduy”, conformado por un equipo coordinador principalmente compuesto por integrantes de la Corriente Nacional Patria Libre y el Movimiento Barrios de Pie. El desarrollo de este espacio, le permitió ampliar los actores con los que articuló y abordar problemáticas más generales.

Asimismo, hacia fines de la gestión conducida por Luis Juez, una de las referentes y fundadoras de CVA, Key Massaccesi, ocupó durante unos meses un cargo en la Dirección de Impuestos Inmobiliarios de Desarrollo Social (DAJI) de la municipalidad. La decisión fue tomada por asamblea y supuso una tensión respecto de los aspectos autonomistas de su gramática política, en particular de aquellos vinculados con su relación con el Estado y con el gobierno. La incorporación de la referente a la gestión del Estado fue interpretada por CVA como un reconocimiento

---

Las Tesmoforias en la Grecia clásica era un festival exclusivamente femenino al que los hombres tenían prohibida la entrada. En él se celebraban el cultivo de la tierra y la recolección de sus frutos en honor de la diosa Deméter-Ceres y se conmemoraba el rapto de su hija Perséfone-Prosérpina por Hades-Plutón.

de la trayectoria de este colectivo en la defensa de los derechos de los vecinos y su lucha por la consecución de tarifas sociales para los servicios y las moratorias para el pago de impuestos y deudas por la obra pública.

Como parte de la gestión y no sin dificultades, según narra la entrevistada, logró resolver algunos casos que solicitaban cuotas para el pago de deudas impositivas de ciudadanos que vivían en condiciones de pobreza y desempleo (Entrevista 11 y 14). Sin embargo, el paso por la gestión fue corto y no avanzó en solucionar estos problemas para una población mayor ni en generar políticas societales más amplias.

\*\*\*

Comenzamos este capítulo con una caracterización del contexto de surgimiento del Centro de Vecinos Autoconvocados a mitad de los años '90 en Córdoba Capital y lo inscribimos en los procesos organizativos vecinales de Córdoba de la década del '80. Analizamos, además, el modo en el que desde una doble referencia identitaria, vecinal/ciudadana y “autoconvocada” e independiente de los partidos políticos, construyó y luego fue transformando sus acciones colectivas, su relación con otras organizaciones sociales, con el Estado y los procesos de democratización y desdemocratización a lo largo del período objeto de estudio.

Hasta comienzos del año 2001, reconocimos un crecimiento de la organización a partir del desarrollo de acciones colectivas territoriales en barrios de sectores económicos bajos o medios empobrecidos de la ciudad centralmente vinculados con la problemática del acceso a la vivienda como derecho. Formulada como demanda de defensa de la vivienda única como bien social, incluyó la exigencia de una tarifa social, moratorias y/o planes para el pago de servicios, créditos e impuestos y la suspensión de acciones jurídicas y/o administrativas contra los vecinos deudores de obras públicas. Asimismo, por estos años, se manifestó en contra de la privatización de servicios públicos por parte de un sistema de gobierno provincial caracterizado como una democracia que combinaba la represión con la dádiva.

Entre el año 2001 -reconocido por sus integrantes como de apogeo de la organización- y el año 2007, pudimos reconocer dos momentos en la historia de

este colectivo que incluyeron transformaciones en sus acciones colectivas y desplazamientos respecto de las identidades predominantes construidas.

Un primer período (2001-2004) en el que predominó el trabajo territorial y la protesta con demandas que sumaron a las cuestiones vecinales, la declaración de la Emergencia Económica y Social, trabajo y planes de empleo. En torno a estas generó algunas articulaciones con organizaciones de desocupados y hacia el 2002 desarrolló experiencias de creación de microemprendimientos y espacios autogestivos en torno al PJyJHD. Sin abandonar prácticas confrontativas con el Estado hasta el año 2005 participó en conducciones rotativas del Consejo Consultivo Municipal de Políticas Sociales. Asimismo y como resultado de la protesta, recibió de parte del gobierno de la provincia algunos de los módulos alimentarios para familias de adultos mayores que transitaban situaciones de pobreza.

En el segundo momento (2005-2007), sus acciones se concentraron en la institución de un nuevo colectivo la “Cooperativa de Vecinos Autoconvocados”. Dicho proceso fue de la mano de la institución de una política estatal municipal - “de arriba hacia abajo”- de un servicio de estacionamiento medido y controlado en la vía pública y se inscribió en la historia de los trabajadores “naranjitas” y el cooperativismo. Ello planteó nuevos desafíos y problemáticas y mantuvo la protesta con demandas laborales dirigidas a la propia municipalidad.

Además, el desarrollo de los distintos programas municipales en articulación con políticas nacionales para el fomento de procesos autogestivos, el abordaje de derechos de las mujeres y el fortalecimiento del trabajo de promoción territorial, le habilitó a CVA inscribir otros proyectos de estas características, generar algunas articulaciones y un mayor desarrollo del “Movimiento de mujeres independientes, Tesmoforias” creado por esta misma organización. Hacia el año 2007, definió ocupar durante unos meses un cargo en el Estado Municipal que permitió resoluciones parciales de casos de ciudadanos con imposibilidad de pagar deudas impositivas.

En términos generales y hasta el ingreso a la gestión municipal sus prácticas guardaron aspectos comunes con aquellas que inscribimos como parte de una gramática “autonomista”. En ellas, cobraron centralidad los mecanismos

deliberativos asamblearios para la toma de decisiones, una organización interna rizomática y una concepción del cambio social entendida como lucha desde la construcción política local y barrial que incluyó la protesta con distintas instancias e intensidades de confrontación -hasta la ocupación de edificios públicos para peticionar-.

Desde una concepción del sistema político como un dispositivo de captura de la autonomía colectiva, sus experiencias de participación en espacios estatales fueron acotadas y apostaron a la construcción de un poder popular paralelo entendido como forma de “autogobierno”. Asimismo, expresaron resistencia a su inclusión en un espacio político partidario, incluso con posterioridad al año 2003, cuando ganaron las elecciones nacionales y municipales gobiernos cuyas políticas y modos de construcción con las organizaciones sociales -al menos en estos primeros años de gobierno- fueron positivamente valoradas por este colectivo.

Estos modos de construcción política y de relación con otras organizaciones sociales y con el Estado constituyeron parte de las potencialidades para visibilizar y conseguir respuestas a sus reclamos en el espacio público y quizá también su dificultad para generar articulaciones con otras demandas y actores sociales que le permitieran participar como sujeto político de transformaciones societales más amplias.

## **CAPÍTULO 4: MOVIMIENTO BARRIOS DE PIE. DE LA RESISTENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE PODER POPULAR EN LOS TERRITORIOS A LA DISPUTA DEL ESTADO Y EL DESARROLLO DE POLÍTICAS POR LA AMPLIACIÓN DE DERECHOS**

El Movimiento Barrios de Pie (MBP) nació en diciembre de 2001, como producto de una definición del partido político “Corriente Nacional Patria Libre” (CNPL) y de un conjunto de colectivos de trabajadores desocupados que venían desplegando sus acciones en distintas provincias del país y que decidieron conformar una organización que los nucleara a nivel nacional. En el año 2002, Barrios de Pie se asentaba en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y en doce provincias de la Argentina entre las que se encontraba Córdoba, donde había surgido la CNPL. Su constitución, como veremos más adelante, coincide con su alejamiento de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). La reconstrucción de algunos momentos de la historia de la CNPL permitirán comprender el nacimiento y el devenir de MBP y su relación con el Estado nacional y local, antes y después de su integración al gobierno kirchnerista en el año 2004.

Iniciamos este capítulo, con algunos antecedentes importantes de su constitución y luego analizamos las acciones de la organización, en lo que identificamos como dos momentos distintos en su relación con el Estado y con los procesos de democratización en Córdoba. Si en el capítulo 2 expusimos las transformaciones del Estado y el papel propuesto a las organizaciones, tomando como eje articulador los distintos mandatos de gobierno -y relaciones entre los procesos locales y nacionales- la temporalidad de la acción de este movimiento guarda un vínculo con esos procesos pero tiene también su singularidad y algunas diferencias.

Sostendremos en el primer apartado que parte del afluente de organización barrial -vecinal y villera sobre el que se construye el MBP se nutrió del período de reconstrucción democrática iniciado en los años ‘80, particularmente en Córdoba, y de los colectivos que emergieron o se desplegaron al calor de la crisis económica y de representatividad de fines de los años ‘90 y comienzos de nuevo siglo. El trabajo territorial fue parte de una definición temprana del partido CNPL -el afluente

partidario del MBP-, respecto de las estrategias y modos de militancia política para lo que planteaban como la construcción de un país nacional y popular. Asimismo, proponemos que la definición de la CNPL de mitad de los años '90 de construir este proyecto y la resistencia al neoliberalismo en vínculo con la burguesía nacional, recuperaba aspectos de una gramática política movimentista que marcó la emergencia y desarrollo del MBP y, en particular, habilitó luego -no sin tensiones- su definición de incorporarse al proyecto de transversalidad y a la gestión del Estado, así como los conflictos hacia el interior de este nuevo espacio político.

Entre el año 2002 y fines de 2003, cuando nació el Movimiento, reconocimos una primera temporalidad instituyente de la organización, de expansión y articulación con otros actores a nivel nacional y de desarrollo territorial en torno a comedores, merenderos, procesos de alfabetización y a la gestión de planes sociales al calor de la resistencia al modelo neoliberal. Auto identificada con el piquete como forma de protesta para visibilizar los problemas de la pobreza y la desocupación, sus prácticas asumieron también un sentido impugnador respecto de gobiernos nacionales y locales. En Córdoba, entre tanto, desarrolló además una primera experiencia de participación institucional con otros actores sociales incluyendo al Estado.

A partir del año 2004 se produjo una transformación del vínculo del MBP con el Estado, cuando se constituyó como uno de los sujetos legitimados para construir políticamente e inició un período centralmente de institucionalización dentro del Estado con el gobierno nacional y municipal. Asimismo, puede reconocerse un cambio en los sentidos de la movilización y una ampliación y diversificación de las problemáticas y actores con que organizaron la acción territorial por áreas de trabajo; un desarrollo territorial que se centró menos en la demanda de trabajo y planes sociales y más en acciones de promoción de derechos, capacitación y formación, con una primera experiencia de cooperativización en Córdoba.

### **1. Antecedentes en Córdoba**

La CNPL surgió a fines de 1987 como una corriente que apostaba a tener alcance nacional. Sus miembros fundadores inicialmente provenían de experiencias de militancia en los años '70, principalmente en el Partido Revolucionario de los

Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT- ERP), a los que se sumaron otras generaciones que habían tenido vínculos con el Partido Intransigente, Montoneros y organizaciones de la Tendencia Revolucionaria del Peronismo -entre otras-.

Como colectivo, se autodefinía como de izquierda combativa “nacional, popular y revolucionaria” (En Marcha, marzo 1988) y reivindicaba como herencias una pluralidad de actores que habían sido protagonistas de distintas luchas a lo largo de la historia en nuestro país y en Latinoamérica: el General San Martín y los soldados de la Independencia; de Facundo Quiroga, de Artigas, del “Chacho” Peñaloza, de Felipe Varela y de los Gauchos Federales; de “la gesta de los obreros de principios de siglo y durante la Década Infame”; “la del pueblo radical e irigoyenista contra el régimen oligarca”; “la del pueblo peronista del 45, el del 17 de Octubre y el de Evita, contra el imperialismo y los cipayos nativos”; la Resistencia Peronista, la CGT de los Argentinos, Santiago Pampillón, el sindicalismo clasista, el Cordobazo y las organizaciones que en las décadas del ‘60 y ‘70 enfrentaron las distintas dictaduras; de Agustín Tosco y Atilio López, de las Madres de Plaza de Mayo y Monseñor Angelelli, de los jóvenes secundarios secuestrados en la Noche de los Lápices, de intelectuales del coraje de Rodolfo Walsh, y de los soldados que pelearon en Malvinas; del inmortal Comandante Che Guevara (Estatuto, 1990). En las entrevistas realizadas a integrantes de los momentos fundacionales de la agrupación, el vínculo entre la historia pasada y el presente como modo de comprensión de los hechos aparece reiteradamente como una característica de la organización valorada positivamente por ellos y como un eje de trabajo en espacios de formación y revistas.

Emergía para conformar lo que sus militantes definían como una organización revolucionaria “de nuevo tipo”. Proponían diferenciarse del resto de los partidos políticos, en particular de los dos hegemónicos a finales de los años ‘80 -de la UCR y del Partido Justicialista caracterizados como organizaciones “liberales” que contribuían a reproducir el sistema-, de la “burocracia sindical” y de las prácticas que sostenían organizaciones que, concibiéndose de izquierda, eran incapaces de generar una alianza “extendida y heterogénea”, que incluyera a distintos sectores sociales.

La conjunción del “marxismo leninismo” como método de análisis de la realidad (Gradín, 2015, p. 117) con la “identidad popular latinoamericanista” (Gómez, 2010, p.87) atravesaba también la concepción de la CNPL sobre el papel de la propia organización en la construcción de las condiciones para favorecer la liberación. Al respecto, algunas de las tareas que se enumeraban en su Estatuto (1990) de constitución incluían: “impulsar el desarrollo de la conciencia de clase de los trabajadores y del pueblo, y su patriotismo”, “crecer en el seno de los trabajadores y el pueblo, nutrirnos de los mejores compañeros, participar en todas sus luchas e impulsarlas”, “Enfrentar la política y el accionar de quienes nos dominan”, “promover el protagonismo y la participación democrática del pueblo en la resolución de sus problemas, su protagonismo en la lucha, y el fortalecimiento de sus organizaciones sociales”, entre otras.

El diagnóstico de la Argentina como un país capitalista dependiente con una crisis estructural y sin salida en los marcos del sistema, cuyos responsables principales eran el “imperialismo” -en particular norteamericano- y quienes consideraban eran sus “socios”, “el gran capital industrial, bancario, comercial y terrateniente” guió por esos años las estrategias y las tácticas del partido en el camino a la construcción del socialismo. Como resultado de esta premisa, consideraban que en los países dependientes el primer conflicto a resolver era aquel entre el imperialismo y la nación, en tanto expresaba la contradicción -en términos marxistas- entre el capital y el trabajo.

Con respecto a la coyuntura argentina de fines de los años ‘80, entendían que si bien el radicalismo en su primer año de gobierno había generado una política de renegociación de la “dependencia” a través de ciertos enfrentamientos con el imperialismo y las clases dominantes, tempranamente había cambiado el rumbo con el lanzamiento de un plan económico -el Plan Austral- que llevaba a más dependencia. Frente a ello, sostenían que era necesario “destruir las actuales relaciones de producción, quebrar el dominio que ejerce el imperialismo y la oligarquía sobre nuestro país” y gestar un orden económico “sin explotadores ni explotados”; construir

una patria con un régimen de Democracia Popular donde el poder esté en manos de los trabajadores y el pueblo, de plena vigencia de los Derechos Humanos y las

libertades públicas (...) donde haya salud, educación, trabajo y vivienda para todos; en el que la ciencia esté al servicio del hombre y la cultura sea nacional y popular; una patria con FFAA del pueblo y la nación que estén al servicio de la defensa de nuestra soberanía. Un estado con una política exterior independiente y de apoyo a los pueblos que luchan contra el imperialismo. (Documento Fundacional de la CNPL, 1987)

A diferencia de quienes consideraban que para ello el camino era un "gradualismo" reformista -conquistando pequeñas porciones del aparato del Estado-, la CNPL propuso en estos primeros años la "toma total del poder" y la "construcción de un Frente Popular" para agrupar a distintos actores y alineamientos políticos, en el que la "clase trabajadora" se constituía en el sujeto fundamental de la revolución. Esta concepción sobre la estrategia y el modo de construcción política atravesó y también limitó durante los años '90 el espectro de actores con los que articuló sus acciones hasta, al menos, su ingreso a la CTA en 1999. Expresada como oposición entre organizaciones con estrategias "confrontativas" y otras "acuerdistas", esta diferencia aparece en reiteradas entrevistas. Entre ellas, la de una referente del partido cuando recuerda, por ejemplo, por qué no participaron o articularon acciones con el colectivo Unión de Organizaciones de Base por los Derechos Sociales (UOBDS) -aunque sí con algunas organizaciones que la habían conformado-, organización que por entonces tenía mucha presencia pública y amplio trabajo barrial en Córdoba y que, como mencionamos en el capítulo anterior, había decidido integrar la Mesa de Concertación de Políticas Sociales convocada desde el Estado por el gobierno radical

(...) en los primeros años de los '90, que se yo, todo lo que aparecía a nivel universitario, a nivel barrial, acá estaba la Unidad de Organizaciones de Base, era muy acuerdista todo, para nosotros. Siempre estaban acordando con los distintos espacios cuando para nosotros era muy, era muy confrontativo. (Entrevista 7)

Como parte de la estrategia de construcción de un frente, en 1987 participó junto con el Partido Humanista, el Partido Verde y el Partido Comunista en la construcción del Frente Amplio de Liberación (FRAL) para las elecciones de Diputados, compitiendo con una multiplicidad de partidos políticos. Sin embargo, como resultado de esos comicios -al menos en Córdoba- sólo consiguieron representación los dos partidos mayoritarios y el FRAL poco menos que el 2% de

los votos (Dirección Nacional Electoral, 23/01/2016).<sup>57</sup> Este elemento es importante para comprender las decisiones que posteriormente tomaron los militantes de esta organización y del MBP porque –a diferencia de lo que sostiene Schuttenberg (2011, p. 43)- si bien la CNPL tuvo como antagonistas al imperialismo y a su representación local en la conducción del Estado, desde su nacimiento tuvo como horizonte la disputa política institucional y participó de diversos frentes en elecciones nacionales presidenciales y legislativas en los años ‘90 e inicios del nuevo siglo. Esta estrategia de construcción política se sostuvo hasta el año 2003 y se alternó con otras de abstencionismo eleccionario y de repudio a los representantes de los partidos políticos hegemónicos con expresiones públicas frente a los edificios parlamentarios, como desarrollaremos más adelante.

Con respecto a la organización interna de Patria Libre, en su documento fundacional y, luego en el primer Estatuto redactado en 1990, ya se presentaban pormenorizadamente las características de la estructura organizativa y se pautaban cada uno de los derechos y deberes que debían cumplir sus integrantes, incluidas sus posibilidades y límites de acción, su moral y sanciones. Los afiliados eran contruidos como militantes “combativos”, “revolucionarios”, “abnegados y firmes”, con “convicciones profundas, de amor a su pueblo, de valor”, y “confianza en el triunfo final”, “espíritu de ofensiva, ser disciplinados, esforzados, tenaces y poseer pensamiento propio”. Según narran los entrevistados, el valor de la disciplina y la valentía que sostenía el tipo de acciones que se impulsaban, eran importantes en la militancia dentro de este espacio. Asimismo, señalaban que el partido desarrollaba instancias de formación política sistemáticas, principalmente para los y las jóvenes que se iba incorporando: “teórica” -incluyendo un cuadernillo, “El Pregón”, con lecturas políticas de historia- y “práctica” -con aprendizajes para la confrontación callejera-. El funcionamiento de la CNPL se regía por el centralismo democrático<sup>58</sup> y su estructura se proponía “asentada en lo territorial” y conformada por direcciones nacionales, regionales, zonales, de frente, las agrupaciones de base y núcleo. El

---

<sup>57</sup> En cada una de las provincias que se presentó, el Frente consiguió entre 0,20% y algo más que el 1,4% de los votos.

<sup>58</sup> Como señaló Gradín, el centralismo democrático, “basado en los desarrollos del marxismo leninismo se diferencia del modelo burocrático o del centralista porque la toma de decisiones se realiza de abajo para arriba y viceversa. Cada decisión estratégica es tomada con la previa consulta a los diferentes niveles de la organización en un debate ida y vuelta” (2015, p. 118).

artículo 18 del Estatuto de 1990, establecía que el Congreso Nacional era la máxima autoridad de la organización y estaba constituido por delegados elegidos democráticamente en los Congresos Regionales.<sup>59</sup> Este modo de organización y su concepción de la militancia permanecieron en el partido hasta su transformación en Libres del Sur e impregnaron el modo en que se construyó la estructura interna del Movimiento Barrios de Pie, el vínculo con el partido y la militancia de quienes lo integraban.

A comienzos de la década del '90, la CNPL se enraizaba principalmente en la ciudad de Córdoba -aunque también logró instalarse en algunas localidades del interior, como Alta Gracia y Cruz del Eje, entre otras-. Entrada esta década y a medida que se iba profundizando la crisis económica y de representatividad y las organizaciones piqueteras comenzaban a tener mayor presencia en el espacio público, sus referentes principales avanzaron en un proceso de construcción en el conurbano bonaerense y en otras provincias del país.

Según definieron en el segundo Congreso de Patria Libre realizado en 1996, con la fuerte ofensiva del imperialismo y la debilidad del campo socialista, era necesario redefinir las tácticas y las estrategias, centrándolas en la “resistencia”, el “desgaste” y la “lucha” contra el modelo neoliberal, antes que en la ofensiva. El documento redactado luego del Segundo Congreso de la CNPL, señalaba

Nuestro planteo de poder tiene que ser un gobierno de frente único con sectores de la burguesía nacional opuesta al modelo concentrador del gran capital y el imperialismo. Un acuerdo para establecer un gobierno de carácter nacional y popular con un programa de claro enfrentamiento al neoliberalismo. (Documento Segundo Congreso CNPL, 1996)

Su apuesta a la construcción de un “movimiento de liberación, nacionalista” presente en su Estatuto (1990) –y, agregamos nosotros, estas definiciones del segundo congreso de ampliar los sectores con los que construir- puede leerse según Gradín (2015), en clave “movimientista”. Teniendo en cuenta la caracterización que realizó Natalucci (2011) respecto de esta gramática política, es posible reconocer por estos años, algunos aspectos movimientistas vinculados con su revalorización

---

<sup>59</sup> Entre las funciones de este espacio, se encontraba la elaboración de los lineamientos estratégicos y políticos; la aprobación del programa y el Estatuto; y la elección de la Dirección Nacional, el Secretariado y el Secretario General. (Estatuto CNPL, 1990)

de la tradición nacional-popular y del peronismo del '45 y con su concepción del cambio social. Desde esta gramática, a una primera etapa de resistencia le seguía otra de ofensiva, siendo la última la que alentaba a la construcción de un movimiento nacional que impulsara un proyecto popular en el que las organizaciones eran concebidas como puentes de relación entre el pueblo y el Estado (Natalucci, 2011).

Esta redefinición no se produjo sin discusiones dentro de la organización entre militantes con distintas trayectorias políticas y perspectivas ideológicas, tensiones que continuaron a lo largo del período de estudio y que marcaron las alianzas que pudo y no pudo construir e incluso los conflictos por la inclusión o no del PJ en la conducción del gobierno nacional (Entrevistas 2, 6 y 7). No obstante ello, por entonces, la estrategia consensuada por la CNPL fue la construcción de un frente con sectores de la burguesía nacional para lo que iba a ser necesario estructurar una fuerza y organización independiente del pueblo humilde y trabajador, conducido por las fuerzas revolucionarias. En el corto plazo, se proponían estimular las formas de lucha que fueran golpeando el consenso hacia los que gobiernan y la legitimidad de sus planes de ajuste, como había sucedido con puebladas como el Santiagazo, las de Jujuy, Córdoba, Río Negro, Cutral-Có, entre otras. En ese camino, desarrollaron acciones organizadas en distintos “frentes”<sup>60</sup>, participaron de diversas acciones de protesta con relevancia local y nacional y fueron asumiendo una identidad piquetera a nivel territorial.

El modo de construcción política se organizó a partir de “frentes” de masas en función de lo que el partido consideraba eran los sujetos estratégicos para llevar adelante la liberación en cada contexto (Gradín, 2015).

---

<sup>60</sup> La construcción de “frentes” había sido una de las estrategias del PRT, expresión de sus alianzas y acuerdos públicos con diversas agrupaciones y dirigentes independientes. Según Cornovale, éstos tenían “el objetivo de canalizar y orientar la movilización popular y alcanzar una mayor gravitación en la arena política nacional” (2010, p. 42). La misma autora afirma que entre los más destacados que impulsó y conformó el PRT-ERP se encuentran el Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS), el Movimiento Sindical de Base (MSB), el Frente Antiimperialista de Trabajadores de la Cultura (FATRAC) y la Juventud Guevarista (JG). Paralelamente, promovió y participó de la Comisión de Familiares de Presos Políticos, Estudiantiles y Gremiales (COFAPPEG), entre otras. Más información puede encontrarse en Cornovale, Vera (2010). La guerra revolucionaria del PRT-ERP en Revista Sociohistórica, n° 27, pág. 41-75.

En Córdoba, la CNPL desarrolló tres frentes. El principal en los años '90 fue el "juvenil", centralmente universitario, con la organización Venceremos que posteriormente se integró al Frente Estudiantil Universitario (FEU) y la creación del Grupo de Estudiantes Solidarios (GES) con presencia también en colegios secundarios. Otro fue el territorial -vecinal- con el colectivo Córdoba desde Abajo, con desarrollo incipiente desde 1994. Y el menos desarrollado, el "sindical", a través de la "Corriente Primero de Mayo" que tuvo alguna inserción en el Sindicato de Luz y Fuerza -con una política fundamentalmente concentrada en evitar la privatización de EPEC- y que articuló con otros sindicatos como la Unión Gráfica de Córdoba, el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SIPOS), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y con el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN). Asimismo, publicó la revista En Marcha como modo de socializar el trabajo territorial y de compartir reflexiones y discusiones sobre la coyuntura y las definiciones de la CNPL, principalmente entre integrantes del propio partido y los otros actores con los que articulaba o se relacionaba.

Córdoba desde Abajo centró sus acciones predominantemente en la lucha contra el hambre y la pobreza a través de la protesta callejera, el sostenimiento de comedores, merenderos y algunos micro-emprendimientos en distintos barrios de la ciudad; entre ellos, Argüello, IPV Argüello, Ituzaingó, Ferreyra, Villa Libertador, San Jorge, Villa Cornú, 1º de Mayo, San Roque, Renacimiento. También trabajaron allí con el frente juvenil otras problemáticas como la del "gatillo fácil" y desarrollaron espacios de apoyo escolar desde una perspectiva que la organización inscribía en el marco de la "educación popular".

Para la conformación de estos espacios, en este período, la organización no contó con recursos económicos provenientes de políticas sociales sino con el propio aporte de sus integrantes, cuestión que fue incorporada formalmente en una modificación posterior del Estatuto a fines del año 2003. Según relatos de los entrevistados, consiguieron también aportes de mercaderías de la cadena de supermercados Libertad y subsidios o insumos para comedores a través de la movilización y la negociación con el nuevo gobierno provincial a partir del año 1999.

### **1.1 Acciones territoriales barriales. De Córdoba desde Abajo a CTA de los barrios**

Sintetizamos en lo que sigue las principales acciones territoriales y de protesta protagonizadas por la CNPL y los vínculos que entabló con otros actores sociales, en particular a partir de la emergencia de Córdoba desde Abajo, como antecedente del MBP a nivel local.

La salida de la dictadura había habilitado en la ciudad un contexto de destacada participación de habitantes de barrios y villas dentro de una variedad de espacios y organizaciones que acompañó el proceso de reconstrucción democrática (Franco et al., 2015).<sup>61</sup> En ese marco se insertó la CNPL desarrollando una política territorial barrial que fue creciendo lentamente a lo largo de los años '90 y se amplió a comienzos de nuevo siglo.

Hacia fines de los años '80, en un contexto de crisis económica, social y política<sup>62</sup> emergieron en el espacio público acciones contenciosas alrededor de algunas problemáticas sociales que se sostendrían como ejes articuladores de la acción territorial a lo largo de los años '90, entre ellas, la pobreza y el hambre. En el marco de la crisis política desatada, en los meses previos a la entrega anticipada del mando por parte de Raúl Alfonsín y la asunción de Menem a la presidencia, el 8 de julio de 1989, se registraron diversas acciones de protesta en demanda de alimentos: saqueos a supermercados en Córdoba y Rosario entre mayo y julio de 1989, concentraciones y cacerolazos protagonizados por mujeres y niños de distintas villas de emergencia de Córdoba Capital, intersección y sustracción de alimentos de un camión de carga en esta última ciudad, entre otros (Gordillo, 2014). Según testimonian algunos entrevistados de la CNPL, en el año 1989, participaron con pobladores de barrios de Córdoba de distintas acciones de protesta dirigidas al gobierno local en demanda de alimentos (Entrevistas 2 y 7).

---

<sup>61</sup> Un estudio encargado por la Municipalidad de Córdoba en 1987, constataba que tres cuartos de las villas censadas tenían o estaban formando algún tipo de organización comunitaria (Luciano, 1996).

<sup>62</sup> La hiperinflación -con índices record de casi 5000% anual (Krikorian, 2010)- había impactado significativamente en las condiciones de vida de amplios sectores de la población que en pocos meses cayeron por debajo de la línea de pobreza. Por entonces, a diferencia de lo que había postulado el radicalismo, la democracia no era condición suficiente para comer ni para educarse.

Era posible reconocer para esa época en la ciudad de Córdoba, diversas estrategias de organización y acciones para la subsistencia que incluían ollas comunitarias, comedores populares, compras colectivas, almacenes comunitarios, entre otras (Aquí estamos los villeros, 1988). En junio de ese mismo año, el diario La Voz del Interior publicaba un informe titulado “Preocupante panorama en sectores de extrema pobreza” en el que aludía a la realidad de estos actores y a la cristalización del “hábito de la ayuda alimentaria impulsada por el gobierno” (Franco et al., 2015, p. 176), como parte de una política asistencialista inicialmente concebida como de emergencia y que se extendía en el tiempo.

En el marco de la militancia en el frente sindical, en la narración de algunos militantes, se menciona también la participación de la CNPL en las protestas del 22 y 23 de junio de 1995 en Córdoba cuando sucedió la emblemática quema de la Casa Radical (Arriaga et al., 2012) seguida de una serie de cortes de ruta y saqueos. Desde enero de ese año se había iniciado en Córdoba un ciclo de intensificación de la protesta con alto protagonismo de los sindicatos del sector público (Gordillo, 2003) al que se habían sumado organizaciones políticas, barriales y villeras (La Voz del Interior, 23/6/1995, p. 2A). Dichas jornadas habían sido el prolegómeno de la renuncia anticipada del gobernador Eduardo Angeloz el 6 de julio del mismo año. Al respecto señala un coordinador provincial

(...) armar la juventud de la Corriente Sindical 1 de Mayo, se produce lo de la toma de la Cervecería Córdoba donde nosotros tuvimos una participación muy fuerte en la toma de la cervecería, se intenta la privatización de Luz y Fuerza y con nosotros, con los trabajadores de LyF y con los de Sipos se tienen las experiencias más duras de confrontación con la Policía y lo de la Legislatura y demás y bueno, todo al final termina desembocando en la quema de la Casa Radical en aquel momento con la gente de Bazán, nosotros teníamos mucha coordinación (...). (Entrevista 2)

En esta misma entrevista y en otras hay referencias también a la participación de la CNPL en diferentes movilizaciones organizadas por los organismos de DDHH en demanda de memoria, verdad y justicia; en las marchas contra la venta de la Cervecería Córdoba, la privatización del agua y en apoyo a la educación pública cuando se promulgaba la Ley de Educación Superior, también hacia mitad de la década del '90 (Entrevista 2, 7 y 6).

La asunción de Ramón Bautista Mestre como nuevo gobernador por el mismo partido político<sup>63</sup> y su despliegue de estrategias tendientes al logro del equilibrio fiscal y a la racionalización administrativa (La Serna, 1997) con la sanción de las leyes de Emergencia Económico– Financiera y Previsional del Sector Público Provincial (Nº 8472) –y su modificatoria (Nº 8482)<sup>64</sup>- fueron objeto de nuevas protestas. A pocos meses de sancionadas estas leyes, se desarrolla la primera acción de protesta protagonizada como Córdoba desde Abajo con un acto en rechazo a la Ley de Emergencia Económica y en repudio a la asunción del por entonces gobernador Angeloz como senador nacional. La acción culminó con una marcha para participar de la ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo en la plaza San Martín. (La Voz del Interior, 8/12/1995) Dicha acción es la primera protesta de desocupados registrada en la ciudad de Córdoba. Otra acción de protesta protagonizada por este colectivo en repudio a las políticas de ajuste del nuevo gobierno provincial, se registra al año siguiente con una movilización a la Legislatura de la provincia (La voz del Interior, 24/12/1996: 1A). Como señala Natalucci (2008) en su estudio sobre el movimiento piquetero en Cruz del Eje, se trata de un actor que tendrá una temprana aparición en nuestra provincia. La construcción del “espacio piquetero” enmarcó, entre otros procesos, la rearticulación de las identidades y trayectorias organizativas de algunos colectivos con inserción barrial que confluyeron en nuevos espacios. Tal es el caso de la CNPL, una de las principales protagonistas de la protesta que registramos como equipo de investigación hacia fines de siglo en la ciudad capital. (Gordillo et al., 2012)<sup>65</sup>

Al año siguiente, comenzaron las protestas frente a supermercados en demanda de alimentos, con formato de concentraciones y ollas populares. Las mismas tenían un doble objetivo: visibilizar las desigualdades generadas por el modelo neoliberal y conseguir ayuda alimentaria para las organizaciones de base con las que trabajaban (Entrevista 10). Al respecto expresa una militante de la CNPL y posterior coordinadora provincial de Barrios de Pie

---

<sup>63</sup> El 14 de mayo de 1995, Ramón Bautista Mestre en su fórmula con Luis Molinari Romero había ganado la elección con el 47,2% de los votos en un contexto de altos índices de desocupación - que registraba 18,6% en abril de 1995 -, crisis económica y alta conflictividad a nivel provincial.

<sup>64</sup> La ley 8472 fue sancionada el 22 de junio de 1995 y publicada en el Boletín Oficial el 21 de julio de 1995. La ley 8482 fue sancionada el 20 de julio de 1995. (Arriaga et al., 2012)

<sup>65</sup> Le siguen el Bloque Piquetero, la CTA y el PO, entre otras.

Ahí hubo un montón de prensa porque fue la primera vez en el país que vamos a la puerta del súper no a saquear sino a cerrar la puerta y explicar que tenemos necesidades...El primero fue en la Colón, a un Americanos, nos fue bárbaro, y ahí empezamos y llegamos a hacer acuerdos hasta con el Libertad de mercadería, mucha mercadería para alguna campaña de la organización, bancábamos la copa de leche, algunos comedores y algo de mercadería para la gente que tenía así las necesidades más gruesas. (Entrevista 3)

Si bien estas primeras acciones lograron visibilidad pública, el sentido que le daba el título de la nota publicada por el diario de mayor tirada local -“Supermercado obligado a donar alimentos”- (La Voz del Interior, 20/06/1996, p. 2.6A) no iba en el mismo sentido que el que Córdoba desde Abajo proponía como modo de intervención en el espacio público

el objetivo que teníamos era generar un hecho político, cuestionar el hambre, la marginalidad, en ese momento lo más simbólico en la sociedad, el mensaje del neoliberalismo: está todo bien, no hay hambre, hay fiesta, fashion, todo, todo eso, el uno a uno, y la pobreza extendida en los niveles terribles. (Entrevista 10)

Entre 1996 y 1997 se repite este tipo de acciones de protesta promovidas por Córdoba desde Abajo, con el mismo fin y en sintonía con otras realizadas en otras provincias del país. Una de las iniciadas en Córdoba, recordada por sus referentes como la acción de protesta más significativa de esos años, por la organización que demandó y el impacto político en términos de la visibilización pública de la problemática del hambre y la pobreza, fue la desarrollada en la víspera de la navidad de 1996 con la consigna “una navidad para los pobres” (Clarín, 24/12/1996).

Para entonces, la prensa local comenzó a nombrar a estos actores no sólo como “villeros” sino como “desocupados”, en un contexto nacional en el que emergían en la escena pública las organizaciones de desocupados con esta y otras modalidades de protesta. En mayo de 1997 se registran en Córdoba los primeros cortes de ruta en el marco de una masiva protesta a nivel nacional de las organizaciones de desocupados. Entre los actores que el diario local identifica como participantes se encuentran la Coordinadora de Desocupados, el Movimiento de Trabajadores por la Resistencia y “desocupados e indigentes villeros” de zonas periféricas de la ciudad (La Voz del Interior, 28/5/1997). Las acciones se produjeron en la ruta nacional 9, en el Camino a 60 cuadras y en la ruta provincial 5, que comunica a la

capital con la localidad de Alta Gracia y en la que había participado una organización vecinal integrante de Córdoba desde Abajo (Franco y Medina, 2012). Luego de dos días, el gobierno provincial dispersó a los manifestantes de la ruta 5 con la acción represiva de la policía de la provincia.

Los cortes de calles en demanda de alimentos al gobierno provincial, la represión policial como principal respuesta del Estado, seguida de pronunciamientos del gobernador que deslegitimaban estos reclamos al caracterizarlos como de “mala costumbre” y asociarlos a la presencia de “activistas de ultraizquierda” entre los manifestantes, continuaron en la ciudad en el mes del aniversario del Cordobazo. De la conmemoración que realizó la seccional Ferreyra de la UOM, sobre la ruta 9, también participó Córdoba desde Abajo (La Voz del Interior, 30/5/1997, 31/05/1997).

Desde entonces, se inauguraba en Córdoba el corte de ruta como formato de protesta que reunía a diferentes actores e identidades y organizaba la demanda alrededor de la asistencia estatal en la forma de alimentos, planes de empleo y otras políticas sociales.

Estos cortes que congregaban a distintos actores en demanda de asistencia estatal a través de la entrega de alimentos, planes de empleo y otras políticas, visibilizaban la profundidad de la crisis económica y social, la dificultad de las políticas diseñadas en los distintos niveles del Estado para responder a las demandas y resolver los conflictos y el crecimiento y movilización nacional de organizaciones que asumían para sí una identidad piquetera. Fundamentalmente luego de las puebladas de Cutral Co, Plaza Huincul y Tartagal, estos colectivos comenzaron a reorganizar experiencias anteriores de trabajo territorial (Franco y Medina, 2012).

Ese fue el caso de Córdoba desde Abajo que en 1999, con la decisión de la CNPL, se diluyó para constituirse como un frente barrial autónomo, la “CTA de los barrios”, dentro de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). La CTA, caracterizada por la CNPL como una organización sindical no burocrática -y la primera que por entonces reconocía una relación entre trabajo y desempleo-, se proponía nuclear y reorganizar el trabajo de diversas organizaciones del país con inscripción territorial en un mismo espacio político. Se trató de un cambio profundo en términos organizativos en tanto implicó el paso de

una estructura de inserción local a una de nivel nacional en articulación con distintos actores.

La decisión fue tomada en el marco de la estrategia de la CNPL de construir un “nuevo proyecto nacional” frente al “modelo liberal”; un plan de lucha que, como señalan en los documentos aprobados del 3º Congreso Nacional, integre a distintos sectores sociales y que implique

(...) soberanía frente a los poderosos del orbe, con crecimiento económico y una más justa distribución de la riqueza, con inserción en el mundo pero a partir del mercado interno vigoroso que integre en un pie de igualdad a todas las provincias, con un Estado fuerte que cuide del patrimonio nacional, defienda al débil y controle al poderoso, donde haya igualdad real de oportunidades para todos, trabajo y justicia social con democracia en serio, participativa, sin represión ni impunidad. (Corriente Nacional Patria Libre, junio de 2000).

Desde allí, retomando su trayectoria previa, desarrolló su trabajo territorial como “CTA de los barrios” y a través de la conducción del frente juvenil de la CTA. Los “barrios” fueron recuperados como parte de la identidad de la organización que permaneció cuando se creó Barrios de Pie.

Como espacio de acción y horizonte de construcción política resaltaba, por un lado, la importancia que desde sus comienzos tuvo el trabajo territorial barrial en el modo de concebir la política por parte de este colectivo y generaba una referencia concreta respecto de aquellos desde y con los que construir. La posibilidad del espacio barrial de congregar a distintos sectores y actores sociales, iba en sintonía con las definiciones de la CNPL en el Segundo Congreso de ampliar los sectores con los que construir un proyecto nacional de las características señaladas. Por otro lado, durante este período, fue un modo de definir una referencia propia y específica dentro de la CTA, diferente del resto de los sindicatos que representaban a los trabajadores asalariados y que conformaban la central.

Para las elecciones presidenciales de 1999 participó como Alianza Frente de la Resistencia. En esta oportunidad Néstor Moccia, histórico militante de Patria Libre fue como candidato a vicepresidente y Jorge Reyna, ex montonero y militante de la JP, como candidato a presidente. Los resultados electorales fueron magros. Sin embargo, los referentes de la CNPL entrevistados recuperan esta experiencia como parte de la estrategia de construcción de un espacio político más amplio.

En Córdoba entre el año 2000 y el 2001, la relación entre la FTV y la CTA de los barrios fue de tensión como en el resto del país. No obstante ello, fue una oportunidad también de ampliación del espacio de construcción junto con otros actores políticos, dentro y fuera del espacio piquetero. Entre el 2001 y el 2002 se registra el momento de mayor expansión del trabajo territorial de este colectivo, según expresan todos los entrevistados y se evidencia en la presencia pública de la organización, en la apertura de nuevos trabajos territoriales y en el acceso a una importante cantidad de planes que administró. Avanzamos sobre esto en los próximos apartados.

## **2. 2001. De la CTA de los barrios al Movimiento Barrios de Pie**

Durante el año 2001, las acciones que emprendieron la CNPL y la CTA de los barrios junto con el resto de los colectivos piqueteros continuaron impugnando la política del gobierno nacional y local. Sin embargo, en el marco de su inscripción dentro de la CTA, también participó de la institución de un espacio de articulación nacional como fueron las Asambleas Piqueteras que antecedieron a la construcción del Bloque Piquetero, de protestas locales como la resistencia a la privatización de EPEC, de la consulta popular que impulsó como parte del FRENAPO y, no sin discusiones con la conducción de la CTA, la CNPL decidió presentarse en un frente electoral para las elecciones legislativas de setiembre de 2001. CTA de los barrios recuperaba al piquete principalmente como formato de protesta desde el que construía su identidad.

En cuanto a las movilizaciones nacionales, CTA de los barrios participó de ellas y de los cortes de ruta convocados que se desarrollaron también en Córdoba. Entre ellas la "Marcha de la vida" organizada por la CTA y la ONG "Chicos del Pueblo", que con una duración de 15 días arrancó en La Quiaca y finalizó en Plaza de Mayo, en demanda de un futuro mejor para los niños de la Argentina y trabajo para los padres desocupados de todo el país. La movilización con trajes de colores y murgas fue protagonizada por más de 400 niños de distintas provincias y contó con la adhesión en Córdoba, además, de CTERA y el CISPREN (La Voz del Interior, 16/05/01, p. 4A).

Otras de las movilizaciones con envergadura nacional y expresión local de las que participó fueron las tres semanas de corte de ruta consecutivo convocadas por la I Asamblea Nacional Piquetera que iniciaron el 31 de julio de 2001. De ella participaron, entre otros actores, la FTV- CTA, la Corriente Clasista y Combativa y el Partido Obrero. CTA de los barrios fue una de las organizaciones que motorizó las acciones de protesta en Córdoba que describimos en el capítulo anterior.

También a nivel local, en el marco del plan de lucha construido por el Sindicato de Luz y Fuerza en contra de la privatización de EPEC que promovía el gobierno provincial, entre mayo y octubre del 2001 participó junto con diversas organizaciones sociales -incluyendo a Vecinos Autoconvocados, gremios, organismos de derechos humanos, partidos políticos y otros actores sociales- de marchas, concentraciones y cortes de las principales calles de la ciudad (la Voz del Interior, 101/05/2001, p. 8A; 11/05/2001, p. 7A; 16/05/2001, p. 9A; 26/07/2001, p. 4A; 30/10/2001, p. 7A).

Asimismo, a diferencia de la CTA que por entonces apostaba al FRENAPPO por fuera de la disputa partidaria electoral por predominar en ella su composición sindical, la CNPL decidió integrar junto con Encuentro Popular y el Partido Intransigente - entre otros partidos-, el “Frente Polo Social” encabezado por el sacerdote Luis Farinello para las elecciones legislativas del 2001. Si bien lograron una mejor elección que en los años anteriores con otros frentes -8,64% de votos válidos en provincia de Buenos Aires y 2,5% en Capital Federal-, su resultado fue marginal y fueron ampliamente superados por lo que se conoció como el “voto bronca”.

Además, participó de la Consulta Popular del FRENAPPO -frente articulador de las organizaciones del campo popular- impulsada por la CTA como estrategia de articulación de lo social con lo gremial, con el doble objetivo de situar una agenda social -un seguro de empleo y formación para los jefes de familia desocupados y una cobertura previsional- y promover la unidad de los sectores en lucha (Armellino y Pérez, 2003). La consulta se realizó entre el 13 y 16 de diciembre de 2001 y según los propios organizadores, alcanzó los 3.200.000 votos. En Córdoba, como parte del trabajo político, semanas previas a la consulta se hicieron talleres educativos en distintos barrios en donde CTA de los barrios trabajaba y también en la universidad.

Sin embargo, las diferencias con dirigentes del espacio de la FTV se fueron profundizando y en diciembre del 2001, se decidió crear el Movimiento Barrios de Pie, como estrategia de diferenciación de la Corriente Nacional Patria Libre respecto de la conducción de la CTA, en relación con la lectura de los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001 -de los que ni la CTA ni por entonces la CTA de los barrios participó- y respecto de la distribución de los recursos que llegaban vía planes sociales nacionales, en particular los Programa de Empleo Comunitario (PEC) que trabajaba la CTA. A fines de junio de 2002, tras la denominada “masacre” del puente Pueyrredón, se agregó además una diferencia con la postura de la FTV. En un comunicado de prensa firmado por la Mesa Nacional del Movimiento Barrios de Pie, el movimiento expresaba su repudio a la conducta del presidente de la Federación de Tierra y Vivienda, Luis D’Elía a quien se le adjudicaba haber abonado a la teoría represiva desplegada desde el gobierno de Duhalde y formalizaba su desvinculación de la FTV

Para mantener bien alto las banderas democráticas y opositoras que levanta la Central de Trabajadores Argentinos, el Movimiento Barrios de Pie ha decidido desvincularse de la Federación de Tierra y Vivienda, de la que formaba parte. Sin dejar de pertenecer a la CTA, nuestra Central (...). (Comunicado de Prensa MBP, 30/06/2002)

### **3. 2002-2003. La etapa piquetera y de resistencia del Movimiento Barrios de Pie: construcción de “poder popular”, desarrollo territorial y lucha en torno a la asistencia alimentaria y a los planes de empleo.**

Queremos una Argentina soberana, con trabajo genuino, sin hambre y sin represión. (Volante de distribución callejera, s/f. Fechas estimada con referentes del MBP, fines de 2003, inicios de 2004)

El Estado está ausente, el Estado no existe, en aquel momento, no? Entonces, el Estado somos nosotros, tenemos que generar tal nivel de referencia en los barrios para que la gente vea que nosotros podemos resolver el tema del hambre, el tema del trabajo, desde las organizaciones, desde la organización popular, y eso es "poder popular". (Entrevista 4)

Por decisión de la CNPL y de los colectivos que venían formando parte de CTA de los barrios -que no integraban la estructura de la CNPL-, a fines del 2001 e inicios del 2002 se disuelve esta organización y se crea el Movimiento Barrios de Pie, con una identidad por fuera de la CTA.

Aunque se trató de otro colectivo, el modo de organización interno definido como de “centralismo democrático” continuó a través de un sistema de delegaciones y coordinaciones por barrios o espacios de construcción territorial que a su vez integraban una mesa coordinadora provincial. Cada mesa además tenía su representación y espacio de coordinación a nivel nacional. La estructura estaba compuesta por militantes de Barrios de Pie y por otros que, además, eran responsables de algún frente de la CNPL. Con respecto a la cantidad de hombres y mujeres en los espacios de conducción, narra una de sus integrantes, que la presencia de éstas últimas se tematizó a medida que la corriente y el MBP empezaron a incorporar discusiones sobre perspectiva de género en el trabajo político (Entrevista 7). Para octubre de 2003, una de las modificaciones en el Estatuto del partido estableció una proporción mínima de mujeres -una de cada tres- integrantes de la Mesa Nacional.

En cuanto a la relación del partido con el movimiento, continuaba en la CNPL una concepción de lo “político” entendido como disputa para la transformación de un orden considerado injusto y que encontraba en el propio partido el sujeto con capacidad de motorizar estos cambios en alianza con otros actores sociales; es decir, el partido era el que tenía los recursos -experiencia y formación militantes- que podían aportar en el proceso de politizar “lo social” a través de su organización política; de construir “poder popular” organizando la lucha por la soberanía, contra el sistema neoliberal y en pos de un proyecto que incluyera a las grandes mayorías. “Lo social”, por su parte, si bien era concebido como central para la construcción de un movimiento del pueblo en su conjunto, atendiendo al tipo de trabajo que desarrolló la organización en este primer período, el mismo se concentró principalmente en el trabajo con personas que vivían en condiciones de pobreza y/o desocupación articuladas en torno al MBP. El desarrollo en los frentes sindicales y juveniles continuó siendo marginal en su política por estos años.

La auto-identificación del MBP con el “movimiento piquetero” o con el “conjunto de trabajadores y trabajadoras desocupadas” recorre las voces de los entrevistados y las publicaciones del MBP. La presentación que el movimiento hace en su página oficial al poco tiempo de su creación recupera esta última identificación

El Movimiento Barrios de Pie nació en diciembre de 2001 como producto de la necesidad de organizarnos a nivel nacional de un conjunto de movimientos de trabajadores y trabajadoras desocupados que veníamos luchando desde hacía tiempo en muchos barrios de diferentes provincias de la República Argentina. (Página Web Movimiento Barrios de Pie, 30/04/2002)

Dos años después, en una nota publicada en la revista del Movimiento Barrios de Pie, se recuerda su nacimiento como organización piquetera, del mismo modo en que lo hacen quienes fueron sus coordinadores provinciales en este período (Entrevistas 2, 3 y 4)

Es bueno recordar que nacimos como un movimiento piquetero y recordar que conservamos nuestra actitud rebelde hacia el engaño de la política malentendida, la política del clientelismo, la política del puntero, la política que quiere que nada cambie, la que es reflejo de estructuras mayores que manejan los traidores de la patria. (Revista Barrios de Pie, julio 2004, p. 2)

Asimismo, la identificación con el sujeto piquetero se reivindicaba en las canciones callejeras -a la voz de “piqueteros carajo, piqueteros carajo...”- y en una de las primeras banderas con que se mostraron en el espacio público callejero (Entrevistas 2).

Podemos conjeturar que la apropiación de uno u otro sentido identitario tuvo que ver con los distintos contextos y estrategias que fue asumiendo el movimiento: con la definición de construir un movimiento amplio al tiempo que aliarse con otros colectivos como los piqueteros entre 2001 y 2002; para disputar los modos en que las organizaciones piqueteras eran visibilizadas en la esfera público mediática en el marco de un proceso creciente de estigmatización mediática a fines del 2002 y comienzos del 2003; para presentarse dentro del espacio de la “transversalidad” conducido por Néstor Kirchner y en los territorios, como un movimiento “rebelde” que no abandonaba la lucha por los derechos de las grandes mayorías al incorporarse a la gestión del Estado y, al mismo tiempo, diferenciarse de ciertas prácticas del partido justicialista de las que históricamente la CNPL primero y luego el MBP, se habían distinguido.

No obstante los diferentes modos de nombrarse, es posible reconocer un consenso sobre la identificación con el piquete como formato de protesta que decidieron asumir en estos primeros tres años como movimiento y su participación en espacios y acciones junto con otros colectivos piqueteros.

En estos primeros años, los objetivos que se propusieron incluyeron “la lucha contra el hambre y la pobreza y la oposición a las medidas de los gobiernos subordinados a las exigencias del FMI”; el logro de “trabajo genuino”; y la solución inmediata a lo que definía como “problemas más acuciantes” como la educación, la salud y la provisión de los servicios indispensables para una vida digna. Sus principales antagonistas a nivel externo se construyeron en torno a los organismos de crédito internacional y las grandes potencias; a nivel interno, el gobierno y el Estado -en sus distintos niveles- en tanto éste se había corrido a favor de “intereses ajenos a las necesidades de las mayorías”, al servicio de los sectores económicamente dominantes (Página Web Movimiento Barrios de Pie, acceso el 12/11/2003). Entre sus aliados, actores nacionales e internacionales -en particular, el pueblo cubano, el Movimiento Quinta República de Venezuela y su referente Hugo Chávez con quien la organización había entablado vínculos en el 2001, y con posterioridad quien resultara presidente de Bolivia, Evo Morales- que apostaban a la construcción de lo que como colectivo caracterizaban como proyectos de país nacional populares.

Desde ese diagnóstico, el MBP definió como estrategia para generar “poder popular”, politizar lo social, “ocupando” el lugar dejado por el Estado “en cada Patria que es su barrio”-, en las distintas provincias donde desarrolló su trabajo territorial (Revista Barrios de Pie, junio 2004). En Córdoba, según relatan los coordinadores provinciales, el trabajo que había empezado en zona norte de la ciudad capital y luego se había extendido a la zona sur, llegó a abarcar en su momento de mayor desarrollo a unos 40 barrios de diferentes seccionales de la ciudad. Entre ellos, Ferreyra, Villa Siburu, Ituzaingó, Acosta, San Roque, San Jorge, Arguello, Renacimiento, Villa Libertador, Comercial, José Ignacio Díaz 3ra, Patricios, General Savio, Urquiza, barrios “de la seccional 13”, entre otros (Entrevista 2, 3 y 4).

El mismo se organizó principalmente alrededor de la lucha reivindicativa y del trabajo en los Centros Comunitarios donde funcionaban comedores, merenderos o copas de leche; roperos comunitarios; equipos para el mantenimiento y desmalezamiento de terrenos; espacios de apoyo escolar, programas de alfabetización y educación popular; bibliotecas populares; campañas de salud de

medición de “talla y peso” y formación de agentes de salud; talleres sobre violencia familiar; actividades vinculadas con la cultura y la comunicación; entre otras.<sup>66</sup> Las huertas, las panaderías comunitarias y otro tipo de emprendimientos como manualidades y artesanías, al menos en esta etapa en Córdoba, no lograron sostenerse en el tiempo o superar la producción a pequeña escala y artesanal (Entrevista 4). En términos organizativos, estas acciones se fueron articulando en torno a lo que luego constituirán áreas de trabajo; por entonces, área de educación, área de comunicación y la comisión de salud.

Quienes se acercaban a integrar el MBP -narran los coordinadores entrevistados- tenían entre sus tareas políticas trabajar y formarse en torno a alguna de estas áreas o espacios y también participar de las acciones de protesta público callejeras (Entrevistas 7, 2 y 3).

En el año 2002, la organización impulsó la campaña “El hambre no puede esperar”, con el objetivo de enfrentar la crisis alimentaria, vinculó estas acciones colectivas a nivel nacional. Como señala uno de los coordinadores provinciales en Córdoba

El Estado está ausente, el Estado no existe, en aquel momento, no?, entonces el Estado somos nosotros, tenemos que generar tal nivel de referencia en los barrios para que la gente vea que nosotros podemos resolver el tema del hambre, el tema del trabajo, desde las organizaciones, desde la organización popular, y eso es "poder popular". (Entrevista 4)

Si bien para los referentes entrevistados, el MBP surgió desde el comienzo como una organización explícitamente política, la posibilidad de construir este “poder popular” y un proyecto de cambio social encontró dificultades en la tensión entre quienes se acercaban al MBP centralmente para paliar necesidades y urgencias -a través de comedores, copas de leche o el acceso a planes sociales- y la posibilidad del propio movimiento de politizar esa realidad, en un contexto de expansión de la organización en términos de cantidad de integrantes y del trabajo territorial (La Voz del Interior, 01/7/2002, p. A2; Entrevistas 2, 3, 4 y 7).

Hasta tanto el Estado nacional y local atendió a las demandas alimentarias - primero como respuesta a la protesta o pedidos concretos y después con programas sociales o subsidios- el trabajo de los comedores y merenderos asumió la forma de

---

<sup>66</sup> Datos extraídos de una base propia elaborada a partir de información brindada por la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral -Córdoba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

“olla popular” y se sostuvo económicamente a través de la ayuda voluntaria y solidaria de empresas, vecinos e instituciones de la zona donde los centros estaban asentados.

Los primeros subsidios se consiguieron con movilizaciones y posteriores negociaciones con el gobierno de la provincia; luego, a partir de proyectos que se canalizaron a través de la Dirección del Programa Asistencia a la Familia. Los programas provinciales para personas desocupadas como el PPP o el Córdoba Confía, no fueron parte de las políticas a las que accedieron quienes integraban esta organización salvo algún caso puntual, según narran los entrevistados y se explicitaba años antes en una denuncia publicada en el boletín informativo antes de su constitución como MBP (CTA de los barrios, Comisión de desempleados zona Sur, octubre de 1999).

En cuanto a las políticas nacionales, el acceso al FOPAR para abastecer la comida que se distribuía en los comedores, a los planes Jefes y Jefas de Hogar y a los PEC para el desarrollo de proyectos productivos, también favorecieron la expansión del trabajo territorial en términos cuantitativos y cualitativos en Córdoba.<sup>67</sup> Al respecto señala una de sus coordinadoras provinciales

(...) FOPAR era un amor, porque era de pasar de la nada a que los pibes coman milanesa, yo tenía una alegría que no podía creer, ahí conseguimos para mil pibes. Era una demanda así brutal, situaciones de pobreza heavy heavy. (Entrevista 3)

Con respecto a los PJyJH en Córdoba, el acceso a los mismos se produjo, según narran los coordinadores provinciales, a través del CCM y del gobierno provincial y llegaron a sumar algo más que 4 mil quinientos en este período (Entrevistas 2 y 3). Los PEC, en cambio, se obtenían por negociaciones directas con el gobierno. A diferencia de lo que sucedía en el conurbano bonaerense, en el caso de Córdoba capital, el crecimiento se produjo principalmente desde los PJyJHD antes que desde los PEC (Entrevista 2, 3 y 4). No obstante ello, con los PEC se trabajaron algunos microemprendimientos de panadería y carpintería en barrios de la capital.

---

<sup>67</sup> Según Gradin, la cantidad de PJyJHD con las que contaba el MBP a nivel nacional fue menor que la de los PEC. Para octubre de 2005, BDP contaba con 18,741 beneficiarios del PEC distribuidos en todo el país (2015, p. 183).

El acceso a los planes no sólo fue una “escalada de recursos” que contribuyó a consolidar y ampliar el trabajo territorial sino también a construir relaciones con distintas instancias gubernamentales (Entrevista 4).

Un volante de distribución callejera de la propia organización -“Por Trabajo, dignidad y poder popular”- informaba que para el 2003 el MBP Córdoba congregaba a 19 comedores, donde se atendían dos mil niños y 23 copas de leche que llegaban a otros mil ochocientos. Para entonces, el colectivo, también había creado un nuevo dispositivo en su vinculación con el Estado y con otros actores sociales: una asociación civil con personería jurídica -Red de Comedores Solidarios- con la que accedió a subsidios nacionales y locales y otros recursos materiales para comedores y copas de leche.

Como desarrollamos en el capítulo 1, en el contexto de las reformas promovidas por los organismos de crédito internacional, los procesos de desestatización -y “comunitarización” (Danani, 2005)-, descentralización y focalización de la política social, habían promovido la transferencia de responsabilidades del Estado en favor de la conformación de un conjunto de “cuasimercados de servicios públicos y sociales” en los que, entre otros actores, las ONGs habían adquirido protagonismo en la “gestión de la pobreza” (Andrenacci y Repetto, 2018). La posibilidad de apropiación de los conocimientos técnicos -y luego también de los recursos económicos- para la constitución de estos colectivos fue muy desigual, en particular para quienes vivían en condiciones de pobreza y desocupación.

La construcción de esta asociación civil por parte del Movimiento Barrios de Pie como estrategia para el financiamiento de parte del desarrollo territorial junto con las acciones de protesta al Estado en demanda de política social, abría también la posibilidad de poner en tensión -al menos localmente- los procesos de “(re)mercantilización” de los lazos ciudadanos y de desresponsabilización del Estado.

Los años 2002 y el 2003 fueron de importantes movilizaciones, acciones de protesta y confrontación callejera a través de la ocupación del espacio público, principalmente con el formato de piquete y corte de ruta o calle. En la base de datos de acciones colectivas de protesta construida por el equipo de investigación, en ese período se registran 13 acciones de protesta organizadas por el MBP y 8 por el

Bloque Piquetero Nacional del que este colectivo formó parte (Gordillo et al., 2012). Las demandas públicas se formularon centralmente en torno al acceso a planes de empleo, alimentos y trabajo; también incluyeron la crítica a los representantes políticos.

Por entonces, Barrios de Pie se había integrado al Bloque Piquetero Nacional junto con el Polo Obrero, la CCC y la FTV. Diferencias históricas dentro de la izquierda impidieron que se lograra una expresión política de ese espacio a más largo plazo. Como señala Natalucci, se trató de una etapa en que la expectativa de la organización “(...) giraba en torno a poder consolidar una estrategia de movilización y de confrontación, donde se resaltaba el carácter destituyente de la política” (Natalucci, 2010a, p. 105).

En Córdoba, las protestas en reclamo de planes de empleo y alimentos e insumos para sostener los comedores y los merenderos se extendió a lo largo del 2002 (La Voz del Interior, 24/4/2002, p. 5A). Se agregaron también marchas junto con el Bloque Piquetero en reclamo de un boleto estudiantil y planes de capacitación para jóvenes (La Voz del Interior, 18/9/2002, p. 4A). Las movilizaciones estuvieron dirigidas principalmente al gobierno provincial y nacional pero también a empresas para demandar asistencia alimentaria (La Voz del Interior, 4/12/2002, p. 3A). La relación con el gobierno provincial y municipal también fue de oposición absoluta. Con respecto al por entonces intendente Kammerath, el MBD se involucró -junto con otras organizaciones- en el pedido de revocatoria de su mandato (Comunicado de prensa MBP, 06/10/2002). La convocatoria a la “Marcha contra el hambre” a comienzos de diciembre del 2002 se realizó con las siguientes demandas

Porque se aumenten los planes a \$300, ante la permanente suba de precios de la canasta familiar. Por trabajo para nuestros jóvenes, dignidad para nuestros viejos y futuro para nuestros niños. Contra la permanente obsecuencia del gobierno ante las multinacionales y el FMI. Que se respeten las firmas de la revocatoria municipal. Que se vaya Kammerath y De la Sota también. ¡Que se vayan todos! (Comunicado de prensa MBP, 02/12/2002)

La consigna “Que se vayan todos. Por otro 19 y 20” fue la que se trabajó para la convocatoria de la Marcha Federal con movilizaciones de las agrupaciones piqueteras en distintas provincias, incluyendo al MBP en Córdoba (Página 12, 16/12/2002, *en línea*). Al respecto, recuerda un referente coordinador provincial,

una de las canciones que se escuchaba en las movilizaciones: “Diputados son todos unos culiados; senadores son todos cagadores” (Entrevista 2).

Sin embargo, la conmemoración de la caída del gobierno de De la Rúa del 20 de diciembre encontró a las organizaciones divididas. En Córdoba, Barrios de Pie y el Bloque Piquetero realizaron un acto en Plaza de la Intendencia, donde exigieron el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el 19 y 20 de diciembre del 2001, así como la renuncia del presidente Duhalde, el gobernador De la Sota y el intendente Kammerath. Por su lado, la Multisectorial -de la que participaban la CTA, junto a la Izquierda Unida y diversos gremios y asambleas vecinales- confluyó en el Patio Olmos, donde se produjeron acciones contra edificios asociados con las políticas de los años '90 en el imaginario del activismo: el propio Patio Olmos y la sede de la UCR (Franco y Medina, 2012).

A lo largo del año 2003 continuaron las movilizaciones exigiendo aumento de salarios, planes, subsidios para desocupados y alimentos. Tras lo que el MBP evaluó como “campañas malintencionadas” por parte del gobierno provincial que pretendía “involucrar a las organizaciones de piqueteros en el cobro indebido de planes Jefes y Jefas de Hogar”, el movimiento denunció el manejo clientelar de planes por parte de los partidos políticos y del gobierno provincial en el marco de la campaña electoral (Volante de distribución callejera “Por Trabajo, dignidad y poder popular”, año 2003). A mediados de año, la organización sacaba en Córdoba el volante “¿Sabías que los piqueteros luchan por ellos, por nosotros, por vos, por Ud...?”, en el que discutía con las representaciones que los medios reproducían sobre los piqueteros: la violencia, la vagancia, la molestia que generan los cortes de ruta, el cobro indebido de planes, entre otras. Comenzaba a opacarse el período en el que la construcción política que incluía al corte de ruta como modalidad predominante de intervención en el espacio público, había gozado de cierta aceptación pública; en particular, a fines del 2001 y comienzos del 2002, en el marco de la crisis económica, social y de representatividad y cuando aún se escuchaban cánticos de algunos sectores que versaban “cacerolas y piquetes, la lucha es una sola”.

En marzo del 2003, poco antes de las elecciones presidenciales, Barrios de Pie junto a otras organizaciones piqueteras realizaron importantes marchas en todo el país

rechazando lo que denominaban la “farsa electoral” (La Voz del Interior, 12/3/2003, p. 3A). En esas elecciones, el movimiento llamó a sus militantes a votar “que se vayan todos” (Franco y Medina, 2012).

Al poco tiempo de la elección de Néstor Kirchner como presidente del país, se cierra la etapa de “resistencia” de Barrios de Pie y se abre una nueva temporalidad que Natalucci (2008) nombra como de “institucionalización del reclamo” y que nosotros proponemos caracterizar como de participación en la coalición de gobierno, de disputa a través de (y en) la gestión del Estado y de reconfiguración del trabajo territorial. Sin embargo, esta definición de la CNPL y del MBP no fue inmediata sino producto de prolongados debates internos a lo largo del año 2003.

### ***3.1. Cuando la participación institucional se articula con la protesta. La experiencia de integración al Consejo Consultivo de Políticas Sociales de Córdoba.***

La masificación de los planes de empleo durante el gobierno de Eduardo Duhalde había sido acompañada por la constitución de los Consejos Consultivos, tal como desarrollamos en capítulos anteriores. En el caso de la CNPL, si bien había definido no participar en este espacio, en Córdoba, el Movimiento Barrios de Pie se integró a la estructura del Consejo Consultivo Municipal a mitad del 2002.

Según datos de entrevista, luego de la destitución del por entonces presidente del CCM -representante de la Mesa de Desempleados de la Ciudad de Córdoba-, el movimiento aceptó una dirección compartida rotativa semestral desde mitad del 2002 y durante el 2003 y fue un integrante de este movimiento, Ricardo Pucheta, quien la asumió.<sup>68</sup> En el año 2005, en el período de “normalización” del espacio, cambió el responsable de esta organización, asumiendo ese rol Marta Juárez (Entrevista 4). Se trató de la primera experiencia del MBP en la participación en un espacio de control y administración de políticas sociales a nivel del Estado; un vínculo distinto al que venía teniendo, principalmente a partir de la protesta o, su contracara, la represión.

---

<sup>68</sup> Los datos acerca de la destitución o no de Olmos de la presidencia surgen de las entrevistas realizadas en el marco de la investigación y de la publicación del Sehas-CENOC (2005). Sin embargo, según notas periodísticas y un oficio respondido a la fiscalía N°3 en junio de 2004 (en Sehas -CENOC, 2005) señala que entre julio y octubre de 2002, la conducción estuvo a cargo de la Mesa de Desempleados de la Ciudad de Córdoba, Barrios de Pie y Vecinos Autoconvocados.

Como lo venimos señalando en otros capítulos, también los integrantes del MBP refieren a la conflictividad de este espacio, en particular, por la importante participación de las redes punteriles del delasotismo y el manejo poco claro de los recursos económicos vinculados a los planes que se cobraban y a los proyectos que se subsidiaban.

El MBP participó de la exposición de proyectos de destinatarios del plan JyJHD que había propuesto la conducción del Consejo, como modo de transparentar parte de estos procesos. El 10 de diciembre del 2002, en el marco de la marcha por el día Universal de los Derechos Humanos que se realizó en el centro de la ciudad -con la consigna “Marcha contra el hambre, la miseria y la impunidad”, acompañada de la instalación de una cuchara gigante- Barrios de Pie se movilizó y expuso algunos proyectos y productos que realizaban quienes cobraban PJyJD en una Feria de Artesanías en la plaza San Martín de la ciudad (La Voz del Interior, 11/12/2002, p. A4).

Junto con otras 15 organizaciones -incluyendo a VA- y la Municipalidad, el Movimiento contribuyó a la movilización del Consejo para el desarrollo de acciones de protesta público callejeras y de presentación del amparo judicial -al que nos referimos en el capítulo 3- para que el Ministerio de Trabajo de la Nación restituyera 11 mil planes JyJHD que habían sido dados de baja el mes anterior y para el pago de otros 8 mil planes a quienes habían completado sus planillas y no habían recibido el pago hasta el momento. (La Voz del Interior, 25/10/2002, p. A3; Entrevistas 4 y 2).

Los conflictos hacia el interior del CCM y en torno a la gestión de los planes continuaron en los años siguientes. La combinación de protestas, presentaciones judiciales, comunicados de prensa, cartas a la municipalidad y a la administración de planes, fueron reiteradas por estos años. No obstante su complejidad, la participación en este espacio le permitió al Movimiento en Córdoba conseguir PJyJHD, vincularse con distintos actores sociales y participar de una experiencia de aprendizajes relacionada con la administración de las políticas sociales; práctica que requirió de una serie de conocimientos y muchas veces se desarrolló con una temporalidad y una lógica diferente a la del trabajo territorial.

En marzo del año 2006, el MBP decidió retirarse de este espacio. En un comunicado al respecto, se mencionaba que la renuncia fue presentada con la movilización de alrededor de 100 coordinadores y delegados del Movimiento Barrios de Pie frente a la sede del Consejo Consultivo de Córdoba y el argumento principal que motivaba la renuncia era la falta de democracia en este espacio, su vaciamiento de contenidos y su conversión en “en un simple apéndice del gobierno de De la Sota” (Indimedia.org, 01/03/2006, *en línea*).

#### **4. 2004-2006. Participación popular para una Argentina que cambia.**

##### **La inclusión en la gestión del Estado nacional y local.**

Así como en nuestro nacimiento supimos ganar las calles para expresar el repudio a las política neoliberales que nos dejaron sin trabajo y con hambre a nuestros chicos, hoy los lugares ganados en la gestión tienen para el Movimiento Barrios de Pie los mismos objetivos: construir un nuevo proyecto de Nación con participación ciudadana, justicia y dignidad para todos y todas. (Revista Barrios de Pie, mayo 2005, p. 2)

Tras la asunción de Kirchner a la presidencia, Barrios de Pie evaluó que las condiciones políticas habían cambiado y que se abrían oportunidades favorables para el accionar del Movimiento. Entre otras, con el llamado a nuevos sectores a formar parte de un proyecto de “transversalidad”, la apertura a que se incorporaran en espacios de gestión estatal y, por su intermedio, a que el propio Estado recepcionara las demandas que venían sosteniendo los movimientos de desocupados y generara políticas para abordarlas.

En particular, entendían que las políticas impulsadas por el nuevo gobierno expresaban importantes definiciones contenidas en los documentos del 3º Congreso Nacional realizado por la CNPL en junio del 2000 y su apuesta de creación de un nuevo proyecto nacional.

A comienzos del 2004, Barrios de Pie decidió integrarse a la coalición de gobierno nacional y ocupar espacios de conducción de algunas secretarías a nivel del Estado. Como colectivo de desocupados, formó parte de lo que se conoció como el “Gabinete Piquetero” junto con otras tres organizaciones más: la FTV, el Movimiento Evita y el Frente Transversal nacional y popular. Asimismo, dispuso que un integrante de la Mesa Nacional de la CNPL participara como asesor de la Secretaría General de la Presidencia -a cargo de Oscar Parrilli - para coordinar las

políticas estatales en los territorios y el vínculo con las organizaciones sociales (Entrevista 1).

En junio de 2004, junto con el resto del denominado “Gabinete Piquetero”, más de 40 organizaciones sociales y de otros actores políticos, participó del lanzamiento del Frente de Organizaciones Populares (FOP) en un acto multitudinario en el Luna Park y de la Primera Asamblea de Organizaciones Populares (Página 12, 22/06/2004, *en línea*). Firmó también el documento “La hora de los pueblos”, como declaración de principios de la Asamblea, expresando el apoyo al movimiento nacional y popular que impulsaba el gobierno de Kirchner y el compromiso de las organizaciones populares para su profundización.

Con respecto a los modos de construcción política dentro de este espacio, si bien las organizaciones que lo conformaron acordaron dejar atrás el período de “resistencia” e iniciar uno de “ofensiva” (Natalucci, 2010c), concebían de diferentes modos la construcción dentro del espacio. Al respecto advierten Natalucci y Pérez (2010) sobre la reedición del debate setentista en la formulación de estas posiciones: “movimientista”, “tendencia” y “alternativa independiente”. El MBP se encuadró en la segunda concepción que compartía con la “movimientista” - sostenida principalmente por el Movimiento Evita- la apelación a la reconstrucción del movimiento nacional y el acuerdo con el liderazgo de Kirchner. Sin embargo, entendía que el actual proyecto era promovido por un gobierno en disputa y no acordaba con la conformación de un espacio con el PJ, en tanto representante de la “vieja política”. La estrategia de las organizaciones debía ser la construcción de herramientas político-electorales propias para dirimir adentro las contradicciones. A diferencia de esta perspectiva, la “alternativa independiente” sostenida por la CTA, se resistía a encuadrarse en un partido político y, si bien como colectivo apoyaba al gobierno, no acordaba integrarlo.

En esta dirección en Córdoba, el MBP participó de la gestión municipal conducida por Luis Juez del Partido Nuevo; partido que por entonces se proponía como una alternativa a la “vieja política” y al bipartidismo, y que había adherido al proyecto de “transversalidad”. La convocatoria al acto popular en apoyo a la gestión realizada en el Polideportivo Municipal de la ciudad capital el 2 de diciembre de 2004 se titulaba: “Por un Nuevo Proyecto Nacional Junto a Kirchner y Juez por

una Córdoba de Pie” (Revista En Marcha 218). Tras recuperar los principales logros del gobierno nacional y definir a los “enemigos de la patria y del pueblo”, convocaba a organizarse para gestar un “nuevo y gran movimiento” junto con Kirchner y Juez

En Córdoba, el desembarco de la nueva política y los anhelos de cambio, están ligados al proceso desarrollado por el Frente Nuevo de la mano del Intendente Luis Juez. Es necesario reconstruir la Ciudad de Córdoba desde su gestión, cómo también desde la amplia participación de los vecinos, luego de la destrucción producida por el tornado neoliberal de Kammerath y De la Sota. Así como extender la esperanza de cambio hacia el interior de nuestra provincia. (Revista En Marcha 218, 2004)

La decisión de integrarse a las coaliciones de gobierno nacional y local iba acompañada de una serie de transformaciones: una redefinición de la relación del MBP con un Estado que ya no era concebido como actor externo al que se demandaba sino como un espacio de construcción y en disputa; un cambio en los ejes de la movilización y el sentido de la protesta; y una transformación en su modo de trabajo territorial, menos centrado en el hambre, el desempleo y los planes sociales, más politizado y vinculado a políticas de promoción de “derechos” en articulación con políticas sociales nacionales y locales.

A nivel nacional, la participación en la gestión del Estado se desplegó centralmente desde la Subsecretaría de Asuntos Latinoamericanos del Ministerio de Relaciones Exteriores -por los vínculos que tenían en la región la CNPL y el MBP- y desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En esta última dependencia, el por entonces coordinador nacional de la CNPL -Jorge “Huevo” Ceballos- se hizo cargo de la Dirección Nacional de Asistencia Comunitaria en junio de 2004 y, en el 2006, ascendió a la sub secretaría. Otros militantes fueron ocupando cargos técnicos dentro del mismo Ministerio en distintas provincias del país, incluyendo Córdoba (Entrevista 1).

Según narran los militantes del MBP, la creación de la Subsecretaria de Organización y Capacitación Popular (SOCP) como parte del MDS y, dentro de ella, del mencionado programa de Promotores Territoriales por el Cambio Social, se construyeron con una modalidad afín a los objetivos del movimiento de trabajadores desocupados y el modo de trabajo del MBP en particular (Entrevistas

7 y 2). Con el objeto de formar redes de referentes territoriales constituidos en promotores comunitarios, el PTCS promovía acciones de capacitación en oficios, en salud preventiva, en comunicación alternativa o popular, formación política, encuentros entre referentes, entre otros. De este programa participaron también militantes de la organización en los roles de co-coordinador nacional del programa, facilitadores nacionales y provinciales y promotores territoriales.

En Córdoba, tuvo como formadores responsables a dos coordinadores provinciales del MBP. En ese marco, entre otras acciones, se creó en la provincia la Escuela de Promotores Comunitarios que desarrolló actividades, espacios de capacitación y talleres en distintos barrios y localidades en articulación con las distintas áreas del MBP. Como parte de las actividades, con la consigna “El asistencialismo es la contracara de la justicia social” (Alicia Kirchner), el primer encuentro de la escuela incluyó cuatro ejes de debate: comunicación, derechos humanos, educación y cultura.

El resto de los programas centrales que impulsó la Secretaría -y en los que se incorporaron a trabajar militantes de la organización- también recuperaron los modos de organización del trabajo y la experiencia del MBP: para la formación de promotores en salud comunitaria, el programa de “Alfabetización en Salud”; con objeto de promover la comunicación popular y comunitaria, el “Contalo Vos”; para favorecer la capacidad de gestión y de incidencia en las políticas públicas, el “Haciendo Historia”; y el programa “Vínculos”, para promover experiencias comunitarias en Educación popular (Gradin, 2015).

Por otra parte, a través de su rama juvenil Jóvenes de Pie, el MBP se integró a la dirección Nacional de Juventudes (DINAJU).

La decisión del MBP de incorporarse en la gestión del Estado en los distintos niveles no fue individual sino colectiva. Como señaló Perelmiter (2010), los militantes fundamentaron su involucramiento desde una doble narrativa: como “continuidad” con el trabajo social territorial a través del cual las organizaciones conforman una “red de resolución de problemas en los barrios” y como mediación entre el Estado y el territorio, “disolviendo las distancias entre la representación institucional y la representación sectorial”. Así sintetiza el sentido que para el MBP tiene esta relación una de las coordinadoras provinciales en Córdoba

que las necesidades reales lleguen al Ministerio y que las respuestas del Ministerio lleguen al territorio; era hacer un vínculo directo sin pasar por ningún ámbito burocrático. (Entrevista 3)

Esta concepción de la relación con el Estado suma otra tensión - a las ya trabajadas en el capítulo uno a propósito de las políticas sociales- respecto de uno de los tres indicadores de los procesos de democratización planteados por Tilly (2010) como “autonomía de los principales centros de poder con relación a las políticas públicas”. Desde la perspectiva del MBP, tras varias décadas en las que los gobiernos y el Estado se habían desentendido de las necesidades de grandes mayorías de la población que vivían en condiciones de pobreza y desocupación, la posibilidad de que en este nuevo contexto el Estado -y los miembros del MBP en tanto “funcionarios” que lo conformaban- construyera una política comprometida -no neutral- respecto de los intereses y necesidades de los mismos, daba cuenta de la preeminencia de los intereses colectivos sobre los individuales y de una mayor democratización de lo público.

En el caso de Córdoba, varios militantes del MBP participaron de la gestión de estos programas nacionales y también de otros locales promovidos por la nueva conducción municipal. Hacia adentro del Partido Nuevo, el MBP disputaba, “pechaba” -en palabras de una coordinadora provincial del MBP- para “armar el kirchnerismo dentro del juecísimo” (Entrevista 3).

#### ***4.1. La redefinición de la movilización y del trabajo territorial***

Justo con la participación en el Estado, las movilizaciones continuaron siendo un modo de construcción política y asumieron otras características. Menos centradas en su identidad “piquetera” y en la protesta, en este período estuvieron mayoritariamente vinculadas con la convocatoria a la participación y al apoyo a las gestiones de gobierno nacional y local, en el caso de Córdoba. La protesta, si bien mermó en intensidad no cesó y definió como adversarios a los actores que se oponían al proyecto nacional y popular. Entre ellos, el ALCA, los monopolios nacionales e internacionales, actores vinculados al terrorismo de Estado y representantes de la “vieja política”.

Entre las movilizaciones más significativas a nivel nacional en este período cabe mencionar las que acompañaron el cierre de la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata en noviembre del 2005; las de cada uno de los 24 de marzo Por la Memoria, por la Verdad y la Justicia; la marcha a Plaza de Mayo para la conmemoración del tercer aniversario de gobierno y la asunción de Héctor Cámpora en 1973, el 25 de mayo de 2006; entre otras.

En Córdoba, además, participó de otras movilizaciones como la realizada en apoyo a la gestión del gobierno nacional el 28 de mayo del 2004, en ocasión de la visita del presidente Kirchner a la ciudad capital cuando la Municipalidad lo declaró ciudadano ilustre y le hizo entrega de las llaves de la ciudad (Revista Barrios de Pie, junio 2004). En esa oportunidad, además, se inició un intercambio epistolar entre el presidente y los habitantes de los barrios nucleados en torno al MBP. Otras movilizaciones se produjeron en meses y años posteriores con la visita del Coordinador Nacional de Barrios de Pie y por entonces responsable de Organización y Capacitación Popular (SOCP) del MDS en diciembre de 2004 (Revista Barrios de Pie, diciembre 2004).

Entre las protestas nacionales, algunas entrevistas se refieren a los escraches simultáneos a estaciones de servicio Shell, Esso y Repsol, en apoyo a las gestiones presidenciales de control de precios que -junto con la política del gobierno- resultaron en la baja de los precios de la nafta al menos de modo temporal (El País, 07/04/2005, *en línea*). A nivel local, en marzo del 2006, el MBP realizó una movilización contra la definición del gobierno provincial de otorgar un subsidio de 9 millones de pesos a Aguas Cordobesas, empresa que además anunciaba por entonces un aumento tarifario (Indymedia, 22/03/2006, *en línea*). Esta protesta tenía lugar tras la decisión del gobierno nacional de rescindir el contrato de concesión con la empresa Aguas Argentinas y de poner a cargo de la prestación del servicio a Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) -empresa con 90% de participación estatal-. También se registran acciones de protesta con otro formato y visibilidad pública al gobierno municipal. Tal fue el caso de la juntada de mil firmas -en la plaza San Martín de la ciudad- contra “el Cospelazo” el 7 de mayo del 2004 para reclamar ante el incremento del costo del “cospel”, moneda que por entonces

se usaba para viajar en el servicio público de transporte de la ciudad (Revista Barrios de Pie, junio 2004).

A medida que se incrementaban los puestos de trabajo y los planes asistenciales daban paso al crecimiento en empleo formal, el trabajo territorial más asistencial comenzó a mermar y la actividad de los Comedores y Merenderos se transformó.

Con respecto a los programas creados a nivel nacional para avanzar en el paulatino cierre y traspaso del PJyJHD, con menor envergadura, el MBP Córdoba trabajó el Familias por la Inclusión Social. Recuperando su modo y experiencia de construcción territorial, a través de uno de los componentes de este programa realizó talleres de capacitación, apoyo escolar y copas de leche en cuatro barrios de la ciudad. Asimismo, junto con la Municipalidad se desarrollaron acciones de prevención primaria de salud y desarrollo comunitario en el marco del Plan de Seguridad Alimentaria que, en Córdoba, se gestionó como plan "Vale lo nuestro". Como ya lo mencionamos, el "Manos a la Obra" no fue un programa que el movimiento haya logrado trabajar en la ciudad de Córdoba por la complejidad que tenía, las características de la población que se nucleaba en torno a la organización y también por las limitaciones de la implementación del propio programa en la ciudad.

El cambio cualitativo sobre las formas de trabajo territorial en este período recorre los relatos de distintos coordinadores provinciales entrevistados. En Córdoba, con el programa Promotores Territoriales, los Centros Comunitarios albergaron "Unidades de Trabajo y Participación"

(...) convertimos nuestros coordinadores en promotores territoriales. Entonces, la compañera que era coordinadora de un centro comunitario, piquetera histórica, que andaba siempre pidiendo bolsones y haciendo lío por todos lados, ahora era una promotora territorial. Que viajaba a Chapadmalal, que se formaba, que hacía cursos, que aprendía a hacer talleres, que discutía la cuestión de, de las políticas sociales. Un salto en calidad, impresionante. (Entrevista 2)

La acción colectiva territorial ya no sólo se organizó alrededor de planes alimentarios y de asistencia del desempleo sino en áreas que funcionaron en estas "Unidades de Trabajo y Participación" y que promovieron la capacitación, la politización y construcción de "poder popular" entre quienes se agrupaban en torno al Movimiento.

Como parte de los modos de construcción política y organización interna, la definición de las actividades que desarrollaba cada Centro, fueron definidas de modo autónomo por sus integrantes en instancia de asamblea. Los coordinadores de cada espacio mantenían reuniones periódicas para la articulación de las distintas acciones. Con respecto a las áreas, cada una estuvo constituida por coordinadores, promotores, militantes y vecinos que -en tanto integrantes del Movimiento- tenían como responsabilidad política participar. Su coordinación estaba a cargo de un profesional y un referente y militante barrial, como apuesta a conjugar el conocimiento teórico con el práctico y generar una relación entre distintos actores y sectores sociales. Los promotores eran vecinos referentes del propio barrio y los que permitían mediar la relación entre el espacio territorial y el área.

El trabajo en las áreas le permitió al Movimiento ampliar los actores y los sectores sociales con los que articulaba, reorganizar sus actividades y profundizar su trabajo territorial. Asimismo, fue creando las condiciones para legitimarse como sujeto político dentro de los territorios y entablar relaciones con otros actores sociales, en particular, el Estado nacional y local.

Vinculado con la transformación de la relación con el Estado y las nuevas orientaciones políticas del MBP, en esta etapa, las áreas y el trabajo territorial del Movimiento en los territorios fue asumiendo cada vez más un lenguaje de “derechos” y una identidad más vinculada a la de “trabajador/a desocupado/a” y a lo barrial. Su crecimiento y expansión estuvo muy vinculado con la participación del MBP en los espacios de conducción política y en la gestión del Estado nacional y local. Como se advierte en las acciones que desarrollaron las diferentes áreas en Córdoba y el propio despliegue del MBP en la gestión municipal, su crecimiento estuvo en estrecha relación con las políticas nacionales implementada a nivel local, su articulación con el gobierno municipal de la ciudad y las experiencias de trabajo y militancia desarrolladas por el propio colectivo.

En el año 2004, en el marco de la participación del MBP en la gestión del Estado nacional, impulsó la campaña San Martín “Argentina Somos Todos y Todas” con el objetivo de motorizar y visibilizar el trabajo territorial y de las áreas en las distintas provincias del país y promover el debate sobre el papel del Movimiento y el Estado en la construcción de un proyecto de país nacional y popular. “El año de las áreas,

el año de crecer” fue el título de la editorial de la Revista Barrios de Pie Córdoba (junio 2004), vinculando este proceso a la campaña. Las áreas con más desarrollo a nivel local fueron:

*Educación Popular.* Estuvo conformada por vecinos, estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario que se formaban en “educación popular” y se constituían en promotores comunitarios o alfabetizadores. Desde esta perspectiva pedagógica, política e ideológica, el área se creó con el objetivo de “democratizar el movimiento”, alfabetizando y aportando a la construcción de “poder popular”, sujetos políticos con capacidad de expresar una voz pública, según relata una de sus coordinadoras provinciales y responsable del área (Entrevista 9).

Las primeras actividades que impulsaron fueron los “apoyos escolares” para niños y niñas entendidos como espacios pedagógicos más amplios que los vinculados a la escolaridad

no era ir a hacer la tarea que le daban en la escuela, aunque esa era la demanda de los papás; sino, sobre todo, trabajar con actividades recreativas, artísticas, musicales y demás como para que los chicos pudieran darse cuenta de que son capaces. (Entrevista 9)

Esta iniciativa se potenció con el programa de Voluntariado de las Universidades Nacionales, aunque tenía una larga trayectoria dentro del frente juvenil y el trabajo territorial de la agrupación Venceremos. Al respecto, señala Natalucci (2008), el programa fue muy discutido por otras organizaciones universitarias que lo rechazaban en tanto no contemplaba un pago salarial o de honorarios. Sin embargo, para el MBP, él era parte de su estrategia mayor por instaurar otros valores, fundamentalmente la solidaridad frente al individualismo promovido por el sistema neoliberal.

También se desarrollaron talleres de Historia Argentina y Latinoamericana con las madres y padres en torno a algunas temáticas sobre las que se pretendía construir posicionamientos críticos. Entre otros temas se trabajaron: en el día de los trabajadores, el problema de la desocupación; en el contexto de la realización de la Cumbre de las Américas y de los Pueblos en el año 2005, se organizaron talleres para discutir “¿Qué es el ALCA?”; la participación de la mujer en los movimientos

sociales; la participación popular; el autodiagnóstico comunitario; y la formación de educadores populares.

Se desarrollaron programas de alfabetización para adultos. El primero fue el cubano “Yo sí puedo”, en articulación con la Municipalidad Córdoba. Con posterioridad, a nivel nacional y local, el MBP trabajó buena parte de las acciones del programa de “Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y Adultos - Encuentro”- (Resolución N° 686/2004) del Ministerio de Educación. Una de las referentes del Movimiento se constituyó en asesora del mismo y otra coordinadora aportó en el vínculo con las organizaciones sociales. En Córdoba capital, en el marco de su participación en la gestión Municipal y de la creación de la Subdirección de Adultos en el 2005, el MBP participó de la apertura de los Centros de alfabetización para estudiantes mayores de 15 años y aportó en el proceso de convocatoria y formación de alfabetizadores. La coordinadora del área de educación del Movimiento resaltaba como central ese trabajo realizado y la posibilidad de articulación con el Instituto Superior de Profesorado “Dr. Antonio Sobral”, a través de un convenio para que las prácticas docentes pudieran hacerse en el marco de este programa (Entrevista 9).

Además del trabajo de alfabetización, desde el Movimiento se aportó a la apertura de bibliotecas populares en diferentes barrios de la ciudad. Entre ellas, en el año 2004, en Colina Los Pinos y en General Savio (Revista Barrios de Pie, diciembre 2004).

Parte de estas experiencias y procesos desarrollados a nivel nacional entre los años 2003 y 2004 fueron sistematizadas en un libro elaborado por el área de Educación Popular del MBP, “Nuestras cabezas piensan donde nuestros pies caminan”. También allí se publicaron las intervenciones de educadores e intelectuales latinoamericanoss en el marco del Primer Encuentro de Educadores Populares organizado por el Movimiento Barrios de Pie en Julio de 2003.

*Salud.* Fue un área de mucho trabajo también y con una trayectoria previa dentro del Movimiento; en particular, con el desarrollo de campañas preventivas y medición de “talla y peso” en articulación con dispensarios de diferentes barrios de

la ciudad. En este período el trabajo se organizó en torno a la seguridad alimentaria y la salud reproductiva, en vinculación con el área de Género.

Una de las acciones que desarrolló en el marco de su participación en la gestión del Estado nacional y Municipal fue una Escuela de promotores en salud, con participación de la dirección municipal de Epidemiología de Córdoba, una ONG y Barrios de Pie. El trabajo en torno a este espacio incluyó el diseño de talleres, a cargo de promotores, para la formación y relevamiento de datos nutricionales. Esos datos sirvieron, además, para el reclamo de entrega de bolsones de sustitución nutricional y de acceso libre y gratuito a métodos anticonceptivos dispuestos por la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. A pesar de algunas dificultades para el desarrollo de esta escuela en el interior provincial, al MBP le permitió vincularse con la experiencia venezolana “Barrios Adentro” y participar activamente en el Foro Mundial de 2005.

Para junio de 2004, el MBP publicaba una nota en su revista denunciando casos de desnutrición en tres comedores de la ciudad que atendían a 145 niños y niñas y responsabilizaba al ministro de Desarrollo Social de la provincia y al gobernador por esta problemática. La nota se publicaba dos meses después de que el Movimiento hubiera participado de una marcha a dicho Ministerio para denunciar casos de desnutrición y reclamar un boleto sanitario, turnos médicos, vacunas, botiquines y controles ginecológicos gratuitos. “Luchando se consiguen cosas”, titulaba la nota sobre la movilización e informaba que a raíz de ella se habían conseguido botiquines para 13 comedores vinculados a la organización (Revista Barrios de Pie, junio de 2004, p. 1).

Por estos años, en conjunto con el área de género del MBP, también se desarrollaron campañas preventivas de enfermedades, talleres sobre planificación y violencia familiar. Asimismo, en octubre del 2005, con la consigna “La construcción colectiva de la salud es patrimonio de los pueblos”, se desarrollaron las Primeras Jornadas de Salud Sexual y Género en la Universidad Nacional de Córdoba. Las jornadas fueron un espacio de formación y articulación con una diversidad de actores. Contaron con la participación del secretario y sub- secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, profesionales médicas del Movimiento de Mujeres y del espacio Cronopiando, médicos sanitaristas y especialistas en

epidemiología comunitaria, la decana de la Facultad de Psicología, una integrante de la Mesa Nacional de la CNPL, por entonces consultora del Consejo Nacional de la Mujer, entre otros (Volante de distribución callejera, 2005).

*Cultura.* Las primeras dos actividades que realizó fue la producción de obras de teatro con vecinos de algunos barrios de la ciudad y que se convirtieron en “cortos”. Uno titulado “Soñando espero”, coordinado con el área de Género del Movimiento. Otro sobre analfabetismo, “La Voluntad”, coordinado con el área de Educación, en el marco del trabajo con los programas de alfabetización de adultos que se venían desarrollando. El corto obtuvo un premio en un concurso de la Secretaría de Cultura de la Nación que le permitió obtener algunos recursos económicos. Ambos fueron trabajados en talleres en los barrios de la ciudad (Entrevista 6).

“Buen cine por 2 mangos” fue el nombre de la actividad cultural, de sensibilización y formación, a través de la cual se transmitió la película “Memorias del saqueo” del cineasta Fernando “Pino” Solanas en distintos barrios y localidades de Córdoba en el año 2004 (Indymedia, 14/06/2004, *en línea*). Asimismo, el área desarrolló una experiencia de “teatro del oprimido” que se trabajó en Villa La Tela y barrio Acosta de la ciudad.

A principios del año 2006 la coordinadora provincial del área, Nacha Merchan, asumió como responsable de la Subdirección de Redes Culturales Comunitarias del Área de Cultura de la municipalidad de Córdoba. El trabajo en la subsecretaría se desarrolló en vinculación con la Secretaría de Cultura de la Nación. Los talleres de capacitación y actividades en los barrios favorecieron la construcción de vínculos con distintas organizaciones territoriales. En el marco de ese trabajo, se realizaron cinco “Aguantazos” en distintos barrios de la ciudad. Estos festivales -como aguantes a la cultura- implicaban una jornada completa de puesta en escena de una feria y el desarrollo de talleres de capacitación. También se promovió la creación de “Consejos Zonales de Cultura” para canalizar inquietudes y proyectos de distintos actores sociales (Entrevista 6).

Según narra su coordinadora, en conjunto con el área de Comunicación, aportó a la creación del grupo de muralistas “Callejón sin salida”.

*Género*, el área tuvo como prolegómeno un seminario destinado a agentes comunitarios con perspectiva de género que había organizado la Red de Mujeres Solidarias en la Escuela de Trabajo Social de la UNC. La iniciativa de construcción del área provino de las propias mujeres que militaban en la agrupación y que impulsaron una discusión sobre su papel en la conducción del espacio y en el resto de las actividades del movimiento; en particular, las de los comedores y copas de leche, principalmente sostenidas por mujeres que, a su vez, tenían como responsabilidad familiar tareas de reproducción y cuidado y que en muchos casos sufrían situaciones de violencia de género. El debate sobre la igualdad de género al interior del Movimiento fue adquiriendo más protagonismo en el inicio del nuevo siglo, a partir de su participación en distintos espacios y encuentros a través de los cuales fueron construyendo, además, relaciones con otros actores sociales. Entre ellos, el I Foro Social Mundial, en el Movimiento de Mujeres y en los Encuentros Nacionales de Mujeres a partir del año 2003 y en los Pre- Encuentros Nacionales de Mujeres en Córdoba (Entrevista 7; Revista Barrios de Pie, octubre 2004).

El impacto de estas discusiones en términos de una mayor democratización hacia el interior del Movimiento se plasmó en la modificación del estatuto de la CNPL incorporando un “cupó” mínimo de mujeres en los espacios de conducción, cuestión que también atravesó las discusiones sobre la conducción del MBP. También, en el desarrollo de estrategias -como espacios de cuidados de niños y niñas- y talleres de formación y discusión sobre “igualdad de género”, el rol de la mujer en las relaciones familiares, la aplicación de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable en Córdoba, la despenalización del aborto y el repudio a la violencia contra la mujer en los territorios en los que trabajaba. Algunos de estos talleres se articularon con otras organizaciones, entre ellas, el “movimiento de mujeres independientes, las Tesmoforias”, vinculado al colectivo de Centro de Vecinos Autoconvocados. En el año 2006, con la consigna “Porque estamos convencid@s de que todas/os somos responsables de generar condiciones de igualdad para mujeres y varones”, se lanzó la campaña “La violencia familiar es un problema de todos y todas” (Natalucci, 2008).

A fines del 2006, dentro del Consejo Nacional de Políticas Sociales, se creó el Programa de Fortalecimiento de Derechos y Participación de las Mujeres “Juana

Azurduy”. El programa estuvo conformado por un equipo de coordinación principalmente compuesto por integrantes de la CNPL y Barrios de Pie, bajo la coordinación general de una de sus principales referentes, Cecilia -“Checha”- Merchan. El programa tuvo por finalidad aportar a que las mujeres encuentren un Estado promotor y presente, la garantía de sus derechos y sensibilizar a la sociedad y a los actores estatales sobre la potencialidad de una cultura de equidad e inclusión. Entre los años 2006 y 2007, participaron de instancias de capacitación desarrolladas por el programa más de 81 mil mujeres de distintas localidades del país, incluyendo a Córdoba (Programa Juana Azurduy, Informe de Gestión 2006 – 2012). Su implementación permitió ampliar el trabajo del MBD en el área de género a nivel nacional y también avanzar en nuevas articulaciones, como la que surgió con distintos actores sociales a través del desarrollo de acciones conjuntas, como la creación de la cátedra Juana Azurduy con la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo; capacitaciones a mujeres detenidas en penales en articulación con distintas áreas de Justicia, entre otras (Entrevista 7).

*Comunicación.* Desde esta área se desarrolló el proyecto “Medios públicos para construir ciudadanía”, en el marco del programa de PTCS. El mismo incluyó talleres y capacitaciones de comunicación popular, principalmente destinados a corresponsales populares que tuvieron lugar en Radio Nacional, medio en el que la organización -por entonces Libres del Sur- desarrolló un programa radial semanal (Revista Barrios de Pie, mayo 2005).

Asimismo, ésta y otras áreas del MBP participaron junto con otras organizaciones de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y de las distintas actividades de debate en torno al derecho a la comunicación. La Coalición surgió a nivel nacional en el año 2004 en demanda de la democratización de las comunicaciones en nuestro país, que logró consensuar en una propuesta común: los 21 Puntos Básicos por una Nueva Ley de Radiodifusión para la Democracia, propuesta e iniciativa que se tomó como base para la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el año 2009. En el marco de estas discusiones, el MBP impulsó talleres de comunicación popular en los barrios; entre ellos, “Para Verte y Oírte Mejor” (Revista Barrios de Pie, octubre 2004).

También destacamos la producción de la Revista Barrios de Pie del Movimiento en Córdoba, a partir de junio del año 2004, tras la realización de la Campaña “San Martín”. La revista tenía por objetivo socializar y visibilizar el trabajo que realizaba el Movimiento en distintas áreas, barrios y localidades de Córdoba -y de otras provincias del país- al tiempo que aportar a la formación y el debate sobre temas y problemáticas locales, nacionales e internacionales que se abordaban en las distintas áreas. Los volantes y demás materiales de prensa de cada área no fueron producidos por este espacio en este período sino que cada una generaba sus propios productos comunicacionales.

Junto con el área de cultura, una escuela y organizaciones sociales de la zona de Argüello norte de la ciudad capital, aportó espacios de formación para la creación de la radio comunitaria la Rimbombante en el barrio en el año 2007 (Entrevista 8). Una de las militantes históricas de la CNPL, ex integrante de la junta ejecutiva del CISPREN y parte del programa PTCS, Gabriela Cabus, fue designada en julio de 2007 como nueva directora de Radio Nacional Córdoba.

En el contexto de un cambio de estrategia política de la CNPL y del MBP para la disputa de espacios político partidarios y la construcción de una nueva identidad como Libres del Sur, proceso en el cual diferentes integrantes de la CNPL y del MBP empezaron a constituirse en candidatos de fuerzas kirchneristas o aliadas, en el 2007 esta área aportó al desarrollo de las campañas comunicacionales (Entrevista 8).

*Emprendimientos y Proyectos Productivos.* Esta área nació en el marco del impulso al desarrollo de microemprendimientos, espacios asociativos y economía social a nivel nacional y de algunas experiencias que el propio Movimiento venía realizando para la gestión de programas sociales como los PJyJHD, los PEC y el MO. En Córdoba, su crecimiento fue muy incipiente por estos años.

En el año 2005 una de las coordinadoras provinciales del MBP y militante de la CNPL, Paola Fedrizzi, se incorporó como responsable de la Dirección de Desarrollo Territorial y Economía Social. Al poco tiempo, otra militante del Movimiento ingresó a la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad. Desde ambos espacios, una de las acciones que la Directora reivindica como la más importante fue el

desarrollo de un sistema de higiene urbana y limpieza en el barrio Bajo Pueyrredón junto con organizaciones de cartoneros y carreros y la fundación “El Faro”. La iniciativa se trabajó en articulación con el dispensario y con promotores territoriales. Se trató de una experiencia piloto que se pretendía ampliar con un centro de reciclado y replicar en otros barrios pero, al final de la gestión municipal, eso no se había logrado desarrollar (Entrevista 3).

El trabajo desde esta Dirección presentó muchas dificultades en términos de la capacidad de generar políticas para resolver las necesidades de los ciudadanos, según lo expresó a modo de autocrítica a su gestión y a la gestión Municipal la Directora entrevistada

(...) los tiempos del Estado nos mató... no poder resolver nada. Cuando te das cuenta estás tapado en papeles, siendo un burócrata, semi tapón de una situación... hicimos buenas experiencias en algún sentido y otras nos quedamos cortos. (Entrevista 3)

En la subdirección de Hábitat Popular de la Municipalidad de Córdoba también se había incorporado un militante histórico de la CNPL, Fernando Nizetich. En sintonía con la apuesta nacional de promover espacios asociativos a través del Programa Federal de Emergencia Habitacional - Primera Etapa, se acompañó el proceso de construcción de viviendas para personas desocupadas organizadas en cooperativas de trabajo en dos barrios de la ciudad: Cervecedores y Marqués de Sobremonte Anexo. En articulación con organizaciones sociales y sindicales -entre las que se encontraba el propio Movimiento y la FTV-, la Dirección se propuso la construcción de 112 viviendas a través de unas 28 cooperativas, en una primera etapa. Como desarrollamos en el capítulo 2, si bien esta iniciativa atendía a una necesidad importante de los habitantes de la ciudad, la cantidad de casas construidas fue muy escasa y existieron diversas dificultades para su finalización. Entre los principales problemas, resaltaba el subdirector, la falta de tierras estatales disponibles, dificultades administrativas que impedían la circulación fluida de recursos económicos, trabajo y materiales para que el proceso de construcción pudiera desarrollarse en los tiempos que demandaba y, en algunos casos, incumplimientos y mal manejo de fondos por parte de las propias cooperativas (Entrevista 5). Estas dificultades quedaron plasmadas en distintas

notas presentadas, entre ellas, la del Subdirector de Hábitat Popular al Director de la misma repartición de la Municipalidad el 28/08/2006 advirtiendo de problemas de flujo financiero para el avance de las obras y la del propio Intendente de la ciudad al subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios el 17/04/2007, informando sobre la rescisión de los contratos de algunas cooperativas por “incumplimientos” pese a los “numerosos e infructuosos intentos de reorganización”. Esta última nota evidenciaba la tensión que se presentaba entre la política de construcción de cooperativas de trabajo desde dispositivos y temporalidades estatales y el hecho de que esos colectivos en muchos casos eran más una congregación de personas generada ad hoc de esas mismas políticas sin soportes organizativos ni una subjetividad previamente construida como trabajadores cooperativos.

Una de esas cooperativas de vivienda que se armaron estuvo vinculada al colectivo MBP. Se llamó “Che Guevara” y funcionó en el barrio Cerveceros de la ciudad capital. A pesar de las dificultades administrativas y presupuestarias, esta cooperativa sí logró construir las 4 casas previstas.

Por otra parte, como desarrollamos en el capítulo 2, funcionarios del Movimiento que participaron de la gestión del Estado municipal junto con el intendente de la ciudad capital impulsaron el desarrollo del Plan Integral de Promoción del Empleo Local (PIPEL), para intervenir en el mercado de trabajo y disminuir los índices de desocupación. Entre las acciones que desarrolló este espacio se encuentran la organización de talleres de orientación laboral, recursos y créditos para empresas y autoempleo. Estas actividades confluyeron en el Observatorio del Mercado Laboral. Los destinatarios del plan fueron personas desocupadas, sub-ocupadas y beneficiarias de planes sociales, en particular del PJyJHD (Natalucci, 2008).

Según relatan los distintos militantes del Movimiento que se involucraron en la gestión del Estado municipal, el trabajo evidenció límites de la propia conducción del Estado y del MBP para generar las políticas que se habían propuesto (Entrevistas 2, 3, 7 y 5). Entre ellos, se destacan las vinculadas a los escasos recursos presupuestarios con que contaban las distintas reparticiones y programas, la lentitud y complejidad de la burocracia estatal respecto de los tiempos de los proyectos y las necesidades y, en algunos casos, las particularidades de los propios

proyectos impulsados. También algunas referencias puntualizaron en la diversidad de actores con distintas perspectivas políticas que componían el partido gobernante y la dificultad de profundizar el proyecto de gestión municipal

Una Dirección de Economía Social sin plata, complejo. Entonces arrancar es fácil porque arrancás con capacitaciones, pero si después no tenés recursos propios de la municipalidad y lo de nación también está complejo (...). (Entrevista 3)

#### ***4.2. 2006. El Estado y el gobierno en disputa. La conformación del Movimiento Libres del Sur***

Tras la derrota del Duhaldismo en la Provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2005, la CNPL y BDP iniciaron un proceso de discusión interno para construir una estrategia para la etapa que se habría camino a las elecciones del 2007. En abril de 2006, junto con el Partido Comunista Congreso Extraordinario, la Agrupación Martín Fierro, el Frente Barrial 19 de Diciembre y la Agrupación Envar el Kadri, crearon el partido político “Movimiento Libres del Sur” (MLS). El nombre, señalaron Natalucci y Perez, “expresaba el propósito de las organizaciones de fortalecer los lazos con los países de la región, especialmente con el proceso venezolano con el cual tenían relaciones previas” y alentaba a la “autodeterminación” de los países del Sur (2010, p. 107-108).

El objetivo era ampliar la identidad y el espacio de construcción de la CNPL y el MPB y nuclear a otras organizaciones que se inscribían dentro del kirchnerismo pero que no estaban directamente vinculadas con el Partido Justicialista. Su conformación reforzaba la estrategia de construir una referencia propia que les permitiera disputar y traccionar al interior del espacio transversal para la construcción de un proyecto político nacional, con capacidad de intervenir en diferentes poderes del Estado -como el Poder Legislativo- y en las distintas instancias gubernamentales, a nivel municipal, provincial y nacional.

En el contexto de las elecciones presidenciales del 2007, para ampliar la base social en sectores medios urbanos, el Kirchnerismo construyó una nueva coalición electoral apoyada en la estructura partidaria de la UCR denominada “Concertación Plural”. Con esta nueva alianza ganó las elecciones presidenciales con un 45% de los votos. Sin embargo, señalaba Mocca (2011), las elecciones habían mostrado un

fracaso de la “transversalidad” como estrategia para reestructurar el sistema de partidos, frente al papel preponderante del PJ y de la UCR en el armado electoral. El MLS, lo interpretó en términos de los límites de la “transversalidad” como proyecto y de que las organizaciones populares y, en particular el MLS, no iban a tener un papel preponderante en la conducción política del espacio.

En la editorial de la primera revista del MLS, “Patria Grande” (febrero 2007), Humberto Tumini se refiere a los dos grandes objetivos del 2007: acompañar con firmeza la gestión del gobierno nacional para ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta y profundizar el modelo sin declinar ante los enemigos de la Patria y, contra toda perspectiva posibilista, renovar la fuerza política. Ambos objetivos daban cuenta de la doble disputa del MLS dentro del espacio político: profundizar el modelo y una mayor distribución de la riqueza y construir una fuerza política por fuera de los partidos tradicionales -de lo que caracterizaban como la “vieja” política- incluyendo a las organizaciones sociales -en particular al propio MLS-; organizaciones a quienes, en esta editorial además, se las interpelaba para participar y protagonizar la disputa político partidaria.

Tras la elección presidencial del 2007, el Movimiento Libres del Sur obtuvo por primera vez dos bancas en la Cámara de Diputados Nacionales, una por la provincia de Buenos Aires ocupada por Victoria Donda y otra por Córdoba a cargo de Cecilia Merchán, tras una alianza con el Frente Cívico conducido por Luis Juez. Asimismo, consiguió representaciones en algunas provincias y municipios, como Córdoba, donde obtuvo un cargo en el Consejo Deliberante de la ciudad como parte del mismo frente, a cargo de Marta Juárez.

En Córdoba capital, el Frente Cívico había salido triunfante en las elecciones a la intendencia de la ciudad con la candidatura de quien había sido su vice intendente, Daniel Giacomino. No obstante ello, tras una denuncia de fraude electoral y el pedido de apertura de urnas, el partido representado en la figura de Luis Juez había perdido las elecciones a la gobernación de la provincia con el 36,4% de los votos frente al 37,17% que había obtenido el por entonces vice gobernador Juan Schiaretti. Las tensiones entre el gobierno nacional y el Frente Cívico -y como parte de él el MLS- se agudizaron cuando la justicia electoral resolvió a favor del gobernador electo y el Frente para la Victoria reconoció su triunfo. El Frente Cívico

esperaba del FPV un pronunciamiento público en apoyo a la denuncia presentada que éste último no realizó.

Si bien las estrategias de alianzas para la obtención de estos cargos fueron distintas en cada caso, a diferencia de elecciones anteriores en las que la CNPL había conformado “frentes” con resultados electorales marginales, éstos se consiguieron en el marco de su participación en el espacio político de conducción del gobierno nacional y de las estrategias que éste había desplegado para el triunfo electoral. Por otra parte, a diferencia de períodos anteriores, en el caso de estas bancas, las tres correspondían a mujeres militantes del espacio político.

Si bien escapa al recorte del período de tiempo de estudio de este trabajo, cabe mencionar que en diciembre de 2008, en el marco de la crisis política iniciada con sectores agropecuarios -“conocida como conflicto con el campo”<sup>69</sup>-, Néstor Kirchner decidió asumir la presidencia del PJ nacional y el MLS “rompió” con el gobierno kirchnerista. Sus referentes renunciaron a sus cargos públicos al entender que se trataba de un avance del PJ dentro de este proyecto político. La ruptura con el Kirchnerismo sumadas a las nuevas alianzas y posicionamientos de la conducción del partido a nivel nacional y local, fueron algunos de los motivos por los que algunos miembros de la conducción del MLS y del MBP decidieron dejar su militancia en este espacio político para continuar haciéndolo dentro del Frente para la Victoria -y/o en otros espacios políticos, en el caso de Córdoba-.

\*\*\*

Iniciamos este capítulo reconstruyendo algunos antecedentes relevantes en la constitución del MBP y luego analizamos las acciones de la organización en lo que identificamos como dos momentos distintos en su relación con el Estado y con los procesos de democratización y desdemocratización en Córdoba: el primero entre el año 2001 y el 2003 y el segundo desde el año 2004 al 2007.

Entre sus antecedentes, reconocimos a fines de los años ‘80 a la Corriente Nacional Patria Libre, como el espacio político que le dio origen al Movimiento y que constituyó una marca de nacimiento e historia posterior. Desarrolló acciones

---

<sup>69</sup> El conflicto cobró una escalada importante cuando sectores del agro se resistieron a la Resolución N° 125 emitida por el Ministerio de Economía de la Nación que establecía la implementación de retenciones móviles sobre las exportaciones de granos y oleaginosas.

públicas predominantemente de enfrentamiento al Estado, de “resistencia” y “desgaste” del modelo neoliberal y por fuera de las estructuras de los dos partidos por entonces hegemónicos y de la “burocracia sindical”. Al mismo tiempo, se propuso la participación en alianzas electorales aunque, hasta el año 2004, con espacios políticos y resultados electorales marginales.

Las fuentes territoriales desde las que se creó el MBP a fines del año 2001 surgieron, primero, de los frentes “juvenil” y “barrial” de la CNPL; luego, del colectivo “Córdoba desde Abajo”; y, a fines de los años '90, como parte de una estrategia de la CNPL de ampliación de las articulaciones con la burguesía nacional, de la “CTA de los barrios” dentro de la Federación de Tierra y Vivienda de la CTA.

El MBP se constituyó como organización de trabajadores desocupados y se identificó con el “piquete” como formato de protesta. Esta primera etapa en la historia de la organización incluyó experiencias de articulación con diferentes actores y organizaciones “piqueteras”; de crecimiento desde una perspectiva de los procesos de democratización principalmente centrados en la construcción de “poder popular”, a través del trabajo territorial -en torno a comedores, merenderos, copas de leche y espacios de alfabetización que funcionaban en Centros Comunitarios- y de la movilización callejera como acción colectiva de protesta contra gobierno nacional, local y el Estado y en torno a la demanda de trabajo, alimentos y políticas sociales.

El acceso a los planes, principalmente el PJyJHD, a bolsones alimentarios y subsidios provinciales, en el caso de Córdoba, implicó una “escalada de recursos” que contribuyó a consolidar y ampliar el trabajo territorial. Asimismo, habilitó la posibilidad de construir relaciones con distintas instancias gubernamentales, como la que desarrolló a partir de su primera experiencia de gestión institucional en el Consejo Consultivo de Políticas Sociales de la ciudad, y la construcción de una asociación civil con personería jurídica, la Red de Comedores Solidarios.

Respecto de la relación del partido con el Movimiento, la CNPL se configuró como el sujeto con capacidad para motorizar un nuevo proyecto de país en alianza con otros actores sociales, politizando “lo social”. Este, por su parte, si bien era concebido como central para la construcción de un movimiento del pueblo en su

conjunto, en este período se concentró principalmente en el trabajo con personas que vivían en condiciones de pobreza y/o desocupación.

La segunda etapa de la historia del Movimiento coincide con su incorporación a la coalición gobernante a nivel nacional. Por entonces, formó parte del “Gabinete Piquetero” y, en su interior, al sector que apelaba a la reconstrucción del movimiento nacional con el liderazgo de Kirchner. En Córdoba, el MBP participó de la gestión municipal del Partido Nuevo, conducida por Luis Juez, que había adherido al proyecto de “transversalidad”.

Constituido como un sujeto legitimado para construir políticamente a nivel nacional y local, su inclusión en los espacios de gobierno implicó diversas transformaciones. Su vínculo con el Estado se concentró en acciones principalmente instituyentes que fueron interpretadas como continuación de la red de trabajo territorial para la resolución de problemas en los barrios.

Las movilizaciones se organizaron menos como protesta y más en apoyo a las gestiones de gobierno nacional y de Córdoba. La protesta, por su parte, se desarrolló contra aquellos que se oponían al proyecto nacional y popular y los representantes de la “vieja” política; en el caso de Córdoba, ello involucró al gobierno provincial.

El trabajo territorial local se amplió y diversificó e incluyó el desarrollo de un incipiente proceso de cooperativización. Desarrollado desde las distintas “áreas” del Movimiento, sumó a la asistencia alimentaria y a la alfabetización otras acciones de promoción de derechos, formación política, elaboración de materiales culturales y comunicacionales, entre otras acciones, tendientes a la politización y a la construcción de “poder popular”. Este despliegue a nivel territorial y en la gestión municipal fue de la mano, principalmente, de la implementación de políticas nacionales en articulación con las municipales y con las experiencias de trabajo y militancia desarrolladas por el propio colectivo.

La participación en ambas gestiones fue planteada en términos de disputa. A nivel nacional, sobre todo con el espacio del PJ y, a nivel local, con los sectores que no adherían al proyecto de transversalidad. Hacia el año 2006, tras la derrota del Duhaldiso en la Provincia de Buenos Aires, la CNPL y el BDP, construyeron con

otros actores una nueva referencia identitaria-el Movimiento Libres del Sur- para disputar y traccionar al interior del espacio transversal.

En el marco de su participación en el espacio político de conducción del gobierno nacional y local, para las elecciones del 2007 -a diferencia de comicios electorales anteriores en las que la CNPL había conformado distintos frentes y había obtenido resultados electorales marginales- el MLS consiguió dos bancas en la Cámara de Diputados Nacionales, una por la provincia de Buenos Aires y otra por Córdoba tras una alianza con el Frente Cívico conducido por Luis Juez. Asimismo, consiguió representaciones en algunas provincias y municipios, como Córdoba, donde obtuvo un cargo en el Consejo Deliberante de la ciudad.

Algunos aspectos de una gramática que propusimos leer en términos “movimientistas” mestizada con un modo de construcción de “centralismo democrático”, marcaron las propias prácticas y formas de organización internas de la primera etapa de surgimiento del MBP, entre los años 2002 y 2003. Al mismo tiempo habilitaron en el año 2004, su definición de incorporarse al proyecto de transversalidad y a la gestión del Estado y su posibilidad de participar de transformaciones societales más amplias. Las discusiones sobre las articulaciones posibles o no con otros actores sociales y, en particular, con el peronismo y la negativa a construir con el PJ, continuaron como tensiones a lo largo del período de estudio y marcaron las alianzas que pudo y no pudo construir el Movimiento con algunos actores sociales.

## **CAPÍTULO 5: ORGANIZACIONES SOCIALES, ESTADO Y PROCESOS DE DEMOCRATIZACIÓN Y DESDEMOCRATIZACIÓN.**

### **CONSIDERACIONES FINALES**

Estar en el Estado y estar simultáneamente fuera del Estado es una contradicción. Pero en el cabalgar esta contradicción radica la clave de la continuidad y defensa de la experiencia progresista de la democracia como construcción de igualdad.  
Álvaro García Linera, 22 de enero de 2020. Conversatorio Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.

En este capítulo retomamos los principales resultados presentados en la tesis y elaboramos una interpretación sobre las relaciones entre organizaciones sociales, Estado y procesos de democratización y desdemocratización.

Para ello comenzamos recapitulando el objetivo, las preocupaciones teóricas, la perspectiva y la red conceptual propuesta en el capítulo 1. Luego, teniendo en cuenta las dimensiones de análisis, retomamos los principales hallazgos de los capítulos 2, 3 y 4 para presentar las continuidades y desplazamientos entre las políticas sociales nacionales y locales, las condiciones de surgimiento y de desarrollo de las dos organizaciones analizadas, Centro de Vecinos Autoconvocados y el Movimiento Barrios de Pie, sus acciones colectivas y su vínculo con el Estado. Asimismo, si bien no fue el objetivo de esta tesis realizar un estudio comparativo entre ambos colectivos, el reconocimiento de algunos encuentros y desencuentros en su historia, permite reconocer ciertas recurrencias y diferencias entre las dos organizaciones y elaborar algunas consideraciones finales.

Hacia el final recuperamos la hipótesis y revisamos las relaciones entre las organizaciones sociales, el Estado y su aporte al desarrollo de procesos más o menos democratizadores. Como parte de las consideraciones finales, se dejan formulados desafíos y nuevos interrogantes.

#### **1. Recapitulando**

El objetivo principal de esta tesis consistió en comprender las acciones colectivas protagonizadas por el Centro de Vecinos Autoconvocados y el Movimiento Barrios de Pie en Córdoba, sus relaciones con el Estado -principalmente a través de las políticas sociales- y su incidencia en procesos de democratización o

desdemocratización en el período 2001-2007, en un contexto de crisis, redefinición y estabilización del orden social.

En ese camino, reconocimos diferentes estudios sociopolíticos que indagaron sobre estos procesos a fines y comienzos del nuevo milenio. Algunos de ellos ofrecían aportes para comprenderlos desde concepciones relacionales de lo social y lo político.

A partir de esos desarrollos, en el capítulo 1 de las tesis, recuperamos las contribuciones de una perspectiva posfundacional y de un enfoque pragmático de la política y construimos una red conceptual que articuló las nociones de “acción colectiva”, “gramáticas políticas”, “institucionalización” y “democratización”.

El estudio de las acciones colectivas aportó para comprender aquellas que emprendieron las organizaciones sociales en el espacio público con el fin de promover un nuevo orden social o conservar el existente, generar transformaciones parciales, conquistar nuevos derechos o simplemente con el objeto de luchar por la supervivencia como otro de los modos de reproducción social.

El reconocimiento de las gramáticas políticas diferentes desde las que emprendieron esas acciones se propuso como un modo de categorizar y diferenciar las formas de organización internas, las concepciones del cambio y el orden social, de la política, el papel y la forma de construcción del trabajo territorial, los modos de intervención en el espacio público y de interacción con distintos actores incluyendo al Estado.

La articulación de esta noción con la de institucionalización permitió enfocar las particulares pautas de acción que pusieron en movimiento las organizaciones para aportar a la conformación de dispositivos institucionales con la potencialidad de abrir al Estado y al sistema político a una interrogación democrática. En tal sentido, planteamos que lo contencioso de la acción no se oponía a la institución sino que era la propia acción de los movimientos y el conflicto el que podía interpelar -y verse interpelado por- al Estado -y la sociedad en su conjunto- respecto de las posibilidades de democratización. El Estado, por su parte, era comprendido como una relación social y un conjunto de estructuras, como campo de lucha y expresión de la lucha política, con sus particularidades en las distintas jurisdicciones y niveles.

Con respecto a los procesos de democratización o desdemocratización, los concebimos como dinámicos, incompletos, resultado de la contienda política y de la interacción entre reivindicaciones y contra-reivindicaciones. En sus extremos, sostuvimos, tendían a disminuir más o menos la desigualdad, a ser más o menos amplios e inclusivos, a generar más protección o desprotección y a favorecer más o menos la consulta. Los mismos podían ser promovidos desde el gobierno y el Estado y las organizaciones sociales, entre otros actores. Asimismo, pusimos en tensión este concepto con las características de unas políticas asistenciales que, cuando asumieron una perspectiva asistencialista -como en el caso de la mayoría en nuestro país en la década de los '90 y hasta el año 2004- tuvieron escasas posibilidades de aportar en un sentido de mayor democratización.

## **2. Continuidades y desplazamientos, encuentros y desencuentros**

Desde esta perspectiva y de lo trabajado en los capítulos 2, 3 y 4, podemos advertir algunas continuidades y desplazamientos en las acciones colectivas del Centro de Vecinos Autoconvocados y del Movimiento Barrios de Pie y su vínculo con el Estado así como ciertos encuentros y desencuentros en la historia de ambos colectivos.

Si bien ambas organizaciones emergieron con adscripciones identitarias y apuestas políticas diferentes a nivel nacional y desarrollaron sus acciones desde gramáticas políticas distintas, en un período determinado, compartieron algunos aspectos de los modos que asumieron la acción colectiva y el vínculo con el Estado. Este proceso tuvo lugar entre los años 2001 y 2003, en un contexto que coincidió en Argentina con la crisis del modelo neoliberal y, en Córdoba en particular, con la reforma del Estado iniciada a fines de la década del '90. Se trató de un período que delimitamos como una primera etapa en la historia del MBP y una parte del primer ciclo de la historia de CVA.

Con posterioridad a los cambios de gobierno nacional y municipal producidos en el año 2003, en el marco de una redefinición de las políticas promovidas desde el Estado y la convocatoria a la participación de las organizaciones a su integración en el gobierno de la ciudad de Córdoba, estos colectivos siguieron caminos diferentes

que los encontraron, sólo escasos meses, en la participación en la gestión municipal de la ciudad hacia el año 2007 y en el desarrollo de experiencias cooperativas.

Como reconocimos en el capítulo 3 de la tesis, en el caso del CVA, su doble referencia identitaria vecinal/ciudadana y “autoconvocada” e independiente de los partidos políticos se articuló centralmente en torno a la problemática del acceso a la vivienda como derecho. Formulada como demanda de “defensa de la vivienda única” como “bien social”, incluyó la exigencia de tarifas sociales, moratorias para el pago de impuestos, servicios o créditos -entre otras- y la suspensión de acciones contra los vecinos deudores de obras públicas. Esas demandas fueron construidas y sostenidas a través de un trabajo en los barrios que incluyó, entre otras, presentaciones jurídicas y/o administrativas y protestas con distintas intensidades de confrontación -hasta la ocupación de edificios públicos para petitionar- en espacios barriales y reparticiones públicas del centro de la ciudad capital.

Como parte de esta primera etapa de la historia de este colectivo, tras intensos debates sobre las políticas asistenciales, el trabajo y los modos de construcción política en torno a ellos, hacia el año 2002 incorporó la demanda de trabajo y planes de empleo y desarrolló experiencias de creación de microemprendimientos y espacios autogestivos en torno al PJyJHD en distintos barrios de la ciudad. En ese proceso, manteniendo su adscripción identitaria vecinal, recuperaba su histórica preocupación por el trabajo y confluía en estas demandas con el Movimiento Barrios de Pie.

A lo largo de todo el período, sus acciones asumieron algunos aspectos comunes con aquellas gramáticas que inscribimos como parte del “autonomismo”. En ellas, cobraron centralidad los mecanismos deliberativos asamblearios para la toma de decisiones, una organización interna rizomática y una concepción del cambio social entendida como lucha desde la construcción política local y barrial. A partir de una concepción del sistema político como un dispositivo de captura de la autonomía colectiva, lo político quedaba reducido al momento del conflicto y la protesta. Desde ese lugar, sus experiencias de participación en espacios estatales fueron acotadas y la relación de lo social con lo político tuvo que ver con la apuesta a la construcción de un poder popular paralelo entendido como forma de “autogobierno”. El proceso de construcción territorial a lo largo de todo el período

fue principalmente con mujeres y hombres adultos y adultos mayores de sectores económicos bajos o medios empobrecidos de distintos barrios de la ciudad.

Con respecto al Movimiento Barrios de Pie, de alcance nacional y vinculado en sus orígenes al partido Corriente Nacional Patria Libre -de izquierda combativa nacional, popular y revolucionaria nacida en Córdoba en 1987- se constituyó como colectivo de trabajadores desocupados a fines del año 2001. Tuvo entre sus antecedentes barriales al colectivo “Córdoba desde Abajo” hasta fines de los años ‘90 y, desde entonces, a la “CTA de los barrios” -dentro de la Federación de Tierra y Vivienda de la CTA-, como parte de una estrategia de la CNPL de ampliar los sectores con los que articular para enfrentar al neoliberalismo. Hasta el año 2003, sus acciones se centraron en la problemática del hambre y la desocupación y demandaron por trabajo genuino y políticas sociales.

En cuanto a la relación del partido con el Movimiento, la CNPL se autoconstruyó como el sujeto político con capacidad para motorizar un nuevo proyecto de país en alianza con otros actores sociales, politizando “lo social”. Este último, por su parte, si bien fue concebido como central para la construcción de un movimiento del pueblo en su conjunto, se concentró principalmente en el trabajo con personas que vivían en condiciones de pobreza y/o desocupación articuladas en torno al MBP.

Desde mitad de la década de los '90, con ciertos rasgos de una gramática que propusimos leer en términos “movimientistas” que se amalgamó con un modo de construcción de “centralismo democrático”, marcaron las propias prácticas, y formas de organización interna de la CNPL y, luego, del MBP. Para la CNPL el cambio social podía pensarse en una primera etapa de resistencia y otra de ofensiva, de construcción de un movimiento nacional que impulsara un proyecto popular en el que las organizaciones eran concebidas como puentes de relación entre el pueblo y el Estado. Esta definición no se produjo sin discusiones dentro de la organización entre militantes con distintas trayectorias políticas y perspectivas ideológicas, tensiones que continuaron y que marcaron las alianzas que pudo y no pudo construir e incluso los conflictos por la inclusión o no del PJ en la conducción del gobierno nacional. Ello fue acompañado de una estrategia que incluyó la participación en alianzas electorales aunque, hasta el año 2004, con espacios políticos y resultados electorales marginales.

La primera etapa en la historia de la organización incluyó experiencias de articulación con diferentes actores y organizaciones “piqueteras”; de crecimiento principalmente centrado en la construcción de “poder popular”, a través del trabajo territorial en torno a las asistencia alimentaria y espacios recreación y alfabetización que funcionaban en Centros Comunitarios; y la movilización callejera como acción colectiva de protesta.

CVA y el MBP compartieron como forma de construcción política esta centralidad del trabajo territorial en los barrios como motor de las acciones colectivas expresadas en el espacio público. Hasta el año 2003, desarrollaron acciones de resistencia y confrontación contra los organismos de crédito internacional, el Estado y las políticas de ajuste del gobierno nacional y local. Además compartieron la protesta contra el proceso de reforma del Estado que se inició en la provincia de Córdoba a fines de la década del '90. Incluyeron entre sus opositores a los dos partidos por entonces hegemónicos en Córdoba y a nivel nacional así como a la “burocracia sindical”. En esas acciones confluyeron con otros actores, entre ellos, sindicales y piqueteros en las demandas vinculadas al trabajo y en la oposición a la privatización de empresas de servicios públicos promovidas por el gobierno provincial, con fue el caso de EPEC.

Para acceder a distintas fuentes de financiamiento y desarrollar algunos proyectos, entre mediados de los años '90 y comienzos de nuevo siglo, ambas organizaciones crearon asociaciones civiles -“ACEMOS” por CVA y la “Red de Comedores Solidarios” ligada al MBP- como dispositivos de vinculación con el Estado y con otros actores sociales.

Si bien su forma de vincularse con el Estado, en ambos casos, estuvo centrada en la protesta y demandas asociadas al trabajo y a las políticas sociales, habilitó un espacio de participación en la administración de políticas sociales en la conducción del Consejo Consultivo Municipal de Políticas Sociales. En el caso de CVA, su menor experiencia de articulación con otros actores se amplió a partir de su inclusión institucional en este espacio. Hacia los años 2005 y 2006, estos colectivos definieron renunciar al CCM por motivos similares vinculados con denuncias de prácticas clientelares por parte de las organizaciones que lo componían y su vínculo con el gobierno provincial.

Estas tensiones habían sido parte de los conflictos que atravesó este espacio de modo permanente desde su creación y que se articularon con otros que abordamos en el capítulo 2 de la tesis. Entre ellos, aquellos vinculados con las características masivas aunque no universales y asistencialistas del PJyJHD y su modo de implementación, seguimiento y control; con la pluralidad de las perspectivas político-ideológicas de los actores que lo compusieron; con las relaciones conflictivas entre los gobiernos municipales y el gobierno provincial; la disputa por la distribución de los recursos; entre otros.

Los programas que recibieron en este período ambas organizaciones fueron principalmente nacionales, el mencionado Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados y el FOPAR, el de Emergencia Alimentaria y –en menor cantidad- los PEC, en el caso del MBP. A pesar de las orientaciones similares de estas políticas respecto del resto de las promovidas en los años ‘90, habilitaron para estos colectivos más recursos, nuevas demandas, la posibilidad de ampliar el trabajo territorial –en el caso del PJyJHD fundamentalmente a partir de su componente comunitario- y desarrollar aprendizajes vinculados con la administración de las políticas sociales; práctica, esta última, que requirió de una serie de conocimientos específicos y se desarrolló con una temporalidad y una lógica muchas veces diferente a la del trabajo en los territorios.

Con respecto a la relación del Movimiento Barrios de Pie y de Centro de Vecinos Autoconvocados con el gobierno provincial, estuvo en sintonía con el vínculo que éste último construyó con otros colectivos de vecinos y desocupados. Como desarrollamos en el capítulo 2 de esta tesis, se trató de un modelo de política principalmente asistencialista, de disciplinamiento y de respuesta selectiva a las demandas que las organizaciones planteaban a partir de la protesta y/o la negociación y que incluyeron la entrega de módulos alimentarios y subsidios. Con el gobierno Municipal durante la intendencia de Kammerath la relación fue en términos generales de enfrentamiento y de conflicto en el marco de la participación de estos colectivos en el CCM y en el espacio que pidió la revocatoria de su mandato.

A partir del año 2004, en el caso del MBP, y del 2005, en el de CVA, inicia lo que delimitamos como otra etapa de su historia que coincide con la redefinición y

estabilización de nuevo orden político, económico y social junto con cambios de gobierno presidencial y municipal en Córdoba. Si bien ambos colectivos tuvieron valoraciones positivas de los dos gobiernos, sus vínculos con ellos fueron diferentes así como también las formas de construcción política y de intervención en el espacio público.

Como en el período anterior, el acceso a políticas sociales por parte de estos colectivos -y principalmente el MBP-, siguió siendo centralmente a partir de políticas asistenciales nacionales que el gobierno municipal implementó y desarrolló con un perfil propio.

Con respecto a CVA, en esta segunda etapa se produce un desplazamiento en términos identitarios. Si bien este colectivo no desaparece, la actividad central comenzó a girar en torno a la institución de la “Cooperativa de Vecinos Autoconvocados”. La creación de este colectivo se inscribió en la historia de los trabajadores “naranjitas” y recuperó la experiencia previa de construcción de espacios autogestivos y de trabajo vecinal- barrial sostenido por CVA años antes. Su gestación se producía en el marco de la institución de una política estatal municipal de estacionamiento medido y controlado en la vía pública -“de arriba hacia abajo”-. La orientación de esta política guardaba sintonía con las redefiniciones nacionales que proponían recuperar la centralidad del Estado -respecto del mercado- en la construcción de lo público y modificar la relación con las organizaciones sociales para incorporar sus problemáticas -en este caso la de falta de fuentes laborales- en la gestión municipal.

La creación de esta organización fue acompañada de un nuevo modo de construcción política vinculada al cooperativismo y sostuvo la negociación y la protesta como modos de relación con el gobierno municipal. Las demandas tuvieron que ver con mejorar las condiciones de trabajo para quienes integraban estas cooperativas y la ampliación de fuentes de empleo. Las mismas fueron planteadas más para tensionar las políticas al respecto antes que para destituir al gobierno.

En articulación con políticas nacionales, el desarrollo de los distintos programas municipales para el fomento de procesos autogestivos, el abordaje de derechos de las mujeres y el fortalecimiento del trabajo de promoción territorial, le habilitó a

CVA inscribir otros proyectos de estas características, generar algunas articulaciones y un mayor desarrollo del “Movimiento de mujeres independientes, Tesmoforias” creado por esta misma organización. Con este espacio articularon algunas acciones con el MBP y el Movimiento de Mujeres local y nacional.

Hacia el año 2007, y por solo unos meses, CVA tomó una decisión política por fuera de una gramática de construcción autónoma del Estado y del gobierno y aceptó la propuesta de integrarse en la gestión del Estado Municipal para trabajar en torno de lo que la organización había acumulado experiencia y conocimientos: la resolución de casos de ciudadanos con imposibilidad de pagar deudas impositivas.

Con respecto a la segunda etapa de la historia del Movimiento Barrios de Pie, la misma coincide con su incorporación a la coalición gobernante a nivel nacional. Por entonces, formó parte de lo que se conoció como el “Gabinete Piquetero” y, en su interior, del sector que apelaba a la reconstrucción del movimiento nacional con el liderazgo de Kirchner. En Córdoba, por su parte, participó de la gestión municipal del Partido Nuevo, conducida por Luis Juez, que había adherido al proyecto de “transversalidad”. Constituido como un sujeto legitimado para construir políticamente a nivel nacional y local, su inclusión en los espacios de gobierno implicó transformaciones en diferentes niveles.

En términos de sus modos de construcción política, supuso una ampliación y diversificación de los actores y las problemáticas que organizaron su trabajo territorial, menos centrado en la demanda de trabajo y planes sociales y más en acciones de promoción de derechos, de formación y un incipiente desarrollo de un proceso de cooperativización. Estos procesos fueron interpretados como continuación de la red de trabajo territorial para la resolución de problemas en los barrios y como mediación entre el Estado y el territorio.

En Córdoba, los Centros Comunitarios albergaron “Unidades de Trabajo y Participación” y el trabajo desarrollado desde distintas “áreas” que promovían la capacitación, la politización y construcción de “poder popular” entre quienes se agrupaban en torno al Movimiento. El crecimiento de estas áreas a nivel local y el despliegue del MBP en la gestión municipal estuvieron en estrecha relación con las políticas desarrolladas a nivel nacional en articulación con las generadas a nivel

municipal y con las experiencias de trabajo y militancia desarrolladas por el propio colectivo.

Con respecto a las movilizaciones, continuaron siendo un modo de construcción política menos centrado en la protesta y más vinculado a la convocatoria a la participación y al apoyo a las gestiones de gobierno nacional y local, en el caso de Córdoba. En cuanto a las movilizaciones en el marco de acciones colectivas de protesta, definieron como adversarios a los actores que se oponían al proyecto nacional y popular, desde los oligopolios y representantes del poder internacional hasta referentes de la “vieja” política. En el caso de Córdoba, ello involucró al gobierno provincial.

En su vínculo con el Estado, desarrolló acciones centralmente instituyentes, de gestión de dependencias estatales, de programas nacionales y otros promovidos por la nueva conducción municipal. La participación en ambas gestiones fue planteada en términos de disputa: a nivel nacional, sobre todo, con el espacio del PJ -en tanto representante de la “vieja política”- y, a nivel local, con los sectores que no adherían al proyecto de transversalidad.

En ese marco, hacia el año 2006, tras la derrota del Duhaldismo en la Provincia de Buenos Aires, la CNPL y el MBP iniciaron un cambio en la estrategia política de construcción dentro del espacio político nacional. A partir de entonces construyeron con otros actores una nueva referencia identitaria -el Movimiento Libres del Sur- para disputar y traccionar al interior del espacio transversal en vistas a la construcción de un proyecto político nacional, con capacidad de intervenir en diferentes poderes del Estado y en las distintas instancias gubernamentales.

En el marco de su participación en el espacio político de conducción del gobierno nacional y local, para las elecciones del 2007, el MLS ocupó lugares de representación en las listas nacionales y locales, incluyendo a Córdoba.

### **3. Potencialidad performativa e impacto político de las acciones de las organizaciones**

Hacia inicios del 2003, la pobreza y el desempleo se habían instalado en el país como problemas públicos al mismo tiempo que la crisis de los modos en que la

política había abordado las cuestiones del crecimiento económico y el empleo en Argentina. Entre los actores que aportaron a este proceso se encontraban las organizaciones de vecinos y desocupados, incluyendo al MBP y a CVA. Sin embargo, la temporal legitimación pública de los reclamos de las organizaciones de desocupados, los espacios de articulación que habían conformado y su relación con los vecinales comenzaban a mermar y a fragmentarse. Asimismo, la protesta como modo de planteo de los problemas públicos comenzaba a ser crecientemente deslegitimada por el gobierno y los medios masivos de comunicación.

Con respecto a la demanda de trabajo, planes de empleo y subsidios para jefes de hogar desocupados que habían sido sostenido como parte del plan de acción de la primera Asamblea Nacional Piquetera y, luego, la de un seguro único en el marco de la consulta del FRENAPO, tuvieron respuestas parciales.

Como señalamos en el capítulo 2 de la tesis, hasta el año 2004, las políticas asistenciales habían incluido programas descentralizados, comunitarizados y focalizados, en el marco de una baja capacidad estatal a nivel nacional y local para resolver problemas vinculados a la pobreza y al desempleo y de una escasa autonomía respecto de los centros de poder. Entre ellos, puede señalarse a nivel nacional -y con implementación local- el FOPAR, el plan de Emergencia Alimentaria -como Programa “A la mesa” en la provincia de Córdoba- y el Plan Jefes y Jefas de Hogar a partir del año 2002. Desde el año 2004, el programa Familias por la Inclusión Social y el Plan de Seguridad Alimentaria -con el nombre de Programa de Fortalecimiento Alimentario y Desarrollo Comunitario “Vale lo nuestro”-.

Ninguno de estos programas se asemejó a las demandas formuladas en el año 2001 en términos de un seguro o una asignación familiar sino que, con diferencias entre ellos, constituyeron políticas de transferencia de ingresos a cambio de una contraprestación o condicionamiento, de cajas de alimentos o de asignaciones monetarias para su compra, según el caso.

A nivel local, como parte del Consejo Consultivo Municipal, durante el período en el que lo condujeron estas organizaciones, consiguieron planes PJyJHD y aportaron acciones para que se sostuviera y ampliara el pago de este programa a una población mayor. Además, generaron pronunciamientos públicos con

demandas a distintas jurisdicciones estatales ante problemáticas sociales vinculadas con el PJyJHD, la falta de políticas habitacionales y la perspectiva punitiva de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno provincial, que fueron publicados en el diario de mayor tirada de Córdoba. Sin embargo, el Consejo no logró una respuesta del Estado por estos temas ni instalarlos en la sociedad como para que trascendieran su propia voz. Asimismo, si bien estos colectivos promovieron discusiones al interior del Consejo sobre el rol que el mismo podía asumir, no logró trascender su papel principalmente administrativo de políticas, en particular en torno al PJyJHD y, luego, el “Manos a la Obra”.

Como resultado de las estrategias y los modos de intervención en el espacio público de diferentes actores -incluyendo a los dos colectivos objeto de estudio- con la iniciativa y el protagonismo del Sindicato de Luz y Fuerza, se logró instalar en parte de la sociedad cordobesa la negativa a la privatización de EPEC, al tiempo que el gobierno provincial detuvo su política y conservó su propiedad estatal.

En cuanto a las demandas que venía sosteniendo CVA vinculadas con la defensa de la vivienda única, buena parte de ellas lograron ser tematizadas en el espacio público y tuvieron respuesta. Por ordenanza Municipal, se consiguió el retiro del “libro del SEVEN” de los vecinos que mantenían deudas por obras públicas y se establecieron acuerdos y planes de pago de deudas con Aguas Cordobesas y EPEC. Además, en febrero de 2002, la sanción de la Ley N° 8998 suspendió por 180 días los remates judiciales de viviendas únicas para familias pobres y desempleadas que hubieran contraído deudas y autorizó al Ejecutivo a prorrogar por tiempo indeterminado esa medida. Para el año 2003, se estableció una tarifa social para el pago de los servicios de luz para todos los habitantes de Córdoba.

Como señalamos en el apartado anterior, tras las elecciones realizadas ese año en todo el país, las políticas anunciadas por el gobierno nacional fueron en sintonía con la demanda de estas organizaciones, en particular, respecto de la reivindicación de lo nacional, la subordinación de la economía a la política, la recuperación del rol del Estado, la inclusión vía producción/trabajo/empleo, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de los vínculos con otros países latinoamericanos. La construcción de un proyecto de transversalidad que no fuera conducido por el PJ y que incluyera a las organizaciones en la gestión de gobierno, si bien no constituyó

una demanda de ninguno de estos colectivos, coincidió con su modo de construcción por fuera de los partidos hegemónicos y en ese sentido fue valorada positivamente por ambos. En este mismo sentido se leyó el discurso de la nueva conducción municipal, no obstante éste se asentaba en una retórica de la transparencia y la anticorrupción que –a diferencia del nacional- disolvía el conflicto propio de lo político.

A nivel nacional, la mejora de los indicadores macroeconómicos y de los índices de empleo constituyeron una respuesta paulatina y parcial a la demanda de trabajo de ambas organizaciones que también repercutió a nivel local. También las políticas sociales asistenciales nacionales iniciaron un proceso en ese sentido al proponerse una contrarreforma del modelo anterior, aunque no llegaron a concretarlo y sus principales programas conservaron algunos rasgos asistencialistas. De algunos de estos programas fueron destinatarios, entre otros, integrantes de las dos organizaciones como paliativo al problema de la pobreza.

Asimismo, la incorporación del MBP en la gestión de estas políticas en el Estado nacional y municipal, le permitió ampliar y fortalecer su red de trabajo territorial para la resolución de problemas en los barrios, incluyendo los de Córdoba, construir nuevas redes e iniciativas con otros actores sociales, instalar problemáticas vinculadas a ellas e instituir políticas estatales. En particular, el Programa Promotores Territoriales para el Cambio Social, se construyó con una modalidad afín al modo de trabajo del MBP que le permitió un crecimiento cualitativo. Este fue un programa al que accedió también CVA.

Con otros programas gestionados o implementados a través de diferentes áreas de trabajo, el MBP consiguió avanzar en acciones que modificaban la centralidad que antes había tenido la asistencia alimentaria y en su apuesta de construcción de “poder popular” a través de la formación y la promoción de derechos a la salud, a la comunicación, la alfabetización, la producción de materiales comunicacionales y una diversidad de acciones y espacios de participación barrial. Asimismo, inició un proceso de creación de una cooperativa de vivienda -la “Che Guevara”- y de solución acotada al problema habitacional a través de la implementación del Programa Federal de Emergencia Habitacional desde la gestión de la municipalidad. No obstante ello, por dificultades propias de la organización y de la

conducción de la intendencia de la ciudad, su participación en la gestión municipal expresó límites para generar las políticas que se habían propuesto y sedimentar cambios que recuperaran algunos aspectos de sus repertorios de deliberación y modos de construcción política desarrollados por el Movimiento.

También CVA participó de la creación de procesos cooperativos con la puesta en marcha de la “Cooperativa de Vecinos Autoconvocados” vinculada a servicios de estacionamiento medido y controlado de la ciudad. Ello tuvo lugar a partir del desarrollo de una política municipal al respecto -el “Plan de Inclusión Social y Economía Solidaria “Sí, nuestra gente vale”- que le permitió una respuesta parcial y, según los integrantes de la cooperativa, precarizada a la demanda de trabajo. El acceso al programa de “Productos y servicios éticos” de la municipalidad habilitó el desarrollo de otros proyectos autogestivos para los integrantes de CVA.

Además, la ocupación de un cargo por parte de una de las fundadoras y referentes históricas de CVA en la Municipalidad por escasos meses, permitió resoluciones parciales de casos de ciudadanos con imposibilidad de pagar deudas impositivas hacia fines del año 2007.

Finalmente, a diferencia de elecciones anteriores en las que la CNPL había conformado frentes y había obtenido resultados electorales marginales, en las del 2007, en el marco de su participación en el espacio político de conducción del gobierno nacional y local y de su reconocimiento como sujeto político partidario, el MLS consiguió dos bancas en la Cámara de Diputados Nacionales. Una de ellas fue por la provincia de Buenos Aires y otra por Córdoba, tras una alianza con el Frente Cívico conducido por Luis Juez. Asimismo, obtuvo representaciones en algunas provincias y municipios, como Córdoba, donde accedió a un cargo en el Consejo Deliberante de la ciudad.

#### **4. Organizaciones sociales, Estado y procesos de democratización.**

Como adelantamos en la hipótesis, pudimos corroborar que, en el período considerado, se redefinieron las relaciones entre lo social y lo político y, en particular, las de las organizaciones sociales y el Estado. Ello habilitó procesos de institucionalización en el sentido de la creación de nuevas pautas de acción y de los sujetos legitimados para hacer política. Sin embargo, este proceso a priori de

democratización no fue homogéneo ni en las políticas promovidas a nivel nacional ni entre las organizaciones sociales locales. Así mismo, tuvo una expresión paradójica en la política local.

Con respecto a las políticas nacionales desarrolladas a partir del año 2004, si las laborales, educativas y de salud avanzaron en un sentido de “contra-reforma” respecto del modelo anterior que había predominado hasta entonces, las políticas sociales asistenciales iniciaron un proceso en ese sentido pero no llegaron a concretarlo y conservaron algunos rasgos asistencialistas. A pesar de esta limitación que dificultó su aislamiento de las desigualdades en torno a las cuales los ciudadanos organizaban su vida, la creación de una Red Federal de Políticas Sociales, su aspiración a vincularla con la política económica, a potenciar procesos autogestivos, de cooperativización y de desarrollo de la economía social así como a promover otros modos de inclusión social, formaron parte del diseño de estas políticas y se proyectaban a futuro en un sentido contrario al que había predominado en los años ‘90.

Estas transformaciones en el diseño de las políticas fueron de la mano de una redefinición de las relaciones con algunos centros de poder que habían tenido injerencia en la definición de las políticas estatales con anterioridad. En particular, a partir de la declaración de default y la renegociación de la deuda externa con el FMI, de la consolidación de grupos económicos locales como impulsores del crecimiento económico industrial, de la incorporación de la participación de los trabajadores en el ingreso, de las organizaciones sociales, sindicales y de otros espacios políticos a la fuerza política dominante y a la gestión del Estado, en un sentido de expansión de lo público. Asimismo, entre otras, la política desarrollada en materia de DDHH y la definición de no represión de la protesta aportaron en la dirección de proteger a los ciudadanos de la arbitrariedad del Estado.

A nivel provincial, la orientación neoliberal de la reforma del Estado y el vínculo que entabló el gobierno de Córdoba con estas organizaciones en particular, fueron en dirección de procesos de desdemocratización. A diferencia de ellos, a nivel municipal, el desplazamiento de la centralidad del mercado por sobre el Estado y el reconocimiento y convocatoria a distintas organizaciones y espacios a la participación en el Estado estuvieron más en sintonía con los procesos nacionales.

No obstante ello, la municipal, constituyó una tentativa democratizadora que -salvo algunos casos- no consiguió profundizar ni instituir políticas estatales tendientes a ampliar derechos y disminuir las desigualdades.

En lo que concierne a las organizaciones sociales, ambas se constituyeron en sujetos políticos principalmente a partir de la protesta y el trabajo territorial hasta el año 2003. Desde entonces, sus posibilidades de ser reconocidos como tales varió y ello tuvo que ver -entre otros aspectos- con sus distintas gramáticas políticas y con las orientaciones del gobierno y el Estado.

En el marco de un gobierno con una perspectiva nacional y popular que abrió el Estado a la participación, aquellos aspectos de una gramática movimientista que asumió el Movimiento Barrios de Pie, en articulación con otros actores y proyectos, le permitieron ampliar sus marcos de alianzas, generalizar e inscribir sus demandas en el espacio público al tiempo que ser reconocido e incorporado como un sujeto político en los espacios de gestión y representación, incluso en la contienda electoral. A través de esos espacios, además, se habilitó su posibilidad de participar de la institucionalización de políticas en el Estado y en el territorio a nivel nacional y local.

CVA siguió un camino diferente. Su inscripción en una gramática política con rasgos predominantemente autonomistas, impregnó un modo de construcción política asentado en lo local desde el que consiguió, en un primer período, desarrollar procesos de lucha e instalar demandas en torno a cuestiones más generales que particulares. Sin embargo, también limitó su posibilidad de reconocimiento como sujeto político más allá de la protesta y su capacidad de generalizar sus demandas en articulación con otros actores y sectores sociales y de constituirse en sujeto de transformaciones sociales más generales. Hacia el segundo período, salvo las acciones desarrolladas en torno a la problemática de género, su construcción central se enfocó en procesos vecinales y cooperativos y en la disputa por las fuentes y condiciones de trabajo en ese espacio asociativo. En ese proceso que, como señalamos, fue promovido desde la gestión municipal, aportó a la institución de una política pública en la ciudad. Ello supuso un cambio en las demandas y un achicamiento de su alcance al tiempo que una transformación en

sus formas de construcción política y en los modos de intervención en el espacio público.

A modo de síntesis y formulación más general, atendiendo a la trayectoria de las acciones colectivas de estas organizaciones, su articulación con otros actores incluyendo al Estado y las propias políticas desarrolladas por éste, es posible reconocer que, hacia los años 2004 y 2005, la redefinición en las relaciones entre lo social y lo político avanzó en un sentido de mayor democratización a nivel nacional, en una tentativa de ampliación democrática a nivel municipal y en un proceso en sentido contrario en el ámbito de la provincia de Córdoba.

##### **5. Una vuelta sobre las recapitulaciones. Reflexiones y desafíos.**

Antes de avanzar en este último apartado nos interesa explicitar una constatación a la que no hicimos lugar en otras páginas. Desde el inicio del nuevo siglo, en Córdoba y en Argentina, prácticamente no hay organización social, partido político, sindicato o gobierno que no se postule como democrático o con el propósito de aportar a procesos democratizadores. Ello fue evidente también en los discursos de los distintos gobiernos nacionales y locales que incluimos en este período de estudio y en los de las propias organizaciones que sostuvieron orientaciones políticas diferentes. De modo que, como afirmamos en la introducción y desarrollamos en el capítulo 1, la democracia no puede funcionar como un supuesto sino más bien como un proceso en disputa que es necesario desentramar y contextualizar para comprender su sentido y orientación.

En esta tesis, su indagación a partir de las acciones colectivas de las organizaciones de vecinos y desocupados y las vinculaciones que establecieron con el Estado -y en particular con las políticas sociales- en Córdoba en el período 2001-2007, fue una “puerta de entrada” para comprender algunos aspectos que asumieron estas relaciones y procesos en ese contexto particular.

Al concluir esta tesis, nos surgen algunas reflexiones más generales y desafíos que compartimos a continuación con el objetivo de aportar a los debates sobre la relación entre las organizaciones sociales, el Estado y los procesos de democratización o desdemocratización; discusiones que recuperan la pregunta por la relación entre lo social y lo político y que en la actualidad continúan vigentes en

los ámbitos académicos, en los espacios de las organizaciones sociales y también a nivel partidario y del Estado.

*Organizaciones sociales, acción colectiva y procesos transformación social.* Los procesos políticos que apuestan a la igualdad, la inclusión y la garantía y ampliación de derechos van de la mano de distintos modos de construcción política y de intervención en el espacio público de diferentes actores, incluyendo a las organizaciones y a los movimientos sociales que, en determinadas condiciones, interactúan con otros a partir de particulares gramáticas políticas. En esas interacciones, estas gramáticas muchas veces son puestas en tensión y pueden transformarse.

En los capítulos 3 y 4 de esta tesis pudimos reconocer que la movilización y la protesta -aunque con intensidades y características distintas- se sostuvieron a lo largo de todo el período de estudio como modos de construcción política y de intervención en el espacio público de dos organizaciones sociales con gramáticas distintas, junto con otras acciones colectivas para la construcción de “poder popular” y procesos instituyentes dentro y fuera del Estado. Asimismo, pudimos advertir, sobre todo en el período previo al año 2003, que la movilización y la protesta no bastaron para construir gobierno ni disputar el Estado. Por entonces, fueron partidos políticos a nivel nacional y local junto con organizaciones y otros actores sociales los que promovieron proyectos y políticas desde estos espacios de conducción.

La potencialidad política de la creación de instancias de articulación con otros actores para la construcción de proyectos societales más amplios y/o para la resistencia a determinadas políticas, al tiempo que las dificultades para sostenerlos a largo plazo, emerge también del análisis de la trayectoria de las dos organizaciones estudiadas. Al respecto consideramos que sigue constituyendo un desafío avanzar en articulaciones a partir de lo que De Sousa Santos (2006) propone como un procedimiento de traducción intercultural e intersocial; un procedimiento que permita hacer inteligible la diversidad y hacer dialogar y construir sentidos entre distintos actores sociales en pos de reinventar la emancipación social.

Con respecto a los aportes de la movilización cuando las organizaciones forman parte de la conducción de gobierno y se organizan para apoyar a un gobierno o para visibilizar derechos impugnados por otros actores sociales, no hay tanta controversia académica. Sin embargo, sí es más discutida aquella que se promueve para tensionar o disputar políticas adentro -y afuera- de un espacio de conducción que se comparte. Al respecto, el debate no está saldado y no puede darse en términos abstractos pero constituye un desafío de todo proyecto que se proponga como democratizador, valorar la potencialidad de la movilización para la ampliación de derechos y construir una respuesta política sin juzgamientos previos. Al mismo tiempo, reconocer esta potencialidad no propone reducir los aportes de las organizaciones y los movimientos sociales a su capacidad de protesta y/o movilización. Estos serían, sin dudas, aspectos limitados para comprender la diversidad de acciones colectivas que éstos promueven y sus modos de construcción política y disputa que, en algunos casos, incluyen la participación en procesos electorales y en la conducción del Estado.

En cuanto a la protesta en demanda de garantía de derechos, y en particular respecto de aquella formulada en términos de “trabajo” entre los años 2001 y 2003, la observación que hacían Calderón y Dos Santos a fines de la década del ‘80 sobre el “desencuentro entre una lógica de dominación abstracta difusa e internacional y el sistema de oposiciones a ella por parte de los movimientos sociales, centrado en una protesta y resistencia concreta y localizada” (1987, p. 631-632), sigue teniendo vigencia para el período objeto de estudio y en el contexto actual. En nuestras sociedades capitalistas en las que el pleno empleo ya no es posible, invita a seguir reflexionando sobre los modos y los actores en torno a los cuales las organizaciones sociales construyen adversidades y el papel del Estado en la generación de políticas de protección vinculadas con la problemática de la falta de empleo y en el reconocimiento y fortalecimiento de otras economías –como el caso de la economía social o popular en la actualidad-.

*Organizaciones, Estado, políticas sociales y procesos democratizadores.* Con respecto a la relación entre organizaciones sociales y Estado a lo largo del período

podimos advertir cambios que fueron desarrollados en esta tesis y sintetizados en apartados más arriba.

Con respecto a la discusión planteada en términos de autonomía-heteronomía de las organizaciones respecto de las políticas estatales, pudimos advertir que éstas condicionaron sus prácticas, sus modos de organización y demandas más allá de la participación o no de las organizaciones sociales en la gestión del Estado y de las orientaciones de las conducciones de gobierno. Tales fueron los casos de las políticas sociales asistencialistas como así también de las políticas que, desde otras perspectivas, se propusieron desarrollar y fortalecer procesos asociativos y cooperativos. Estos condicionamientos, no obstante, no fueron totales y los colectivos tuvieron capacidad de reapropiarse de espacios y de políticas sociales. También tuvieron las organizaciones, oportunidad de instalar temas en el espacio público que en algunos casos -según la receptividad de los distintos gobiernos, sus orientaciones y los contextos en los que ejercieron sus mandatos- se convirtieron en agenda del Estado.

Asimismo, en el sentido del epígrafe con el que iniciamos este capítulo, pudimos reconocer que el proceso de crecimiento político de las organizaciones sociales no estuvo única o directamente ligado al periodo de resistencia, oposición a los distintos gobiernos y protesta contra el Estado. En el caso del MBP, su participación en la gestión del mismo a nivel local y nacional, le permitió instituir políticas en torno a las problemáticas que trabajaba en los territorios y participar en la disputa de la construcción de lo público. En el de CVA, recuperar demandas y experiencias de abordaje para construir soluciones parciales.

En ambos procesos, la participación de estos colectivos en el Estado no derivó en relaciones de subordinación. Al respecto, señalaba García Linera como uno de los desafíos para las fuerzas del espectro progresista en la región que “su transformación en poder de Estado no debe significar la disolución, ni la burocratización ni el debilitamiento de las formas de organización social sino una transformación, adecuada a las nuevas circunstancias, para ser poder social y a la vez poder estatal. Es en esta dualidad, que a la vez es una tensión política, donde radica la clave de la defensa y la expansión de las experiencias progresistas” (2020, *en línea*)

Sostener ese desafío no supone desconocer los conflictos y las disputas propias de lo político que se producen cuando nuevos actores participan de la gestión estatal. Tampoco implica desatender a las limitaciones y condicionantes que a veces presenta el propio Estado para el desarrollo de aquellos proyectos que las conducciones se proponen impulsar. Entre ellas, algunas vinculadas con la propia orientación de las políticas y/o con las lógicas, tiempos y modos de funcionamiento del propio Estado.

Al respecto, tanto a nivel municipal como nacional, entre los años 2003 y 2007, los procesos estatales no siempre estuvieron acompañados con los tiempos, modalidades y formas de construcción de las organizaciones sociales e, incluso, con el tipo de gestión que demandaban las propias políticas que los distintos gobiernos se propusieron implementar. Estas limitaciones no fueron iguales en las distintas jurisdicciones ni áreas del Estado y las políticas que se desarrollaron desde las diferentes dependencias también variaron.

En ese sentido, uno de los desafíos para las gestiones de gobierno, es transformar al Estado para que funcione de modo más acorde a los procesos sociales y organizativos; unos procesos cuyos tiempos, en contextos de pobreza y desempleo, pivotan entre el corto plazo de la supervivencia y el largo plazo de la organización social.

Con respecto a las políticas sociales, y en particular, aquellas que hacia el final del período de estudio se propusieron generar y fortalecer procesos asociativos y cooperativos, combinando economías de mercado con otras como la social, un desafío pendiente es el diseño de intervenciones que no reproduzcan formas de discriminación por las cuales existan unas comunidades con economías para quienes tienen recursos económicos para garantizar la subsistencia y otras para aquellos que viven en condiciones de pobreza.

Para finalizar, y sólo porque las tesis en algún momento se cierran o pausan -y como los procesos de la vida vuelven a transformarse-, retomamos de los hallazgos generados por esta tesis y como apuesta general para proyectos societales que aspiren a una mayor democratización, el desafío de la ampliación de lo público y la centralidad en ese proceso de la intervención del Estado junto con la participación activa de las organizaciones sociales.

## BIBLIOGRAFÍA

- Abal Medina, Paula (2017). Los Movimientos Obreros Organizados de la Argentina (2003-2016). En Abal Medina, Paula; Natalucci, Ana; y Rosso, Fernando (Eds.), *¿Existe la clase obrera?* (pp.21-62). Capital Intelectual.
- Aiziczon, Fernando (2018). Configuraciones militantes contemporáneas: Una propuesta metodológica para pensar el compromiso político. *De Prácticas y Discursos*, 7(9), 141-159. <https://doi.org/10.30972/dpd.792805>
- \_\_\_\_\_(2017). *Cultura política, militantes y movilización: Neuquén durante los años '90*. Prometeo.
- Andrenacci, Luciano y Repetto, Fabián (2006). Ciudadanía y capacidad estatal: Dilemas de reconstrucción de la política social argentina. En Andrenacci, L. y Abramovich, A. L (Eds.), *Problemas de política social en la Argentina contemporánea* (pp. 547-590). Prometeo, UNGS.
- Aquin, Nora (2003). El trabajo social comunitario en las actuales condiciones: Fortalecer la ciudadanía. En Aquin, N. (Ed.), *Ensayos sobre ciudadanía: Reflexiones desde el trabajo social* (pp. 113- 125). Espacio.
- Arendt, Hannah. (2009). *La condición humana*. Paidós.
- Arriaga, Elisa; Franco, María José; Medina, Leticia y Natalucci, Ana (2012). Un Estado en transición: Córdoba ante el embate neoliberal. En Gordillo, Monica; Arriaga, Elisa; Franco, María José; Medina, Leticia; y Natalucci, Ana (Eds.), *La protesta frente a las reformas neoliberales en la Córdoba de fin de siglo* (pp. 25-64). Ferreyra Editor.
- Auyero, Javier (2002a). *La zona gris*. Siglo Veintiuno Editores.
- \_\_\_\_\_(2002b). *La protesta: Retratos de la beligerancia popular en la Argentina democrática*. Universidad de Buenos Aires.
- \_\_\_\_\_(2001). *La política de los pobres: Las prácticas clientelistas del peronismo*. Manantial.
- Battistini, Osvaldo (Ed.). (2004). *El trabajo frente al espejo: Continuidades y rupturas en los procesos de construcción identitaria de los trabajadores*. Prometeo.

- Basualdo, Eduardo (2016). El bicentenario y la independencia económica. *FLACSO*. <https://www.flacso.org.ar/noticias/el-bicentenario-y-la-independencia-economica/>
- \_\_\_\_\_. (2011). *Sistema político y modelo de acumulación: Tres ensayos sobre la Argentina actual*. Cara o Ceca.
- Basualdo, Eduardo y Manzanelli, Pablo (2016, mayo 20). Régimen de acumulación durante el ciclo de gobiernos Kirchneristas: Un balance preliminar a través de las nuevas evidencias empíricas de las cuentas nacionales. *IADE*. <http://www.iade.org.ar/articulos/regimen-de-acumulacion-durante-el-ciclo-de-gobiernos-kirchneristas-un-balance-preliminar>
- Beccaria, Alejandra y Claudia, Danani (2011). El sistema previsional: aspectos institucionales y protección, entre la transformación y la normalización (2003-2013). En Danini, Claudia y Hintze, Susana (Coord.), *Protecciones y desprotecciones. La seguridad social en la Argentina 1990-2010*, (pp. 103-152). Universidad General Sarmiento.
- Becerra, Natalia; Tomatis, Karina; Bertotto, Nicolasa y Gaviglio, A. Paula (2012, Octubre 4-6). *Intervenciones sociales del Estado y desempleo en la Argentina actual* [Ponencia]. VI Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos, Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires, Argentina. <http://www.madres.org/documentos/doc20130123162617.pdf>
- Becerra, Natalia. (2016). *Continuidades y rupturas en las políticas sociales y laborales orientadas a intervenir sobre el desempleo en Argentina* [Tesis de maestría no publicada]. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba.
- Bresser-Pereira, Luiz y Cunill Grau, Nuria (Eds.). (1998). *Lo público no estatal en la reforma del Estado*. Paidós, CLAD.
- Bringel, Breno y Falero, Alfredo (2016). Movimientos sociales, gobiernos progresistas y estado en América latina: Transiciones, conflictos y mediaciones. *Caderno CRH*, 29(spe3), 27-45. <https://doi.org/10.1590/S0103-49792016000400003>

- Britos, Nora (2009). Políticas de asistencia frente a los derechos sociales en Argentina. Algunas lecturas sobre los alcances de la inclusión social en el Programa Familias. En Aquin, Nora y Caro, Rubén (Orgs.) *Políticas públicas, derechos y Trabajo Social en el Mercosur* (pp.13-22). Espacio.
- Britos, Nora y Caro, Rubén (2007). Modelos para armar. La intervención estatal en el campo del desempleo en la provincia de Córdoba. En Vuotto, Mirta (Comp.). *La co-contrucción de políticas públicas en el campo de la economía social* (pp. 163-174). Prometeo.
- Bonvillani, Andrea (2012, Noviembre 20-22). *Lo que dicen los trapos: Consignas en movimiento en la Sexta Marcha de la gorra* [Ponencia]. I Congreso Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades VIII Jornadas Interdisciplinarias de Humanidades y Ciencias Sociales del CIFYH, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. <http://conferencias.unc.edu.ar/index.php/ponencias/ponencias2013/paper/viewFile/1913/42>
- Bourdieu, Pierre (1985). ¿Qué significa hablar? Akal.
- Calderón, Fernando y dos Santos, Mario (Eds.). (1987). *Latinoamérica: Lo político y lo social en la crisis*. CLACSO.
- Calderón, Fernando y Jelin, Elisabeth (1987). *Clases y movimientos sociales en América Latina: Perspectivas y realidades*. Cedes.
- Cabral, Ximena (2005). El trabajo territorial en las asambleas barriales: Actores, redes y trayectorias. *Estudios del trabajo*, 2005(30), 33-66.
- Caletti, Sergio (2007). Decir, autorrepresentación, sujetos. *Versión. Estudios de Comunicación y Política*, 17, 19-78.
- \_\_\_\_\_(2000) ¿Quién dijo República? Notas para un análisis de la escena pública contemporánea. *Versión*, 10, 15-58.
- Cardarelli, Graciela y Rosenfeld, Monica (1998). *Las participaciones de la pobreza: Programas y proyectos sociales*. Paidós.
- Castel, Robert (2001). *La metamorfosis de la cuestión social: Una crónica del salariado*. Paidós.
- Cefai, Daniel (2003). Acción asociativa y ciudadanía común: ¿La sociedad civil como matriz de la res publica? En Benedicto, Jorge., y Morán, María Luz

- (Eds), *Aprendiendo a ser ciudadanos: Experiencias sociales y construcción de ciudadanía entre los jóvenes* (pp. 91-71). INJUVE.
- Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (2020, Enero 22). Conversatorio con Álvaro García Linera. *Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)*. <https://www.celag.org/conversatorio-alvaro-garcia-linera/>
- Ciuffolini, Alejandra y De la Vega Ávila Tulian, Candela (2009, Mayo 7-8). “Arrancando planes” *Estrategias de resistencia en torno al Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados: El caso de los movimientos de desocupados en Córdoba* [Ponencia]. I Jornadas Nacionales de Historia de Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.
- Ciuffolini, Alejandra (Ed.). (2009). *En el llano todo quema: Movimientos y luchas urbanas y campesinas en la Córdoba de hoy*. Universidad Católica de Córdoba.
- Closa, Gabriela (2010). Las transformaciones en el peronismo de Córdoba. En Tcach, César (Ed.), *Córdoba Bicentenario: Claves de su historia contemporánea*, (pp. 493- 516). Centro de Estudios Avanzados, Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba.
- Cohen, Jean y Arato, Andrew (2000). *Sociedad Civil y Teoría Política*. Fondo de Cultura Económica.
- Cortés, Martín (2010). Movimientos sociales y Estado en el “kirchnerismo”: Tradición, autonomía y conflicto. En Masetti, Astor., Villanueva, Ernesto., y Gómez, Marcelo (Eds.), *Movilizaciones, protesta e identidades políticas en la Argentina del Bicentenario* (pp. 97-156). Nueva Trilce.
- Cross, Cecilia. (2004). La federación de tierra y vivienda de la CTA: el sindicalismo que busca representar a los desocupados. En Battistini, Osvaldo (Ed.), *El trabajo frente al espejo. Continuidades y rupturas en los procesos de construcción identitaria de los trabajadores* (pp. 291-309). Prometeo.
- Dagnino, Evelina (2004). ¿Sociedade civil, participação e cidadania: De que estamos falando? En Mato, Daniel (Ed.), *Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización* (pp. 95-110). FACES, Universidad Central de Venezuela.

- Dahl, Robert (1989). *Poliarquía*. Tecnos.
- Danani, Claudia y Hintze, Susana (Eds.). (2011). *Protecciones y desprotecciones: La Seguridad Social en la Argentina, 1990-2010*. Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Danani, Claudia (2008). América Latina luego del mito del progreso neoliberal: Las políticas sociales y el problema de la desigualdad. *Ciências Sociais Unisinos*, 44(1), 39-48.
- \_\_\_\_\_. (2005, Octubre 11-13). *Las políticas sociales de los '90: los resultados de la combinación de individuación y comunitarización de la protección* [Ponencia]. Coloquio Internacional Trabajo, conflictos sociales e integración monetaria: América Latina en una perspectiva comparada. Universidad Nacional General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina.
- \_\_\_\_\_. (2004). El alfiler en la silla: sentidos, proyectos y alternativas en el debate de las políticas sociales y la economía social. En Danani, Claudia (Ed.), *Política social y economía social: debates fundamentales*. UNGS- Editorial Altamira. Buenos Aires.
- De Ipola, Emilio (1987). *Ideología y discurso populista*. Plaza & Janés.
- De Souza Santos, Boaventura (2006). *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social: Encuentros en Buenos Aires*. CLACSO.
- De Swaan, Abram (1992). *A cargo del Estado*. Pomares-Corregidor.
- Delamata, Gabriela (2004). *Los barrios desbordados: Las organizaciones de desocupados del Gran Buenos Aires*. Eudeba.
- Denning, Michael (2011). Vida sin salario. *New left review*, 2011(66), 77-94. <https://newleftreview.es/issues/66/articles/michael-denning-la-vida-sin-salario.pdf>
- Dos Santos, Mario y Calderón, Fernando (Eds.). (1987). *Los Conflictos por la Constitución de un Nuevo Orden*. CLACSO.
- Elster, Jon (1990). Racionalidad, moralidad y acción colectiva. *Zona abierta*, 43-68.
- Esping-Andersen, Gøsta (1993). *Los tres mundos del Estado de Bienestar*. Edicions Alfons el Magnànim.

- Etchegorry, Cristina, Magnano, Cecilia y Matta, Andrés (2007, Agosto 22-25). *Políticas públicas y economía social: El Plan Nacional Manos a la Obra en la ciudad de Córdoba* [Ponencia]. IV Congreso Argentino de Administración Pública. Buenos Aires, Argentina.
- Falú, Ana, Marengo, Cecilia, Elorza, Ana y Monayar, Virginia (2015). La Política habitacional del Programa Federal de Construcción de Viviendas: Su implementación en la ciudad de Córdoba. *Vivienda y Ciudad*, 2, 72-77.
- Fernández, Ana María (2011). *Política y subjetividad: Asambleas barriales y fábricas recuperadas*. Biblos.
- Ferrari, Marcela y Gordillo, Mónica (Comps.). (2015). *La reconstrucción democrática en clave provincial*. Prohistoria Ediciones.
- Forni, Pablo y Castronuovo, Luciana (Eds.). (2014). *Ni punteros ni piqueteros: Organizaciones populares durante el kirchnerismo*. EDULP.
- Fornillo, Bruno (2008). Acerca de la corriente clasista y combativa frente al gobierno de Kirchner. Del diálogo a la oposición (2003-2007). En Pereyra, Sebastián, Pérez, Germán y Schuster, Federico (Eds.), *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones piqueteras pos crisis de 2001* (pp. 233-250). Al Margen.
- Franco, María José (2017). La emergencia de la CTEP en Córdoba. Transformaciones en la movilización social. *Revista Estudios Sociales Contemporáneos*, 17, 172-187.  
[https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos\\_digitales/9983/revista-escmaqueta17revisin.pdf](https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/9983/revista-escmaqueta17revisin.pdf)
- \_\_\_\_\_ (2014, Abril 24-26). *De la defensa de la vivienda única, a los planes sociales y a la organización en torno al trabajo: La experiencia de "Vecinos Autoconvocados" (Córdoba, 2001-2005)*. V Reunión del Comité Académico Historia, Regiones y Fronteras. Asociación de Universidades Grupo de Montevideo. Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, Argentina.
- \_\_\_\_\_ (2013, Julio 1-7). *Aportes para pensar las transformaciones producidas con el Kirchnerismo en relación a la política asistencial: Un análisis a partir de los discursos del Estado y del gobierno nacional en torno al Plan*

- Jefes y Jefas de Hogar Desocupados*. X Jornadas de sociología de la UBA: 20 años de pensar y repensar la sociología, nuevos desafíos académicos, científicos y políticos para el siglo XXI. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
- \_\_\_\_\_. (2010). Lo “comunitario” como modo de interpelación a los sectores populares: Una reflexión a partir de algunos programas sociales diseñados durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner. En Vidal, Gardenia., y Boixados, Cristina (Eds.), *Estudios de la historia de Córdoba en el s. XX* (pp. 241-266). Ferreyra Editor.
- Franco, María José y Medina, Leticia (2012). Villeros, vecinos y desocupados en el escenario de protestas de Córdoba (1989-2003). En Gordillo, Mónica; Arriaga, Ana Elisa; Franco, María José; Medina, Leticia; Natalucci, Ana y Carol Solis, Ana (Eds.), *La protesta frente a las reformas en la Córdoba de fin de siglo* (pp. 257-306). Ferreyra Editor.
- Franco, María José; Medina, Leticia y Solís, Ana Carol (2015). Conflictividad Social y articulación política en los barrios cordobeses durante la reconstrucción de la democracia. En Ferrari, Marcela y Gordillo, Mónica (Comps.). (2015). *La reconstrucción democrática en clave provincial* (pp.153-180). Prohistoria Ediciones.
- Fraser, Nancy y Honneth, Axel (2006). *¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político-filosófico*. Morata.
- Frederic, Sabina (2006). El ocaso del “villero” y la profesionalización de los “políticos”: Sobre el problema moral de la política en el Gran Buenos Aires. *Etnografías Contemporáneas*, 1(1), 98-125.
- Gamson, William (1995). “Constructing social protest”. En Jonsthan Hank and Klandermans Bert (pp.85-106), *Social movements and culture*. University of Minnesota Press.
- García Delgado, Daniel (2005). Distribución del ingreso y pobreza en la Argentina postdefault. Aportes para una estrategia nacional de desarrollo con equidad. *Polis*. *Revista Latinoamericana*, 12. <http://journals.openedition.org/polis/5655>

- García Linera, Álvaro (2010). *Sociología de los Movimientos Sociales en Bolivia: Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política*. Producción Plural editores.
- Garretón, Manuel Antonio (2002). La transformación de la acción colectiva en América Latina. *Revista de la CEPAL*, 2002(76), 7-24. <https://doi.org/10.18356/92d9a65f-es>
- Garriga Zucal, José y Moreira, María Verónica, (2006). El aguante: Hinchadas de fútbol, entre la pasión y la violencia. En Miguez, Daniel, Semán, Pablo (Eds.), *Entre santos, cumbias y piquetes: Las culturas populares en la Argentina reciente* (pp. 55-73). Biblos.
- Giarracca, Norma (Ed.). (2001). *La protesta social en la Argentina: Transformaciones económicas y crisis sociales en el interior del país*. Alianza.
- González, Cristina (2012). Nuevas tendencias del Sistema de Protección Social en Argentina en el nuevo milenio: ¿Hacia un nuevo paradigma? *Textos & Contextos*, 11(2), 247 – 257.
- González Bombal, Inés (1988). *Los vecinazos: Las protestas barriales en el Gran Buenos Aires 1981-83*. Ediciones del Instituto de Desarrollo Económico y Social.
- Gordillo, Mónica (2014). Acciones contenciosas: la ruptura de 1989. *Contenciosa*, 1(2), 1-13. <https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Contenciosa/article/view/5058/7694>
- \_\_\_\_\_ (2009). *¿Piquetes y cacerolas? El argentinazo de 2001*. Sudamericana.
- \_\_\_\_\_ (2003). El modelo cordobés y su crisis: la caída de Angelo en 1995. *Anuario de la Escuela de Historia*, 2003(3), 249-269.
- Gordillo, Mónica; Arriaga, Ana Elisa; Franco, María José; Medina, Leticia; Natalucci, Ana y Carol Solis, Ana (Eds.). (2012). *La protesta frente a las reformas en la Córdoba de fin de siglo*. Ferreyra Editor.
- Gómez, Marcelo (2010). Acerca del protagonismo político y la participación estatal de los movimientos sociales populares: juicio al paradigma normal de análisis. En Masetti, Astor, Villanueva, Ernesto, y Gómez, Marcelo (Eds.),

- Movilizaciones, protestas e identidades políticas en la Argentina del Bicentenario* (pp. 65-95). Nueva Trilce.
- \_\_\_\_\_. (2006). Crisis y recomposición de la respuesta estatal a la acción colectiva desafiante en la Argentina 1989-2004. *Revista Argentina de Sociología*, 4(6), 88-128.
- Gómez, Marcelo y Massetti, Astor (2009). *Los movimientos sociales dicen: Conversaciones con dirigentes piqueteros*. Nueva Trilce.
- González, Cristina, Britos, Nora y Caro, Rubén (2006). Las políticas de combate a la pobreza del Post-Consenso de Washington: ¿Un nuevo rostro para la asistencia? I Foro Universitario de Investigación e Intervención Social. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. [CD ROM].
- Gradin, Agustina (2015). *La participación política de las organizaciones de desocupados en el Estado nacional durante el periodo 2003 – 2009. La experiencia del Movimiento Barrios de Pie: sus límites y potencialidades*. [Tesis de Doctorado no publicada]. Universidad de Buenos Aires.
- \_\_\_\_\_. (2014). Estado y mediaciones sociales: El estilo de gestión del Movimiento de Desocupados Barrios de Pie en el territorio (Argentina 2002 -2011). *Estudios*, 32, 49-7.
- Grassi, Estela (2003). *Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal: la otra década infame (I)*. Espacio Editorial.
- Grimson, Alejandro, Ferraudi Curti, M. Cecilia y Segura, Ramiro (Eds.). (2008). *La vida política en los barrios populares de Buenos Aires*. Prometeo.
- Guiddens, Anthony (2011). *La constitución de la sociedad*. Amorrortu Editores.
- Gutiérrez, Alicia (2004). *Pobre', como siempre: Estrategias de reproducción social en la pobreza, un estudio de caso*. Ferreyra Editor.
- Hall, Stuart y Du Gay, Paul (Eds.) (1996). *Cuestiones de identidad cultural*. Amorrortu.
- Hintze, Susana y Costa, María (2010). La reforma de las asignaciones familiares 2009: aproximación al proceso político de la transformación de la protección. En Danani, Claudia y Hintze, Susana (Coord.) *Protecciones y desprotecciones: la Seguridad Social en la Argentina, 1990-2010*. Los Polvorines.

- Hintze, Susana y Costa, María (2011). La reforma de las asignaciones familiares 2009: aproximación al proceso político de la transformación de la protección. En Danani, Claudia y Hintze, Susana (Coord.), *Protecciones y desprotecciones: la seguridad social en la Argentina, 1990-2010* (pp. 67-128). Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Hopp, Malena (2009). Planes sociales, contraprestación y huidas de la asistencia. En Grassi, Estela, y Danani, Claudia (Eds.), *El mundo del trabajo y los caminos de la vida*. Espacio.
- Jelin, Elizabeth (Comp.). (1985). *Los nuevos movimientos sociales*. CEAL.
- Jenkins, Craig (1994). La teoría de la movilización de recursos y el estudio de los movimientos sociales”. *Zona Abierta* 69, 5-50.
- Kessler, Gabriel, Svampa, Maristela y González Bombal, Inés (Eds.). (2010). *Reconfiguraciones del mundo popular: el conurbano bonaerense en la postconvertibilidad*. Prometeo.
- Krikorian, Marcelo (2010). La hiperinflación de 1989/90. Aportes y reflexiones sobre un episodio que marcó la historia argentina. *Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales* (40), 533-546.
- Kymlicka, Will y Norman, Wayne (2002). El retorno del ciudadano: Una revisión crítica de la producción reciente en teoría de la ciudadanía. Instituto de Estudios Peruanos.
- La Serna, Carlos (1997). Actores y procesos en la crisis del Estado de Bienestar. *Administración pública y Sociedad*, (1997)10, 101-121.
- Lechner, Norbert (1984). *La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado*. FLACSO.
- \_\_\_\_\_(Ed.). (1981). *Estado y política en América Latina*. Siglo Veintiuno Editores.
- Lesgart, Cecilia (2003). *Usos de la transición a la democracia: Ensayo, Ciencia y Política en la década del '80*. Homo Sapiens.
- Lindemboim, Javier y Danani, Claudia (Eds.). (2003). *Entre el trabajo y la política: las reformas de las políticas sociales argentinas en perspectiva comparada*. Biblos.

- Lo Vuolo, Rúben (1995a). A modo de introducción: los contenidos de la propuesta del ingreso ciudadano. En Lo Vuolo, Rúben, y Barbeito, Alberto (Eds), *Contra la exclusión: la propuesta del ingreso ciudadano* (pp. 17-48). Ciepp: Miño y Dávila.
- Luciano, Francisco (1996). Regularización de asentamientos irregulares en Córdoba (Argentina). En Azuela, Antonio; y Francois, Tomas (Eds.), *El acceso de los pobres al suelo urbano* (pp. 89-116). Centro de Estudios mexicanos y Centroamericanos.
- Marchart, Oliver (2009). *El pensamiento político postfundacional. La diferencia política en Nancy, Lefort, Badiou y Laclau*. Fondo de Cultura Económica.
- Martínez, Fabiana (2006, Octubre 19-21). "Mis queridos enemigos": restitución de los antagonismos en el discurso presidencial (años 2003/2006) [Ponencia]. X Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación: "Una década de encuentros para (re)pensar los intercambios y consolidar la red", Red Nacional de Investigadores en Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de San Juan, San Juan.
- McAdam, Doug, McCarthy, John y Zald, Mayer (Eds). (1999). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. ISTMO.
- McAdam, Doug, Tarrow, Sidney y Tilly, Charles (2005). *La dinámica de la contienda política*. Hacer.
- Maccioni, Laura (2002). Valoración de la democracia y resignificación de "política" y "cultura": Sobre las políticas culturales como metapolíticas. En Mato, Daniel (Ed.), *Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y poder*. CLACSO.
- Maneiro, María (2012). *De encuentros y desencuentros: Estado, gobiernos y movimientos de trabajadores desocupados*. Biblos.
- Manzano, Virginia (2008). Etnografía de la gestión colectiva de políticas estatales en organizaciones de desocupados de La Matanza -Gran Buenos Aires-. *RUNA, Archivo Para Las Ciencias Del Hombre*, 28(1), 77-92. <https://doi.org/10.34096/runa.v28i1.1211>
- \_\_\_\_\_(2014). Demandas colectivas y formas de intervención estatal: un enfoque relacional de la política en el Gran Buenos Aires. En Forni, Pablo, y

- Castronuovo, Luciana (Eds.), *Ni piqueteros ni punteros: Organizaciones populares durante el kirchnerismo* (pp. 241-264). EDULP.
- Manzano, Virginia y Ramos, Ana (2015). Procesos de movilización y de demandas colectivas: Estudios y modos de abordar 'lo político' en la vida social. *Identidades*, 5(8), 1-25.
- Martínez, Fabiana (2013). Pánicos sociales, ciudadanía episódica y exclusión: Análisis del caso Blumberg en medios gráficos argentinos. *Signo y Pensamiento*, 24(46), 125 -136.
- Massetti, Astor (2009). *La década piquetera (1995-2005): Acción colectiva y protesta social de los movimientos territoriales urbanos*. Nueva Trilce.
- \_\_\_\_\_(2010): Limitaciones de los movimientos sociales en la construcción de un estado progresista en Argentina. *Argumentos: Revista de crítica social*, 12, 83-108.
- Massetti, Astor, Villanueva, Ernesto y Marcelo, Gómez (Eds.). (2010). *Movilizaciones, protestas e identidades políticas en la Argentina del bicentenario*. Nueva Trilce.
- Mata, María Cristina (2002). Comunicación, ciudadanía y poder. Pistas para pensar su articulación. *Diálogos de la Comunicación*, 64, 64-76.
- Medina, Leticia (2015). *Democratización del espacio urbano: la movilización por el hábitat en Córdoba, 1987-2004*. [Tesis de Doctorado no publicada]. Universidad de Buenos Aires.
- Medina, Leticia; Ortiz Suárez, Soledad y Testa, Gastón (2001). *Un estado "amigo de la gente". Actualizaciones de la matriz liberal en los procesos de reforma del Estado y la sociedad. El caso de Córdoba*. [Tesis de Licenciatura no publicada]. Universidad Nacional de Córdoba.
- Melucci, Alberto (1996). *Challenging codes: Collective action in the information age*. Cambridge University Press.
- \_\_\_\_\_(1994). Asumir el compromiso: Identidad y movilización en los movimientos sociales. *Zona Abierta*, 69, 153-180.
- Merklen, Denis (2005). *Pobres ciudadanos: Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*. Gorla.

- Minujín, Alberto (Ed.). (1993). *Cuesta abajo. Los nuevos pobres: efectos de la crisis en la sociedad argentina*. Losada.
- Mocca, Edgardo (2009). Clivajes y actores políticos en la Argentina democrática. *Temas y Debates*, 17, 11-32. <https://doi.org/10.35305/tyd.voi17.93>
- Morales, Susana y Plaza Schaefer, Valeria (2013). Seguridad y democracia: Tensiones de origen Aportes al análisis de la política de seguridad en la provincia de Córdoba. *Estudios*, 29, 111-131.
- Murillo, Susana (2008). *Colonizar el dolor: La interpelación ideológica del Banco Mundial en América Latina, el caso argentino desde Blumberg a Cromañón*. CLACSO.
- Mouffe, Chantal (1999). *El retorno de lo político*. Paidós.
- Nallino, María Alejandra (2005, Noviembre 15-18). *La articulación del sector público y privado en la reforma del Estado, desde el enfoque neoinstitucionalista centrado en actores. El caso de las agencias de turismo y deportes en la Provincia de Córdoba*. [Ponencia]. VII Congreso Nacional de Ciencia Política: "Agendas Regionales en Conflicto", SAAP, Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, Argentina.
- Nardacchione, Gabriel (2005). La paradoja de las protestas vecinales bajo el menemismo: ¿se puede generalizar una protesta para defender lo propio? En Schuster, Federico; Naishatat, Francisco; Nardacchione, Gabriel y Pereyra, Sebastián (Eds.). *Tomar la palabra: Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea* (pp.193-218). Prometeo.
- Nardacchione, Gabriel, Rinesi, Eduardo y Vommaro, Gabriel (Eds.). (2007). *Los lentes de Víctor Hugo: Transformaciones políticas y desafíos teóricos en la Argentina reciente*. Prometeo.
- Natalucci, Ana (2018). Entre la Democratización y la República: Revisitando el ciclo de movilización en el último gobierno Kirchnerista (Argentina, 2012-2015). *Estudios de Derecho*, 75(166), 30-50.
- \_\_\_\_\_. (2012): Los dilemas políticos de los movimientos sociales. (Argentina, 2001-2010). *Documentos de Trabajo del Instituto de Iberoamérica*, 09(2012), 1-43. [https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/122496/DT\\_09\\_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/122496/DT_09_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

- \_\_\_\_\_ (2011). Entre la movilización y la institucionalización. Los dilemas de los movimientos sociales (Argentina, 2001-2010)". *Revista Polis*, 28, 1- 17. <http://www.revistapolis.cl/28/art11.htm>
- \_\_\_\_\_ (2010a). Aportes para la discusión sobre la autonomía o heteronomía de las organizaciones sociales: La experiencia del Movimiento de Barrios de Pie, 2002-2008. *Laboratorio: Revista de Estudios sobre Cambio Estructural y Desigualdad Social*, 23(2010), 90-108.
- \_\_\_\_\_ (2010b). ¿Nueva gramática de la política? Reconsideraciones sobre la experiencia piquetera en la argentina reciente". *Revista Astrolabio, nueva época*, 5, 94-118. <http://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/article/view/180>
- \_\_\_\_\_ (2010c). *Movilización piquetera y movilización sindical: las organizaciones populares en tiempos de reforma estructural (Córdoba, 1995-2001)* [Tesis de Doctorado no publicado]. Universidad de Buenos Aires.
- \_\_\_\_\_ (2008). *Sujetos políticos, procesos de reconstitución identitaria y protestas sociales: las organizaciones piqueteras de Córdoba, 1994-2006* [Tesis de Maestría no publicada]. Universidad de Buenos Aires.
- \_\_\_\_\_ (Ed.). (2008): *La comunicación como riesgo: Sujetos, movimientos y memorias, relatos del pasado y modos de confrontación contemporáneos*. Al Margen.
- Natalucci, Ana y Pagliarone, María Florencia. Revisitando los conceptos de lo social y lo político: movimientos sociales, procesos de democratización y nuevas institucionalidades. *Revista Andina de Estudios Políticos*, 2, 77-98.
- Natalucci, Ana y Pérez, Germán (2010). La matriz movimientista de acción colectiva en Argentina: la experiencia del espacio militante kirchnerista. *Revista América Latina Hoy Argentina: la transformación de los consensos políticos*, 54, 97-112.
- Neffa, Julio C. y Brown, Brenda (2012). De las políticas pasivas a las políticas activas: Análisis comparativo de las políticas públicas de empleo (1989-2011). *Empleo, desempleo y políticas de empleo*, 10(2012), 5-45.

[https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/17761/CONICET\\_Digital\\_Nro.20268.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/17761/CONICET_Digital_Nro.20268.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

- Neffa, Julio C., Brown, Brenda y Bantar, Humberto, (2015). Políticas nacionales de empleo ejecutadas por el MTEySS. *Empleo, desempleo y políticas de empleo*, 21(2015),6-134.[https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/10337/CONICET\\_Digital\\_Nro.14123.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/10337/CONICET_Digital_Nro.14123.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Neffa, Julio (Ed.). (2008). *Desempleo, pobreza y políticas sociales: Fortalezas y debilidades del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados*. Miño y Dávila.
- Nun, José y Portantiero, Juan Carlos (1987). *Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina*. Puntosur.
- O'Donnell, Guillermo, Schmitter, Philippe C. y Whitehead, Laurence (Comps.). (1988). *Los procesos de transición y consolidación democrática en América Latina*. Paidós.
- O'Donnell, Guillermo (1997). *Contrapuntos: Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*. Paidós.
- Olson, Mancur (1968). *The logic of Collective Action*. Harvard University Press.
- Otto, Maduro (1992). *Mapas para la fiesta: Reflexiones latinoamericanas sobre la crisis y el conocimiento*. Centro Nueva Tierra.
- Pautassi, Laura, Rossi, Julieta y Campos, Luis (2003). *Plan jefes y Jefas: ¿Derecho social o beneficio sin derechos?* Centro de Estudios Legales y Sociales.
- Pereyra, Sebastián, Pérez, Germán y Schuster, Federico (Eds.). (2008). *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones piqueteras pos crisis de 2001* (pp. 233-250). Al Margen.
- Perelmiter, Luisina (2010). Militar el Estado: La incorporación de movimientos sociales de desocupados en la gestión de políticas sociales, Argentina (2003-2008). En Massetti, Astor, Villanueva, Ernesto y Gómez, Marcelo (Eds.), *Movilizaciones, protestas e identidades políticas en la Argentina del Bicentenario* (pp. 133-152). Nueva Trilce.
- Pérez, Germán (2017). El enigma populista. Gino Germani: orígenes y actualidad de la sociología política argentina. En Vommaro, Gabriel y Gené, Mariana

- (Eds.), *La vida social del mundo político: investigaciones recientes en sociología política* (pp. 263-292). Universidad Nacional General Sarmiento.
- \_\_\_\_\_. (2010). El malestar en el concepto: Ejes de un debate teórico acerca de los movimientos sociales en Latinoamérica. En Massetti, Astor, Villanueva, Ernesto y Marcelo, Gómez (Eds.), *Movilizaciones, protestas e identidades políticas en la Argentina del bicentenario*. Nueva Trilce.
- Pérez, Germán y Armelino, Martín (2003). Crisis y recomposición: notas (breves) sobre el colapso argentino. *El politólogo*.
- Pérez, Germán y Natalucci, Ana (Eds.). (2012). *Vamos las bandas: organizaciones y militancia kirchnerista*. Nueva Trilce.
- \_\_\_\_\_. (2010). Reflexiones en torno a la matriz movimientista de acción colectiva en Argentina: La experiencia del espacio militante kirchnerista. *América Latina Hoy*, 54(2010), 97-112. <https://doi.org/10.14201/alh.6957>
- Pérez, Germán; Libson, Micaela; Armelino, Martín y Mauro, Sebastián (2002). Hablar, actuar, juzgar: Contribuciones de la pragmática a la teoría social contemporánea. En Schuster, Federico (Ed.), *Filosofía y métodos de las ciencias sociales* (pp. 265-310). Manantial.
- Pitkin, Hanna (1984). *Wittgenstein: el lenguaje, la política y la justicia*. Centro de Estudios Constitucionales.
- Rabotnikof, Nora (2005). *En busca de un lugar común: El espacio público en la teoría política contemporánea*. Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM.
- Quirós, Julieta (2006). *Cruzando la Sarmiento. Una etnografía sobre piqueteros en la trama social del sur del Gran Buenos Aires*. Antropofagia.
- Rancière, Jacques (2007). *El desacuerdo: Política y filosofía*. Nueva Visión.
- Reynares, Juan Manuel y Tomassini, María Virginia (2016). No tan distintos: El lugar de la política en los discursos de Unión por Córdoba y el Partido Nuevo. *RAIGAL, Revista Interdisciplinaria de Ciencias Sociales*, 2(2), 52-67.
- Retamozo, Martín (2011). Movimientos sociales, política y hegemonía en Argentina. *Polis, Revista de la Universidad Bolivariana*, 10(28), 243-279.

- \_\_\_\_\_(2009a). Lo político y la política: Los sujetos políticos, conformación y disputa por el orden social. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 51(206), 69-91.
- \_\_\_\_\_(2009b). Las demandas sociales y el estudio de los movimientos sociales. *Cinta de Moebio*, 35, 110-127.
- Retamozo, Martín y Morris, María Belén (2015). Sindicalismo y política: La Central de Trabajadores de la Argentina en tiempos kirchneristas. *Estudios Sociológicos*, 33(97), 63-87.
- Retamozo, Martín y Trujillo, Lucía (2019). El kirchnerismo y sus estrategias políticas en Argentina: Desde la transversalidad hasta Unidad Ciudadana. *Izquierdas*, 45, 185-214.
- Rinesi, Eduardo, Nardacchione, Gabriel y Vommaro, Gabriel (Eds.). (2007). *Los lentes de Víctor Hugo: Transformaciones políticas y desafíos teóricos en la Argentina reciente*. Universidad General Sarmiento, Prometeo.
- Schuster, Federico; Pérez, Germán J., Pereyra; Sebastián, Armesto; Melchor, Armelino; Martín, García Analí; Natalucci, Ana; Vázquez, Melina y Zipcioglu, Patricia (2006). *Transformaciones de la protesta social en Argentina: 1989-2003*. Instituto Gino Germani.
- Schuster, Federico; Naishatat, Francisco; Nardacchione, Gabriel y Pereyra, Sebastián (Eds.). (2005). *Tomar la palabra: Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. Prometeo.
- Schuster, Federico y Scribano, Adrián (2001). Protesta social en la Argentina de 2001: Entre la normalidad y la ruptura. *Observatorio Social de América Latina*, 2(5), 17-22.  
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal5/>
- Schuster, Erika (2015, Agosto 5-7). *Un acercamiento al estado y las políticas laborales en Córdoba 1999-2007* [Ponencia]. 12º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo: “El trabajo en su laberinto, viejos y nuevos desafíos”. Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET), Buenos Aires, Argentina.
- Schuttenberg, Mauricio (2010). *La reconfiguración de las identidades “nacional populares”*. *Estudio de las organizaciones insertas en el kirchnerismo desde*

- 2001 a 2009 [Ponencia]. II Jornadas Internas del Centro de Investigaciones Sociohistóricas, Universidad Nacional de la Plata, La Plata, Argentina.
- Scribano, Adrián (2003). *Una voz de muchas voces: Acción colectiva y organizaciones de base, de las prácticas a los conceptos*. Serviproh.
- Semán, Pablo y Míguez, Daniel (Eds.). (2006). *Entre santos, cumbias y piquetes: Las culturas populares en la Argentina reciente*. Biblos.
- Sigal, Silvia (2005). Prefacio. En Merklen, Denis (Autor), *Pobres ciudadanos: Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)* (pp. 9-16). Gorla.
- Soldano, Daniela y Andrenacci, Luciano (2006). Aproximación a las teorías de la política social a partir del caso argentino. En Andrenacci, Luciano (Ed.), *Problemas de política social en la Argentina contemporánea* (pp. 21-90). Prometeo.
- Svampa, Maristella (2008). *Cambio de época: Movimientos Sociales y poder político*. Siglo Veintiuno Editores.
- \_\_\_\_\_(2005). *La Sociedad Excluyente: La Argentina bajo el signo del neoliberalismo*. Tarcus.
- \_\_\_\_\_(2003). *Desde Abajo: La transformación de las identidades sociales*. Biblos.
- Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián (2003). *Entre la ruta y el barrio: La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Biblos.
- Tapia, Luis (2009). Movimientos sociales, movimientos societales y los no lugares de la política. *Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano*, 17. CLACSO.[http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20100829034923/17\\_tapia.pdf](http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20100829034923/17_tapia.pdf)
- Tarrow, Sidney (1997). *Poder en movimiento: Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Alianza.
- Tcach, Cesar (2004). Pensar Córdoba: Reflexiones preliminares. *Estudios*, 15(2014), 9-14. <https://doi.org/10.31050/re.voi15.13532>
- Tilly, Charles (1998). Conflicto político y cambio social. En Ibarra, Pablo, y Tejerina Benjamín (Eds.), *Los movimientos sociales: Transformaciones políticas y cambio cultural*. Trotta.

- Torre, Juan Carlos (2004, Noviembre). *La operación política de la transversalidad: El presidente Kirchner y el Partido Justicialista*. Conferencia “Argentina en perspectiva”. Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina.
- Traversaro, Natalia (2014). *Prácticas de Comunicación del “Movimiento Barrios de Pie/Libres del Sur” (MBP/MLS) de Córdoba-Argentina (2002-2009)* [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad Complutense de Madrid. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/29414/1/T35940.pdf>
- Trom, Daniel (2008). Gramática de la movilización y vocabulario de motivos. En Natalucci, Ana (Ed.), *Sujetos, movimientos y memorias: Sobre los relatos del pasado y los modos de confrontación contemporáneos* (pp. 21-48). Al Margen.
- Thwaites Rey, Mabel (2010). El Estado en debate: transiciones y contradicciones. *Crítica y Emancipación, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales*, 2(4), 9-24.
- \_\_\_\_\_(2004). *La autonomía como búsqueda, el Estado como contradicción*. Prometeo.
- Tilly, Charles (2010). *Democracia*. Ediciones AKAL.
- Tomassini, María Virginia (2018). *El partido nuevo de Córdoba: origen e institucionalización: 2003-2011*. [Tesis de doctorado publicada]. Universidad Nacional de Córdoba. <https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/6831/M.%20Virginia%20Tomassini.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Vaca Narvaja, Hernán (2001). *El candidato. Biografía no autorizada de José Manuel de la Sota*. Sudamericana.
- Vasilachis, Irene (1992). *Métodos cualitativos I*. CEDAL.
- Verón, Eliseo (1987). *La semiosis social*. Gedisa.
- Vasilachis, Irene (1993). *Métodos Cualitativos I: Los problemas teórico-epistemológicos*. Centro Editor de América Latina.
- Williams, Raymond (1982). *Cultura: Sociología de la comunicación y del arte*. Paidós.
- Wittgenstein, Ludwig (1976). *Los cuadernos azul y marrón*. Tecnos.

## FUENTES

### 1. Documentos institucionales de distintas dependencias estatales e informes para el Estado

- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (2007a): “La Bisagra: Políticas Sociales en Acción”
- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (2007b): Resumen Ejecutivo. Balance 2007. Programa Familias por la Inclusión Social.
- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (2010): Políticas sociales del Bicentenario. Tomo I.
- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Informe de ejecución presupuestaria 2006. <https://www.economia.gob.ar/hacienda/cgn/cuenta/2006/tomoi/16jur85.htm> . Consultado 24/7/2008
- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (2004). “Material de Trabajo Espacios asociativos aportes para el fortalecimiento: ¿Qué son los Consejos Consultivos de Políticas Sociales”. Buenos Aires.
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral. Base de datos del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados con asignaciones y liquidaciones en Córdoba por proyectos y cantidad de destinatarios. Período 2002- 2008.
- Ministerio de Producción y Trabajo de la provincia de Córdoba (2003): Informe Estadístico.
- Área de Políticas Activas de la Agencia Territorial Córdoba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (2019): Informe de Gestión. Córdoba.
- Programa Juana Azurduy, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Presidencia de la Nación. - Informe de Gestión 2006 – 2012.
- Dirección Nacional Electoral, Recorriendo las Elecciones de 1983 a 2013. Disponible en: <http://elecciones.gob.ar/30/diputados1987.html#/7/1> (acceso el 23/01/2016)
- Municipalidad de Córdoba. Observatorio Urbano. “Córdoba, una ciudad en cifras. Guía de estadística de la ciudad de Córdoba”. Año 2006.

- Servicio Habitacional y de Acción Social (SEHAS) y Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) (2005). Documento de Sistematización de las acciones del Consejo Consultivo Municipal (CCM) en Córdoba. Córdoba.
- Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP) de la Universidad Nacional de Córdoba (2007). Diagnóstico sobre la aplicación de la Convención Interamericana de Combate a la Corrupción Municipalidad de Córdoba. Córdoba.
- Escuela de Trabajo Social y Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba (2007). Informe final de la primera etapa “Abordaje participativo de los problemas organizacionales” presentado a la Municipalidad de Córdoba en el marco del “Proyecto de intervención con cooperativas de permisionarios de estacionamiento medido”. Autoras: Cucui, Tania; Franco, María José; Machinandarena, Ana Paola; Medina, Leticia; Ortiz Suárez, Soledad; Plaza, Verónica; y equipo.

## **2. Discursos de autoridades nacionales, provinciales y municipales**

- De la Sota, José Manuel. Discurso de apertura del período ordinario de la Legislatura de la Provincia de Córdoba. Año 2000
- Duhalde, Eduardo (14/01/2002): Discurso del presidente desde la iglesia Santa Catalina de Siena. Disponible en: [http://www.presidenciaduhalde.com.ar/system/objetos.php?id\\_prod=165&id\\_cat=37](http://www.presidenciaduhalde.com.ar/system/objetos.php?id_prod=165&id_cat=37)
- Duhalde, Eduardo. Discurso de asunción como presidente ante la Asamblea Legislativa, 01/01/2002, Bs. As., Argentina.
- Duhalde, Eduardo (14/01/2002): Mensaje a la nación del presidente desde la iglesia Santa Catalina de Siena. Disponible en: [http://www.presidenciaduhalde.com.ar/system/objetos.php?id\\_prod=165&id\\_cat=37](http://www.presidenciaduhalde.com.ar/system/objetos.php?id_prod=165&id_cat=37)
- Duhalde, Eduardo. Discurso de apertura anual de la Asamblea Legislativa, 01/03/2002, Bs. As., Argentina.
- Duhalde, Eduardo. Discurso de apertura anual de la Asamblea Legislativa, 01/03/2003, Bs. As., Argentina.
- Kirchner, Néstor. Discurso de asunción como presidente ante la Asamblea Legislativa, 25/05/2003, Bs. As., Argentina.
- Kirchner, Néstor. Discurso de apertura anual de la Asamblea Legislativa, 01/03/2004, Bs. As., Argentina.

- Kirchner, Néstor. Discurso de apertura anual de la Asamblea Legislativa, 01/03/2005, Bs. As., Argentina.

-Juez, Luis. Discurso de Asunción. 10/12/2003. Disponible en: <http://archivo.lavoz.com.ar/2003/1211/1096.pdf>

### **3. Legislativas**

- Decreto 1506. Poder Ejecutivo de la Nación. 2004

- Decreto 565. Plan Jefes y Jefas de Hogar Desempleados. Poder Ejecutivo de la Nación. 2002

- Resolución 825. Programa Familias por la Inclusión Social. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 2005.

- Resolución 1375. Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social Manos a la Obra. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 2004.

- Resolución 299. Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación. Programa Jefes de Hogar. Componente “Emergencia Habitacional”. 2003.

- Decreto 336. Seguro de Capacitación y Empleo. Ministerio de Desarrollo Social. 2006.

- Ley nacional 25865. Régimen simplificado para pequeños contribuyentes. 2004.

-Decreto 189. “Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social”. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 2004.

- Ley provincial 8835 "Carta del Ciudadano". Córdoba, 2000.

- Ley provincial 8836 "Modernización del Estado Provincial". Córdoba, 2000.

- Ley provincial 8837 "Incorporación de Capitales Privados al Sector Público". Provincia de Córdoba, 2000.

-Cámara de Senadores de la Provincia de Córdoba. Diario de Sesiones, Tomo I, 2000.

- Legislatura de la Provincia de Córdoba, Diario de sesiones, período 126, 1 de febrero de 2004.

- Legislatura de la Provincia de Córdoba, Diario de sesiones, período 127, 1de febrero del 2005.

- Ministerio de Economía de la Nación (2006). Cuenta de inversión. Tomo 2. Disponible en: <https://www.economia.gob.ar/hacienda/cgn/cuenta/2006/tomoi/16jur85.htm>

#### **4. Páginas Web**

[www.desarrollosocial.gov.ar](http://www.desarrollosocial.gov.ar)

<https://www.cordoba.gob.ar/>

#### **5. Medios de comunicación nacionales y locales (selección de noticias)**

-La Nación (19/08/2001): “De la Sota: el Gobierno no da pie con bola”. Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/politica/de-la-sota-el-gobierno-no-da-pie-con-bola-nid328851> (acceso el 23/01/2016)

-La Nación (19/10/2001): “La relación con De la Rúa separa al PJ”. Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/politica/la-relacion-con-de-la-rua-separa-al-pj-nid344081> (acceso el 23/01/2016)

-Las Heras, José María (16/07/2019): “Cordobesas” en Hoy día Córdoba. Disponible en: <https://hoydia.com.ar/opinion/117-varios/60473-cuando-de-la-sota-quiso-que-de-la-rua-saliese-de-la-convertibilidad.html>

-Schurman, Diego (26/005/2006) “Una demostración de fuerza a toda plaza” en Página 12. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-67399-2006-05-26.html>

-Gutiérrez, Mónica. (01/02/2002) “De la Sota se divorció de Kammerath” en Página 12. Disponibles en: <https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-1412-2002-02-01.html>

- La políticaOnline (03/06/2009) “Giacomino culpó a Juez por el déficit de la ciudad de Córdoba”. Disponible en: <https://www.lapoliticaonline.com/nota/nota-57788/>

- Ratti, Camilo (04/11/2004): “Los transversales Kirchneristas sumaron a Juez a su estrategia” en Página 12. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-43178-2004-11-04.html>

- Diario La Voz del Interior. Período 1989 –2007. Córdoba.

- Gutiérrez, Mónica (01/02/2002): De la Sota se divorció de Kammerath. en Página 12. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-1412-2002-02-01.html>

- Diario Judicial Córdoba (12/12/2002): Revocatoria suspendida. Disponible en: <https://www.diariojudicial.com/nota/44635>

## **6. Registros, materiales gráficos y audiovisuales y medios de comunicación de las organizaciones sociales**

Revista En Marcha. 1988, 1999, 2004. Córdoba. Corriente Patria Libre.

Revista Barrios de Pie. 2004 y 2005. Buenos Aires. Movimiento Barrios de Pie.

Estatuto y documentos fundacionales y refundacionales de Patria Libre desde 1987 hasta el 2003.

Proyecto presentado por la Red de Comedores Solidarios y financiado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

Página web Movimiento Barrios de Pie disponible en: [www.barriosdepie.org.ar](http://www.barriosdepie.org.ar)

Barrios de Pie (2004): Nuestras cabezas piensan donde nuestros pies caminan. Buenos Aires. Editorial La fragua.

Folletos callejeros del Movimiento Barrios de Pie. (s/f)

Vecinos Autoconvocados. Revista Vecinos. Años 1999 y 2000. Córdoba.

Revista "Che Vecino". Año 2001.

Folletos callejeros de Vecinos Autoconvocados. (s/f)

## **7. Entrevistas realizadas**

### **7.1. Funcionarios estatales**

- Entrevistado Sebastián Bertucelli. Titular del Consejo de Solidaridad de la Municipalidad de Córdoba. Gestión Kamerath. Entrevista realizada el 15/10/2009. Córdoba.

- Entrevistado Daniel Juez. Secretario de Desarrollo Social y Participación Ciudadana. Gestión Luis Juez. Entrevista realizada el 15/07/2015. Córdoba.

- Entrevistado Gustavo López. Director de Desarrollo Territorial y Economía Social de la Subsecretaría de Políticas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Ciudadana. Gestión Luis Juez. Entrevista realizada el 15/07/2015. Córdoba.

- Entrevistada Ines Torcigliani. Directora del Programa de Asistencia a la Familia (Julio 1999 – Julio 2010). Entrevista realizada el 01/09/2015. Córdoba.
- Entrevistado Dario Ranco. Director de Emergencia Social y Políticas Compensatorias (1999- 2002), director de Emergencia Social y Hábitat Social de la Provincia de Córdoba (2003- 2007). Entrevista realizada el 02/11/2015. Córdoba.
- Entrevistado Alberto Villa Uría. Director de Empleo y Capacitación Laboral. Gestión Luis Juez. Entrevista realizada el 21/07/2008. Córdoba.
- Entrevistado Carlos Navarta. Secretario del Consejo Consultivo Municipal de Córdoba entre diciembre de 2005 y marzo de 2008. Entrevista realizada el 17/07/2008, cuando había renunciado el por entonces presidente del CCM. Córdoba.

## **7.2. Integrantes de la organización Movimiento Barrios de Pie**

- Entrevista 1. Co fundador de Patria Libre y presidente del partido Patria Libre. Entrevista realizada en el año 2015. Córdoba.
- Entrevista 2. Coordinador provincial de Barrios de Pie e integrante de la dirección provincial de Patria Libre. Dos entrevistas realizadas, una en el año 2010 y la otra en el 2014. Córdoba.
- Entrevista 3. Coordinadora provincial de Barrios de Pie. Luego, funcionaria municipal en la gestión de Luis Juez. Entrevista realizada en el año 2014. Córdoba.
- Entrevista 4. Coordinador provincial de Barrios de Pie y representante de Barrios de Pie en el Consejo Consultivo Municipal. Presidente de dicho Consejo en el año 2002. Entrevista realizada en el año 2014. Córdoba.
- Entrevista 5. Militante de Patria Libre desde 1990. Empleado en la Secretaría de Vivienda de la Nación con el kirchnerismo. Luego, Subdirector de Hábitat Popular en la gestión de Luis Juez. Entrevista realizada en el 2015. Córdoba.
- Entrevista 6. Responsable del área de Cultura de Barrios de Pie. Entrevista realizada en el año 2015. Córdoba.
- Entrevista 7. Responsable del área de Género de Barrios de Pie como parte de la conducción de Patria Libre. Consultora del Consejo Nacional de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, miembro del Consejo Consultivo del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y del Consejo Consultivo del Área de la Mujer de Cancillería, Coordinadora Nacional del Programa Juana Azurduy. Entrevista realizada en el año 2015. Córdoba.

- Entrevista 8. Responsable del área de Comunicación de Barrios de Pie. Entrevista realizada en el año 2015. Córdoba.
- Entrevista 9. Responsable del área de Educación de Barrios de Pie. Entrevista realizada en el año 2015. Córdoba.
- Entrevista 10. E., integrante de Córdoba desde Abajo. Entrevista realizada en julio de 2011. Córdoba.

Entrevistas publicadas y consultadas:

Entrevistas a Jorge “huevo” Ceballos, fundador de Patria Libre, primer coordinador nacional de Barrios de Pie, Director Nacional de Asistencia Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y luego, subsecretario de Organización y Capacitación Popular. Entrevistas publicadas en la página Web de Barrios de Pie y en Gomez y Massetti (2009).

### ***7.3. Integrantes de la organización Centro de Vecinos Autoconvocados***

- Entrevista 11. Referente principal de Vecinos Autoconvocados, de la Coop. De Naranjitas y de la asociación civil ACEMOS. Dos entrevistas realizadas, una en el año 2010 y la otra en el año 2014. A la última entrevista se sumó un mail con respuestas a preguntas por datos puntuales a comienzo del año 2015. Córdoba.
- Entrevista 12. Referente principal de Vecinos Autoconvocados, de la Coop. De Naranjitas y de la asociación civil ACEMOS. Entrevista realizada en el año 2016. Córdoba.
- Entrevista 13. Delegada vecinos Autoconvocados e integrante de la Coop. De Naranjitas. Entrevista realizada en el año 2016. Córdoba.
- Entrevista 14. Delegada vecinos Autoconvocados e integrante de la Coop. De Naranjitas. Entrevista realizada en el año 2016. Córdoba.

Entrevistas en co-autoría en el marco de otras investigaciones.

- Entrevista 15. Consejo de la Cooperativa de Naranjitas. Entrevista grupal a todos los miembros. Año 2005. Córdoba.